



# Asamblea General

Distr. general  
4 de marzo de 2010  
Español  
Original: español/francés/inglés

---

## Consejo de Derechos Humanos

### 13º período de sesiones

Tema 3 de la agenda

**Promoción y protección de todos los derechos humanos,  
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,  
incluido el derecho al desarrollo**

#### Adición

### **Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria\***

El presente documento contiene las opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en sus períodos de sesiones 54º, 55º y 56º, celebrados en mayo, septiembre y noviembre de 2009, respectivamente. En la parte principal de este informe figuran un cuadro con la lista de todas las opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo y los datos estadísticos relacionados con dichas opiniones.

---

\* Documento presentado con retraso.

## Índice

	<i>Página</i>
Opinión N° 17/2008 (Líbano) .....	4
Opinión N° 18/2008 (Egipto) .....	6
Opinión N° 19/2008 (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) .....	9
Opinión N° 20/2008 (Egipto) .....	12
Opinión N° 21/2008 (China) .....	16
Opinión N° 22/2008 (Arabia Saudita) .....	23
Opinión N° 23/2008 (República Árabe Siria) .....	26
Opinión N° 24/2008 (República Árabe Siria) .....	28
Opinión N° 25/2008 (México) .....	33
Opinión N° 26/2008 (Myanmar) .....	36
Opinión N° 27/2008 (Egipto) .....	46
Opinión N° 28/2008 (República Árabe Siria) .....	59
Opinión N° 29/2008 (China) .....	64
Opinión N° 30/2008 (Sri Lanka) .....	67
Opinión N° 31/2008 (Arabia Saudita) .....	70
Opinión N° 32/2008 (Malasia) .....	72
Opinión N° 33/2008 (Argelia) .....	81
Opinión N° 34/2008 (República Islámica del Irán) .....	83
Opinión N° 35/2008 (Egipto) .....	85
Opinión N° 36/2008 (Arabia Saudita) .....	91
Opinión N° 37/2008 (Arabia Saudita) .....	94
Opinión N° 38/2008 (Sudán) .....	97
Opinión N° 39/2008 (República Islámica del Irán) .....	106
Opinión N° 40/2008 (Yemen) .....	109
Opinión N° 41/2008 (Indonesia) .....	110
Opinión N° 42/2008 (Egipto) .....	114
Opinión N° 43/2008 (Myanmar) .....	118
Opinión N° 44/2008 (Myanmar) .....	124
Opinión N° 45/2008 (India) .....	127
Opinión N° 46/2008 (Myanmar) .....	138
Opinión N° 1/2009 (Viet Nam) .....	141
Opinión N° 2/2009 (Estados Unidos de América) .....	148
Opinión N° 3/2009 (Estados Unidos de América) .....	154

---

Opinión N° 4/2009 (Maldivas).....	160
Opinión N° 5/2009 (Líbano) .....	164
Opinión N° 6/2009 (República Islámica del Irán).....	168
Opinión N° 7/2009 (Níger).....	170
Opinión N° 8/2009 (Emiratos Árabes Unidos).....	173
Opinión N° 9/2009 (Japón) .....	176
Opinión N° 10/2009 (República Bolivariana de Venezuela).....	182
Opinión N° 11/2009 (Malawi).....	189
Opinión N° 12/2009 (Líbano) .....	193
Opinión N° 13/2009 (Yemen) .....	195
Opinión N° 14/2009 (Gambia) .....	197
Opinión N° 15/2009 (Zimbabwe).....	201
Opinión N° 16/2009 (Ucrania) .....	205
Opinión N° 17/2009 (España) .....	209

## **Opinión N° 17/2008 (Líbano)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 9 de octubre de 2007.**

**Relativa al Sr. Assem Kakoun.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue creado por la Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo fue aclarado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato del Grupo de Trabajo mediante su decisión 2006/102 y lo prorrogó por un nuevo período de tres años mediante su resolución 6/4 de 28 de septiembre de 2007. Actuando de conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno la comunicación mencionada *supra*.

2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado la información solicitada.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

i) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido la pena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

ii) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y además, respecto de los Estados partes, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

iii) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados partes, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad un carácter arbitrario (categoría III).

4. Según la comunicación dirigida al Grupo de Trabajo el 31 de julio 2007 y las aclaraciones e informaciones complementarias que éste recibió ulteriormente, Assem Kakoun fue detenido el 6 de enero de 1990 en Hammana, en el domicilio de Rustom Ghazalé, un responsable de los servicios de inteligencia sirios en el Líbano, para el que trabajaba. La detención fue realizada por los servicios de seguridad sirios en el Líbano, sin una orden de detención. El Sr. Kakoun fue llevado a un centro de la seguridad siria situado en Anjar, en la región libanesa de la Bekaa, y dos semanas más tarde fue trasladado a Damasco, a un establecimiento administrado por los servicios sirios, donde estuvo detenido durante 11 meses, siempre en secreto. Presuntamente fue torturado en todos los lugares donde estuvo detenido. El 20 de noviembre de 1990 las autoridades sirias lo entregaron a la policía judicial libanesa y sólo se dictó una orden de detención contra el Sr. Kakoun el 14 de diciembre de 1990. Durante más de siete meses fue trasladado de un centro de detención a otro, hasta que llegó a la cárcel central de Roumieh, donde se encuentra, o al menos donde se encontraba en la fecha de la comunicación.

5. El Sr. Kakoun compareció ante un tribunal libanés de Beirut por un asesinato ocurrido el 25 de noviembre de 1989, pero ni la fuente ni el Gobierno indican el nombre de la víctima o cualquier otra circunstancia; el Gobierno se limita a señalar que los hechos se habrían producido en Tabir. Según la fuente, el Sr. Kakoun fue acusado del presunto delito

debido a un conflicto entre el Sr. Ghazalé y él, y el Sr. Kakoun nunca reconoció ser el autor, salvo bajo tortura.

6. Se indicó que las torturas que sufrió el Sr. Kakoun le dejaron graves secuelas físicas (incapacidad funcional en una mano y marcas en el cuerpo) y psicológicas. Habría sido sometido a tortura en todos los centros de detención secretos donde estuvo detenido, tanto en el Líbano (Bekaa) como en la República Árabe Siria.

7. La fuente añade que el juicio del Sr. Kakoun adoleció de irregularidades, como se expone a continuación:

a) El Sr. Kakoun permaneció en detención secreta durante los primeros 15 días después de haber sido aprehendido en el Líbano, durante los 10 meses siguientes, cuando se encontraba en la República Árabe Siria, y ulteriormente durante 8 meses más en el Líbano, hasta la apertura del proceso, el 14 de diciembre de 1990, cuando se reconoció por primera vez su detención.

b) Durante los interrogatorios extrajudiciales en la República Árabe Siria y los interrogatorios ante el Juez de instrucción en la cárcel de Barbar El Khazem (Verdun), en el Líbano, el Sr. Kakoun pidió la asistencia de un abogado y se negó a declarar ante el Juez. En consecuencia, se suspendió la vista y sólo declaró el 4 de enero de 1991, pero sin la presencia de un abogado. En el juicio propiamente dicho, el Sr. Kakoun declaró que había confesado bajo tortura. Según la fuente, el tribunal indicó en su decisión que había llegado a la conclusión de que el acusado era culpable basándose precisamente en su confesión. El tribunal desestimó la denuncia de tortura, porque no se acreditó su fundamento.

c) El Sr. Kakoun no pudo ejercer el derecho de apelación. Interpuso ciertamente un recurso, pero el tribunal no lo examinó y lo declaró inadmisible, a pesar de que se cumplían los requisitos de admisibilidad, y confirmó la pena de cadena perpetua impuesta en primera instancia.

8. En su respuesta, el Gobierno indica que, tras el juicio a que fue sometido, el 10 de febrero de 1993 Assem Kakoun fue condenado a muerte por el Tribunal Penal de Beirut, en virtud del artículo 549 p) y del artículo 72 (tenencia de armas de fuego) del Código Penal, pero la pena fue conmutada por cadena perpetua y trabajos forzados, en aplicación de la Ley de amnistía N° 84/91.

9. No compete claramente al Grupo de Trabajo pronunciarse sobre el fundamento de las acusaciones que llevaron al veredicto de culpabilidad y la pena impuesta al interesado en la causa por asesinato o por tenencia ilegal de armas. Por lo tanto, sólo se pronunciará sobre el carácter arbitrario o no de la privación de libertad de Assem Kakoun, que ya dura 18 años.

10. De acuerdo con los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos; tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, y a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; no puede ser privada de su libertad, salvo con arreglo al procedimiento establecido en ésta; debe ser llevada sin demora ante la autoridad judicial competente; debe ser juzgada dentro de un plazo razonable; y, por último, la prisión preventiva no debe ser la regla y sólo debe autorizarse para asegurar la comparecencia del acusado en el acto del juicio y, en su caso, para la ejecución del fallo.

11. Los hechos presentados por la fuente no han sido desmentidos por el Gobierno en su respuesta, lo que da credibilidad a las alegaciones.

12. Por otra parte, Assem Kakoun afirmó haber sido torturado en los lugares donde estuvo detenido y haber reconocido la autoría del asesinato del que se le acusaba bajo tortura. Si efectivamente denunció los malos tratos, el Estado debería haber realizado una investigación de conformidad con el artículo 13 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En su respuesta, el Gobierno no indica que haya actuado de conformidad con esta disposición y el Grupo de Trabajo, por tanto, debe presumir que el Gobierno no ordenó el inicio de una investigación, por lo que es al menos razonable suponer que el Sr. Kakoun pudo haber sufrido torturas y que su confesión pudo haberse obtenido de esa manera, en cuyo caso, en virtud del artículo 15 de la Convención contra la Tortura, esa confesión no puede ser invocada como elemento de prueba, como se hizo.

13. Habida cuenta de que se han violado todas las normas de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de otros instrumentos mencionados, cabe concluir que:

La privación de libertad del Sr. Kakoun es arbitraria y corresponde a la categoría III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

14. En consecuencia, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que ponga remedio a la situación de Assem Kakoun de conformidad con las disposiciones mencionadas en esta Opinión. El Grupo de Trabajo considera que, en las circunstancias del caso y teniendo en cuenta la duración de la privación de libertad, la reparación adecuada sería su inmediata puesta en libertad del interesado.

Aprobada el 9 de septiembre de 2008.

## **Opinión N° 18/2008 (Egipto)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 19 de octubre de 2007.**

**Relativa al Sr. Djema'a al Seyed Suleyman Ramadan.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo agradece la cooperación recibida por parte del Gobierno, que ha proporcionado información sobre las alegaciones presentadas por la fuente.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El caso que se resume a continuación se comunicó al Grupo de Trabajo de la siguiente manera: el Sr. Ramadan, nacido el 5 de noviembre de 1960, fue detenido en la noche del 11 de mayo de 1994 en su casa en Helouane por agentes de los Servicios de Seguridad del Estado, que no mostraron ninguna orden de detención ni dieron motivo alguno para su detención. Fue trasladado a numerosos centros de detención. Durante el primer año permaneció en régimen de incomunicación. Según se alegó, el Sr. Ramadan presuntamente fue torturado.
5. Algunos meses después del arresto del Sr. Ramadan, su detención fue legalizada por una decisión administrativa del Ministro del Interior dictada de acuerdo con el artículo 3 de la Ley N° 162 de 1958 sobre el estado de excepción.
6. En septiembre de 1997, de acuerdo con el Código de Justicia Militar de 1966, y a pesar del hecho de que era un civil, el Sr. Ramadan fue llevado ante el Tribunal Militar Supremo de Heikstep, en El Cairo, que lo condenó a cadena perpetua. Dicho tribunal está integrado por oficiales militares en funciones y responde a la jerarquía militar; y, de

acuerdo con la fuente, sus integrantes carecerían de la formación jurídica necesaria. La ley egipcia no contempla la apelación ante un tribunal superior, ni civil ni militar.

7. La fuente concluye que los tribunales militares egipcios no pueden garantizar el derecho a un juicio justo a los civiles acusados de delitos penales, tal como se establece en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que la República Árabe de Egipto es Estado parte. Sus sentencias son definitivas y no pueden ser objeto de recurso ante un tribunal superior, con lo que se impide a los acusados ejercer el derecho a un proceso con las debidas garantías. La fuente alega que el Sr. Ramadhan no pudo consultar con un abogado con suficiente antelación para preparar su defensa. Según la fuente, el estado de salud del Sr. Ramadhan se encuentra gravemente deteriorado, por lo que actualmente está hospitalizado en el hospital de Qasr Al Ain.

8. En su respuesta, el Gobierno informó de que el Sr. Ramadhan es un miembro destacado de una organización terrorista proscrita que utiliza la violencia armada como medio para causar estragos y sembrar el terror entre la población, con el fin de perturbar la ley y el orden público en el país. En particular, en la causa 56/1997 sobre delitos militares, el tribunal militar lo acusó de ser responsable de diferentes explosiones en entidades bancarias. El Gobierno no indicó fechas exactas, circunstancias, víctimas u otros elementos pertinentes, ni detalles sobre la organización terrorista proscrita a la que presuntamente estaba vinculado el Sr. Ramadhan o los incidentes de violencia armada en que presuntamente estuvo implicado. El Gobierno se limitó a informar de que el tribunal militar condenó al Sr. Ramadhan el 15 de septiembre de 1997 a cadena perpetua, pena que actualmente sigue cumpliendo.

9. El Gobierno sostiene que el criterio para determinar si un juicio es justo no tiene que ver con la naturaleza del tribunal, sino más bien con las garantías que ofrecen sus procedimientos. Añade que los tribunales militares de Egipto cumplen con las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre medidas excepcionales cuando se declara un estado de excepción; aplican la ley penal ordinaria y proporcionan a los acusados que comparecen ante ellos las mismas garantías procesales que los tribunales ordinarios con arreglo al Código de Procedimiento Penal.

10. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente, que no hizo comentarios.

11. El Grupo de Trabajo observa que en un caso muy similar al presente, en su Opinión N° 3/2007 (A/HRC/7/4/Add.1, pág. 62), declaró arbitraria la detención del Sr. Ahmed Ali Mohamed Moutawala y 44 personas más. El Grupo de Trabajo desea reiterar los fundamentos de dicha Opinión.

12. Además de los argumentos contenidos en la mencionada Opinión N° 3/2007, el Grupo de Trabajo desea agregar la información que sigue a continuación.

13. Contrariamente a lo que sostiene el Gobierno, la naturaleza de una corte o tribunal es un elemento fundamental para considerar las garantías de imparcialidad e independencia a que hacen referencia el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La experiencia mundial es que los llamados tribunales militares están compuestos ante todo por jueces militares. Mientras que la cualidad esencial que debe tener un juez para ejercer sus funciones es la independencia, en el caso de un militar el principal valor es por definición la dependencia, incluso la obediencia. En el caso de Egipto, las competencias militares dependen del Ministerio de Defensa. Los jueces militares son oficiales militares nombrados por el Ministerio de Defensa por un período de dos años, que puede ser renovado por un período adicional de dos años a discreción del Ministerio. Además, el hecho de que sea el poder ejecutivo del Gobierno quien remite las causas a los tribunales crea un fuerte vínculo entre los tribunales militares y el poder ejecutivo.

14. El Gobierno señala que la Ley de sentencias militares se ha modificado recientemente para garantizar la imparcialidad e independencia de sus miembros mediante la concesión de la inmunidad judicial y el fortalecimiento de las garantías de las personas juzgadas por esos tribunales. El Grupo de Trabajo considera que el Gobierno confirma así que antes de dicha enmienda las garantías eran incluso inferiores a las actuales, y el Sr. Ramadhan fue juzgado en efecto en virtud de las antiguas normas. La enmienda también prevé la creación de un tribunal militar de apelaciones, que corresponde a un tribunal de casación. El Sr. Ramadhan no tuvo la posibilidad de interponer recurso ante un tribunal superior.

15. El Grupo de Trabajo observa además que los tribunales militares en Egipto están integrados por tres oficiales militares (o cinco en algunos casos) y un representante de la Fiscalía Militar. Un artículo de la Ley orgánica N° 25 de 1966, relativa a la jurisdicción militar, exige que los funcionarios militares que ejerzan la función de jueces tengan conocimientos de derecho. Sin embargo, este requisito sólo se aplica al director de esta jurisdicción y al Fiscal General Militar. La experiencia jurídica de algunos jueces y fiscales es generalmente limitada, y se circunscribe a las infracciones cometidas por militares contra la legislación y los códigos militares, pero no se extiende a la evaluación de delitos y responsabilidades propias de los civiles.

16. La integración de un representante de la Fiscalía como magistrado en el tribunal militar agrava la dependencia, o la falta de independencia, de ese tribunal, ya que la Fiscalía es, por su propia función, una de las partes —la que formula la acusación— en los procedimientos judiciales.

17. En 2002, el Comité de Derechos Humanos, al analizar el cumplimiento por parte de la República Árabe de Egipto de sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, observó "con inquietud la competencia que se concede a los tribunales militares y a los tribunales de seguridad del Estado para juzgar a civiles acusados de terrorismo, siendo así que tales tribunales no ofrecen garantías de independencia y que no es posible apelar contra sus decisiones ante una jurisdicción superior" (artículo 14 del Pacto) (CCPR/CO/76/EGY, párr. 16). El Comité también consideró que las leyes egipcias que penalizan el terrorismo (y que al parecer se habían aplicado al Sr. Ramadhan) contienen una "definición amplísima y general" de ese flagelo, lo que da lugar a graves consecuencias jurídicas.

18. Por otra parte, el Comité contra la Tortura, en sus Observaciones Finales, expresó su "especial preocupación por la gran cantidad de indicios de tortura y malos tratos en los locales administrativos bajo control del Departamento de Investigación para la Seguridad del Estado, situación que se facilita, según se informa, por la falta de inspecciones obligatorias de esos locales por un órgano independiente" (CAT/C/CR/29/4, párr. 5). El Sr. Ramadhan fue precisamente conducido a esos locales.

19. Además, la declaración de un estado de excepción por el Gobierno no cumple con el requisito del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para que esa declaración sea legítima. El Pacto establece que deben existir "situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación". En tales casos, puede haber medidas de excepción que suspendan algunas obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna. Toda suspensión de las obligaciones contraídas en virtud del Pacto se hará "en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación".

20. La declaración del estado de excepción fue realizada mediante el Decreto N° 560 del Presidente provisional (el Presidente de la Asamblea Popular) el 6 de octubre de 1981, el mismo día del asesinato del Presidente de la República, Anwar el-Sadat. Desde entonces el

estado de excepción se ha renovado periódicamente, sin que haya habido ni un solo día en que dejara de aplicarse. La última prórroga, por un período de dos años, se aprobó el 26 de mayo de 2008.

21. El 6 de octubre de 1981 se podía considerar sin duda que en Egipto prevalecía una situación excepcional que ponía en peligro la vida de la nación, pero este argumento parece ser menos válido hoy en día. El estado de excepción está afectando de forma clara los derechos de las personas que objetivamente no tienen vínculos con ese crimen. La larga duración del estado de excepción también ha sido condenada por el Comité contra la Tortura ("El hecho de que el estado de excepción esté vigente desde 1981, lo que obstaculiza la plena consolidación del imperio de la ley en Egipto"), así como por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("el estado de urgencia que ha regido en Egipto desde 1981 menoscaba la aplicación de las garantías constitucionales de los derechos económicos, sociales y culturales" (E/C.12/1/Add.44, párr. 10).

22. El Grupo de Trabajo considera, además, que el Sr. Ramadhan tenía derecho a que su caso fuera examinado de manera equitativa y justa ante un tribunal imparcial e independiente. Tenía también derecho, de acuerdo con el artículo 14, párrafo 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a que el fallo condenatorio y la pena que impuesta fueran sometidos a un tribunal superior. No fue así el caso.

23. A la luz de lo anteriormente expuesto, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La privación de libertad del Sr. Al Djema'a Seyed Suleymane Ramadhan desde el 11 de mayo de 1994 es arbitraria, pues contraviene los artículos 5, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

24. Consecuentemente con la Opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que remedie la situación del Sr. Ramadhan y le proporcione la atención médica y la asistencia que solicita, de modo que su situación esté en consonancia con las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Grupo de Trabajo considera que, dado el largo período que ya ha pasado privado de libertad, la reparación adecuada sería su inmediata puesta en libertad.

Aprobada el 9 de septiembre 2008.

## **Opinión N° 19/2008 (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 14 de enero de 2008.**

**Relativa al Sr. Michel Moungar.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haber proporcionado la información solicitada.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El caso que se resume a continuación se comunicó al Grupo de Trabajo de la siguiente manera: el Sr. Michel Moungar, nacido el 22 de octubre de 1973 en el Chad y ex miembro del Movimiento para la Democracia y la Justicia en el Chad (MDJC), entró en

el Reino Unido el 2 de enero de 2003 y solicitó asilo. Se le concedió el estatuto de refugiado en el Reino Unido el 6 de octubre de 2005 de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951.

5. El Sr. Mounkar fue detenido el 3 de noviembre de 2006 y acusado de engaño. Fue condenado a un año de prisión y acabó de cumplir la condena el 7 de mayo de 2007. Desde entonces está detenido en el Centro de Lindholme para la Deportación de Inmigrantes en Doncaster, con vistas a su expulsión del Reino Unido. Al mismo tiempo, las autoridades están tratando de revocar su estatuto de refugiado.

6. Su solicitud de libertad bajo fianza, de fecha 17 de mayo de 2007, fue rechazada el 1º de junio de 2007. El 3 de julio de 2007 el Sr. Mounkar impugnó la decisión relativa a su expulsión, recurso que fue desestimado el 16 de julio de 2007.

7. Tras expresar el Sr. Mounkar su temor a ser detenido y posiblemente asesinado en caso de ser devuelto al Chad, debido a su conocida militancia política contra el Gobierno de ese país, el Ministerio del Interior del Reino Unido decidió expulsarlo al Camerún, a pesar de no ser súbdito camerunés.

8. La fuente alega que la prolongada detención administrativa del Sr. Mounkar, de más de ocho meses, es arbitraria, pues dadas las circunstancias no es necesaria.

9. En su respuesta, el Gobierno informó de que Michel Mounkar no es el verdadero nombre de esta persona. El 10 de abril de 2007, las autoridades del Camerún confirmaron que su verdadera identidad es Blaise Emani Adabert, nacido el 22 de octubre de 1968 (y no el 22 de octubre de 1973) y ciudadano camerunés.

10. El Sr. Mounkar/Emani afirmó que había llegado al Reino Unido el 2 de enero de 2003, por vía aérea, acompañado por un facilitador pagado. No había pruebas de ello. Solicitó asilo el 21 de febrero de 2003 bajo la identidad de Michel Mounkar. Su solicitud fue denegada el 9 de mayo de 2005, y el 11 de mayo de 2005 se le notificó su situación y la obligación de su expulsión del Reino Unido por ser considerado inmigrante ilegal.

11. El 2 de junio de 2005 Michel Mounkar/Adabert Emani interpuso un recurso contra la denegación de su solicitud de asilo. El 22 de septiembre de 2005 su recurso fue aceptado y el 6 de octubre de 2005 fue reconocido como refugiado en los términos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. El 7 de noviembre de 2005 se le expidió un documento de viaje.

12. El 3 de noviembre de 2006, la persona que se hacía llamar Michel Mounkar fue detenida por funcionarios del Departamento de Trabajo y Pensiones bajo sospecha de posesión y uso de un pasaporte falso francés. El Gobierno añade que, cuando se registró su casa, se incautaron de un número significativo de documentos falsos con la identidad de Michel Mounkar. También se incautaron de un pasaporte auténtico expedido por la República del Camerún a nombre de Adabert Blaise Emani, nacido el 22 de octubre de 1968, y un permiso de conducir camerunés igualmente auténtico y al mismo nombre. También se encontró una tarjeta del Halifax Bank a nombre del Sr. A. B. Emani.

13. Según el Gobierno, el Sr. Adabert Blaise Emani intentó solicitar asilo en el Reino Unido por primera vez el 4 de julio de 2001, cuando se le negó la entrada a este país en Coquelles tras la presentación de un pasaporte falso francés con el nombre de Nayl Richard. El pasaporte camerunés auténtico encontrado después de su detención el 3 de noviembre de 2006 contenía un visado francés "Schengen" expedido en Douala, Camerún, el 16 de junio de 2001. Se pudo confirmar que el Sr. Emani había embarcado en el aeropuerto de Douala el 26 de junio de 2001 y había entrado en Francia en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle al día siguiente, una semana antes de que se le negara la entrada en el Reino Unido. El 4 de julio de 2001, el Sr. Emani fue detenido por la policía francesa, que le tomó fotografías y huellas dactilares. Posteriormente se comprobó que estas fotografías y huellas

dactilares tomadas en Francia coincidían con las fotografías y huellas dactilares de la persona que se hacía llamar Michel Mounkar en el Reino Unido.

14. El Sr. Mounkar/Emani fue condenado el 13 de marzo de 2007 por el Tribunal de la Corona de Manchester por posesión y uso de documentación falsa. Fue condenado a 12 meses de prisión y el Tribunal recomendó su expulsión. Él no interpuso recurso contra su pena o condena. El pasaporte camerunés con la identidad de Adabert Blaise Emani fue remitido a las autoridades correspondientes en el Camerún, que confirmaron que el pasaporte era auténtico y había sido expedido a nombre del Sr. Adabert Blaise Emani, nacido en Bafang el 22 de octubre de 1968. El 10 de abril de 2007, se solicitó al Sr. Emani que esgrimiera las razones por las que opinaba que no debería ser expulsado del Reino Unido. No respondió.

15. El 1º de mayo de 2007 se le informó de que se había decidido cancelar su condición de refugiado y dictar orden de expulsión contra él. Esta decisión admitía el derecho de recurso. El Sr. Emani presentó su apelación el 4 de mayo de 2007 con la identidad de Michel Mounkar. Arguyó que en caso de ser devuelto al Chad se enfrentaría a un trato contrario a los artículos 2, 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El 7 de mayo de 2007, el Sr. Mounkar/Emani completó su pena privativa de libertad y fue retenido posteriormente en virtud de las disposiciones del párrafo 2 del anexo 3 de la Ley de inmigración de 1971. El 3 de julio de 2007 se escuchó el recurso de apelación del Sr. Mounkar/Emani. Él estuvo presente y pudo prestar declaración ante el Juez de Inmigración.

16. En su resolución emitida el 16 de julio de 2007, el Juez de Inmigración comentó: "El recurrente es un testigo claramente deshonesto y carente de credibilidad". Y añadió lo siguiente: "Para llegar a la conclusión de que el pasaporte pertenece al recurrente también hemos tenido en cuenta la recuperación en su domicilio de un permiso de conducción camerunés que está igualmente a nombre de Adabert Blaise Emani. De acuerdo con nuestras constataciones, de que el recurrente ha mentado sobre su identidad chadiana y ha presentado una solicitud de asilo falsa alegando su persecución en el Chad, y teniendo en cuenta nuestras conclusiones positivas referentes a que tanto el pasaporte camerunés como el permiso de conducción pertenecen al recurrente, estamos convencidos, atendiendo al criterio de mayor probabilidad, de los hechos que indican que la verdadera identidad del recurrente es Adabert Blaise Emani y que se trata de un ciudadano del Camerún y que no es Michel Mounkar del Chad".

17. Tras constatar que la expulsión del Sr. Emani al Camerún no contravendría las obligaciones del Reino Unido establecidas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados o el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Juez de Inmigración llegó a la siguiente conclusión: "Tenemos en cuenta el hecho de que la sentencia del Juez recomendó la expulsión y que el delito por el que el recurrente fue condenado era el uso de un pasaporte francés falso, un delito que atenta contra un aspecto clave del control de la inmigración. También tenemos en cuenta nuestras conclusiones en el sentido de que el recurrente engañó al demandado para que le concediera asilo alegando falsamente que era un súbdito del Chad que había sufrido persecución en ese país. Consideramos que la política de interés público exige que no se permita que las personas que abusan de tal modo del sistema de asilo mediante engaño se beneficien de ese hecho para permanecer en el Reino Unido, salvo tal vez en circunstancias sumamente excepcionales, y claramente este caso no entra en esa categoría".

18. El 14 de agosto de 2007, la solicitud del Sr. Mounkar/Emani de que se revisara la desestimación de su recurso fue rechazada por el Juez Principal de Inmigración. El Sr. Mounkar/Emani dijo entonces ser de Darfur, en el Sudán. El 15 de agosto de 2007 presentó una nueva solicitud ante el Tribunal Superior de Justicia de que se revisara la decisión de desestimar su recurso, que fue rechazada el 22 de noviembre de 2007, lo que

agotaba todas las vías de recurso. El 21 de enero de 2008 se firmó una orden de expulsión contra Adabert Blaise Emani, la cual autorizaba su detención hasta que saliera del territorio del Reino Unido. Más tarde fue expulsado al Camerún.

19. El Gobierno, por último, manifiesta que el mantenimiento en detención del Sr. Emani fue revisado periódicamente. El párrafo 2 del anexo 3 de la Ley de inmigración de 1971 establece que una persona cuya expulsión haya recomendado un tribunal puede ser retenida mientras se formula la orden de expulsión. La detención del Sr. Emani, en consecuencia, fue legal y plenamente justificada por la recomendación del tribunal de que fuera expulsado; por su pésimo historial de inmigración; por el grado de engaño que practicó; y por la probabilidad de que no cumpliera con las condiciones impuestas para su liberación.

20. El Gobierno presentó su respuesta a la fuente, que no facilitó al Grupo de Trabajo observaciones o comentarios.

21. El Grupo de Trabajo considera que el Sr. Michel Mounzar/Adabert Blaise Emani fue expulsado al Camerún en virtud de una orden de expulsión dictada por una autoridad administrativa competente en materia de inmigración, y que esta decisión fue revisada por las autoridades judiciales competentes, el Juez de Inmigración y el Tribunal Supremo.

22. Sin embargo, el Grupo de Trabajo también tiene en cuenta que esta persona estuvo en detención penal entre el 3 noviembre de 2006 y el 7 de mayo de 2007 por posesión y uso de documentación falsa, y en detención administrativa desde entonces y hasta su expulsión. Sus solicitudes de excarcelación bajo fianza fueron denegadas el 1º de junio y el 8 de noviembre de 2007. Este período de detención administrativa parece ser de una duración injustificada e innecesaria para la ejecución de una orden de expulsión. El Grupo de Trabajo considera que el derecho a no ser privado de libertad es uno de los derechos humanos fundamentales y que los principios de no dilación indebida y plazo razonable están consagrados en los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (véase, a este respecto, la Opinión N° 45/2006 del Grupo de Trabajo (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (A/HRC/7/4/Add.1, pág. 43)).

23. Teniendo en cuenta que el Sr. Michel Mounzar/Adabert Blaise Emani fue expulsado del Reino Unido, el Grupo de Trabajo, de acuerdo con el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo, decidió archivar el caso.

Aprobada el 10 de septiembre de 2008.

## **Opinión N° 20/2008 (Egipto)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 24 de octubre de 2007.**

**Relativa al Sr. Islam Subhy Abd al-Latif Atiyah al-Maziny.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haber proporcionado la información solicitada referente a las alegaciones de la fuente.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El caso que se resume a continuación se comunicó al Grupo de Trabajo de la siguiente manera: el Dr. Islam Subhy Abd al-Latif Atiyah al-Maziny, nacido el 21 de octubre de 1971, es un médico muy conocido y un prestigioso escritor residente en Al Gharbiyah. No es miembro de ninguna asociación política. Ha publicado, entre otros libros, una guía de medicina de familia titulada *Before You Go to the Doctor; The Diary of the*

*Unfortunate Doctor between Addicts; When Men Stagger; The Wonder of Muslim Doctors;* y una enciclopedia sobre la historia de la medicina islámica; *Cataract and Glaucoma; Our Sexual Troubles before and after Marriage* y *Social y Medical Study about Addiction: My Enemy Inside my Cage*.

5. Se informó de que el Dr. Al-Maziny debió viajar a Arabia Saudita con el fin de trabajar temporalmente en un centro médico. Después de obtener un permiso de trabajo de las autoridades competentes, se dirigió a la jefatura de seguridad de Tanta, en Egipto, el 7 de abril de 2007, y fue arrestado. El jefe de seguridad le informó de que el motivo de su detención era facilitar una investigación. Permaneció recluido en régimen de incomunicación, en una exigua celda y en condiciones antihigiénicas e insalubres, durante 50 días. Los guardias a menudo le impedían ir al baño. Según la fuente, el Dr. Al-Maziny fue maltratado durante su detención. No fue interrogado acerca de un hecho preciso ni acusado de haber cometido un delito concreto.

6. El 27 de mayo de 2007, el Dr. Al-Maziny fue trasladado a la prisión Wady Natroune. Se cree que el Ministro del Interior emitió una orden administrativa para su detención, pero el Dr. Al-Maziny nunca recibió una notificación formal de dicha orden ni un mandamiento para su detención. El 7 de julio de 2007, un tribunal civil ordenó su liberación inmediata. El tribunal consideró que no había pruebas contra el detenido y que su detención no estaba justificada, sobre todo teniendo en cuenta su buena reputación y su posición respetable en la sociedad egipcia.

7. Sin embargo, el Dr. Al-Maziny fue detenido de nuevo cuando salía de la prisión por agentes de los Servicios de Seguridad del Estado, que lo llevaron a su cuartel general en Tanta, donde se le aplicó de nuevo un régimen de incomunicación. Según la fuente, esta nueva detención fue una falta de respeto hacia la decisión del tribunal civil y demuestra desprecio hacia el estado de derecho. El 16 de julio de 2007, el Dr. Al-Maziny fue trasladado de nuevo a la prisión de Wady Natroune.

8. En julio de 2007, el jefe de la Unidad de Salud de la cárcel ordenó el inmediato traslado del Dr. Al-Maziny al hospital, ya que consideró que su estado de salud se había deteriorado gravemente durante su estancia en prisión. El Dr. Al-Maziny sufre de varias enfermedades, entre ellas una úlcera anastomótica con una gastritis con riesgo de hemorragia; una patología discal con compresión de las vértebras; un cálculo uretral y una isquemia retiniana. La administración penitenciaria no aceptó su traslado al hospital, y en lugar de eso agravó las condiciones, ya extremadamente duras, de su detención.

9. La fuente informa de que el Dr. Al-Maziny permanece detenido en virtud del artículo 3 de la Ley de excepción N° 162 de 1958. Esta ley capacita al Ministro del Interior para detener administrativamente a cualquier persona sin cargos ni orden judicial, y da derecho a los servicios de seguridad a determinar la naturaleza "sospechosa" de cualquier individuo, así como la "amenaza" potencial que esa persona representa para el "orden público". Los servicios de seguridad no están obligados a fundamentar o defender sus consideraciones o temores acerca de un individuo. El Dr. Al-Maziny nunca ha recibido una notificación sobre su detención, la posible duración de la misma o las razones por las que se le ha privado de libertad. No se le han formulado cargos ni se le ha acusado de haber cometido ningún delito, ni se ha previsto un juicio.

10. La fuente añade que, contrariamente a la disposición contenida en el artículo 9, párrafo 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Dr. Al-Maziny no dispone de ningún recurso efectivo para impugnar la legalidad de su detención. Permanece en prisión a pesar de la decisión judicial que ordenaba su puesta en libertad. No se le han formulado cargos, no se lo ha acusado ni juzgado, y no sabe de qué hechos se le considera responsable.

11. Según el Gobierno, el Dr. Islam Subhi Abd al-Latif Al-Maziny era miembro activo de un movimiento extremista. El Ministro de Interior ordenó su detención en virtud de la Ley de excepción N° 162 de 1958, en su versión enmendada, a fin de detener sus actividades. Recibió el tratamiento pertinente en su lugar de detención y su estado en ese momento era estable. El ciudadano mencionado *supra* fue puesto en libertad el 19 de diciembre de 2007.

12. El Gobierno afirma que el concepto "circunstancias excepcionales" es un elemento fundamental de todos los sistemas jurídicos nacionales. Permite a las autoridades nacionales adoptar determinadas medidas de emergencia para hacer frente a las amenazas contra la estabilidad social y la seguridad. En el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos figuran disposiciones a tal efecto, igual que en el artículo 15 del Convenio Europeo [de Derechos Humanos] y en el artículo 26 de la Convención Americana [sobre Derechos Humanos]. Egipto ha seguido el enfoque de la legislación anterior que regulaba el estado de excepción desde 1962. Esta ley fue enmendada para ponerla en consonancia con las normas internacionales y con las obligaciones jurídicas de Egipto en este sentido.

13. Como se indicó anteriormente, el Dr. Al-Maziny fue detenido de conformidad con la Ley de excepción, que permite la detención administrativa durante un período limitado por ley. Como es bien sabido, el estado de excepción está a punto de ser levantado y, en consecuencia, la Ley de excepción no se aplicará una vez que se promulgue la Ley de lucha contra el terrorismo.

14. El Gobierno concluye que la detención del Dr. Al-Maziny no fue arbitraria, sino que se basó en razones objetivas relacionadas con sus actividades, y se ordenó legalmente y de conformidad con la legislación vigente en Egipto, y teniendo en cuenta los términos del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que hace referencia a los estados de excepción.

15. La fuente confirmó que el Dr. Al-Maziny, cuya salud se ha degradado gravemente durante su detención, fue en efecto puesto en libertad el 19 de diciembre de 2007. Permaneció detenido, por tanto, más de ocho meses sin ningún fundamento jurídico, por una simple decisión del Ministro del Interior, un hecho que el Gobierno no contradice en su respuesta. El Gobierno persiste en justificar detenciones arbitrarias y detenciones de larga duración en virtud de la Ley de excepción de 1958, una ley que ha permanecido en vigor durante más de 50 años, mientras invoca el artículo 4 del Pacto, un instrumento internacional diseñado para proteger los derechos humanos y no para justificar la violación de dichos derechos por parte de los Estados.

16. Además, según la fuente, el Gobierno no contesta las alegaciones formuladas, en concreto que:

a) El Dr. Al-Maziny fue efectivamente detenido el 7 de abril de 2007 en su lugar de residencia por agentes de los Servicios de Seguridad del Estado sin ninguna orden judicial y retenido en secreto durante 50 días sin posibilidad de contacto con el mundo exterior;

b) Nunca se le notificó acusación judicial alguna, ni fue llevado ante ningún tribunal ni ante ninguna otra autoridad judicial;

c) Fue arrestado y retenido durante todo este período como "medida preventiva", sólo en base a su presunta "pertenencia a un movimiento extremista", entendiendo esto como explicación de sus opiniones políticas; durante ese tiempo no se comprobó ningún hecho material en su contra;

d) A pesar de la existencia de una decisión judicial que ordenaba su puesta en libertad el 7 de julio de 2007, fue retenido sin procedimiento legal alguno, haciendo de esta

forma improductiva e ineficaz cualquier apelación o recurso a la justicia sobre la legalidad de su detención.

17. De acuerdo con los métodos del Grupo de Trabajo, si por cualquier razón la persona se ha puesto en libertad tras el envío del caso al Grupo, dicho caso debería, en principio, ser archivado. Sin embargo, el Grupo de Trabajo, aunque la persona haya sido puesta en libertad, se reserva el derecho de emitir una Opinión, caso por caso, sobre si la privación de libertad fue o no arbitraria.

18. El fundamento jurídico de la privación de libertad del Dr. Al-Maziny proviene del estado de excepción declarado el 6 de octubre 1981, de acuerdo con la Ley de excepción N° 162 de 1958, por la República Árabe de Egipto, que lo ha mantenido en vigor sin interrupción durante más de 26 años. El estado de excepción otorga el Ministerio del Interior amplios poderes para suspender los derechos básicos, tales como detener a personas indefinidamente sin cargos ni juicio. La duración de este estado de excepción ha sido una preocupación constante de la comunidad de derechos humanos, incluido el Grupo de Trabajo.

19. De hecho, el Grupo de Trabajo considera que, contrariamente al argumento del Gobierno, el estado de excepción declarado por el poder ejecutivo de Egipto no se ajusta a los requisitos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que su artículo 4 establece que podría darse "en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación". No pueden ser suspendidas todas las obligaciones contraídas en virtud del Pacto, y durante el tiempo que dure la suspensión se deben seguir atendiendo las demás obligaciones impuestas por el derecho internacional, que no darán lugar a ninguna discriminación prohibida. Toda suspensión temporal de las obligaciones contraídas en virtud del Pacto debe limitarse estrictamente a las exigencias de la situación invocada.

20. La declaración del estado de excepción se realizó el 6 de octubre 1981, el mismo día del asesinato del ex Presidente de la República, Anwar el-Sadat. Se hizo de acuerdo con la Ley de excepción N° 162, aprobada en 1958 bajo el Gobierno de Gamal Abdul Nasser, por decreto del Presidente interino, el Dr. Soufy Abu Talib, entonces Presidente de la Asamblea Popular. Desde ese día, el estado de excepción se ha renovado periódicamente. El 26 de mayo de 2008 fue prorrogado por un período de dos años, prevaleciendo por tanto hasta el 31 de mayo de 2010. El estado de excepción ha permitido al Gobierno detener a prisioneros indefinidamente y sin cargos.

21. Sin duda, el asesinato del Presidente el-Sadat en 1981 y sus eventuales consecuencias podían ser considerados en su momento un "peligro para la vida de la nación", pero dicho argumento parece carente de validez en el momento actual, o al menos no debería afectar los derechos de las personas que objetivamente no están vinculadas con aquella situación. El estado de emergencia se asocia a tiempos de guerra, entre países o interna, a disturbios o a desastres naturales que ponen en peligro la seguridad o el orden público. Esta larga duración del estado de excepción también se ha denunciado en un informe del Comité contra la Tortura ("el hecho de que el estado de excepción esté vigente desde 1981" obstaculiza "la plena consolidación del imperio de la ley en Egipto", señaló el Comité en su informe CAT/C/CR/29/4, art. 5 a)), así como por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("el estado de urgencia que ha regido en Egipto desde 1981 menoscaba la aplicación de las garantías constitucionales de los derechos económicos, sociales y culturales", señaló el Comité en su informe E/C.12/1/Add.44, párr. 10). En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Humanos recomendó que Egipto levantara el estado de excepción permanente.

22. Debe considerarse que, aunque un tribunal, actuando conforme a un criterio jurídico estricto, había ordenado la liberación del Dr. Al-Maziny el 7 de julio de 2007, el Gobierno,

ignorando el mandato judicial, ordenó su nuevo arresto y su detención secreta, sin formular cargos en su contra.

23. En vista de lo anterior, aunque el Dr. Al-Maziny disfrutó del derecho de un recurso para impugnar su detención, este no se hizo efectivo en términos absolutos, como exige el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

24. El Grupo de Trabajo carece de precedentes y de suficiente información de contexto para pronunciarse sobre si la detención del Dr. Al-Maziny estuvo motivada por el ejercicio legítimo de alguno de los derechos mencionados en la categoría II de sus métodos de trabajo (véase *supra* el párrafo 3).

25. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

a) La privación de libertad del Dr. Al-Maziny durante el período que va del 7 de abril de 2007 al 7 de julio de 2007 (fecha en que el tribunal ordenó su puesta en libertad) fue arbitraria, de acuerdo con los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 9, párrafos 1, 2, 3 y 4, y el artículo 14, párrafos 1, 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y entra en las categorías I y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo;

b) La detención del Dr. Al-Maziny durante el período que va del 8 de julio de 2007 al 19 de diciembre de 2007 (día de su liberación) fue arbitraria de acuerdo con la categoría I, por la inexistencia de base jurídica válida para justificar su privación de libertad.

26. Consecuentemente con la Opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que garantice el derecho a la libertad y a la seguridad de todas las personas, y le solicita que disponga las medidas efectivas necesarias para indemnizar al Dr. Al-Maziny, de conformidad con el artículo 9, párrafo 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que informe de ello al Grupo de Trabajo.

Aprobada el 10 de septiembre de 2008.

### **Opinión N° 21/2008 (China)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 17 de julio de 2007.**

**Relativa al Pastor Shengliang Gong.**

**El Estado ha firmado pero no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por proporcionar la información solicitada.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El caso que se resume a continuación se comunicó al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la siguiente manera: el Pastor Gong Shengliang (Gong Dalí) es un pastor cristiano de la provincia de Hubei, que fundó la Iglesia del Sur de China en 1988. La Iglesia del Sur de China actúa con independencia de la única iglesia protestante sancionada por el Estado en China, el Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías. La Iglesia no está registrada en la Oficina de Asuntos Religiosos. Bajo el liderazgo del Pastor Gong, se transformó rápidamente en una de las mayores iglesias cristianas protestantes de China. Entre 1986 y 2001 fueron encarcelados más de 2.000 miembros de la Iglesia. En 2000, el Comité Central del Partido Comunista Chino y la Oficina General del Consejo de Estado

atribuyeron a la iglesia del pastor Gong la denominación de "organización sectaria" e intensificaron sus esfuerzos para desmantelarla. En un Aviso de secta se declaró que el Pastor Gong y la Iglesia eran una amenaza para la sociedad y se dieron instrucciones a los departamentos de seguridad de todo el país para "detener de inmediato a Gong y los miembros clave [de la Iglesia]".

5. El 8 de agosto de 2001, la policía de Hubei detuvo al Pastor Gong en la casa de un miembro de la Iglesia. Entre mayo y octubre de 2001, la policía también arrestó a otros 16 miembros de la Iglesia del Sur de China, que más tarde fueron acusados y juzgados junto con el Pastor Gong. Después de su detención, la policía no permitió a los miembros de la Iglesia contactar con sus familiares ni comunicó a estos el lugar en que estaban detenidos. La policía tampoco permitió que los miembros de la Iglesia se pusieran en contacto con abogados.

6. Veintiún miembros de la Iglesia del Sur de China han explicado detalladamente en las declaraciones juradas presentadas al Grupo de Trabajo que la policía de Hubei los torturó para que prestaran falsos testimonios antes y durante los juicios del Pastor Gong. Identificaron las siguientes instalaciones gubernamentales como lugares donde la policía los torturó: Oficina de Seguridad Pública de Zhongxiang, Centro de Detención de Jingmen, Centro de Capacitación Policial de Zhongxiang, Escuela de Formación de la Policía de Jingmen y Centro de Detención de Shayang. También identificaron por su nombre a funcionarios de la Oficina de Asuntos Religiosos de Zhongxiang, de la Oficina de Seguridad Pública de Zhongxiang, de la Oficina de Seguridad Pública de Shayang, y de la Comisaría de Chengzhong, como responsables de supervisar y llevar a cabo la tortura. El Gobierno acusó al Pastor Gong de haber violado a diez mujeres (sus nombres han sido registrados por el Grupo de Trabajo), pero todas ellas se retractaron de sus declaraciones y dijeron que habían sido torturadas para que contribuyeran a formular las acusaciones.

7. Según la fuente, el propio Pastor Gong fue torturado y obligado a firmar una falsa confesión de culpabilidad. Aunque la detención del Pastor Gong se produjo el 8 de agosto de 2001, su familia no tuvo noticia de su paradero hasta el 10 de diciembre de 2001. Durante esos cuatro meses de detención en régimen de incomunicación, la policía interrogó en varias ocasiones al Pastor Gong en situaciones de coacción mental, psicológica y física. El Pastor Gong firmó bajo amenaza una declaración en que admitía los cargos de violación y agresiones físicas. El 5 de diciembre de 2001, después de casi cuatro meses de detención en régimen de incomunicación, la Fiscalía acusó al Pastor Gong de creación de una secta, violación y agresiones físicas intencionales. Se informó de que en virtud del artículo 300 del Código Penal de la República Popular de China (la Ley "antisectas"), la prueba de que el líder ha tenido "relaciones sexuales ilícitas con mujeres" se puede utilizar para fundamentar la acusación de que la organización es una secta.

8. El 19 de diciembre de 2001, el Tribunal Intermedio inició un juicio a puerta cerrada en contra del Pastor Gong y los otros 16 acusados. No se permitió a los familiares de los acusados entrar en el juzgado. El primer día del juicio el Pastor Gong presentaba un estado visiblemente debilitado. En el segundo día de la vista oral, el Pastor Gong era incapaz de mantenerse en pie. Se dirigió al Juez y se desmayó antes de que el Juez pudiera responderle. El Tribunal Intermedio permitió a las presuntas víctimas de agresiones prestar testimonio sin identificarse. Las presuntas víctimas no pudieron identificar a ninguno de los acusados como sus agresores. El Tribunal no permitió a los abogados del Pastor Gong interrogar a ninguna de las presuntas víctimas. Al menos seis de los acusados declararon ante el tribunal que habían sido torturados durante los interrogatorios y bajo esta coacción habían hecho acusaciones falsas contra el Pastor Gong de las que querían retractarse. Sin embargo, el Tribunal Intermedio no les permitió retractarse de las falsas acusaciones. Todos los acusados presentaron una declaración escrita ante el tribunal explicando que sus confesiones eran falsas y habían sido obtenidas mediante tortura. El mismo Pastor Gong

presentó una declaración escrita afirmando que había sido obligado a realizar una falsa confesión de culpabilidad. El Tribunal Intermedio no dio curso a este documento ni investigó las denuncias de tortura.

9. El auto de acusación incluía más de 20 cargos penales contra el Pastor Gong y los otros 16 acusados, y enumeraba 13 aldeas repartidas en 10 municipios y 8 ciudades como centro de sus presuntas actividades. Los cargos incluían actividades que abarcaban un período de más de seis años, y mencionaban a 30 presuntas víctimas y a 31 supuestos testigos. Después de sólo tres días de procedimiento, el Tribunal Intermedio determinó que el Pastor Gong era culpable de agresión, violación, "creación y utilización de una secta para socavar la aplicación de la ley", y destrucción deliberada de bienes. El Tribunal Intermedio condenó al Pastor Gong a muerte. Los guardias obligaron al Pastor Gong y a los otros acusados a firmar el acta del juicio sin permitirles leerla.

10. Los acusados interpusieron recurso ante el Tribunal de Apelaciones, que admitió que "los hechos afirmados por el Tribunal Intermedio no son claros y las pruebas que apoyan la sentencia no son concluyentes". Se ordenó un nuevo juicio. Este segundo juicio del Pastor Gong y los otros 16 acusados comenzó el 9 de octubre de 2002. Se negó a los abogados del Pastor Gong el acceso a las actas del primer juicio. El día antes de que comenzara el juicio, el 8 de octubre de 2002, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Intermedio requirieron la asistencia de los abogados del Pastor Gong a un almuerzo-reunión de carácter privado. En el encuentro, los funcionarios del Tribunal Intermedio explicaron a los abogados del Pastor Gong que el caso tenía relevancia política y que debían mantener los secretos de Estado y cooperar con el Tribunal Intermedio a fin de que el juicio tuviera una conclusión rápida. El segundo juicio se celebró de nuevo a puerta cerrada. En lugar de escuchar los testimonios en directo sobre los cargos de violación y agresión, el Tribunal Intermedio ordenó a la Fiscalía que presentara sólo resúmenes de las declaraciones de los testigos y las víctimas. El Tribunal Intermedio rechazó la petición de los abogados defensores de que las pruebas se presentaran de forma completa. Con respecto a los cargos de violación, la Fiscalía reveló sólo los apellidos de las cuatro presuntas víctimas, ninguna de las cuales testificó en el juicio. Por otra parte, las declaraciones de las víctimas nunca se mostraron al Pastor Gong o a sus abogados. Los abogados del Pastor Gong no pudieron por tanto determinar las identidades de las presuntas víctimas, y mucho menos interrogar a los testigos de cargo ni defender al Pastor Gong contra las acusaciones.

11. La sentencia del Tribunal Intermedio en el segundo juicio se basó expresamente en pruebas obtenidas mediante tortura para condenar al Pastor Gong por violación. También se cita en la misma la confesión del Pastor Gong a la policía, que se obtuvo de manera similar, bajo coacción de tortura. Después de sólo un día y medio de procedimiento, el Tribunal Intermedio condenó al Pastor Gong por violación y lesiones físicas intencionales. Esta vez lo condenó a cadena perpetua.

12. La fuente alega que el Gobierno violó el derecho del Pastor Gong a un juicio justo, al basarse en confesiones obtenidas mediante tortura de miembros de la Iglesia del Sur de China, y al negar las debidas garantías fundamentales en el proceso. Tanto el Pastor Gong como los miembros de la Iglesia coimputados presentaron denuncias de tortura a la Fiscalía antes del juicio. También instaron enérgicamente a los jueces durante el primer y el segundo juicio al Pastor Gong a que examinaran sus denuncias de tortura. El artículo 18 de la Ley de procedimiento penal exige a la Fiscalía investigar las denuncias de tortura, pero la Fiscalía no inició ninguna investigación. El Tribunal Intermedio también hizo caso omiso en el primer juicio de las objeciones de los miembros de la Iglesia a la presentación de las declaraciones obtenidas mediante tortura. En el segundo juicio, el Tribunal Intermedio pasó por alto igualmente las objeciones al uso de pruebas obtenidas mediante tortura. El Pastor Gong fue condenado en base a las declaraciones resumidas del primer juicio, incluidas las confesiones obtenidas bajo coacción de Li Ying, Minghua Sol y el Pastor Gong. Según la

fuente, la condena al Pastor Gong a penas de prisión es arbitraria porque se basa en pruebas obtenidas mediante tortura.

13. La fuente afirma que el Gobierno, además, violó el derecho del Pastor Gong a un juicio justo al negarle las debidas garantías fundamentales en el proceso, incluido el derecho a disponer del tiempo y los medios para defenderse de los cargos; el derecho a un juicio público; el derecho a ser informado de los cargos; el derecho a interrogar a los testigos; y el derecho a interrogar a los testigos de descargo. La decisión del Tribunal Intermedio de celebrar el juicio a puerta cerrada violó el derecho del Pastor Gong a un juicio público, dando lugar de este modo en una detención arbitraria. El Tribunal Intermedio cerró las puertas al público en los dos juicios al Pastor Gong. Los familiares cercanos del Pastor Gong y de los miembros de la Iglesia se vieron obligados a esperar en el exterior del palacio de justicia. El Tribunal Intermedio trató de justificar el juicio a puerta cerrada porque los cargos incluían violación. Sin embargo, ni siquiera se examinaron los cargos de violación durante los procesos, ni se llamó a ninguna presunta víctima a declarar, ni siquiera al Pastor Gong, ni se revelaron los nombres completos de las presuntas víctimas de violación. Así, la intimidación de las presuntas víctimas nunca estuvo expuesta a riesgo y tan sólo sirvió de pretexto para evitar la importante salvaguardia de la justicia que proporciona un juicio público. De las constancias tampoco se desprenden otras "circunstancias excepcionales" (como la seguridad nacional) que podrían justificar la celebración de un juicio a puerta cerrada.

14. Con respecto al derecho a disponer del tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, la fuente señala que los cargos contra el Pastor Gong eran extremadamente complejos. La acusación incluía más de 20 cargos penales contra él y los otros 16 acusados, y enumeraba como centro de sus presuntas actividades 13 aldeas repartidas en 10 municipios y 8 ciudades. Los cargos incluían actividades que abarcaban un período de más de seis años. Se mencionaba a 30 presuntas víctimas y a 31 supuestos testigos. Sin embargo, en ambos juicios el Tribunal Intermedio no concedió al Pastor Gong y a los demás miembros de la Iglesia tiempo suficiente para preparar la defensa. Antes del segundo juicio, los abogados del Pastor Gong solicitaron expresamente una prórroga del plazo sobre la base de que los cuatro días concedidos eran claramente insuficientes. Sin embargo, el Tribunal Intermedio denegó su petición. Además, durante los cuatro meses que permaneció detenido en régimen de incomunicación antes del juicio de diciembre de 2001 se denegó al Pastor Gong el acceso a asistencia jurídica. Por otra parte, el Tribunal Intermedio no permitió el acceso a las actas y a las pruebas del primer juicio a los abogados del Pastor Gong, a pesar de que el Tribunal Intermedio se basó en las pruebas del primer juicio para condenarlo en el segundo. El Tribunal Intermedio denegó al Pastor Gong el acceso al expediente y al veredicto del primer juicio. De esta forma, el Tribunal Intermedio no permitió a los abogados del Pastor Gong determinar si la Fiscalía había subsanado las deficiencias de las pruebas en el primer juicio.

15. La fuente sostiene que el Gobierno vulneró el derecho del Pastor Gong a ser informado de los cargos en su contra. En el segundo juicio la Fiscalía y el Tribunal se negaron a facilitar al Pastor Gong la identidad de las personas a las que supuestamente había violado. Además, el Gobierno no informó al Pastor Gong de que iba a ser juzgado por el cargo de organizar una banda delictiva hasta que la Fiscalía lo planteó durante el segundo juicio. Los abogados defensores protestaron porque dicho cargo no estaba en el auto de procesamiento. El Tribunal Intermedio desestimó sus objeciones, permitió a la Fiscalía proceder y obligó a la defensa a refutar sus acusaciones sin darle tiempo adicional para prepararse. El Tribunal Intermedio concluyó el juicio sin más explicaciones del nuevo cargo. El Gobierno también denegó al Pastor Gong un proceso con las debidas garantías al no dar a sus abogados la oportunidad de interrogar a cualquiera de los testigos de la Fiscalía. El Tribunal Intermedio no sólo no permitió que el Pastor Gong interrogara a cualquiera de las cuatro presuntas víctimas de violación, sino que incluso se negó a revelar

sus identidades. El acusado no tuvo forma alguna de saber... a quienes supuestamente había violado, ni cómo se llamaban. Además, el Gobierno negó al Pastor Gong un proceso con las debidas garantías al prohibirle llamar o interrogar a los testigos de descargo.

16. Según la fuente, el Gobierno ha encarcelado al Pastor Gong como castigo por sus creencias religiosas, violando así el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución de la República Popular de China, que protege el derecho de las personas a "profesar cualquier religión", y establece que ningún ciudadano será discriminado por el Estado por sus creencias religiosas. En el primer juicio, el Tribunal Intermedio se basó en la evidencia de que miembros de la Iglesia fueron "enviados a diferentes lugares para participar en la obra misionera y aumentar sus conversos" para encontrar al Pastor Gong culpable de la organización de sectas. Además, el Gobierno interpretó erróneamente varias enseñanzas cristianas para poner de manifiesto un desafío político al régimen socialista. El Aviso de secta calificaba la colecta de donativos de la Iglesia como una práctica ilegal de "coacción y engaño". La fuente afirma que el Gobierno nunca presentó ninguna prueba de que los miembros de la Iglesia fueran engañados en cuanto al uso de sus diezmos, ni de que se utilizaran para ninguna otra cosa que las actividades legítimas de la Iglesia, o de que las prácticas contables de la Iglesia fueran fraudulentas. Sin embargo, el Tribunal Intermedio se basó en la calificación del Aviso de secta sobre el uso del diezmo para condenar al Pastor Gong por la organización de sectas.

17. En su respuesta, el Gobierno informó de que el 7 de diciembre de 2001, la Fiscalía Popular de Jingmen, en la provincia de Hubei, inició un procedimiento penal ante el Tribunal Intermedio Popular Municipal del Jingmen contra Gong Dali, también conocido como Gong Shengliang (varón, nacido en mayo de 1952), los agricultores de la aldea de Xuzhai (en el municipio de Zaoyang, provincia de Hubei) y otras personas por agresiones, violación y otros delitos. Debido a la necesidad de proteger la intimidad de las víctimas en este caso, el Tribunal Intermedio Popular Municipal de Jingmen, de conformidad con la ley, no llevó a cabo el procedimiento en audiencia pública y el 25 de diciembre de 2001 dictó sentencia en primera instancia. Tras su condena en primera instancia, Gong y los otros acusados se negaron a aceptar la sentencia del tribunal y apelaron. Tras el examen del caso, el Tribunal Supremo Popular de la Provincia de Hubei dictaminó que algunos de los hechos aportados como prueba en el procedimiento en primera instancia no estaban claros, y el 23 de septiembre de 2002 desestimó la sentencia dictada en primera instancia y envió el caso para un nuevo juicio.

18. Los días 9 y 10 de octubre de 2002, el Tribunal Intermedio Popular de Jingmen, de conformidad con la ley, volvió a juzgar el caso a puerta cerrada y determinó los siguientes hechos: durante el período de noviembre de 1999 a mayo de 2001, Gong y sus coacusados, actuando bajo el liderazgo de Gong, arrojaron ácido sulfúrico a la cara de sus víctimas para desfigurarlas, irrumpieron en locales cerrados bajo llave con la cara cubierta, golpeando a sus víctimas ferozmente con barras de metal, incluso derribando las paredes para entrar en edificios y para llevar a cabo sus golpes, como venganza contra los aldeanos que se oponían a sus actividades ilegales; hirieron a 16 personas, 4 de ellas de gravedad, 10 con lesiones menores y 2 con heridas leves, haciendo uso de una crueldad extrema y de la manera más reproachable. Además, con el uso de la fuerza, el engaño y otras tácticas, Gong llevó a cabo varios atentados al pudor y violaciones contra las mujeres jóvenes Wang [nombre omitido], Li [nombre omitido], Yang [nombre omitido], Zhang [nombre omitido] y otras, en las ciudades de Zhongxiang, Zaoyang y Shiyan, en los hogares de otras personas, y en el sector Huangzhuang de la represa de control de inundaciones del río Han en la ciudad de Zhongxiang.

19. Tras el juicio, el Tribunal Intermedio Popular de Jingmen hizo pública su sentencia en el mismo tribunal, condenando a Gong, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 234, párrafos 1 y 2, y 236, párrafo 3 b), del Código Penal chino, por el delito de

lesiones corporales intencionales, a cadena perpetua, despojándolo de sus derechos políticos a perpetuidad; por el delito de violación, a una pena de prisión de 10 años; con la condena final unificada de cadena perpetua, y la privación de sus derechos políticos, a perpetuidad. Los coacusados de Gong fueron condenados por el delito de lesiones corporales intencionales a penas de prisión de entre 2 y 15 años. Otros cuatro acusados fueron absueltos. Los otros cargos presentados por las autoridades fiscales contra Gong y el resto de acusados fueron desestimados, pues los hechos no estaban claros en el auto de procesamiento, se carecía de pruebas y no se estableció el delito.

20. Tras el procedimiento en primera instancia, Gong y sus coacusados interpusieron un recurso de casación. El Tribunal Supremo Popular de la Provincia de Hubei consideró el caso en segunda instancia y el 22 de noviembre de 2002 resolvió que se debía desestimar el recurso y mantener la sentencia original. Gong purga actualmente su condena en la prisión de Hongshan, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei. Antes de su ingreso en prisión, se le diagnosticaron úlceras de estómago; según su propia declaración, había sufrido hasta ese momento más de 20 intervenciones y procedimientos quirúrgicos, las cicatrices de los cuales eran visibles en su abdomen; igualmente, desde hacía muchos años tomaba medicamentos de forma continua. Una vez en prisión, y gracias a la medicación y el tratamiento, recuperó su condición física normal.

21. Respecto a la alegación de que Gong y los otros acusados, durante la etapa de investigación previa al juicio, fueron torturados, y que sus confesiones y las pruebas en su contra fueron obtenidas mediante coacción y eran falsas, y que los tribunales no garantizaron el derecho a un proceso con las debidas garantías, el Gobierno indicó que en ningún momento durante el procedimiento, tanto en primera como en segunda instancia, Gong y sus coacusados, o sus abogados defensores, presentaron ninguna queja respecto al uso de la tortura durante la fase de investigación. El Tribunal Intermedio Popular Municipal de Jingmen y el Tribunal Supremo Popular de la Provincia de Hubei determinaron que las acciones de Gong y los otros acusados constituían un delito de lesiones corporales intencionales, que tuvieron la posibilidad de presentar recursos y que, después de la debida acreditación durante el procedimiento, se confirmó que las pruebas demostraban lo siguiente:

- a) Las declaraciones de las víctimas y los testimonios orales relevantes y el testimonio por escrito de los testigos demostraron las causas de sus lesiones y los hechos que se habían aducido.
- b) El informe y las fotografías de la escena de los hechos fueron reconocidas por los acusados en cuestión, quienes confirmaron el lugar donde se cometieron los delitos.
- c) El informe de la investigación forense y las fotografías de las víctimas demostraron en qué partes de sus cuerpos habían sufrido las lesiones y el grado de las mismas.
- d) De estas víctimas, cuatro sufrieron lesiones clasificadas como graves; las lesiones sufridas por las otras 12 víctimas variaban en gravedad, de leve a moderada. Después de que los acusados identificaran las fotografías de las víctimas antes mencionadas, se confirmó que ellos les habían infligido las lesiones.
- e) El informe de las pruebas materiales recogidas en el lugar de los hechos, el informe de las armas recuperadas en ese mismo lugar y las fotografías de los lugares donde se ocultaron las armas demostraron que los instrumentos recuperados de la escena del crimen por los funcionarios encargados de la investigación fueron los instrumentos utilizados para cometer el delito, que habían sido ocultados por los acusados después de cometerlos, y que habían sido recuperados después de que los acusados mostraran los lugares en que estaban escondidos. Se recuperaron barras de hierro, tubos de acero,

martillos y otros instrumentos y, después de que los acusados los reconocieron debidamente, se confirmó que fueron los utilizados en la comisión de los delitos.

22. El Tribunal Intermedio Popular Municipal de Jingmen y el Tribunal Supremo Popular de la Provincia de Hubei consideraron que Gong era culpable del delito de violación; que tuvo a su disposición los procedimientos de apelación; que a la luz del interrogatorio de los testigos en el juicio, se obtuvo la confirmación de los siguientes hechos evidentes:

a) Las declaraciones de las cinco víctimas confirmaron que Gong, con el uso de la fuerza, el engaño y otras tácticas contra las víctimas, había obtenido relaciones sexuales ilícitas con ellas en las ciudades de Zhongxiang, Zaoyang y Shiyan, en los hogares de otras personas, y en el sector Huangzhuang de la represa de control de inundaciones del río Han en la ciudad de Zhongxiang;

b) En las oficinas de las autoridades de seguridad pública Gong había admitido el delito de haber tenido relaciones sexuales ilícitas con muchas jóvenes, hecho confirmado, al mismo tiempo, con las declaraciones realizadas en las oficinas de seguridad pública por su coacusado Li Rong y el correspondiente testimonio escrito.

23. Las pruebas son claras y abundantes, y demuestran fehacientemente que Gong era culpable de los delitos de lesiones corporales intencionales y violación. No se trata manifiestamente de un caso de falsa acusación.

24. En cuanto a la alegación de que la decisión del Tribunal de celebrar los dos juicios a puerta cerrada se basó en el falso pretexto de proteger la intimidad de las víctimas para vulnerar el derecho de Gong y sus coacusados a un juicio justo, el Gobierno informó de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Penal chino, los casos que afectan a la vida privada de los individuos no se deben celebrar en público. Los cargos presentados por la Fiscalía contra Gong por el delito de violación concernían a la intimidad de ciertas personas, por lo que la decisión del Tribunal Popular de no examinar el caso de forma pública fue totalmente coherente con la ley.

25. Con respecto a la alegación de que el Tribunal no proporcionó al acusado y sus abogados el tiempo suficiente ni los medios necesarios para preparar su defensa, vulnerando así su derecho a defenderse, el Gobierno afirmó que, de conformidad con lo establecido en los artículos pertinentes del Código de Procedimiento Penal, en este caso durante las etapas del juicio y la sentencia, los acusados y sus abogados ejercieron plenamente su derecho a la defensa.

26. En cuanto a la alegación de que el Tribunal, en su sentencia contra Gong por organizar y utilizar una secta para violar la ley, etc., vulneró su derecho civil a la libertad de religión y de creencias, el Gobierno señaló que las autoridades de la Fiscalía presentaron cargos contra Gong y los otros acusados por otros delitos; tras el juicio se determinó que los hechos no habían quedado claros, las pruebas eran insuficientes y el delito no se había establecido de forma adecuada.

27. Por último, el Gobierno expresó la Opinión de que la sentencia penal dictada por el Tribunal Popular contra Gong y los otros acusados ya ha adquirido fuerza ejecutiva, por lo que, de conformidad con la ley, han sido entregados a sus centros penitenciarios para cumplir sus condenas.

28. El Grupo de Trabajo toma nota de las discrepancias entre las alegaciones de la fuente y la respuesta del Gobierno. Aunque la fuente admite que el Pastor Gong Shengliang fue condenado por los delitos de agresión, violación y lesiones intencionales, niega que el Pastor Gong sea responsable de cometer tales crímenes. Según la fuente, el Pastor Gong reconoció haber cometido esos delitos únicamente porque fue sometido a tortura durante su detención previa al juicio.

29. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno ha respondido proporcionando información específica y concreta sobre el juicio y las pruebas presentadas en contra de la persona mencionada *supra*. En su respuesta, el Gobierno niega claramente que el Pastor Gong haya sido objeto de torturas o malos tratos, y añade que en ningún momento durante el proceso judicial, ni en primera ni en segunda instancia, el Pastor Gong Shengliang y sus coacusados, o sus abogados defensores, presentaron reclamación alguna sobre el uso de tortura o malos tratos durante la fase de investigación.

30. Se proporcionó a la fuente una copia de la respuesta del Gobierno el 9 de octubre de 2007. El Grupo de Trabajo recordó a la fuente el 25 de julio de 2008 la conveniencia de presentar sus comentarios u observaciones a la respuesta del Gobierno. Sin embargo, hasta la fecha la fuente no ha respondido.

31. Teniendo en cuenta las notables diferencias entre las alegaciones presentadas por la fuente y la respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo considera que no tiene elementos suficientes para emitir una Opinión. Por lo tanto, y de acuerdo con el párrafo 17 d) de sus métodos, el Grupo de Trabajo decide archivar el caso.

Aprobada el 10 de septiembre de 2008.

### **Opinión N° 22/2008 (Arabia Saudita)**

**Comunicaciones dirigidas al Gobierno el 6 de noviembre de 2006 y el 29 de mayo de 2007.**

**Relativas al Sr. Suleyman b. Nasser b. Abdullah Al-Alouane.**

**El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno, que facilitó al Grupo de Trabajo información sobre el caso. Las respuestas del Gobierno se hicieron llegar a la fuente, que hizo observaciones al respecto. Dado que los primeros comentarios de la fuente a la primera respuesta del Gobierno no contenían nuevas alegaciones, el Grupo de Trabajo decidió, en su 48° período de sesiones, transmitirlos al Gobierno, el cual presentó sus comentarios u observaciones. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una Opinión sobre los hechos y las circunstancias del caso.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El caso que se resume a continuación se comunicó al Grupo de Trabajo de la siguiente manera: el Sr. Suleyman b. Nasser b. Abdullah Al-Alouane, nacido en 1969 en Al Burayda, Al Qasim, casado y padre de tres hijos, residente en Haï Mechaal, Al Burayda, maestro de profesión, fue detenido el 28 de abril de 2004 en su lugar de trabajo por agentes de los Servicios Generales de Información, sin ningún tipo de orden judicial y sin que se formularan cargos contra él.
5. El mismo día, su casa fue allanada sin orden judicial. El Sr. Al-Alouane fue trasladado a un centro de detención dependiente del Ministerio del Interior, donde habría sido torturado. Se le acusó de criticar repetidamente al Gobierno de los Estados Unidos de América por sus políticas sobre el mundo árabe y en particular por la invasión del Iraq en 2003. El Sr. Al-Alouane fue posteriormente trasladado a la prisión de El Hayr en el sur de Riad, donde permanece detenido desde hace más de cuatro años. Ha estado en completo aislamiento durante largos períodos. Hasta la fecha de la comunicación del caso, no se han presentado cargos contra el Sr. Al-Alouane ni se ha fijado la fecha del juicio. Se le ha negado, además, el acceso a un abogado.

6. La fuente informa igualmente de que al Sr. Al-Alouane se le había prohibido anteriormente ejercer su profesión de maestro, pero que esta prohibición fue levantada en 2003. Debido a la expresión de sus opiniones políticas, el Sr. Al-Alouane fue acusado por funcionarios públicos de expresar opiniones contrarias al interés nacional y de sembrar la discordia en la sociedad. Permanece detenido en régimen de incomunicación, ha sido objeto de malos tratos y no se le ha hecho comparecer ante un juez.

7. La fuente considera que la detención del Sr. Al-Alouane es contraria no sólo a los principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino también a los artículos 2 y 4 del Real decreto N° M.39, relativo a la reglamentación del procedimiento penal y los derechos de los detenidos a tener un abogado. No se invocó ninguna norma jurídica para justificar la detención y el encarcelamiento del Sr. Al-Alouane. La fuente concluye que su detención puede atribuirse a haber ejercitado su derecho a expresar libremente sus opiniones políticas.

8. El Gobierno, en su respuesta a las alegaciones de la fuente, confirmó que el Sr. Al-Alouane fue detenido el 29 de abril de 2004, e informó de que su detención se llevó a cabo en el marco de un asunto relacionado con el terrorismo. Las autoridades que lo detuvieron lo trataron de acuerdo con la reglamentación judicial vigente en el Reino, y disfrutó de todos los derechos garantizados a los acusados en dichas normas. Se autorizaron a sus familiares 37 visitas, la última de las cuales tuvo lugar el 10 de enero de 2007. Se concedió ayuda financiera a su familia. Se hicieron las gestiones pertinentes para que el Sr. Al-Alouane pudiera acogerse a los servicios de un abogado defensor durante las etapas de la instrucción y el juicio. También se le permitió ponerse en contacto con funcionarios para transmitir sus quejas.

9. En sus observaciones a la respuesta del Gobierno, la fuente niega que al Sr. Al-Alouane se le permitiera consultar con un abogado defensor. También señala que el Gobierno no ha refutado la alegación de que el Sr. Al-Alouane fue detenido sin una orden judicial a tal efecto; de que no fue informado de los cargos que se le formulaban; de que no tuvo la posibilidad de impugnar de manera efectiva la legalidad de su detención; y de que, a pesar de los más de cuatro años que ya ha pasado en prisión, no se le ha hecho ningún juicio.

10. En su 48° período de sesiones, el Grupo de Trabajo decidió pedir al Gobierno aclaraciones sobre la información que había presentado. Mediante carta de fecha 29 de mayo de 2007, pidió al Gobierno que le informara sobre lo siguiente: a) Cuándo tuvo lugar el juicio del Sr. Alouane, b) ante qué tribunal, c) quién fue su abogado defensor y d) en cuántas ocasiones pudo el Sr. Al-Alouane reunirse con él. El Grupo de Trabajo pidió también una copia de la sentencia final o de la condena.

11. El Gobierno respondió que el Sr. Al-Alouane fue detenido bajo la acusación de transferir fondos fuera del Reino a organizaciones y grupos implicados en actos de terrorismo; emitir interpretaciones de la ley islámica (*Fatwas*), y dar sermones no autorizados y conferencias de carácter enardecedor a grupos terroristas. Se está investigando aún su caso por su relación con células terroristas, algunas de las cuales están operando fuera del Reino, y en vista de nuevas pruebas de su participación en una serie de delitos y su asociación con otros sospechosos. El Gobierno añadió que el caso del Sr. Al-Alouane fue presentado ante el tribunal competente, que emitió órdenes judiciales para la prolongación de su detención, a fin de que se pudieran completar los procedimientos de la investigación.

12. La fuente considera que el Gobierno se limita a declarar que se está investigando al Sr. Al-Alouane por terrorismo, pero no especifica la naturaleza de los actos concretos; la participación del Sr. Al-Alouane en ellos; los cargos formulados en su contra o los artículos específicos del Código Penal presuntamente infringidos. Según la fuente, el Sr. Al-Alouane

es bien conocido en su país por haber tomado posiciones públicas sobre la invasión del Iraq y sobre la situación política en Arabia Saudita y en la región árabe. No se ha respetado su derecho a presentar un recurso jurídico contra su detención, lo cual vulnera la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución del Reino y la legislación interna de Arabia Saudita.

13. Sobre la base de estos elementos, el Grupo de Trabajo considera que está en condiciones de emitir una Opinión. El Grupo de Trabajo estima que el Gobierno no ha dado respuestas específicas en relación a las alegaciones concretas de la fuente. No ha proporcionado respuestas concretas a las preguntas del Grupo de Trabajo contenidas en su comunicación de fecha 29 de mayo de 2007. Parece que el Gobierno se contenta con facilitar al Grupo de Trabajo datos generales en lugar de información concreta. El Gobierno no refuta los motivos por los cuales la fuente considera que la detención del Sr. Al-Alouane es arbitraria.

14. El Grupo de Trabajo observa que, por el contrario, el Gobierno reconoce en sus respuestas, implícita o explícitamente, las siguientes alegaciones de la fuente:

a) El Sr. Al-Alouane fue en efecto detenido el 29 de abril de 2004 y ha permanecido recluido desde entonces.

b) La detención del Sr. Al-Alouane se llevó a cabo sin un mandato previo; sin una orden de detención; y no se precisaron ni se formularon cargos contra él.

c) El simple hecho de afirmar, de manera general, que esta persona está implicada en la financiación o la difusión de actividades terroristas, sin especificar su participación en dichas actividades, o la naturaleza de la misma, no es suficiente para establecer una base legal para su detención.

d) No se ha informado a esta persona de los hechos exactos y precisos que se le recriminan, por lo que no puede preparar adecuadamente su defensa.

e) Aunque el Gobierno ha informado de que el Sr. Al-Alouane puede presentar quejas ante las autoridades, no ha especificado si puede impugnar la legalidad de su detención, y, en caso afirmativo, de qué forma.

f) El Gobierno ha reconocido implícitamente que el Sr. Al-Alouane no está autorizado a obtener asesoramiento jurídico o a contar con los servicios de un abogado que le ayude a preparar su defensa.

g) El Gobierno ha reconocido que el Sr. Al-Alouane se encuentra detenido desde el 29 de abril de 2004, sin embargo no ha proporcionado ninguna información sobre el avance del procedimiento jurídico, la etapa en que se encuentra el proceso o la posible fecha en que empezaría su juicio.

h) El Gobierno informa de que el Sr. Al-Alouane "emitió interpretaciones de la ley islámica (*Fatwas*) y sermones no autorizados y conferencias de carácter enardecedor a grupos terroristas". Esto parece confirmar las alegaciones de la fuente relativas a que el Sr. Al-Alouane fue detenido principalmente por sus opiniones y puntos de vista.

15. El Grupo de Trabajo desea subrayar en este punto que el Gobierno tiene la obligación de respetar los derechos del ejercicio de las libertades de opinión y de expresión de todos sus ciudadanos y de las personas que viven bajo su jurisdicción, de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución del Reino y las normas jurídicas de Arabia Saudita. Tiene también la obligación de respetar las garantías procesales, presentar cargos contra los detenidos y someter sus casos ante un tribunal imparcial e independiente.

16. A la luz de las alegaciones presentadas, la información transmitida por el Gobierno sobre el caso y las observaciones de la fuente al respecto, el Grupo de Trabajo señala que no se mostró una orden de detención al Sr. Al-Alouane; no se le informó acerca de las razones de su detención; no se le informó sobre los cargos precisos en su contra; no se le permitió consultar o designar a un abogado defensor; no pudo impugnar o apelar su detención de forma efectiva; y permanece privado de libertad sin haber sido formalmente acusado ni juzgado. Las afirmaciones radicales del Gobierno de que se ha detenido al Sr. Al-Alouane en relación con un asunto de terrorismo, de que disfruta de todos los derechos y garantías que le corresponden como acusado, y de que se hicieron las gestiones pertinentes para que pudiera acogerse a los servicios de un abogado defensor, carecen de la precisión y los detalles necesarios para que se puedan tomar en consideración de modo significativo, y por lo tanto no sirven de fundamento. Además, el Grupo de Trabajo observa que el Gobierno no ha respondido a las preguntas concretas formuladas por el Grupo de Trabajo en su comunicación de fecha 29 de mayo de 2007.

17. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La privación de libertad del Sr. Suleyman b. Nasser b. Abdullah Al-Alouane es arbitraria, pues contraviene los artículos 9, 10 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y corresponde a las categorías I, II y III de las aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

18. Consecuentemente con la Opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para remediar la situación y ajustarla a las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

19. El Grupo de Trabajo también recomienda al Gobierno que considere la posibilidad de convertirse en parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 10 de septiembre de 2008.

### **Opinión N° 23/2008 (República Árabe Siria)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 4 de febrero de 2008.**

**Relativa al Sr. Nezar Rastanawi.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. A la luz de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno de la República Árabe Siria no haya proporcionado una respuesta.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El caso que se resume a continuación se comunicó al Grupo de Trabajo de la siguiente manera: el Sr. Nezar Rastanawi es un ciudadano de la República Árabe Siria de 46 años de edad, que suele residir en Hama-Murek. Es ingeniero civil y miembro fundador de la Organización Árabe de Derechos Humanos-Siria (AOHR-S).
5. El Sr. Rastanawi fue detenido el 18 de abril de 2005 mientras regresaba a su casa en la aldea de Mowrek, en la provincia de Hama; permaneció en régimen de incomunicación y sin que se le formularan cargos en un lugar desconocido durante más de dos semanas, antes de que las Fuerzas de Seguridad Militar informaran a su familia de que estaba bajo su custodia. En julio de 2005, el Sr. Nezar Rastanawi fue trasladado a la prisión de Sednaya, en las afueras de Damasco, y desde allí fue enviado al Tribunal Supremo de Seguridad del Estado (SSSC). Permaneció en régimen de incomunicación hasta agosto de 2005, momento en que se le permitieron visitas mensuales de su esposa. Sin embargo, hasta noviembre de

2005 no se conocieron los cargos contra él y se le denegó el acceso a una defensa. Las Fuerzas de Seguridad Militar desestimaron la solicitud del Sr. Rastanawi de que se designara a un grupo de abogados defensores para su primer juicio ante el SSSC, previsto para el 24 de noviembre de 2005. Durante ese período el Sr. Rastanawi fue presuntamente objeto de malos tratos.

6. El 19 de noviembre de 2006, el Sr. Nezar Rastanawi fue condenado por el SSSC de Damasco a cuatro años de prisión por "difundir noticias falsas" e "insultar al Presidente de la República". Los cargos y la condena parecen basarse en su labor de promoción de los derechos humanos. El Sr. Nezar Rastanawi sigue en la prisión de Sednaya y recibe visitas de su esposa.

7. La fuente alega que la detención y encarcelamiento del Sr. Nezar Rastanawi se basan únicamente con su labor pacífica y legítima de defensa de los derechos humanos. En consecuencia, su detención es arbitraria, porque se trata de una represalia por ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión, garantizado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que la República Árabe Siria es parte.

8. La fuente añade que los procedimientos contra el Sr. Rastanawi ante el Tribunal Supremo no cumplieron las normas internacionales de un juicio con las debidas garantías, ya que fue detenido sin una orden judicial ni otro documento que justificara su detención; se le negó el acceso a su abogado; no se le notificaron los cargos en su contra; fue privado de toda posibilidad de preparar adecuadamente su defensa, y no pudo apelar su condena. Además, los jueces del Tribunal disfrutaron de atribuciones discrecionales excesivas a la hora de condenar al acusado.

9. El Grupo de Trabajo señala que el Sr. Nezar Rastanawi ya fue objeto de la Opinión N° 35/2006 (República Árabe Siria) (A/HRC/7/4/Add.1, pág. 11), adoptada por el Grupo de Trabajo el 16 de noviembre de 2006, en la cual se decidió archivar el caso de conformidad con el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo. El Grupo de Trabajo ha recibido información acerca de la liberación del Sr. Rastanawi, la cual no fue contradicha por la fuente en ese momento.

10. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una nueva Opinión sobre los hechos y circunstancias del caso, a la luz de las alegaciones formuladas, a pesar de que el Gobierno no ha ofrecido su versión de los hechos ni ha dado explicaciones sobre las circunstancias del caso.

11. Como se indica en el párrafo 9, el presente caso no es totalmente nuevo para el Grupo de Trabajo, ya que se ocupó del mismo hace aproximadamente dos años. El Grupo de Trabajo considera que el Gobierno de la República Árabe Siria reconoció en su comunicación anterior que el Sr. Rastanawi había sido en efecto detenido y encarcelado en aquel momento. El Gobierno no aportó motivos para la detención de esta persona. La información relativa a la liberación del Sr. Rastanawi fue impugnada por la fuente a través de una última comunicación a la que el Gobierno no ha respondido.

12. El Grupo de Trabajo señala que no se aprecia ningún fundamento jurídico que justifique la privación de libertad del Sr. Rastanawi. Según la fuente, se trata de un respetado profesional y de un activista de los derechos humanos que ejerce su derecho a la libertad de expresión y de reunión. Su detención prolongada sin un juicio imparcial ante un tribunal independiente, así como las condiciones de su detención, violan las normas internacionales de derechos humanos en la materia.

13. En consecuencia, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La detención del Sr. Rastanawi es arbitraria y corresponde a las categorías I, II y III de las aplicables por el Grupo de Trabajo.

14. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de la República Árabe Siria que adopte las medidas necesarias para remediar su situación y ponerla en consonancia con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

15. El Grupo de Trabajo también desearía señalar a la atención del Gobierno de la República Árabe Siria el hecho de que en ocasiones anteriores examinó casos que implicaban acusaciones de privación arbitraria de la libertad y juicios injustos ante el SSSC, un tribunal especial que está juzgando a los acusados de delitos contra la seguridad del Estado (véanse, por ejemplo, las opiniones Nos. 8/2007 (A/HRC/7/4/Add.1, pág. 79); 15/2006; 16/2006; 21/2006 (A/HRC/4/40/Add.1, págs. 84, 87 y 103); 1/2005; 4/2005; 7/2005; 10/2005 (E/CN.4/2006/7/Add.1, págs. 22, 25, 34 y 43); 6/2004 (E/CN.4/2005/6/Add.1, pág. 39). Algunos casos sometidos a la consideración del Grupo de Trabajo presentan similitudes lamentables en relación con la duración y condiciones de la detención y el encarcelamiento; el acceso a un juicio justo, que incluya la presencia de abogados; y la imprecisión y ausencia de cargos específicos basados en pruebas contra los detenidos. Los encausados por este tribunal a menudo son acusados y condenados por delitos contra la seguridad que son imprecisos, derivados de una interpretación muy general y sin fundamentos.

16. El Grupo de Trabajo ha recibido varias alegaciones relativas a los procedimientos ante el SSSC: los acusados no están presentes durante la fase preliminar del juicio, en la que el Fiscal presenta pruebas; las confesiones son admitidas como prueba incluso cuando se alega que han sido obtenidas bajo tortura; el tribunal no investiga las denuncias de tortura; los juicios se celebran habitualmente a puerta cerrada y no se permite el acceso del público ni de los familiares de los acusados; los acusados tienen acceso restringido a los defensores; los jueces tienen amplias facultades discrecionales para imponer la pena; y los condenados no pueden recurrir sus condenas.

17. El SSSC, creado en 1968 bajo el estado de excepción, que ha durado 46 años, no observa las disposiciones internacionales, ni siquiera las constitucionales, de protección de los derechos de los acusados. Los acusados no tienen ningún recurso legal contra la detención o el encarcelamiento. El procedimiento ante el SSSC no cumple las normas internacionales sobre juicios justos.

18. Si el Gobierno está de acuerdo, sería un honor para el Grupo de Trabajo ayudarlo en el estudio de las leyes pertinentes para regular el SSSC y, en general, de las leyes que rigen la privación de libertad. El Grupo de Trabajo ofrece su cooperación para contribuir a poner estas leyes en consonancia con las normas y principios establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Aprobada el 12 de septiembre de 2008.

### **Opinión N° 24/2008 (República Árabe Siria)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 4 de junio de 2007.**

**Relativa al Dr. Mohamad Kamal Al-Labouani.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado información sobre las alegaciones de la fuente.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)

4. A la luz de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta facilitada por el Gobierno a la fuente y recibió sus comentarios.
5. El caso que se resume a continuación se comunicó al Grupo de Trabajo de la siguiente manera: el Dr. Mohamad Kamal Al-Labouani es un ciudadano sirio nacido en 1957, con domicilio en Zabadani y médico de profesión. También es escritor, artista y fundador de la Unión Liberal Democrática en Siria.
6. Según la información recibida, agentes de la policía de seguridad detuvieron al Dr. Al-Labouani en el Aeropuerto Internacional de Damasco el 8 de noviembre de 2005 cuando entraba en su país después de viajar a Europa y los Estados Unidos de América. En el transcurso de su viaje, que comenzó en agosto de 2005, el Dr. Al-Labouani se reunió con organizaciones de derechos humanos y funcionarios gubernamentales para ejercer presión en pro de la reforma democrática en Siria, y concedió entrevistas a los medios de comunicación. Durante las entrevistas de televisión en los Estados Unidos, el Dr. Al-Labouani habría criticado al Gobierno de la República Árabe Siria y pedido la introducción gradual y pacífica de la democracia. También manifestó que se oponía firmemente a la intervención de los Estados Unidos u otros gobiernos extranjeros en los asuntos de Siria.
7. La policía de seguridad que lo detuvo el 8 de noviembre de 2005 no mostró ninguna orden de detención ni ningún otro documento que la justificara. El Dr. Al-Labouani fue trasladado al cuartel de la policía de seguridad política en Damasco, interrogado y encarcelado. Tres días después se emitió una orden de detención que no estaba firmada ni indicaba los motivos de la detención.
8. El 12 de noviembre de 2005, el Dr. Al-Labouani fue llevado ante un tribunal penal de Damasco. Se le acusó de "socavar el sentimiento patriótico", "debilitar el espíritu nacional", "insultar la dignidad del Estado" e "incitar al odio sectario", sobre la base de los artículos 285, 286, 287, 307 y 308 del Código Penal de Siria. Posteriormente, el Dr. Al-Labouani fue trasladado a la prisión de Adra en Damasco.
9. Cinco meses más tarde, la Fiscalía agregó los cargos de "conspirar o comunicarse con un país extranjero con el objetivo de que ataque Siria" (artículo 264 del Código Penal). Estos cargos, que conllevan una pena mucho más grave (hasta cadena perpetua) que los presentados previamente en su contra, se añadieron como consecuencia de una carta del Director de la Oficina de Seguridad Nacional al Ministro de Justicia, quien a su vez envió un comentario acerca de la carta al Fiscal General Jefe de Damasco pidiendo que incluyera los cargos adicionales. Nunca se interrogó al Dr. Al-Labouani en relación con las nuevas acusaciones.
10. Durante el juicio no se permitió a los abogados del Dr. Al-Labouani ningún contacto privado con su cliente. El abogado que dirigía la defensa, el Sr. Anwar al-Bunni, fue detenido el 17 de mayo de 2006 acusado de "difundir información falsa en perjuicio del Estado", en relación con una petición en que se exhortaba a la normalización de las relaciones entre la República Árabe Siria y el Líbano. El 24 de abril de 2007, el Tribunal Penal de Damasco condenó al Sr. al-Bunni a cinco años de cárcel.
11. En el juicio, la Fiscalía no presentó ninguna prueba de que el Dr. Al-Labouani hubiera incitado, en algún momento o de alguna forma, a una intervención extranjera en Siria. La defensa presentó como pruebas las grabaciones de los dos programas de televisión emitidos en los Estados Unidos en los que el Dr. Al-Labouani se había pronunciado en repetidas ocasiones contra cualquier tipo de presión militar o económica contra Siria e insistido en que los gobiernos extranjeros sólo debían ejercer presión política sobre el Gobierno sirio para dar al pueblo la oportunidad de introducir la democracia en su país, por sí mismo y a su ritmo. La defensa también presentó cartas de parlamentarios británicos y de

otros países europeos en las que declaraban que el Dr. Al-Labouani siempre había afirmado que cualquier forma de intervención en Siria sería un error.

12. El 10 de mayo de 2007, el Tribunal Penal de Damasco determinó que el Dr. Al-Labouani era culpable de los nuevos cargos, o sea, de "conspirar o comunicarse con un país extranjero con el objetivo de que ataque Siria", sobre la base del artículo 264 del Código Penal, y lo condenó a 12 años de prisión. Actualmente se encuentra cumpliendo la condena.

13. La fuente alega que el Dr. Al-Labouani está encarcelado únicamente por hacer un llamamiento a una reforma democrática y pacífica en Siria. Como demuestran la grabación de sus entrevistas en televisión y el resto de las declaraciones que ha realizado, nunca ha exhortado al derrocamiento violento del Gobierno. Su defensa documentó ampliamente este punto durante el juicio, mientras que la Fiscalía fue incapaz de aportar prueba alguna en apoyo de los cargos de "conspirar o comunicarse con un país extranjero con el objetivo de que ataque Siria" ni ningún otra acusación formulada contra él.

14. La fuente también afirma que el Dr. Al-Labouani no tuvo en absoluto un juicio justo. El Gobierno se injurió de forma particular en su derecho "a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección" (artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), al no permitirle que se reuniera en privado con sus defensores y al encarcelar al abogado director de su equipo de defensa, el Sr. al-Bunni. La fuente concluye que la detención del Dr. Al-Labouani es arbitraria.

15. En su respuesta, el Gobierno señala que el Sr. Kamal Al-Labouani creó una organización política ilícita, sin permiso de las autoridades pertinentes. Esto es punible según la legislación siria, de conformidad con el artículo 288 del Código Penal. Estableció vínculos personales con organismos oficiales en el extranjero y recibió en secreto ayuda material de organizaciones extranjeras hostiles a la República Árabe Siria. Estos son actos castigados por la legislación siria, de conformidad con el artículo 264 del Código Penal.

16. El Gobierno informa de que el Dr. Al-Labouani publicó información falsa en una página web, probablemente para dañar, a nivel nacional e internacional, la reputación del Estado. Este acto está castigado en la legislación siria, de conformidad con los artículos 286 y 287 del Código Penal. El Ministerio Público en Damasco inició actuaciones penales en su contra por los delitos de daños a la reputación del Estado y debilitamiento del espíritu y la unidad nacionales. El Dr. Al-Labouani fue interrogado el 12 de noviembre de 2005 en presencia de sus representantes legales. Se tomó la decisión de emitir una orden de detención contra él y de encarcelarlo preventivamente en la Prisión Central de Damasco por los delitos que se le imputaban.

17. El Gobierno concluye poniendo de relieve que no se detuvo al Dr. Al-Labouani de manera arbitraria y que las razones de su detención no tienen que ver con sus exhortaciones pacíficas a favor de la reforma democrática en Siria. Como ciudadano sirio, está protegido de la tortura y los malos tratos de cualquier índole por la ley siria. Se le permite recibir visitas periódicas de sus abogados y de miembros de su familia.

18. En sus observaciones a la respuesta del Gobierno, la fuente señala lo siguiente:

a) La Fiscalía añadió los nuevos cargos contra el Dr. Al-Labouani, que son más graves y por los que finalmente fue condenado, cinco meses después iniciarse el proceso judicial, debido a las presiones del Director de la Oficina de Seguridad Nacional y del Ministro de Justicia. Los cargos presentados contra el Dr. Al-Labouani al inicio del procedimiento, como los relacionados en el artículo 287 del Código Penal, se castigan con penas máximas de seis meses.

b) La fuente añade que, contrariamente a la información facilitada por el Gobierno, nunca se ha acusado al Dr. Al-Labouani del delito de formación de una organización ilícita, previsto en el artículo 288 del Código Penal.

c) El Dr. Al-Labouani no niega que se entrevistara con organizaciones no gubernamentales y funcionarios gubernamentales en el extranjero, pero la naturaleza de estos contactos fue totalmente desvirtuada por la acusación, sin ninguna prueba que apoyara sus afirmaciones.

d) Nunca se presentaron cargos contra el Dr. Al-Labouani que hicieran referencia a recibir en secreto fondos de organizaciones extranjeras opositoras a la República Árabe Siria.

e) No se hizo mención alguna sobre Internet durante el juicio. Tan sólo se citaron las dos transmisiones televisivas.

f) La Fiscalía no presentó ninguna prueba para respaldar la acusación de incitación a un país extranjero a intervenir en Siria.

g) La fuente considera que el Dr. Al-Labouani fue detenido porque los servicios de seguridad creían que tenía alguna información importante acerca de la investigación sobre la muerte de Rafik Hariri en el Líbano.

h) Contrariamente a la información proporcionada por el Gobierno, el Dr. Al-Labouani no está adecuadamente protegido contra la tortura o los malos tratos en la cárcel. Los guardias de la prisión le han forzado a afeitarse la cabeza y ha sido atacado por otros reclusos. Al menos en dos ocasiones se le ha encerrado en una celda subterránea sin luz e infestada de ratas e insectos, o se le ha negado el acceso a productos de limpieza, comida adecuada, ropa de vestir, ropa de cama e instalaciones sanitarias.

19. El Grupo de Trabajo consideró anteriormente una comunicación presentada en nombre del Dr. Al-Labouani (véase la Opinión N° 11/2002<sup>1</sup>) en relación con su calidad de miembro del Foro de la Sociedad Civil creado por Riad Seif. Fue detenido en septiembre de 2001 y juzgado por el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado por "incitar a la rebelión armada". Fue declarado culpable y condenado el 28 de agosto de 2002. En su Opinión N° 11/2002, el Grupo de Trabajo observó que esas personas [un grupo del que formaba parte el Dr. Al-Labouani] fueron detenidas por participar en diversos foros en apoyo de un grupo que celebraba reuniones y promovía una mayor participación política, y que realizaba sus actividades de forma pacífica, cosa que el Gobierno no negó, en ejercicio de sus derechos a la libertad de reunión, expresión y opinión, garantizados por las normas de derecho internacionales (párr. 25 c)). El Dr. Al-Labouani fue puesto en libertad el 9 de septiembre de 2004.

20. El Grupo de Trabajo ha examinado debidamente las afirmaciones formuladas por la fuente, la respuesta del Gobierno, y los comentarios recibidos de la fuente sobre dicha respuesta.

21. El Gobierno informó de que el Dr. Al-Labouani no fue detenido ni condenado por sus exhortaciones pacíficas a la reforma democrática en Siria, sino por otras actividades de carácter muy grave, es decir, por dañar la reputación del Estado, debilitar el espíritu y la unidad nacionales y conspirar o comunicarse con un país extranjero con el objetivo de que ataque Siria. Sin embargo, todas las argumentaciones aportadas en este sentido son imprecisas, generales y ambiguas, y podrían encajar en el marco de la expresión de puntos de vista o del ejercicio pacífico de actividades políticas, en particular la publicación de

<sup>1</sup> E/CN.4/2003/8/Add.1, págs. 85 a 89.

información en Internet, el establecimiento de vínculos personales con personas en el extranjero, la formación de una organización política sin permiso, etc.

22. El Grupo de Trabajo considera que se debe tener en cuenta la clara falta de proporcionalidad entre el poder y las consecuencias de los trabajos y actividades llevados a cabo por un solo individuo, que debe ocuparse diariamente de sus actividades profesionales, artísticas, sociales y políticas, y el poder y el impacto de toda una maquinaria de Estado, con sus órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial y sus fuerzas armadas, y agentes de policía y de seguridad. El Grupo de Trabajo considera que los actos y omisiones imputados al Dr. Al-Labouani no pueden merecer justificadamente el período de prisión prolongado y arduo impuesto por el sistema judicial de su país.

23. Los cargos más graves, por los que fue finalmente condenado a 12 años de prisión, es decir, "conspirar o comunicarse con un país extranjero con el objetivo de que ataque Siria", a los que hace referencia el artículo 264 del Código Penal, se añadieron cinco meses después del inicio del procedimiento judicial. El Dr. Al-Labouani no fue interrogado en relación a esos cargos y no se le dio la posibilidad de defenderse de tales acusaciones. Ello es claramente incompatible con las normas del debido proceso y del estado de derecho, universalmente aceptadas.

24. En su Opinión N° 11/2002 (República Árabe Siria)<sup>2</sup>, el Grupo de Trabajo ya consideró que una detención anterior del Dr. Al-Labouani, y de otras ocho personas, fue arbitraria, ya que fueron detenidos "por haber participado en diversos foros en apoyo de un grupo que celebraba reuniones e incitaba a una mayor participación política, y que realizaban sus actividades de forma pacífica, cosa que el Gobierno no negó, en ejercicio de sus derechos a la libertad de reunión, expresión y opinión, garantizados por las normas de derecho internacionales"<sup>3</sup>.

25. El Grupo de Trabajo considera que se ha condenado ahora al Dr. Al-Labouani por actos de una naturaleza esencialmente igual a aquellos por los que se le detuvo y condenó anteriormente. La diferencia es que ahora ha sido condenado por actividades realizadas en el extranjero y que el Gobierno ha añadido cargos de carácter más grave. El hecho principal imputado al Dr. Al-Labouani siguen siendo sus exhortaciones a la reforma democrática, realizadas tanto en la República Árabe Siria como en el extranjero.

26. El Grupo de Trabajo también señala que, en su respuesta, el Gobierno no ha puesto en duda el carácter pacífico de las actividades llevadas a cabo por el Dr. Al-Labouani, tanto en la República Árabe Siria como en el extranjero. La respuesta sólo se refiere a la creación de una organización política ilícita, la publicación de información falsa en una página web y el establecimiento de vínculos personales con organismos oficiales en el extranjero.

27. Las circunstancias de la detención y el encarcelamiento del Dr. Al-Labouani, sin la exhibición de una orden de detención; el hecho de que no se permitió a sus abogados comunicarse con él antes del juicio ni se garantizó al Dr. Al-Labouani un mínimo contacto con sus abogados defensores durante el mismo; la circunstancia de que no fue interrogado sobre los nuevos y graves cargos que se presentaron contra él al final del juicio; el hecho de que no se le permitió presentar testigos de descargo y de que el tribunal no consideró las pruebas presentadas por la defensa; son violaciones graves del debido proceso y representan un caso flagrante de denegación de un juicio justo.

28. El insistente rechazo público del Dr. Al-Labouani a una eventual injerencia de potencias extranjeras en los asuntos de Siria, como se desprende de los programas de

<sup>2</sup> E/CN.4/2003/8/Add.1, págs. 85 a 89.

<sup>3</sup> Ibid., pág. 89.

televisión y de otras pruebas mostradas durante el juicio, es un claro signo de su lealtad a su país y de su posición nacionalista en relación con la posibilidad de cualquier injerencia extranjera. La afirmación del Gobierno de que se estaba dañando la reputación del Estado y debilitando la moral y la unidad nacionales no coincide con la actitud del Dr. Al-Labouani en su país y en el extranjero.

29. En consecuencia, el Grupo de Trabajo considera que se ha condenado al Dr. Al-Labouani por la expresión pacífica de sus opiniones políticas y por llevar a cabo actividades políticas, un derecho protegido por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que la República Árabe Siria es parte. Su proceso judicial parece haber sido manifiestamente injusto y no haber respetado las exigencias fundamentales del debido proceso judicial.

30. El Grupo de Trabajo, por lo tanto, opina que

La privación de libertad sufrida por el Dr. Al-Labouani es arbitraria y contraria a los artículos 9, 10, 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los artículos 9, 14, 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a las categorías II y III de las aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

31. En consecuencia, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno de la República Árabe Siria que tome todas las medidas necesarias para remediar la situación del Dr. Al-Labouani, proporcionándole acceso a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial, de acuerdo con las normas del debido proceso judicial y los principios y normas establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en consonancia con sus obligaciones en virtud de la normativa internacional de derechos humanos.

32. El Grupo de Trabajo pide además al Gobierno que considere los principios, leyes y normas procesales relativos al debido proceso judicial y a un juicio justo en la República Árabe Siria, con el fin de hacerlos compatibles con los principios y normas internacionales en materia de derechos humanos.

Aprobada el 12 de septiembre de 2008.

## **Opinión N° 25/2008 (México)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 30 de mayo de 2007.**

**Relativa al Sr. Olivier Acuña Barba.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su apreciación al Gobierno por haber proporcionado oportunamente la información solicitada.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. Habida cuenta de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación recibida del Gobierno. El Grupo de Trabajo ha transmitido la respuesta del Gobierno a la fuente de la comunicación y ha recibido sus comentarios. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una Opinión acerca de los hechos y circunstancias del caso considerado, teniendo en cuenta las alegaciones formuladas, la respuesta del Gobierno sobre ellas y los comentarios de la fuente.

5. Según las informaciones recibidas, el Sr. Olivier Acuña Barba, ciudadano mexicano, periodista de investigación; director de la publicación *Sinaloa Dos Mil*; reportero de medios nacionales durante más de 20 años y corresponsal de medios extranjeros, se encuentra detenido en el penal de Culiacán, Estado de Sinaloa. Fue arrestado el 14 de enero de 2006 a las 8.00 horas en su domicilio, en presencia de su esposa e hijos, por agentes de la Unidad Modelo de Investigación Policial de la Policía Ministerial del Estado (PME) de Sinaloa, adscritos al Departamento de Investigaciones; vestidos de civil, quienes no portaban signos distintivos o insignias que los identificasen como agentes policiales. Los agentes se movilizaban en vehículos sin placas ni identificación oficial. Al arrestarlo, los agentes no se identificaron ni presentaron orden de arresto alguna.

6. Trasladado a una bodega, fue sometido a torturas durante más de 18 horas con el objeto de que se declarase culpable del homicidio del Sr. Loreto Antonio López Carvajal, alias "El Toñito", ocurrido el 3 de octubre de 2005. La víctima del homicidio tenía antecedentes penales por robo. Según la fuente, esta confesión buscaba impedirle continuar sus investigaciones periodísticas sobre la corrupción de autoridades estatales y de agentes policiales y evitar que siguiese publicando los resultados de sus investigaciones. El proceso se siguió en el Séptimo Juzgado de Culiacán, Sinaloa.

7. Su esposa e hijos fueron "retenidos" durante más de 24 horas en su domicilio, siendo constantemente vigilados por elementos policiales. Los agentes abandonaron el domicilio ante la intervención del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al partir, se llevaron documentos, notas, equipo periodístico, obras de arte y fotografías de propiedad del Sr. Acuña Barba. Este fue finalmente conducido ante el Agente del Ministerio Público Especializado en el Delito de Homicidio Doloso. No se le permitió contar con un abogado defensor de su elección, nombrándose a una defensora de oficio adscrita ante dicha agencia.

8. Sostiene la comunicación que el proceso penal por homicidio tuvo como únicos fundamentos la confesión que le fue obtenida mediante tortura y la declaración de un único testigo de cargo, el Sr. Christian Ochoa, quien luego de haber exculpado al periodista en un primer testimonio, y luego de haber huido durante varios meses, cedió a las presiones, cambió su versión y declaró en su contra.

9. La comunicación da cuenta de numerosas investigaciones sobre responsabilidades penales, civiles y políticas de autoridades estatales y policiales por hechos criminales (asesinatos, desapariciones forzadas, corrupción, etc.) que dieron origen a una serie de actos de hostigamiento e intimidaciones. La comunicación adjunta antecedentes de numerosos casos que el Sr. Acuña Barba denunció y de sus demandas de protección ante las autoridades estatales, la que nunca le fue otorgada.

10. En un segundo proceso penal abierto en su contra, ante el Juzgado Tercero del mencionado distrito judicial, el Sr. Acuña Barba fue acusado de la comisión de los delitos de amenazas de muerte y de allanamiento de morada.

11. En su respuesta, el Gobierno asume como propio un informe sobre el caso emitido por la Procuraduría General del Estado de Sinaloa, el que a su vez se fundamenta en una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del mismo Estado que, en síntesis, expresa:

a) Que el Sr. Acuña Barba se encontraba detenido en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán por los hechos antes referidos.

b) Que la aprehensión no se efectuó en su domicilio, ni en presencia de su esposa e hijos, ni por agentes no individualizados, sino en otro lugar, con orden de arresto previa y por agentes legalmente individualizados. Sostiene que el detenido no confesó su responsabilidad en el crimen de López Carvajal, y que fue bien tratado, no habiendo sufrido torturas.

- c) Que no existe relación alguna entre las actividades periodísticas del procesado y su privación de libertad.
- d) Que no hay antecedentes de detención de su esposa e hijos.
- e) Que no hay antecedentes de que funcionarios públicos hayan participado en intimidaciones y hostigamientos en su contra.
- f) Que los dos procesos judiciales incoados en contra del Sr. Acuña Barba no están relacionados con sus denuncias periodísticas.
- g) Que continúan las investigaciones por las denuncias formuladas por hechos de tortura.
- h) Que las pruebas contra el Sr. Acuña Barba que constan en el proceso por homicidio del Sr. López Carvajal son las declaraciones de los que sí son autores confesos, Javier Estrada Acosta y Martín Edgar Ochoa, quienes efectivamente acusan al Sr. Acuña.
- i) Que la orden de arresto, y luego el auto de formal prisión de 21 de enero de 2006 dictado por las autoridades judiciales a cargo del caso, fueron apeladas y confirmadas por la Sala de Circuito Penal Zona Centro el 30 de septiembre de 2006, y el posterior recurso de amparo del inculcado Acuña Barba fue desestimado por el Juzgado Segundo de Instrucción el 3 de noviembre de 2006. Cerrada la investigación, se dedujo acusación en contra del Sr. Acuña, quien presentó sus descargos el 19 de junio de 2007. La vista de la causa se inició el 31 de julio de 2007.

12. En sus comentarios a la respuesta del Gobierno, la fuente insiste en sus alegaciones contra el Procurador General del Estado y en su versión de los hechos, pero no aporta nuevos elementos de convicción.

13. El Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, dictó sentencia de primera instancia en el juicio por homicidio del Sr. López Carvajal el 29 de mayo de 2007. El Juez condenó solamente a uno de los inculcados absolviendo a los otros dos, incluyendo al Sr. Acuña Barba. El Juez no encontró elementos de convicción de su participación en el crimen. La sentencia ordenó "su inmediata y absoluta libertad".

14. Conforme a lo previsto en párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo, asumidos por la antigua Comisión y por el actual Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo ordena el archivo de un caso sometido a su opinión cuando la persona es liberada. No obstante, ese mismo instrumento le permite excepcionalmente pronunciarse sobre el carácter arbitrario o no de la privación de libertad que la persona sufrió durante el período previo a su puesta en libertad.

15. En el presente caso no cabe aplicar dicha excepción, toda vez que el Grupo de Trabajo no ha sido concebido como un tribunal de última instancia; que en sus Opiniones no debe evaluar la prueba rendida en un juicio contra un detenido ni pronunciarse sobre su culpabilidad o inocencia. No es ése su mandato y, por lo demás, le sería imposible hacerlo sin un estudio previo y en profundidad del expediente judicial.

16. Así, si la orden de arresto, los autos de formal prisión y de procesamiento, y luego la sentencia definitiva, se ajustan o no a los elementos de convicción que obran en el expediente, no es un análisis que compete al Grupo de Trabajo.

17. Se trata además de procesos judiciales y de una privación de libertad por delitos comunes y no por un delito en el que la acción impugnada sea el ejercicio de uno de los derechos mencionados en la categoría II de las consideradas por el Grupo de Trabajo (es decir, los proclamados por los artículos 7, 13, 14 y 18 a 21 de la Declaración Universal

de Derechos Humanos y los correspondientes 12, 18, 19, 21, 22 y 25 a 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

18. Tampoco se alegan claras violaciones al debido proceso legal, como podría ser, por ejemplo, la denegación de admitir una prueba ofrecida por el acusado, ni otras infracciones graves que harían que la detención fuese arbitraria conforme a la categoría III del Grupo de Trabajo.

19. Pero ni los delitos que se imputaron al Sr. Acuña Barba son delitos de opinión ni se vulneraron los derechos consagrados en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que el Grupo de Trabajo no tiene elementos para considerar que la detención del Sr. Acuña fue arbitraria. El fundamento principal de la alegación de la fuente es el trabajo periodístico de esta persona y sus denuncias anteriores sobre casos de corrupción. Pero el Grupo de Trabajo no tiene elementos para inferir que su detención y posterior enjuiciamiento penal por delitos de carácter común fueron en represalia por sus actividades profesionales o sus escritos.

20. Tampoco compete al Grupo de Trabajo pronunciarse sobre la realidad o no o la efectividad o no de las torturas que la fuente alega que esta persona sufrió, materia que es propia de otro de los procedimientos públicos creados por la antigua Comisión de Derechos Humanos y el Consejo Económico y Social desde 1967 y asumido por el actual Consejo de Derechos Humanos. Ni puede tampoco pronunciarse el Grupo de Trabajo sobre la alegada detención por 24 horas de su esposa e hijos (que la comunicación llama "retención"), hecho negado por el Gobierno, y sobre el que no se ha aportado evidencia alguna.

21. En estas condiciones y por lo expuesto, el Grupo de Trabajo, de conformidad con el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo, decide archivar y dar por terminada su consideración del presente caso.

Aprobada el 10 de septiembre de 2008.

### **Opinión N° 26/2008 (Myanmar)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 16 de agosto de 2007.**

**Relativa a los Sres. Hkun Htun Oo, Sai Nyunt Lwin, Sai Hla Aung, Htun Nyo, Sai Myo Win Htun, Nyi Nyi Moe, y Hso Ten.**

**El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. A la luz de las alegaciones formuladas por la fuente, el Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno de Myanmar no le haya proporcionado sus observaciones al respecto, a pesar de haber sido invitado varias veces a hacerlo. El Grupo de Trabajo considera, no obstante, que está en condiciones de emitir una Opinión sobre el caso.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El caso que se resume a continuación se comunicó al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la siguiente manera:
  - a) U Hkun Htun Oo, hijo del Sao Kyar Zone, de 63 años, con residencia habitual en 25 Pyi Road (Milla 9), distrito 5, municipio de Mayangone, Yangon;
  - b) U Sai Nyunt Lwin, hijo de U Ba Khin, de 52 años, con residencia habitual en 157 Pyi Road (Milla 9), distrito 5, municipio de Mayangone, Yangon;
  - c) Sai Hla Aung, hijo de U Kaung Mu, de 61 años, con residencia habitual en 175 Hkwanyo Road, sector Pyidawthar, Taunggyi, estado de Shan;

d) U Htun Nyo, hijo de U Ba Myaing, de 57 años, con residencia habitual en 56 Konemyinththayar Road, distrito de Kanthar, Taunggyi, estado de Shan;

e) U Sai Myo Win Htun, hijo de U Ba Myint, de 42 años, con residencia habitual en el distrito Yatanathiri, Taunggyi, estado de Shan;

f) U Nyi Nyi Moe, hijo de U Tin Ngwei, de 36 años, con residencia habitual en J/237 Thissa Road, sector Nyaungshei, Taunggyi, estado de Shan; y

g) Hso Ten, hijo de U Htun Sein, de 69 años, con residencia habitual en 3, distrito 1, Myawaddi Road, Lashio, estado de Shan; todos ellos ciudadanos de Myanmar pertenecientes a la etnia shan, fueron detenidos los días 8, 9 y 10 de febrero de 2005, respectivamente, por tratar de formar un comité denominado Consejo Consultivo de Académicos del estado de Shan. Todos, menos Hso Ten, fueron detenidos por agentes de la subdivisión especial de la Policía de Myanmar, sin mandamiento judicial y por orden del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC). Hso Ten fue detenido sin orden judicial por personal del Comando Oriental de las Fuerzas Armadas de Myanmar. Sai Hla Aung fue detenido en el municipio de Taunggyi mientras viajaba en tren a Yangon. Hkun Htun Oo y Sai Nyunt Lwin fueron detenidos en sus domicilios. Se desconoce en qué lugares fueron detenidas las personas restantes.

5. Hso Ten es el Presidente del Consejo de Paz del Estado de Shan y Jefe del Ejército del Estado de Shan (SSA), un grupo étnico armado que ha suscrito un acuerdo de alto el fuego con el SPDC. Hkun Htun Oo es el presidente de la Liga Nacional Shan para la Democracia (SNLD), un partido político registrado en Myanmar, así como representante electo por la circunscripción N° 1 de Thee Baw. En el momento de crearse el Comité de Representación del Parlamento Popular (CRPP), actuó como representante de los shan. También lideró la Alianza de Nacionalidades Unidas (UNA). Sai Nyunt Lwin es el Secretario General de la SNLD, y Sai Hla Aung uno de sus miembros. Nyi Nyi Moe, Sai Myo Win Htun, y Htun Nyo son miembros de una organización de la sociedad civil denominada Nueva Generación de las Juventudes Shan (SYNG).

6. El 17 de febrero de 2005 todos los individuos en cuestión fueron trasladados a la Prisión Central de Insein, en Yangon, donde permanecieron hasta el 2 de noviembre de 2005 bajo la autoridad del Departamento de Servicios Penitenciarios del Ministerio del Interior. El 18 de febrero de 2005 el Tribunal Supremo de Myanmar, mediante Orden N° 37/05, transfirió su caso a un tribunal especial convocado por autoridad del Tribunal del Distrito del Norte de Yangon y presidido por los jueces divisionales auxiliares U Mya Thein (Presidente) y U Khin Maung Kyi. Al día siguiente, el Ministerio del Interior dictó orden de detención para todos ellos.

7. Todos esos individuos fueron acusados por el Gobierno de la Unión de Myanmar de conspirar para la secesión de la Unión, tras asistir a una reunión convocada para formar el Consejo Consultivo de Académicos del Estado de Shan. El 21 de febrero de 2005 el Teniente de policía Coronel Khin Htay, el Capitán de policía Aung Myint Than y el Teniente de policía Myint Aung, de la Subdivisión Especial de la Fuerza de Policía Popular de Myanmar, iniciaron contra ellos una denuncia en la que les imputaban una serie de cargos basados en las siguientes afirmaciones:

Por invitación del General Hso Ten, de fechas 4 y 5 de noviembre de 2004, Hkun Htun Oo y Sai Nyunt Lwin asistieron a la reunión del 15° Aniversario del Día de la Paz, organizada por la SSA en la aldea de Sein Kyawt, distrito de Thee Baw, en el norte del estado de Shan. En esta reunión acordaron formar el Consejo Consultivo de Académicos del Estado de Shan. Hkun Htun Oo ofreció sus sugerencias y durante la reunión se examinó la formación del mencionado Consejo. Sai Nyunt Lwin dio lectura a la Carta de Paz de las Nacionalidades del Estado de

Shan. Than Myint también asistió a la reunión. El General Hso Ten pronunció un discurso de apertura.

La segunda reunión se celebró en la casa del General Hso Ten, en Lashio, el 22 de diciembre de 2004. La tercera reunión tuvo lugar en una oficina del SSA en Taung Gyi el 7 de febrero de 2005, día del estado de Shan. En esta reunión se distribuyó una declaración del Consejo Consultivo de Académicos del Estado de Shan, una declaración de la Nueva Generación del Estado de Shan, y una declaración de las juventudes estudiantiles.

Hkun Htun Oo y Sai Nyunt Lwin no estuvieron presentes en esta tercera reunión.

8. El 15 de marzo de 2005, el SPDC celebró una conferencia de prensa en la que explicó los motivos de las detenciones llevadas a cabo. Hkun Htun Oo, Sai Nyunt Lwin, Sai Hla Aung, Htun Nyo, Sai Myo Win Htun, Nyi Nyi Moe y Hso Ten fueron acusados de alta traición, de conformidad con el artículo 121, párrafo 1, del Código Penal de Myanmar (causa penal N° 233/05); de sedición, de conformidad con el artículo 124 a) del Código Penal (causas penales Nos. 234/05 y 239/05); y de subversión, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de protección de la transferencia pacífica y sistemática de la responsabilidad y del buen desempeño de las funciones de la Convención Nacional frente a los disturbios y las oposiciones (la Ley antisubversiva) (causa penal N° 235/05, declaración 5/96). Se les formularon además cargos de conformidad con el artículo 6 de la Ley relativa a la formación de organizaciones de 1988 (causa penal N° 236/05) y con la Ley de registro de impresos y publicaciones, de 1962 (causa penal N° 237/05). Hso Ten fue condenado además por dos casos relacionados con un incidente aislado: por una tala ilegal, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de protección del patrimonio público (causa penal N° 294/05) y por la exportación ilegal de madera, de acuerdo con la Ley provisional de control de importaciones y exportaciones (causa penal N° 293/05).

9. Las audiencias preliminares ante el tribunal empezaron el 27 de abril de 2005, de conformidad con el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, y concluyeron el 26 de mayo de 2005. La vista de la causa se inició el 2 de junio de 2005 en las dependencias de la Prisión Central de Insein. Todos los acusados se declararon inocentes el 6 de junio de 2005. Sólo se pudo interrogar a seis de los 18 testigos de descargo, pues el resto se había dado a la fuga o no se los pudo localizar. Dos testigos presentados por la Fiscalía tampoco pudieron ser convocados para ser interrogados. El 2 de noviembre de 2005 todos los acusados fueron condenados a "destierro de por vida" por el Tribunal del Distrito del Norte de Yangon. Esto significa cadena perpetua en una colonia penal con trabajos forzados. Hkun Htun Oo fue condenado a 93 años de prisión a cumplir en la prisión de Putao, en el estado de Kachin (preso N° 0136/C); Sai Nyunt Lwin a 85 años en la prisión de Kale, en la división de Sagaing (preso N° 7222/C); y Sai Hla Aung, Htun Nyo, Sai Myo Win Htun, y Nyi Nyi Moe a 79 años en la prisión de Kyauk Hpyu (estado de Rakhine), en la prisión de Buthihtaung (estado de Rakhine), en la prisión de Myingyan (División de Mandalay) y en la prisión de Pakukku (división de Magwe), respectivamente. Hso Ten fue condenado a cumplir 106 años de prisión en la cárcel de Khanti (estado de Shan). Uno de sus coacusados, U Myint Than (también conocido como Eh Phyu), que también fue detenido el 9 de febrero de 2005 y condenado a 79 años de prisión por el Tribunal del Distrito del Norte de Yangon, murió mientras estaba detenido en la prisión de Than Dwe. Otro de los coacusados, U Sao Tha Ut, miembro de la SNLD, también fue condenado a una severa pena de prisión, pero fue liberado tras el juicio por comparecer como testigo del Estado, de conformidad con el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal. Está pendiente un recurso en la Sala Especial de Apelación del Tribunal Supremo en Yangon, última instancia a la que es posible recurrir en virtud de las convenciones del sistema jurídico de Myanmar.

10. Los acusados Hkun Htun Oo, Sai Nyunt Lwin, Sai Hla Aung, Htun Nyo, Sai Myo Win Htun, Nyi Nyi Moe y Hso Ten fueron condenados en la causa penal N° 233/05 por alta

traición, de conformidad con el artículo 121 del Código Penal, que establece: "La persona que a) libere una guerra contra la Unión de Myanmar o alguna de las partes que la integran, b) o asista a cualquier Estado o persona, c) o incite o conspire con otra persona dentro o fuera de la Unión para librar una guerra contra la Unión o alguna de las partes que la integran, d) o intente o de alguna otra manera se prepare, con la fuerza de las armas u otros medios violentos, para derrocar a los órganos de la Unión o alguna de las partes que la integran, establecidas por la Constitución, o tenga alguna participación o interés, o incite o conspire con cualquier persona, dentro o fuera de la Unión, para intentar o tener participación o interés en cualquier intento de esta índole, se considerará culpable del delito de alta traición". El Tribunal determinó que todos los acusados eran culpables de alta traición. Según las conclusiones del Tribunal del Distrito del Norte de Yangon, Hkun Htun Oo, como presidente del Consejo Consultivo de Académicos del Estado de Shan, pronunció un discurso de apertura el primer día de la primera reunión del Consejo del 4 de noviembre de 2004. El demandado Sai Nyunt Lwin asistió a esa reunión y dio lectura a una declaración de la Coalición de Pueblos Étnicos de Shan. Hso Ten presidió la segunda jornada de la primera reunión. La segunda reunión del Consejo se celebró en su casa en el municipio de Lashio y la tercera reunión se celebró en una oficina del Ejército del Estado de Shan en el municipio de Taung Gyi con la autorización de Hso Ten. Según el Tribunal, sobre la base de esta prueba, se afirmó que Hso Ten era la persona que dirigía las reuniones del Consejo Consultivo de Académicos del Estado de Shan. El Tribunal declaró asimismo su convicción de que la conducta de los acusados tenía por objeto transformar el Consejo Consultivo de Académicos del Estado de Shan en una organización a nivel nacional para lograr la autonomía y la autodeterminación del estado de Shan, ejerciendo así el derecho a la igualdad y el derecho a la secesión. El Tribunal concluyó que la intención del Consejo era socavar la Unión de Myanmar después de alcanzar estos objetivos.

11. Todas las personas implicadas fueron también declaradas culpables en la causa penal N° 234/05, de conformidad con el artículo 124 a) del Código Penal, por el delito de sedición: "Toda persona que mediante declaraciones verbales o por escrito, o mediante signos o cualquier otra representación visible, incite o intente incitar al odio y al desprecio, o exacerbe o intente exacerbar animadversión [hacia el Gobierno establecido por ley para la Unión o cualquiera de las partes que la integran] será castigado con destierro a una colonia penal de por vida o por un plazo más breve, a lo que se podrá añadir una multa; con una pena de prisión de hasta tres años, a lo que se podrá añadir una multa, o con multa". El Tribunal basó sus condenas en las declaraciones orales o escritas efectuadas durante la primera reunión del Consejo Consultivo de Académicos del Estado de Shan, en las que se afirma que la situación política vigente en Myanmar, "caracterizada por la lucha por el poder entre el gobierno militar, que actualmente dirige el país, y los partidos políticos que ganaron las elecciones de 1990", había causado "los problemas del país y el empobrecimiento cada vez mayor del pueblo". La declaración escrita distribuida en la reunión y después leída en público decía: "Las condiciones han ido empeorando día a día en los últimos 16 años" y "aunque no podemos hablar de esclavitud, sí podemos decir que las condiciones de vida del pueblo birmano no son muy diferentes de las de los esclavos".

12. La causa penal N° 239/05, relativa a Sai Nyunt Lwin, se basaba en un documento titulado *El futuro de Birmania*, elaborado por la Alianza de Nacionalidades Unidas (UNA) y descubierto en un ordenador encontrado en su casa, que dio lugar a otra condena de cadena perpetua conforme al artículo 124 a) del Código Penal. El Tribunal describió el contenido del documento de la siguiente manera:

"1) Las actos del gobierno, positivos o negativos, tienen un efecto directo en la vida de los habitantes de ese país. Los malos gobiernos gobiernan mal el país y no satisfacen las necesidades del pueblo. Por lo tanto, las personas tienen el deber de elegir un buen gobierno, que promueva nuestra dignidad y nuestra vida...

2) El Consejo de Estado para el Restablecimiento del Orden Público (SLORC) ha incumplido la promesa que hizo antes de las elecciones de 1990. Por otra parte, ha entorpecido y controlado el proceso de elaboración de un proyecto de constitución. Del 9 de enero de 1993 al 25 de enero de 1996 convocó una falsa Convención Nacional en el Campo de Kyatkasan, fundada en seis objetivos, uno de los cuales consistía en que "el ejército desempeñe un papel de liderazgo en la política nacional de Birmania"...

3) La SLORC controla y domina por completo la Asociación para la Solidaridad y el Desarrollo y le ha ordenado que haga campaña para introducir en la Convención Nacional sus 104 políticas unilaterales fundamentales... Esta campaña pone en peligro el alto el fuego de los grupos étnicos armados...

4) El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC) está tratando de redactar una constitución con 104 políticas fundamentales que permitan al ejército seguir gobernando y perpetuar el régimen actual. Si esta constitución se aprueba y promulga, Birmania será el país con la peor constitución del mundo...

5) Contrariamente a lo que manifiesta el SPDC, la Unión de Birmania que resultaría de la constitución que propone este Consejo de Estado sería un estado militarizado incapaz de generar un país desarrollado y moderno.

6) Como existen siete estados y siete divisiones en la Unión de Birmania, un sistema de partido único no representa adecuadamente a todos los pueblos del país; esto genera una situación de desigualdad para los grupos étnicos y la imposibilidad de que emerja un sistema genuinamente democrático.

7) La población birmana vive desde 1948 una crisis política a causa de las debilidades y deficiencias de la Constitución de 1947. Debido a estas deficiencias, la independencia de Birmania estuvo acompañada de conflictos étnicos, guerras ideológicas, la toma del poder por parte de los militares y problemas graves de todo tipo para el pueblo.

8) La declaración formulada en el sexto aniversario de la Cámara de las Nacionalidades aseguraba que las condiciones políticas, económicas, educativas y sociales en Birmania se han deteriorado y que la unidad nacional está resentida. En tales condiciones, existe un gran temor a que se produzca inevitablemente una crisis general en Birmania.

9) Debería establecerse una República Federal de Birmania gobernada mediante una verdadera democracia, que garantizara y protegiera los derechos humanos, la igualdad étnica y la libre determinación de todos los grupos étnicos; sólo de este modo podríamos asegurar que el país no vuelva a estar gobernado por regímenes dictatoriales."

13. Khun Htun Oo, Sai Nyunt Lwin, Nyi Nyi Moe, Sai Hla Aung, Htun Nyo, Sai Myo Win Htun y Hso Ten fueron además condenados a cinco años de reclusión y trabajos forzados, de conformidad con el artículo 6 de la Ley relativa a la formación de organizaciones de 1988 (causa penal N° 236/05). Dicho artículo establece: "Toda persona declarada culpable de cometer un delito en virtud del artículo 3, párrafo c), o del artículo 5, será castigada con pena de prisión de hasta cinco años". El artículo 3, párrafo c), reza: "No deberán formarse organizaciones no autorizadas, y si se han formado, no podrán seguir existiendo, ni llevando a cabo sus actividades". El artículo 5 establece: "No deberán formarse organizaciones como las que se indican a continuación, y si ya se han formado, deberán dejar de funcionar o de existir: (...) c) Organizaciones que cometan actos que puedan afectar o alterar el funcionamiento regular de la maquinaria del Estado, o que instiguen, inciten o induzcan a cometer esos actos". El Tribunal, entre otras cosas, determinó que los acusados eran culpables de debatir, durante la tercera reunión del Consejo Consultivo de Académicos del Estado de Shan, sobre temas que afectaban al buen funcionamiento del Estado y que parecían tener por objeto obstaculizar la acción del

Gobierno para administrarlo, y de emitir posteriormente opiniones en ese sentido. El Tribunal del Distrito del Norte de Yangon estableció que el Consejo dirigido por los acusados era una asociación prohibida por el Estado y que no podía llevar a cabo ningún tipo de actividad de conformidad con el artículo 5 c) de la Ley relativa a la formación de organizaciones. Según el Tribunal, el Consejo había llegado a crearse, y su fundación violaba esta disposición.

14. En el marco de dos causas diferentes (las causas penales N° 294/05 y N° 293/05), Hso Ten fue condenado a cadena perpetua en virtud de los artículos 2 y 3 de la Ley de protección del patrimonio público de 1963 y del artículo 5.5, párrafos 1 y 3 de la Ley (transitoria) de control de importaciones y exportaciones de 1947. Según el Tribunal, en virtud de estas disposiciones se determinó que Hso Ten era culpable de participar en la tala y exportación ilegal de madera de teca a China. El artículo 2 de la ley mencionada establece: "Se considera patrimonio público el dinero, los bienes almacenados, los utensilios u otros bienes que tienen en propiedad o por haberse cedido su uso, o bajo custodia: a) el ejército; b) el gobierno revolucionario o las autoridades locales o la Junta, o una corporación, banco u otra organización constituida con arreglo a una ley existente; c) una cooperativa; o d) cualquiera de las siguientes organizaciones declaradas por el gobierno revolucionario en sus boletines oficiales: 1) una organización registrada de acuerdo con la Ley de registro de asociaciones, 2) una organización registrada de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de sociedades de Birmania, 3) un administrador, 4) otras organizaciones". El artículo 3 de esta ley establece: "Toda persona que cometa robo, apropiación indebida o estafa en relación con el patrimonio público será castigada con cadena perpetua, o un período mínimo de prisión de diez años, además de una multa". La Ley (transitoria) de control de importaciones y exportaciones considera una infracción penal la violación de los reglamentos de aduanas y de importación y exportación.

15. En una última causa (causa penal N° 237/05), Htun Nyo, Sai Hla Aung, Nyi Nyi Moe, Sai Myo Win Htun y Hso Ten fueron condenados por publicación ilegal al violar los artículos 6, 17, 18 y 20 de la Ley de registro de impresos y publicaciones de 1962. Según la fuente, el artículo 6 de esta ley dispone: "1) Toda persona que quiera ejercer como impresor o editor debe formular una declaración firmada, de acuerdo con el artículo 3, y presentarla al oficial del registro con el correspondiente formulario de solicitud y dentro de los plazos establecidos. 2) No se permite participar en una empresa de impresión o publicación si no se posee la tarjeta de registro y se siguen las normas de la misma o los requisitos de la ley". El artículo 17 de la referida ley establece: "Cualquier persona que se dedique a la impresión o publicación sin el registro que estipula el artículo 6 será condenada a una pena de uno a siete años de prisión, o una multa de 3.000 a 30.000 kyats, o bien se le aplicarán ambos castigos". El artículo 18 establece: "Toda persona que aluda a un hecho falso a sabiendas de que lo es será sancionada con una pena de seis meses a cinco años de prisión o una multa de 2.000 a 20.000 kyats, o bien se le aplicarán ambos castigos". Por último, el artículo 20 estipula: "Cualquier persona que se oponga al procedimiento de esta ley o no lo acate, o que no acate la orden de una autoridad emitida en virtud de esta ley, será sancionada con una pena de uno a siete años de prisión, o una multa de 3.000 a 30.000 kyats, o bien se le aplicarán ambos castigos". El Tribunal condenó a los acusados porque las tres declaraciones publicadas en la tercera reunión del Consejo Consultivo de Académicos del Estado de Shan y en el 58° Aniversario del Día del Estado de Shan, respectivamente, no estaban registradas de acuerdo con el artículo 6, párrafos 1 y 2, de la Ley de registro de impresos y publicaciones. En consecuencia, era de aplicación la sanción prevista en el artículo 17 de dicha ley. Por otra parte, no siguieron el procedimiento estipulado en el artículo 18, por lo que se les aplicó la sanción prevista en el artículo 20 de la ley.

16. La fuente alega una serie de irregularidades procesales en el juicio. En concreto, señala que en el momento de detener a los acusados no se presentó ninguna orden de detención. El Ministerio del Interior emitió las órdenes el 19 de febrero de 2005, unos 10

días después de que se llevaran a cabo las detenciones y de que se encarcelara a las personas en cuestión. La fuente alega además que las familias de los detenidos dieron poderes a tres abogados del Tribunal Supremo para que los representaran en sus causas; sin embargo, se les negó el acceso a los acusados y al Tribunal a pesar de sus reiteradas peticiones. Según la fuente, el tribunal que los juzgó no tenía competencia *ratione loci*, con lo que se violaron los artículos 177, 178 y 526 del Código de Procedimiento Penal, que exige la autorización del Presidente nacional o el Presidente del Tribunal Supremo para transferir una causa fuera de la zona que tiene la competencia. Al no existir dicha autorización, el juicio se debería haber celebrado en el estado de Shan, lugar en que presuntamente se cometieron los delitos.

17. Por otra parte, al parecer el juicio estuvo a cargo, sin autorización, de un tribunal compuesto por dos jueces y se realizó en la cárcel, y no en locales judiciales, como establece el Tribunal Supremo en sus directivas N° 7/56 y N° 3/69. También se negó a los acusados el derecho a interrogar a los testigos, como estipula el artículo 256 del Código de Procedimiento Penal. Dos testigos que eran clave para establecer la condena de todos los imputados no pudieron ser convocados nuevamente, y el juzgado no siguió el procedimiento establecido para estos casos en la directiva N° 3/66 del Tribunal Supremo. A los testigos de descargo de Hso Ten, en su causa por comercio ilegal de madera, no se les concedió tiempo suficiente para comparecer y atestiguar. Se emitió una citación el 26 de julio de 2005, pero sólo dos días después el juzgado anunció que los que no se hubieran presentado ante el tribunal hasta ese momento no serían escuchados. Como los testigos debían viajar desde las regiones del extremo noreste del país, el tiempo que se les dio para desplazarse no fue razonable. Igualmente, se rechazó una petición de la defensa para que se proporcionaran a la aerolínea estatal los nombres de los testigos que debían comparecer, con el fin de facilitar y agilizar su viaje desde Lashio a Yangon. Por todas estas razones sólo se pudo oír a un testigo del acusado. Por último, y en violación de las normas sobre pruebas, reglamentada en el artículo 614 del Manual del Tribunal, durante el juicio se emplearon fotocopias en lugar de los documentos originales.

18. La fuente alega también que los condenados no han cometido ningún delito de conformidad con la legislación interna de Myanmar. Por lo que respecta a la causa penal N° 233/05, la fuente sostiene que no había elementos suficientes para justificar la condena por alta traición, de conformidad con el artículo 121 del Código Penal. No se presentaron pruebas ante el Tribunal de que se estuviera preparando una guerra contra Myanmar o ni de cualquier otro supuesto de los mencionados en el artículo 121 del Código Penal. Las acciones de los acusados descritas en la sentencia se referían tan sólo a su participación en un movimiento político. La fuente alega además que el Gobierno no se ha formado mediante la aplicación de una constitución, como lo requiere el artículo 121 del Código Penal, ya que Myanmar no dispone de constitución desde 1990. Por lo tanto, desde un primer momento los acusados no pueden ser condenados por alta traición. Por último, la fuente señala que las personas implicadas en los hechos descritos únicamente pretendían establecer una verdadera Unión para el país.

19. En cuanto a la causa N° 234/05, la fuente sostiene que no hay sedición, de conformidad con el artículo 124 a) del Código Penal, pues esta disposición se refiere a un "Gobierno establecido por ley". Por otra parte, alega que los imputados se limitaron a ejercer su derecho a la libertad de expresión. Con respecto a la causa N° 239/05, relativa a Sai Nyunt Lwin, la fuente alega que su procesamiento no está en consonancia con el artículo 124 a) del Código Penal, ya que la condena se basó en el contenido de un ordenador hallado en casa de Sai Nyunt Lwin, con documentos que proponían el establecimiento de una unión federal en Myanmar, ninguno de los cuales había sido difundido ni empleado para este fin. Es más, la Ley para la definición de términos de 1973 establece en su artículo 22 que cuando un acto u omisión constituye un delito en virtud de dos o más leyes, el autor será juzgado sólo en base a una de ellas. Sai Nyunt Lwin, sin

embargo, fue condenado a un total de 85 años de prisión por el mismo acto en las causas Nos. 233/05, 234/05, 235/05, 236/05 y 239/05. Esta condena está también en desacuerdo con el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 71 del Código Penal. Este último dispone: "Cuando un delito se compone de diferentes partes, y cada una de estas partes es en sí misma un delito, el autor no podrá ser castigado con la pena correspondiente a más de uno de esos delitos". Además, la imposición de múltiples condenas por un solo hecho ilegal es una violación de los principios establecidos en la Ley del poder judicial de 2000 e infringe el principio jurídico fundamental de *non bis in ídem*. Por último, Sai Nyunt Lwin actuaba de buena fe, sin intención criminal y ejerciendo legalmente su derecho a la libertad de expresión.

20. La condena por subversión (causa penal N° 235/05) se refiere a una reunión de fecha 7 de febrero de 2005, a la que Hkun Htun Oo y Sai Nyunt Lwin no asistieron. Su afirmación de que no asistieron no fue contradicha por la acusación ni se aportaron pruebas que demostraran lo contrario, a pesar de que el artículo 3 de la Ley antisubversión requiere que quien cometa o instigue el acto de subversión sea el acusado como individuo, más que como miembro de una organización.

21. La fuente afirma además que en la causa penal N° 236/05 no era legalmente posible dictar una condena de conformidad con la Ley relativa a la formación de organizaciones de 1988, ya que, entre otras cosas, en el momento en que se presentaron los cargos en su contra los acusados no habían establecido aún íntegramente el Consejo Consultivo de Académicos del Estado de Shan, y no pudieron, por lo tanto, solicitar el registro. Por otra parte, las declaraciones formuladas en la reunión que se esgrime para acusarlos fueron hechas dentro de los límites de su derecho a la libertad de expresión.

22. En cuanto a las causas separadas contra Hso Ten (causas penales Nos. 294/05 y 293/05), la fuente sostiene que éste no pudo haber violado las disposiciones pertinentes de la Ley de protección del patrimonio público, ya que la madera de teca motivo del litigio no se puede considerar patrimonio público en el sentido del artículo 2 de la ley y los cargos tenían relación con una empresa con la debida licencia. Es más, no se le podía acusar y condenar por la misma acción con arreglo a diferentes leyes penales, a saber, la Ley de protección del patrimonio público, por un lado, y la Ley (transitoria) de control de importaciones y exportaciones, por otro (causa penal N° 293/05). Este proceder no está en consonancia con el estado de derecho y además perjudica la aplicación equitativa de la justicia. El Tribunal utilizó exactamente las mismas pruebas, testimonios y actuaciones judiciales para ambas condenas, a pesar de que el procedimiento jurídico exige que el tribunal se asegure de que cada testigo presta declaración únicamente sobre un cargo por vez, y que se lleve una documentación separada para cada uno (artículo 614 del Manual del Tribunal). Otro vicio del procedimiento en cuestión se refiere a que la aprobación de su detención en virtud de la Ley de protección del patrimonio público no fue emitida por el Ministerio del Interior hasta el 1° de julio de 2005, es decir, casi cinco meses después de que el acusado fuera detenido.

23. Con respecto a la causa penal N° 237/05, que dio lugar a la condena de Htun Nyo, Sai Hla Aung, Nyi Nyi Moe, Sai Myo Win Htun, y Hso Ten, por violar la Ley de registro de impresos y publicaciones de 1962, la fuente alega que no se presentaron pruebas ante el Tribunal de que fuera necesario registrar la distribución de esta declaración según el artículo 3 de la ley, pues su distribución fue limitada. No se les puede considerar penalmente responsables en virtud de esta ley, pues no imprimieron ni publicaron ningún documento.

24. La fuente explica que la detención y condena de las personas en cuestión se produjo tras un proceso de acercamiento entre el Gobierno y diversos grupos étnicos del país, que tuvo lugar durante los años 2003 y 2004. Hkun Htun Oo fue conocido durante esos años por sus esfuerzos para la negociación de un acuerdo entre el Gobierno y sus opositores

armados. Durante este período, la UNA, liderada por Hkun Htun Oo, se negó a participar en la Convención Nacional para la elaboración de una nueva constitución. Además, el Secretario de la SNLD, Sai Nyunt Lwin, declaró que su organización no participaría en la Convención Nacional a menos que se enmendaran los 104 Principios Básicos que permitirían a las fuerzas armadas de Myanmar controlar el Gobierno. Durante ese período el SPDC prohibió una publicación titulada *Boletín Sum Bai*, editada por Sai Nyunt Lwin. Del mismo modo, el 11 de abril de 2004, el Consejo para la Restauración del Estado de Shan, ala política del Ejército del Estado de Shan, emitió un comunicado criticando también los 104 Principios. El 6 de mayo de 2004, Hkun Htun Oo declaró públicamente que la SNLD adoptaba la misma postura política que la Liga Nacional para la Democracia y que los 104 Principios del SPDC eran inaceptables. La fuente explica que el origen del conflicto entre el Gobierno actual y los grupos étnicos en cuestión se remonta a la época de la independencia de Myanmar en 1947. Fue entonces cuando los líderes shan se opusieron a la Constitución y lucharon por presentar enmiendas, lo que les valió ser acusados por los militares de conspirar para separarse de la Unión.

25. El Grupo de Trabajo, tras examinar la información recibida, detallada y fidedigna, y tras lamentar la ausencia de respuesta del Gobierno de Myanmar a la misma, considera que la situación de los siete presos tal como ha sido presentada por la fuente conlleva una serie de infracciones de los derechos humanos que permiten hablar de detención arbitraria.

26. Hkun Htun Oo, Sai Nyunt Lwin, Sai Hla Aung, Htun Nyo, Sai Myo Win Htun, Nyi Nyi Moe y Hso Ten fueron detenidos a principios de febrero de 2005 sin mandamiento judicial, siguiendo órdenes de diversas autoridades del Gobierno de Myanmar. El Ministerio del Interior no emitió las órdenes de detención contra ellos hasta el 19 de febrero de 2005.

27. Las irregularidades en el juicio socavaron el derecho de los acusados, en condiciones de plena igualdad, a un juicio justo y público, ante un tribunal independiente e imparcial, en el que disfrutaran de las garantías necesarias para su defensa, conforme a lo estipulado en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La decisión del Tribunal Supremo de Myanmar de transferir sus causas a un tribunal creado para la ocasión pone en tela de juicio la imparcialidad y la equidad del proceso. El Grupo de Trabajo no puede valorar si la convocatoria de este tribunal, sin competencia *ratione loci*, se ajustaba al procedimiento interno adecuado estipulado en el Código de Procedimiento Penal de Myanmar, circunstancia que es cuestionada por la fuente. Sin embargo, el Grupo de Trabajo sí es competente para determinar que, como el juicio se celebró en una zona apartada de los lugares en que presuntamente se cometieron los delitos, y los testigos clave propuestos por los abogados defensores no pudieron ser escuchados debido al poco margen de tiempo que les concedía la citación expedida por el Tribunal Especial, y tampoco se pudo interrogar a otros testigos, no se respetó debidamente el derecho a la defensa de los procesados.

28. Las alegaciones también siembran serias dudas sobre la imparcialidad del juicio debido a que se negó a los abogados defensores libremente elegidos el acceso a los acusados y al Tribunal Especial. El hecho de que el juicio se llevara a cabo en la cárcel y no en locales judiciales pone en duda que se respetara el carácter público exigido como requisito en los artículos 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por otra parte, las autoridades gubernamentales hicieron públicas las acusaciones contra los procesados en una conferencia de prensa el 15 de marzo de 2005, lo que afectó a su derecho a la presunción de inocencia. También, según el criterio del Grupo de Trabajo, no se cumplió el principio de *non bis in ídem* en relación con Sai Nyunt Lwin, pues fue condenado por los mismos hechos en múltiples cargos (causas penales Nos. 233/05, 234/05, 235/05, 236/05 y 239/05).

29. El Grupo de Trabajo considera que estas violaciones del derecho a un juicio justo, tomadas en su conjunto, son de tal gravedad que confieren carácter arbitrario a la detención de los siete condenados, sobre todo teniendo en cuenta las acusaciones extremadamente graves que se hicieron contra ellos, como la de alta traición, que acarrea severas penas de prisión. El Grupo de trabajo no puede evaluar si los defectos de falta de equidad en el juicio se han corregido o no en la apelación, que estaba pendiente en el momento de la presentación de los casos por parte de la fuente, ya que no dispone para ello de los comentarios del Gobierno sobre las alegaciones que se le transmitieron.

30. El Grupo de Trabajo no puede juzgar, como si fuera un "supertribunal de casación", las decisiones adoptadas por los tribunales penales nacionales respecto a la culpabilidad de los acusados o la correcta evaluación de las pruebas objetivas. No puede, por lo tanto, confirmar las alegaciones de la fuente en relación a que Hso Ten no cometió un delito de tala ilegal y exportación de madera, ni puede asegurar que las acciones de los acusados cumplieran con todos los elementos de los delitos establecidos por las diferentes disposiciones de las leyes penales de Myanmar. Sin embargo, el Grupo de Trabajo puede valorar si las disposiciones que determinan que una acción u omisión concreta sea un delito están en consonancia con el derecho internacional en materia de derechos humanos. También puede examinar si las acciones que se imputan están protegidas por uno de los derechos enumerados en la categoría II de los criterios aplicables al examen de los casos, lo que haría que no fueran punibles.

31. El Grupo de Trabajo considera que hay indicios suficientes de que la lista de cargos contra los acusados y las acciones resultantes del Gobierno de Myanmar constituyen una reacción al ejercicio pacífico de los derechos humanos fundamentales a la libertad de reunión, de opinión, de expresión y de asociación, así como del derecho a participar en el gobierno del propio país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, garantizados por los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

32. De la información proporcionada por la fuente se desprende que las siete personas encausadas estaban en proceso de formar una organización política cuyo electorado estaría constituido principalmente por miembros de la etnia shan. Sin embargo, este proceso se llevó a cabo también con el deseo de estimular el movimiento democrático en el conjunto del país, con Hkun Htun Oo como presidente de la rama shan de la Liga Nacional para la Democracia, el partido político de Aung San Suu Kyi, que ganó las elecciones generales de 1990. Según considera el Grupo de Trabajo, incluso si el objetivo final de este movimiento político era obtener la propia autonomía y la libre determinación de un "Estado de Shan" dentro de la Unión de Myanmar, o separarse de la Unión, sus actividades estarían protegidas por los derechos ya mencionados si se llevaron a cabo de una manera pacífica y a través de medios democráticos. Nada de lo dicho en las declaraciones pronunciadas durante las tres reuniones del Consejo Consultivo de Académicos del Estado de Shan, o el contenido descubierto en el ordenador de Sai Nyunt Lwin, que sirvieron para imputar a los acusados, indicaría que no haya sido así.

33. Además, el hecho de que el Ejército del Estado de Shan firmara un acuerdo de alto el fuego con el Gobierno de Myanmar a través del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, sumado al contexto descrito anteriormente por la fuente sobre el desarrollo constitucional del país desde su independencia en 1947, lleva a pensar que Hso Ten, junto con los demás miembros del grupo, perseguían objetivos políticos a través de un proceso político, y no militar. El momento de la detención de los siete acusados, llevada a cabo en febrero de 2005, inmediatamente después de las tres reuniones del movimiento político, celebradas en noviembre y diciembre de 2004 y en febrero de 2005, apoya decididamente la conclusión de que las detenciones y los juicios en que se impusieron severas penas de

prisión se llevaron a cabo como reacción a sus compromisos políticos, y no a su participación en actividades armadas, si las hubo.

34. Una vez establecido que las actividades de los siete acusados corresponden al ámbito del derecho a la libertad de opinión, expresión, asociación y participación en el Gobierno del propio país, las penas de duración prolongada que se les impusieron están fuera de los límites aceptables de estos derechos fundamentales. Las disposiciones penales que tipifican como delito "incitar o intentar incitar al odio y al desacato, o exacerbar o intentar exacerbar la animadversión" hacia el Gobierno en el poder; o que castigan a los fundadores de una organización sólo porque puede "afectar o alterar el funcionamiento regular de la maquinaria del Estado"; o a una persona por "aludir a un hecho falso a sabiendas de que lo es"; o a quien funda una empresa de impresión y publicación sin el registro previo; son demasiado imprecisas, amplias y restrictivas, habida cuenta de la vital importancia que tiene el intercambio libre —y pacífico— de ideas (políticas) para una sociedad, como lo garantiza el derecho a la libertad de expresión, asociación y actividad política. El Grupo de Trabajo concluye que el encarcelamiento de los siete acusados también constituye una detención arbitraria en los términos de la categoría II.

35. A la luz del análisis de la información de que dispone, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La privación de libertad de los Sres. Hkun Htun Oo, Sai Nyunt Lwin, Sai Hla Aung, Htun Nyo, Sai Myo Win Htun, Nyi Nyi Moe y Hso Ten es arbitraria, pues contraviene los artículos 9, 10, 11, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y corresponde a las categorías II y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

36. Consecuentemente con la Opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Myanmar que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de las personas antes mencionadas, de modo que esté en consonancia con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo vuelve a invitar al Gobierno de Myanmar a que considere la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 12 de septiembre de 2009.

## **Opinión N° 27/2008 (Egipto)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 11 de octubre de 2007.**

**Relativa al Sr. Mohamed Khirat Al-Shatar y otras 25 personas.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado información sobre las alegaciones de la fuente.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. En vista de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta facilitada por el Gobierno a la fuente y recibió sus comentarios.
5. Los casos se comunicaron al Grupo de Trabajo de la siguiente manera: Mohamed Khirat Saad Al-Shatar, nacido en Dakahleya el 4 de mayo de 1950, hombre de negocios y miembro de los consejos de administración de varios bancos y compañías financieras, fue

detenido el 14 de diciembre de 2006 a las 0.00 horas en su domicilio, ubicado en Madinat an Nasr, El Cairo.

6. Ayman Abd El-Ghani Hassanin, nacido el 1º de noviembre de 1964, ingeniero, fue detenido en la fecha, hora y lugar mencionados *supra*.

7. Khaled Abdelkader Owda, nacido el 31 de agosto de 1944, científico y profesor de Geología en la Universidad de Assiut, miembro de la Asamblea del Pueblo entre 2000 y 2005, militante del Partido Nacional Democrático, fue detenido el 14 de enero de 2007 a las 1.30 horas en el recinto de la Universidad, mientras se reunía con varios profesores de universidades extranjeras.

8. Ahmad Ahmad Nahhas, nacido el 12 de febrero de 1959, ingeniero y tesorero del Sindicato de Ingenieros de Alejandría, fue detenido el 16 de enero de 2007 a las 16.30 horas en su lugar de trabajo en Alejandría.

9. Ahmed Ashraf Mohamed Mostafa Abdul Warith, de 50 años, gerente de una editorial, fue detenido el 24 de diciembre de 2007 por la tarde en su lugar de trabajo en Al-Sayeda Zeinab.

10. Ahmed Azzedin El-Ghoul, nacido el 8 de octubre de 1954, periodista con residencia en Giza, fue detenido en su domicilio el 14 de diciembre de 2006 a las 3.00 horas.

11. Amir Mohamed Bassam Al-Naggar, nacido el 16 de febrero de 1964, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Cairo, fue detenido el 1º de enero de 2007 a las 2.00 horas en su domicilio.

12. Esam Abdul Mohsen Afifi, nacido el 7 de diciembre de 1956, profesor de Bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Al-Azhar, con residencia en Giza, fue detenido en su domicilio el 14 de diciembre de 2006 a las 2.30 horas.

13. Essam Abdel Halim Hashish, nacido el 29 de abril de 1950, profesor de ingeniería en la Universidad de El Cairo, fue detenido el 14 de enero de 2007 a las 2.00 horas en su domicilio.

14. Farid Aly Galbt, nacido el 23 de marzo de 1954, profesor de derecho en la Universidad de Al-Azhar, fue detenido el 14 de diciembre de 2006 a las 3.00 horas en su domicilio.

15. Fathy Mohamed Baghdady, nacido el 27 de junio de 1954, Director de escuela con domicilio en Nasr-City, El Cairo, fue detenido en su domicilio el 14 de diciembre de 2006 a las 3.00 horas.

16. Gamal Mahmoud Shaaban, nacido el 6 de junio de 1965, Director financiero con residencia en Alejandría, fue detenido en su lugar de trabajo en Alejandría, la compañía Salsapeal, el 14 de diciembre de 2006 a las 14.00 horas.

17. Ahmad Mahmoud Shousha, nacido el 23 de marzo de 1954, ingeniero con residencia en Nasr-City, El Cairo, fue detenido el 24 de diciembre de 2006 a las 2.30 horas en su domicilio.

18. Yasser Mohamed Ali, nacido el 22 de marzo de 1955, Director del Banco Unión de Crédito, con residencia en Giza, fue detenido el 14 de diciembre de 2006 a las 2.00 en su domicilio.

19. Mahmoud Abdul Latif Abdul Gawad, nacido el 28 de diciembre de 1957, abogado con residencia en Idku City, Behera, fue detenido en su domicilio el 17 de enero de 2007 a las 1.30 horas.

20. Hassan Ezzudine Malek, nacido el 20 de agosto de 1958, hombre de negocios, con residencia en Nasr-City, El Cairo, fue detenido el 24 de diciembre de 2006 a las 2.00 horas en su domicilio.
21. Mahmoud Morsi Koura, nacido el 25 de octubre de 1961, ingeniero con residencia en Ain Shams, El Cairo, fue detenido en su domicilio el 14 de diciembre de 2006 a las 3.00 horas.
22. Mamdouh Ahmed Al-Husseini, nacido en 1947, ingeniero con residencia en New Cairo, Al'Tagamue Al-Khamis, fue detenido el 14 de diciembre de 2006 a las 1.00 horas en su domicilio.
23. Medhat Ahmad El-Haddad, nacido el 25 de diciembre de 1949, Presidente de la Sociedad Árabe de Construcción (ACC), con residencia en Rami, Alejandría, fue detenido en su domicilio el 14 de enero de 2007 a las 2.00 horas.
24. Mohamed Ali Bishr, nacido el 14 de febrero de 1951, profesor de ingeniería en la Universidad de Menoufia, con residencia en Shebin El-Kom, fue detenido el 14 de enero de 2007 a las 5.00 horas en su domicilio.
25. Mohamed Mahmoud Hafez, nacido el 24 de agosto de 1971, oftalmólogo y Director de los laboratorios Hayat Pharmaceutical International Co., con domicilio en Nasr-City, El Cairo, fue detenido en su domicilio el 24 de diciembre de 2006 a las 2.00 horas.
26. Mohamed Mehany Hassan, nacido el 27 de octubre de 1976, contable titulado, con residencia en Flower City, Ezpet Elnkhel, El Cairo, fue detenido el 14 de diciembre de 2006 a las 4.00 horas en su domicilio.
27. Mohamed Ali Baligh, nacido el 8 de octubre de 1956, profesor de medicina en el Instituto Oftalmológico de El Cairo, con residencia en Heliópolis, El Cairo, fue detenido en su lugar de trabajo el 23 de diciembre de 2006 a las 10.00 horas.
28. Mostafa Salem, nacido el 2 de agosto de 1962, contable con residencia en Heliópolis, El Cairo, fue detenido el 14 de diciembre de 2006 a las 3.00 horas en su domicilio.
29. Osama Abdul Muhsin Shirby, nacido el 1º de julio de 1944, Director de una agencia de viajes, con residencia en Alejandría, fue detenido en su domicilio el 14 de enero de 2007 a las 2.00 horas.
30. Murad Salah El-Desouky, nacido el 25 de septiembre de 1957, profesor de Anatomía en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Cairo, con residencia en Mit Ghamr, Daqahliya, fue detenido el 14 de diciembre de 2006 a las 6.00 horas en la calle Mohamed Hassan 20, Ain Shams, El Cairo.
31. Según la información presentada por la fuente, estas 26 personas, miembros destacados de los Hermanos Musulmanes, organización de la oposición, fueron detenidas en sus domicilios y lugares de trabajo en una serie de redadas nocturnas simultáneas los días 14, 23 y 24 de diciembre de 2006, y 14, 16 y 17 de enero de 2007 por agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado (Amn Addawia), que actuaron con el apoyo de unidades especiales del ejército. Se registraron sus casas y oficinas, y se confiscaron sus ordenadores personales, teléfonos móviles, libros y documentos, así como los de sus familias. En ningún momento se mostraron órdenes de detención o de registro, ni a ellos ni a sus familiares, ni se esgrimieron razones que justificaran su detención.
32. Estas 26 personas, junto con otras 14 más, fueron trasladadas a la prisión de Al-Mahkoum en El Cairo, donde fueron recluidas en celdas de 3 por 8 metros. Se les negaron mantas y medicamentos, y 17 de los detenidos fueron obligados a dormir en el suelo. A sus familiares se les negó el derecho a visitarlos.

33. El 21 de enero de 2007, los detenidos fueron trasladados a la prisión de Torah. El Fiscal Abd al-Magid Mahmud los acusó de pertenencia a una organización proscrita y de suministrar armas y entrenamiento militar a estudiantes universitarios. El Fiscal prorrogó el encarcelamiento de los detenidos en tres ocasiones. El 28 de enero de 2007, el Ministerio Público ordenó congelar los activos de los detenidos sobre la base de que habían financiado una organización prohibida. Los activos de sus esposas e hijos también fueron congelados.

34. El 29 de enero de 2007, un juez del Tribunal Penal de El Cairo, después de interrogar a los acusados, desestimó todos los cargos en su contra y ordenó su liberación inmediata. Consideró que no había pruebas contra los detenidos y que la prolongación del período de detención no estaba justificada. El Tribunal consideró que no se justificaba retener a estas personas, sobre todo teniendo en cuenta su conocida honorabilidad y buena reputación en la sociedad egipcia y el hecho de que no tenían antecedentes penales. En su fallo, el Juez pidió específicamente al Poder Ejecutivo que respetara su decisión.

35. A pesar de la decisión judicial, el Ministerio del Interior emitió órdenes de detención contra estas personas y fueron arrestadas de nuevo y de forma inmediata por la policía. Según la fuente, estas nuevas detenciones demostraron un desprecio por el estado de derecho y una falta de respeto hacia la decisión del tribunal.

36. El 4 de febrero de 2007, el Presidente de la República, actuando en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó que los detenidos fueran juzgados por el Tribunal Supremo Militar de Heikstep, El Cairo, de acuerdo con el Código de Justicia Militar de 1966 (Ley N° 25), que autoriza al Presidente a enviar civiles a tribunales militares. Las leyes de excepción permiten al Gobierno detener indefinidamente a personas sin cargos, juicio o recurso legal. Esta detención a veces se prolonga durante años.

37. La fuente añade, además, que los tribunales militares son conocidos por sus juicios sumarios, que no dan a la defensa tiempo suficiente para preparar su argumentación. Los jueces militares egipcios no están obligados a tener una licencia legal para ejercer. Son nombrados por un período de dos años por el Jefe Adjunto de las Fuerzas Armadas y pueden ser despedidos en cualquier momento. Entre las garantías procesales que se violan sistemáticamente cuando se somete a civiles a los tribunales militares de Egipto, destaca el derecho a un juicio público ante un tribunal independiente e imparcial; el derecho a un acceso rápido a un abogado defensor; el derecho a preparar una defensa adecuada; y el derecho a apelar.

38. El 24 de abril de 2007, el Tribunal Penal de El Cairo absolvió por segunda vez a 17 de los detenidos mencionados *supra* en respuesta a una apelación presentada por sus familiares y anuló la decisión del Fiscal del Estado de congelar los activos de los detenidos. Las autoridades no acataron las decisiones de absolución y ordenaron que los juicios militares comenzaran el 26 de abril de 2007.

39. La primera vista del juicio se llevó a cabo en secreto y bajo estrictas medidas de seguridad. Se limitó estrictamente el acceso de los medios de comunicación al juzgado. También se negó el acceso a observadores internacionales independientes. No se informó de la fecha de inicio del juicio a los abogados defensores, que decidieron boicotear la audiencia del tribunal como forma de protesta, obligando así a los acusados a defenderse a sí mismos. Los acusados no fueron informados sobre los cargos en su contra antes de iniciarse el juicio. Más tarde, un tribunal colegiado de tres jueces militares los acusó de terrorismo, blanqueo de dinero y posesión de documentos para difundir las ideas de los Hermanos Musulmanes. El Fiscal del Estado reconoció que aún no había recibido una denuncia sobre el blanqueo de dinero, ya que el banco aún no la había presentado. La fuente considera que esto demuestra que se acusó a los demandados, se congelaron sus cuentas y se cerraron sus empresas sin pruebas judiciales válidas. Se celebraron nuevas audiencias del juicio el 3 de junio, el 15 de julio y el 5 de agosto de 2007.

40. La fuente considera que estas detenciones formaron parte de una campaña de las autoridades, iniciada en marzo de 2006, contra los Hermanos Musulmanes, un grupo que, aunque oficialmente proscrito, constituye la mayor oposición del país, al ocupar 88 de los 454 escaños del Parlamento. Considera que esta ofensiva comenzó cuando los Hermanos Musulmanes prestaron su apoyo a la campaña de los jueces por la independencia del Poder Judicial. Los tribunales militares de Egipto no pueden garantizar a las personas acusadas de delitos penales el derecho a un juicio justo, conforme a lo estipulado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sus sentencias son definitivas y no pueden ser objeto de recurso ante un tribunal superior, con lo que se niega a los acusados el derecho a un proceso con las debidas garantías. Los tribunales militares no deberían tener jurisdicción para juzgar a civiles, independientemente de los cargos que se les imputen. No se les puede considerar tribunales independientes e imparciales para los civiles.

41. La fuente considera que las personas mencionadas *supra* fueron detenidas y mantenidas en prisión únicamente por ejercer sus derechos a la libertad de reunión, asociación, opinión y expresión, consagrados en los artículos 18, 19 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

42. En cuanto a los hechos, el Gobierno informó de que el 13 de diciembre de 2006 la Fiscalía recibió un informe producto de una investigación policial en relación con varios líderes de la asociación Hermanos Musulmanes, una organización proscrita, sospechosos de mantener reuniones con el fin de elaborar un plan dirigido a los estudiantes de varias universidades, en particular de la Universidad de Al-Azhar. El objetivo de este plan era generar el caos, perturbar la vida académica e incitar a los estudiantes a organizar manifestaciones y sentadas, a dañar bienes públicos y privados y a obstruir la ley con miras a alcanzar lo que la organización proscrita define como "la fase de empoderamiento previa al establecimiento del Califato Islámico".

43. La investigación arrojó los siguientes resultados:

a) Los dirigentes responsables del plan de organización fueron identificados y entre ellos figuraban Mohamed Khirat Al-Shatar y otros. También se identificaron los miembros del comité organizador encargados de ejecutar el plan. Para ejecutar el plan, crearon una serie de grupos paramilitares integrados por estudiantes de la Universidad de Al-Azhar, que fueron reclutados por la organización proscrita con los mismos métodos utilizados por las milicias de algunos partidos político-religiosos en los Estados vecinos. Se les proporcionó como armas cuchillos y palos y se les dieron instrucciones de provocar disturbios y cometer actos de violencia en los alrededores de la universidad con el fin de aterrorizar a otros estudiantes y al personal académico. Los organizadores encargaron a los estudiantes que celebraran un desfile paramilitar el 10 de diciembre de 2006 en el que los participantes vestirían un uniforme y un casco negro con las palabras "combatientes inquebrantables". Algunos también se taparon la cara con máscaras negras con el fin de eludir la vigilancia policial. Los manifestantes hicieron demostraciones de artes marciales con cuchillos y palos, y cuando salieron a la vía pública trataron de crear una atmósfera de pánico y terror.

b) Los acusados, estudiantes universitarios miembros de la organización proscrita, fueron detenidos en su residencia universitaria y en apartamentos alquilados para ellos por los líderes de la organización para ser usados como centro de reuniones. Los acusados llevaban consigo cuchillos e instrumentos para su uso como armas en estas residencias, además de materiales impresos y documentos sobre las actividades de la organización. La investigación permitió también identificar la procedencia de los recursos destinados a financiar estas actividades, administrados por los líderes de la organización proscrita a través de lo que se conoce como el "comité financiero interno" y el "comité financiero externo". Estos comités supervisan el gasto y la administración de los fondos de la organización, y apoyan las mencionadas operaciones mediante la recaudación de las

suscripciones de los miembros y la recepción de donaciones voluntarias, con el pretexto de que su uso irá destinado a apoyar la causa palestina. También tienen contactos con asociaciones e instituciones benéficas en el extranjero, y reciben de ellas dinero, alegando que será utilizado para obras de caridad. Sin embargo, el dinero se invierte en negocios y en la creación de empresas y actividades económicas registradas a nombre de los miembros de la organización proscrita, sus cónyuges y familiares; destinan una parte de los beneficios a las actividades de la organización e invierten el resto para multiplicar sus recursos e incrementar al máximo su capacidad financiera.

44. Tan pronto como se recibió ese informe, la Fiscalía emitió una orden de detención, así como de registro corporal y de sus residencias, contra los dirigentes de la organización proscrita y los estudiantes de Al-Azhar miembros de la misma, y también de registro de las oficinas centrales de una empresa propiedad de Mohamed Khirat Al-Shatar. En cumplimiento de esa orden y de las órdenes subsiguientes, se detuvo a 32 líderes de la organización y 109 estudiantes de Al-Azhar miembros de la misma. Se obtuvieron los siguientes resultados:

a) En las residencias de las personas detenidas y en la sede de la citada empresa y de las empresas que operaban en nombre de la organización se encontraron sumas de dinero en libras egipcias y en moneda extranjera estimadas en millones de libras egipcias. Además, se encontraron diversos documentos impresos y manuscritos, entre ellos los planes para una nueva etapa de actividades basada en los objetivos y principios de la organización proscrita.

b) En los armarios roperos y en los cajones de escritorio de los estudiantes universitarios se encontraron cuchillos (normales y navajas) e instrumentos preparados para ser utilizados como armas. También se incautaron de varios cascos negros con la palabra "inquebrantables", así como de documentos impresos, fotocopiados y manuscritos de la organización, con los detalles de los principios y las ideas de los Hermanos Musulmanes, propaganda de la Yihad y material en que se exhortaba a la formación de un sindicato de estudiantes bajo el nombre de Al-Ittihad Al-Hurr (Sindicato Libre). También se decomisaron diversos materiales impresos y proclamas con el nombre y el lema de la organización.

45. La Fiscalía examinó los documentos incautados a los dirigentes de la organización acusados y encontró en ellos planes para infiltrarse en las asociaciones de estudiantes, con una atención especial y prioritaria en la Universidad de Al-Azhar. Había también documentos que demostraban que el enfoque adoptado por la organización proscrita era usar la fuerza y la violencia para cambiar el actual sistema político en Egipto, y que la organización estaba tratando de ampliar sus actividades en el extranjero a través del trabajo proselitista y de inversiones en varios países islámicos africanos. El material impreso contenía información que indicaba que la organización posee establecimientos comerciales y empresas tanto en el país como en el extranjero, y que desea adquirir medios de comunicación para utilizarlos como portavoces de su ideología. Asimismo, los documentos mostraban que la organización depende de las donaciones voluntarias de particulares e instituciones, y que ha abierto cuentas bancarias con el propósito de recaudar dichas aportaciones.

46. La Fiscalía analizó los documentos de carácter organizativo incautados a los estudiantes universitarios y estableció que consistían en material escrito a mano, impreso y fotocopiado que incluían cuestionarios y formularios para la evaluación de los estudiantes reclutados por los Hermanos Musulmanes. Además de los detalles acerca de los métodos de la organización y de los planes en el contexto de la Universidad Al-Azhar, se encontraron carteles de propaganda que llevaban el nombre y el lema de la organización ilegal, así como libros y estudios realizados por sus dirigentes, donde se promueven las ideas, principios y objetivos de la organización.

47. La Fiscalía registró las residencias de estudiantes para las que poseía órdenes de allanamiento y decomisó cuchillos y numerosos documentos similares a los incautados durante la ejecución de la orden de 13 de diciembre de 2006. Esto permitió establecer el grado de control ejercido por los acusados sobre las residencias, pues en sus paredes colgaban, en lugares visibles, carteles propagandísticos de la organización, y en las puertas de los apartamentos, dentro de las residencias, figuraban imágenes, signos y dibujos con su lema. La Fiscalía estableció que los artículos incautados durante el registro pertenecían a los acusados, ya que se encontraron en los armarios y en los cajones de los escritorios de sus habitaciones privadas dentro de las residencias.

48. La Fiscalía inició sus investigaciones interrogando a los testigos de cargo, a saber, los agentes de policía que habían ejecutado las órdenes de detención y habían sido testigos del descubrimiento de los objetos confiscados en las residencias universitarias y en los apartamentos que los líderes de la organización habían alquilado para los estudiantes en lugares bajo su control físico efectivo. También tomó declaración al Rector de la Universidad de Al-Azhar y su adjunto, quienes confirmaron los hallazgos de la investigación y los acontecimientos en la universidad que habían conducido a la detención de los acusados.

49. La Fiscalía interrogó a los acusados en presencia de sus abogados defensores y luego acusó a dos de los dirigentes de liderar y dirigir una organización proscrita cuyo objetivo es incitar a otros a incumplir las disposiciones de la Constitución y la ley; a violar los derechos y libertades públicas garantizados por la Constitución y la ley; y a socavar la unidad nacional y la paz social utilizando el terrorismo. Los líderes también fueron acusados de posesión de material impreso y grabaciones destinadas a promover los objetivos de la organización, preparados para ser distribuidos o mostrados a otros, así como del blanqueo del producto del delito de dirección de una organización proscrita, que utiliza el terrorismo para lograr sus fines y para ocultar su índole y su procedencia.

50. La Fiscalía acusó a los estudiantes universitarios de pertenecer a la organización a sabiendas de sus objetivos. También los acusó de posesión de material impreso para promover dichos objetivos y de posesión de cuchillos sin licencia ni justificación de una necesidad personal. Estos delitos son punibles con arreglo a los artículos 86, 86 *bis* y 86 *bis* a) del Código Penal y los artículos 1, párrafo 1, y 25 *bis* de la Ley N° 394 de 1954 sobre armas de fuego y municiones, en su versión modificada por la Ley N° 26 de 1987 y la Ley N° 165 de 1981, así como con arreglo a los puntos 5, 10 y 11 del anexo 1 de la ley mencionada en primer lugar, y a los artículos 2 y 14 de la Ley N° 80 de 2006 sobre blanqueo de capitales.

51. Después de interrogar a los acusados y someterlos a un cotejo con las pruebas, la Fiscalía decidió mantenerlos en prisión preventiva durante 15 días para proseguir con las investigaciones. Siguió solicitando la prórroga de las órdenes de custodia, dentro de los plazos establecidos por ley, pues las investigaciones no se habían completado, y para prevenir fugas o violaciones graves de la seguridad y el orden público por parte de los acusados.

52. El 29 de enero de 2007, 16 de los líderes de la organización ilegal interpusieron un recurso contra la orden de prórroga de la custodia, y el 31 de enero de 2007, 42 de los estudiantes universitarios también recurrieron contra esa orden ante el Tribunal Penal de El Cairo, que decidió revocarla y liberar a todos los que presentaron recurso.

53. En vista de la gravedad de las actividades delictivas de los dirigentes de la organización ilegal y de los crímenes que se les imputaban en la causa N° 963 de 2006 de Alta Seguridad del Estado, el Presidente de la República emitió el Decreto N° 40/2007, de 5 de febrero de 2007 de conformidad con la Ley de excepción vigente en el país, para contrarrestar la amenaza del terrorismo y, en particular con su artículo 6, para remitir la

causa y los acusados, Mohamed Khirat Al-Shatar y los otros líderes de la organización, a un tribunal militar.

54. El 11 de febrero de 2007, después de concluir sus investigaciones sobre los estudiantes universitarios acusados en la causa N° 148 de 2007 de Alta Seguridad del Estado, la Fiscalía decidió poner en libertad a los que todavía estaban en prisión y remitirlos al comité disciplinario competente de Universidad de Al-Azhar para que les aplicara las medidas disciplinarias correspondientes a los delitos de los que habían sido acusados. La Fiscalía, facultada para examinar los medios más adecuados para iniciar una acción penal, tomó esta decisión con el fin de salvaguardar su futuro académico y evitarles las graves consecuencias de un juicio penal.

55. Como punto de partida, el Gobierno define el estatuto jurídico de las disposiciones de emergencia pública y de los tribunales militares en el sistema jurídico egipcio. La Constitución de Egipto reglamenta el estado de excepción en el país en el artículo 148, que estipula que el estado de excepción debe ser declarado por el Presidente de la República y, a continuación y en el plazo de 15 días, deberá presentarse a la Asamblea Popular para su ratificación. El mismo artículo establece que el estado de excepción en todos los casos será por un período limitado, el cual no podrá ser prorrogado sin la aprobación de la Asamblea Popular.

56. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Egipto es parte, establece en su artículo 4 que en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados partes podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Además, establece que esa disposición no autorizará suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrs. 1 y 2), 11, 15, 16 y 18 del Pacto, que tratan del derecho a la vida, las salvaguardias contra la pena capital y la tortura, el sometimiento a la esclavitud, la servidumbre, la prisión por deuda civil, la sujeción a la ley en relación con los delitos y las penas, el reconocimiento de la personalidad jurídica y las libertades relativas a la religión y las creencias religiosas.

57. Las naciones del mundo, con sus diversos sistemas jurídicos, han adoptado varios métodos para hacer frente a las emergencias y las circunstancias excepcionales a que hacen frente sus sociedades. Algunos conceden poderes excepcionales mediante disposiciones en las leyes pertinentes y dejan que sean las autoridades competentes las que evalúen las medidas necesarias, mientras que otros aplican las medidas previstas en la legislación preexistente para hacer frente a situaciones de emergencia pública, y otros dejan todo el asunto a la discreción de las autoridades en cuestión. Desde 1923, el legislador egipcio ha seguido el sistema de aplicar la legislación preexistente en caso de emergencia. A la Ley marcial N° 15 de 1923 siguió la Ley N° 162 de 1958, modificada por las Leyes N° 60 de 1968, N° 37 de 1972, N° 164 de 1981 y N° 50 de 1982. Todas ellas contienen disposiciones relativas a la proclamación de un estado de excepción nacional. La ley establece las circunstancias en las que se puede proclamar un estado de excepción, la autoridad competente para proclamarlo, los procedimientos para prorrogarlo, las medidas que pueden adoptarse, las condiciones para presentar una alegación en relación con el estado de excepción, los tribunales de excepción y sus procedimientos, y los efectos de poner fin a un estado de excepción. La ley respeta todas las normas internacionales establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Ley de excepción no establece que la Constitución, la ley o la vida parlamentaria deban ser suspendidas. Por otra parte, la ley no da atribuciones absolutas al Poder Ejecutivo, sino que concede derechos y las garantías a las personas perjudicadas por el uso arbitrario de esos derechos. Además, cuando se declara

un estado de excepción, el Código de Justicia Militar autoriza al Presidente de la República a remitir cualquier delito tipificado en el Código Penal, o en cualquier otra ley, a un tribunal militar.

58. El Gobierno señala que, si bien la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos no regula los estados de emergencia y de excepción, el artículo 60 de la misma establece que la Comisión [Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos] se basará en la legislación internacional sobre derechos humanos y los diversos instrumentos adoptados por los organismos especializados de Naciones Unidas en este ámbito. Por tanto, es necesario remitirse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que regula esta materia, como se mencionó *supra*, y que no contiene nada que impida a los Estados partes enjuiciar a civiles ante tribunales militares. Por otra parte, la Observación general N° 13 del Comité de Derechos Humanos establece que, si bien el Pacto no impide que los tribunales militares juzguen a civiles, sí indica claramente que tales juicios deben ser la excepción y deben aportar las garantías previstas en el artículo 14 del Pacto. El factor clave a la hora de remitir causas civiles a los tribunales militares es la existencia de garantías de un juicio justo. El Grupo de Trabajo hizo hincapié precisamente en este punto en su informe de 10 de enero de 2008 (A/HRC/7/4).

59. En virtud del sistema jurídico egipcio, los tribunales militares son una autoridad judicial independiente y permanente. Sus asuntos, niveles y ámbito de aplicación están regulados en el Código de Justicia Militar N° 25 de 1966 y las leyes que lo han modificado, la última de las cuales es la Ley N° 16 de 2007. Los tribunales militares son, obviamente, tribunales especiales con jurisdicción penal, tal como se define en los artículos 4, 5 y 6 de la ley, y examinan delitos de derecho común cometidos por militares o por civiles que trabajan para las autoridades militares, además de los delitos cometidos por civiles en las instalaciones de las fuerzas armadas y en las bases militares.

60. Los jueces militares son jueces especializados que deben satisfacer los criterios establecidos en la Ley del poder judicial. Gozan de inmunidad jurídica, no pueden ser separados de sus cargos y no están sujetos a ninguna otra autoridad que no sea la ley en el desempeño de sus funciones. Las apelaciones contra sentencias de los tribunales militares se pueden interponer ante el Tribunal Supremo Militar de Apelaciones sobre la misma base que los recursos ante el Tribunal de Casación. Ello garantiza que los juicios son revisados por un tribunal superior integrado por un grupo rotatorio de cinco magistrados. Los juicios ante el tribunal se llevan a cabo de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y deben ser coherentes con el Código Penal. Esta ley se aprobó sobre la base de consideraciones específicas, determinadas por la legislación egipcia teniendo en cuenta el carácter militar de esas consideraciones y la necesidad de proteger las instalaciones y equipos sujetos a su jurisdicción de una manera coherente con las necesidades militares. Por lo tanto, los tribunales militares no son tribunales especiales, dentro de los límites de su jurisdicción, sino tribunales naturales que dictan sentencias de conformidad con los procedimientos judiciales y dirigen las actuaciones con todas las garantías que se ajustan a todas las normas internacionales para un juicio justo y equitativo, ya sea desde el punto de vista de las audiencias públicas, de la presencia y representación del abogado defensor del acusado (representantes legales o personas designadas por el tribunal) y del derecho a apelar contra las sentencias ante el Tribunal Supremo.

61. En virtud del sistema jurídico egipcio, es posible apelar contra las decisiones administrativas, en general y a todos los niveles, mediante una solicitud al Consejo de Estado para la anulación de una decisión y el pago de una indemnización. El Consejo de Estado garantiza que se cumplan todas las normas internacionales para una audiencia justa y equitativa, ya que es una autoridad judicial egipcia que considera los casos en dos instancias, de las cuales la más elevada es el Tribunal Supremo Administrativo.

62. Los mandamientos para la congelación de activos [de los acusados], incluidos los activos de las esposas y los hijos, que en realidad provienen de los acusados en una causa penal (por la relación de dependencia y la necesidad de rastrear los activos ilegales), son medidas provisionales adoptadas por la Fiscalía mientras están en curso las actuaciones penales; en ese marco se adopta una decisión final al respecto.

63. Los tribunales militares proporcionan las garantías requeridas por los sistemas judiciales de conformidad con las normas internacionales, entre ellas la independencia, la inmunidad y las dos instancias de jurisdicción. Por lo tanto, los tribunales militares cumplen los criterios para ser considerados una autoridad judicial permanente e independiente en el marco del sistema jurídico egipcio, y proporcionan garantías equivalentes a las que ofrecen los tribunales ordinarios.

64. De los aspectos judiciales y de fondo considerados *supra* se desprende que: los delitos que se imputaban a los autores de la denuncia y por los que se los juzga se enmarcan en el derecho público, al cual están sujetas todas las personas sin distinción ni discriminación. Los delitos consisten en actos graves contra la seguridad de la comunidad y los derechos y libertades de los demás y no tienen nexo alguno con creencias o libertades religiosas. Es más, las medidas impuestas como consecuencia del mantenimiento del estado de excepción no son contrarias a las normas internacionales establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por tanto, los tribunales militares a los que se remitieron las causas constituyen una autoridad judicial que cumple con todas las normas internacionales para un juicio justo y equitativo, están regulados por ley y dirigen las actuaciones de conformidad con la legislación vigente. Los tribunales militares no son, por tanto, una autoridad judicial especial y estas leyes no contienen disposición alguna discriminatoria o contraria al principio de igualdad ante la ley.

65. Los actos que se imputaban a los autores son delitos graves en virtud del Código Penal y de otras leyes penales. Teniendo en cuenta el estado de excepción en el país, la gravedad de las actividades delictivas atribuidas a los acusados de organización proscrita y la gravedad de los delitos de que fueron acusados en la causa de Alta Seguridad del Estado N° 963 de 2006, el Presidente de la República emitió el Decreto N° 40 de 2007, mediante el cual remitió la causa y a los acusados, Mohamed Khirat Al-Shatar y otros (los líderes de la organización), a los tribunales militares, de conformidad con la Ley N° 25 de 1966, cuyo artículo 6 autoriza al Presidente de la República a remitir a los tribunales militares cualquier delito tipificado en el Código Penal o en otra ley cuando se está bajo estado de excepción.

66. Con respecto a la decisión de liberar a los acusados tras el recurso interpuesto por los autores contra la resolución de la Fiscalía de mantener la prisión preventiva, el tribunal se limitó a valorar la existencia de motivos que justificaran la prórroga y no examinó los cargos contra los recurrentes. La Fiscalía acató la decisión del tribunal en el caso de los estudiantes y, tras completar sus investigaciones, decidió suspender las actuaciones y, tomando en consideración el futuro de los estudiantes, remitir el caso a las instituciones universitarias para que tomaran las medidas disciplinarias pertinentes.

67. Los acusados que fueron remitidos a los tribunales militares apelaron contra esta decisión ante el Tribunal Administrativo del Consejo de Estado, que ordenó suspenderla. También se apeló la decisión ante el Tribunal Supremo Administrativo mediante el Recurso N° 12.761, del 53° año judicial. El Tribunal ordenó la suspensión de la resolución recurrida el 4 de junio de 2007, y el recurso fue examinado en audiencia ante el Tribunal Supremo Administrativo. Se fijó la fecha del juicio para el 12 abril de 2008.

68. El caso objeto de la presente comunicación permanece ante los tribunales militares. Las actuaciones judiciales se celebraron en audiencia pública, en presencia de los abogados defensores de los acusados. El caso está todavía en fase de deliberación; las audiencias se

han completado y el tribunal decretó autos para sentencia, aunque ésta no se ha pronunciado hasta la fecha.

69. La sentencia que se dicte podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior Militar por la Fiscalía Militar o por los acusados, de la misma forma que un recurso ante el Tribunal de Casación. Se aplicarán las normas y procedimientos relativos a los recursos en las causas penales. Por tanto, el tribunal de apelación tiene las mismas facultades que el Tribunal de Casación en lo que respecta a la revisión de los argumentos jurídicos y de la sentencia, y a la decisión de revocar o confirmar la sentencia, en función de la admisibilidad de los argumentos presentados por las dos partes implicadas en una causa penal (los acusados y la Fiscalía). Las Salas del Tribunal Supremo se componen de cinco magistrados distintos de los que dictaron la sentencia recurrida.

70. El uso por parte del Presidente de la República de su derecho a remitir una causa a los tribunales militares en el contexto del estado de excepción permanente se limita y apunta exclusivamente a los delitos graves de terrorismo, de los cuales se han dado pocos casos.

71. Cabe señalar que el Gobierno ha anunciado su intención de poner fin al estado de excepción una vez que finalice la redacción del texto del proyecto de ley de lucha contra el terrorismo. El artículo 179 de la Constitución dispone que el Presidente de la República puede remitir cualquier delito de terrorismo a cualquier órgano judicial reconocido en la Constitución o la ley. Esto en sí mismo constituye una garantía básica de un juicio justo y equitativo, pues las leyes que rigen a las diferentes autoridades judiciales estipulan que los juicios deben ser justos y equitativos desde el punto de vista de los procedimientos y las sentencias. Por consiguiente, cualquier órgano judicial escogido por el Presidente de la República garantiza un juicio justo y equitativo conforme a lo dispuesto en la Constitución (capítulo IV, sobre el estado de derecho) y en las distintas leyes.

72. Con respecto a las cuestiones de fondo, debe quedar claro a partir de los hechos expuestos *supra* que las alegaciones que figuran en la denuncia sobre trato discriminatorio de las personas en cuestión carecen de fundamento. En cuanto a las cuestiones formales, Egipto considera que el examen de esta comunicación no pertenece al ámbito de competencia del Grupo de Trabajo de acuerdo con los procedimientos pertinentes, ya que no se han agotado los recursos internos (el juicio no ha concluido y la sentencia final puede ser impugnada en apelación, y después ante el Tribunal de Casación). Por otra parte, la comunicación está siendo examinada por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Comunicación N° 354/2007), que es un mecanismo de recurso regional.

73. En sus observaciones sobre la respuesta del Gobierno, la fuente expone que el Gobierno informa de que se detuvo a 109 estudiantes universitarios mientras se preparaban para perpetrar actos graves de violencia extrema, descritos como de carácter casi insurreccional, y que la investigación que siguió determinó que los estudiantes serían realmente responsables, como principales organizadores y financiadores. Las actuaciones iniciadas contra los estudiantes por el Fiscal de Seguridad del Estado (Niyabat Amn Addawla Al Ôlya) originaron el proceso penal. Estas actuaciones no dependían de la Fiscalía General, como pretende el Gobierno.

74. La fuente recuerda que el 11 de febrero de 2007, el Fiscal de Seguridad del Estado decidió anular los procesos relativos a los 124 (y no 109) estudiantes detenidos de la Universidad de Al-Azhar. El Rector de la Universidad de Al-Azhar, el Vicerrector y otras autoridades universitarias que declararon como testigos exoneraron a los estudiantes de cualquier responsabilidad en actos de violencia o de la posesión de cuchillos. Todos los estudiantes fueron también sometidos a la Comisión de Disciplina de la Universidad, a petición del Fiscal de Seguridad del Estado, y esta Comisión les exoneró.

75. La fuente añade que el principal testigo presentado por la Fiscalía fue el Coronel Atef Al Hussein, que era a su vez el funcionario encargado de las investigaciones. El Coronel Al Hussein no aportó ninguna prueba sobre las acciones o las reuniones celebradas por los imputados que probaran las acusaciones formuladas contra ellos. Todas las detenciones fueron ordenadas por el Coronel Al Hussein por teléfono, y no mediante órdenes de detención ordinarias, lo que suponía una violación de la ley egipcia y del derecho internacional.

76. Una autoridad política decidió la detención continuada e indefinida de las personas mencionadas *supra*, en pugna con una decisión judicial, lo cual constituyó también una violación del artículo 134 del Código Penal. Esta orden de detención administrativa se formuló sencillamente por razones políticas, y a pesar de una clara decisión judicial dictada por un tribunal penal competente, que ordenó la liberación inmediata de los acusados.

77. La fuente concluye señalando que el uso de los tribunales militares en Egipto ha pasado a ser selectivo, y que actualmente sólo se aplica a los miembros de los Hermanos Musulmanes. Estos tribunales no son independientes, imparciales ni competentes, ni garantizan el debido proceso judicial conforme a las normas internacionales.

78. Según el Grupo de Trabajo, las siguientes alegaciones no han sido refutadas por el Gobierno en su respuesta:

a) Las 26 personas a las que se refiere la presente Opinión fueron detenidas en sus domicilios y lugares de trabajo en una serie de redadas nocturnas simultáneas los días 14, 23 y 24 de diciembre de 2006, y 14, 16 y 17 de enero de 2007, por agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado (Amn Addawia), que actuaron con el apoyo de unidades especiales del Ejército. Se registraron sus casas y oficinas, y se confiscaron sus ordenadores personales, teléfonos móviles, libros y documentos, así como los de sus familias. No se dieron razones, ni a ellos ni a sus familiares, que justificaran su detención.

b) El 29 de enero de 2007, el Tribunal Penal de El Cairo, después de interrogar a los acusados, desestimó todos los cargos contra ellos y ordenó su inmediata liberación. Consideró que no había pruebas contra los detenidos y que la prórroga del período de detención no estaba justificada.

c) A pesar de la decisión judicial, el Ministerio del Interior emitió órdenes de detención contra estas personas, que fueron arrestadas nuevamente y de forma inmediata por la policía, y el 4 de febrero de 2007 el Presidente de la República, actuando en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó que los detenidos fueran juzgados por el Tribunal Supremo Militar de Heikstep, El Cairo; el juicio tuvo lugar el 15 de abril de 2008. No se observó el principio de *non bis in idem*, consagrado en el artículo 14, párrafo 7, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

d) El Tribunal Supremo Militar de Heikstep absolvió a los Sres. Khaled Abdelkader Owda, 2) Ahmad Ahmad Nahhas, 3) Ahmed Azzedin El-Ghoul, 4) Amir Mohamed Bassam Al-Naggar, 5) Gamal Mahmoud Shaaban, 6) Yasser Mohamed Ali, 7) Mahmoud Abdul Latif Abdul Gawad, 8) Mahmoud Morsi Koura, 9) Mohamed Mahmoud Hafez, 10) Mohamed Mehany Hassan, 11) Mohammed Ali Baligh, y 12) Osama Abdul Muhsin Shirby.

e) Igualmente, el Tribunal Militar condenó a una pena de entre tres y siete años de prisión a los Sres. Mohamed Khirat Al-Shatar, 2) Hassan Ezzudine Malek, 3) Ahmed Ashraf Mohamed Mostafa Abdul Warith, 4) Ahmad Mahmoud Shousha, 5) Esam Abdul Mohsen Afifi, 6) Essam Abdul Halim Hashish, 7) Farid Aly Galbt, 8) Fathy Mohamed Baghdady, 9) Mamdouh Ahmed Al-Husseini, 10) Medhat Ahmad El-Haddad, 11) Mohamed Ali Bishr, 12) Mostafa Salem, y 13) Murad Salah El-Desouky, por su pertenencia a una organización proscrita.

f) El Gobierno justificó esta intervención por la situación de estado de excepción, que atribuye competencias específicas al Presidente de la República para remitir a un tribunal militar cualquier delito tipificado en el Código Penal o en cualquier otra ley.

79. El Grupo de Trabajo reitera sus consideraciones anteriores sobre casos similares de detención en Egipto (como los recogidos en su Opinión N° 3/2007 (Egipto)), así como sobre los dictámenes del Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre la situación causada por la declaración del estado de excepción en Egipto desde el 6 de octubre de 1981 (véase, por ejemplo, CAT/C/CR/29/4, párr. 5, y E/C.12/1/Add.44, párr. 10).

80. Teniendo en cuenta lo anterior, el Grupo de Trabajo señala que deberían diferenciarse dos momentos específicos:

a) El de la detención de los Sres. Khaled Abdelkader Owda, Ahmad Ahmad Nahhas, Ahmed Azzedin El-Ghoul, Amir Mohamed Bassam Al-Naggar, Gamal Mahmoud Shaaban, Yasser Mohamed Ali, Mahmoud Abdul Latif Abdul Gawad, Mahmoud Morsi Koura, Mohamed Mahmoud Hafez, Mohamed Mehany Hassan, Mohammed Ali Baligh, Osama Abdul Muhsin Shirby;

b) El de las condenas pronunciadas contra los Sres. Mohamed Khirat Saad El-Shatar, Hassan Ezzudine Malek, Ahmed Ashraf Mohamed Mostafa Abdul Warith, Ahmad Mahmoud Shousha, Ayman Abd El-Ghani Hassanin, Esam Abdul Mohsen Afifi, Essam Abdul Halim Hashish, Farid Aly Galbt Fathy Mohamed Baghdady, Mamdouh Ahmed Al-Husseini, Medhat Ahmad El-Haddad, Mohamed Ali Bishr, Mostafa Salem y Murad Salah El-Desouky.

81. El primer período se refiere a la detención de todas estas personas antes de que el Tribunal Penal de El Cairo tomara la decisión judicial que ordenaba su liberación inmediata. El segundo período se refiere a la nueva detención de todas estas personas como consecuencia de la orden administrativa del Poder Ejecutivo, que no tuvo en cuenta la resolución judicial que ordenaba su liberación.

82. Los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que toda persona tiene derecho en plena igualdad a una audiencia justa y pública ante un tribunal independiente e imparcial. Esto debe interpretarse en el sentido de que si esa autoridad judicial independiente e imparcial decide que una orden emitida por una autoridad administrativa no es apropiada, los detenidos deberían ser liberados inmediatamente. Aunque las fuerzas de la policía pueden detener a estas personas de nuevo bajo los mismos cargos, la nueva detención por las autoridades administrativas no tendrá ningún fundamento jurídico y supondrá el incumplimiento de una decisión judicial.

83. La ausencia de fundamento jurídico para la nueva detención de estas personas es un elemento suficiente para que el Grupo de Trabajo considere su detención como arbitraria. Sin embargo, el Grupo de Trabajo señala que, incluso sin ese elemento, estas detenciones se considerarían arbitrarias debido al hecho de que estas personas, todas ellas civiles, fueron juzgadas ante un tribunal militar, que no ofrecía las cualidades necesarias de competencia, independencia e imparcialidad.

84. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. La independencia, la imparcialidad y la objetividad del tribunal es un requisito fundamental determinado por el derecho internacional. Los tribunales militares egipcios dependen del Ministerio de Defensa. Están compuestos por jueces nombrados por los mandos de las Fuerzas Armadas

y pueden ser separados de sus cargos en cualquier momento. Además, sus miembros carecen de la necesaria profesionalidad y conocimientos jurídicos.

85. El Grupo de Trabajo considera que, en principio, los tribunales militares no deberían juzgar a civiles. El Comité de Derechos Humanos también ha expresado su preocupación respecto a que esos tribunales, así como los Tribunales de Seguridad del Estado, no presentan las debidas garantías de independencia. Además, sus decisiones no están sujetas a recurso ante un tribunal superior, según se establece en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (véase CCPR/CO/76/EGY, párr. 16).

86. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

a) La privación de libertad de los Sres. Mohamed Khirat Saad Al-Shatar, Hassan Ezzudine Malek, Ahmed Ashraf Mohamed Mostafa Abdul Warith, Ahmad Mahmoud Shousha, Ayman Abd El-Ghani Hassanin, Esam Abdul Mohsen Afifi, Essam Abdul Halim Hashish, Farid Aly Galbt, Fathy Mohamed Baghdady, Mamdouh Ahmed Al-Husseini, Medhat Ahmad El-Haddad, Mohamed Ali Bishr, Mostafa Salem, y Murad Salah El-Desouky es arbitraria, pues contraviene los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a las categorías I y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

b) El Grupo de Trabajo, sin prejuzgar el carácter arbitrario de su detención, sobre la base del párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo, decidió archivar los casos de los Sres. Khaled Abdelkader Owda, 2) Ahmad Ahmad Nahhas, 3) Ahmed Azzedin El-Ghoul, 4) Amir Mohamed Bassam Al-Naggar, 5) Gamal Mahmoud Shaaban, 6) Yasser Mohamed Ali, 7) Mahmoud Abdul Latif Abdul Gawad, 8) Mahmoud Morsi Koura, 9) Mohamed Mahmoud Hafez, 10) Mohamed Mehany Hassan, 11) Mohammed Ali Baligh, y 12) Osama Abdul Muhsin Shirby.

87. Consecuentemente con la Opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Egipto que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de las personas antes mencionadas y la ponga en conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 12 de septiembre de 2008.

## **Opinión N° 28/2008 (República Árabe Siria)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 9 de enero de 2008.**

**Relativa a los Sres. Ahmed Omar Einein, Khaled Hammaami, Khaled Jema'Abd al-'Aal, Mustafa Qashesha, Muhammad Asa'd, Ahmed Huraania, Hussein Jema' Othmaan, Samer Abu al-Kheir, Abd al-Ma'ti Kilani, Muhammad 'Ali Huraania, Muhammad 'Ezz al-Din Dhiyab y Muhammad Kilani.**

**El Estado ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado información sobre las alegaciones de la fuente.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. En vista de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta facilitada por el Gobierno a la fuente y recibió sus comentarios.

5. La fuente comunicó los casos de la siguiente manera: los Sres. Ahmed Omar Einein, Khaled Hammaami, Khaled Jema'Abd al-'Aal, Mustafa Qashesha, Muhammad Asa'd, Ahmed Huraania, Hussein Jema' Othmaan, Samer Abu al-Kheir, Abd al-Ma'ti Kilani, Muhammad 'Ali Huraania, Muhammad 'Ezz al-Din Dhiyab y Muhammad Kilani, todos ellos de la aldea de al-'Otayba, en la zona rural de Damasco, fueron condenados el 14 de noviembre de 2006 después de un juicio injusto ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado (SSSC) a penas de prisión de seis a nueve años.
6. Estas personas habían sido detenidas el 23 de abril de 2004. Once de ellas fueron detenidas por agentes de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, permanecieron en régimen de incomunicación durante varios meses en una de sus subdivisiones, y posteriormente fueron trasladadas a la prisión de Sednaya, cerca de Damasco.
7. Hasta enero de 2006, sólo se permitió a esas 11 personas una visita de sus familiares. La persona restante, el Sr. Mustafa Qashesha, también fue detenido el 23 de abril de 2004, en su caso por agentes de Seguridad del Estado, que lo mantuvieron en régimen de incomunicación en una de sus instalaciones y luego lo trasladaron a la prisión de Sednaya. Se le autorizó un acceso a las visitas de familiares menos restringido que el de los otros 11 individuos.
8. Según la fuente, se torturó a los detenidos durante su detención. Cuando algunos familiares se quejaron de estas supuestas torturas, ellos mismos fueron detenidos durante un día y luego puestos en libertad, y de nuevo se denegó a las 12 personas antes mencionadas la posibilidad de recibir visitas. No se llevó a cabo ninguna investigación sobre las presuntas torturas sufridas por los detenidos.
9. La fuente añade que se detuvo a estas personas por sus supuestos "antecedentes islámicos". El 14 de noviembre de 2006 se les condenó por formar parte de "un grupo creado con el propósito de cambiar la situación económica o social del Estado", en virtud del artículo 306 del Código Penal. No se presentaron ante el tribunal pruebas que fundamentaran la acusación, por lo que los acusados no pudieron impugnarla.
10. Durante meses se denegó a los acusados el derecho a designar a sus abogados, pero en enero de 2006 el tribunal les asignó defensores de oficio. Sin embargo, al menos en tres ocasiones no se informó a los abogados de oficio de las fechas de las audiencias, de modo que las sesiones del juicio tuvieron que aplazarse.
11. El Sr. Ahmed 'Omar 'Einein fue condenado a nueve años de prisión. Los Sres. Khaled Hammaami, Khaled Jema' 'Abd al-'Aal, Mustafa Qashesha y Muhammad Asa'd fueron condenados a siete años de prisión. Los Sres. Ahmed Huraania, Hussein Jema' 'Othmaan, Samer Abu al-Kheir, 'Abd al-Ma'ti Kilani, Muhammad 'Ali Huraania, Muhammad 'Ezz al-Din Dhiyab y Muhammad Kilani fueron condenados a seis años de prisión.
12. La fuente también informa de que el 23 de abril de 2004 fueron igualmente detenidos en al-'Otayba otros tres hombres, los Sres. Ziad Kilani, 'Ali 'Othman y Na'em Qasem Marwa. Estos permanecen detenidos y están siendo juzgados ante el Tribunal Supremo por los mismos cargos. Se los hizo comparecer ante el tribunal el 6 de enero de 2008, pero como no se informó correctamente a sus abogados de la fecha de la audiencia, ésta se aplazó hasta abril de 2008.
13. En su respuesta de fecha 8 de abril de 2008, el Gobierno señaló que la legislación siria no castiga a las personas por sus antecedentes religiosos; que, por el contrario, la Constitución y la legislación vigentes hacen hincapié en la libertad en general y en la libertad religiosa en particular, y que la ley se encarga de proteger y garantizar estas libertades. La cultura siria se distingue por su diversidad religiosa, así como por la coexistencia pacífica de todas las religiones y la tolerancia entre ellas.

14. El Gobierno añade que las personas mencionadas anteriormente pertenecían a una organización terrorista extremista afiliada a Al Qaeda, que se convirtió en foco de atención como resultado de los atentados terroristas que llevó a cabo tanto en Estados árabes como occidentales. La organización, que está siendo procesada por las autoridades sirias de conformidad con el artículo 148 del Código Penal de 1949, tiene por nombre Al-Takfir wa al-Hijrah, y es una filial de Al-Qaeda que se ha extendido por la República Árabe Siria y Jordania. La mayoría de las personas mencionadas *supra* se unieron a esta organización por medio del Sr. Mustafa Qashoshah y el Sr. Ibrahim Abu al-Khayr. Este último resultó muerto mientras cometía un acto terrorista en Jordania. Las personas mencionadas siguieron un adiestramiento con armas para preparar operaciones terroristas en los Estados árabes, ya que consideran que los gobiernos árabes no se aplican la ley islámica (sharia) ni permiten la Yihad contra Israel y los Estados Unidos de América.

15. El Gobierno facilita la siguiente información sobre cada una de las personas mencionadas *supra*:

a) Ahmad bin Ali Huraniyah se unió a la organización por conducto de Mustafa Qashoshah, quien afirmó que su objetivo era "combatir a los infieles en cualquier momento y en todo lugar". Según su declaración, recibió un adiestramiento con armas "como preparación para luchar en el Iraq".

b) Husayn Jama Uthman se unió a la organización por conducto de Mustafa Qashoshah, quien afirmó que su objetivo era "combatir a los infieles en cualquier momento y en todo lugar". Según su declaración, recibió un adiestramiento con armas "como preparación para luchar en el Iraq".

c) Ahmad Omar Aynayn se unió a la organización por conducto de Ibrahim Abu al-Khayr, que había llevado a cabo actos terroristas en Jordania y que lo había adiestrado en el uso de las armas "como preparación para luchar en el Iraq".

d) Mohamed Ahmed As'ad se unió a la organización por conducto de Mustafa Qashoshah y recibió adiestramiento con armas "como preparación para luchar en el Iraq". Intentó ir al Iraq con este propósito.

e) Mohamed Ali Huraniyah se unió a la organización por conducto de Ali Osman y recibió adiestramiento con armas "como preparación para luchar en el Iraq".

f) Khalid Jama `Abd al-Al se unió a la organización por conducto de Mustafa Qashoshah y recibió adiestramiento con armas "como preparación para luchar en el Iraq".

g) Abd al-Mu'ti al-Kilani se unió a la organización por conducto de Ziyad Kilani y recibió adiestramiento con armas "como preparación para luchar en el Iraq".

h) Mohamed Izz al-Din Diyab unió a la organización por conducto de Ziyad Kilani y dejó la organización tres meses más tarde.

i) Samir Mustafa Abu al-Khayr se unió a la organización terrorista por conducto de Ziyad Kilani y recibió adiestramiento con armas "como preparación para luchar en el Iraq".

j) Khalid Mohamed Hammami se unió a la organización terrorista por conducto de Mustafa Qashoshah, y se estaba preparando "para luchar en el Iraq".

k) Mustafa Qashoshah se unió a Al Qaeda por conducto de Ibrahim Abu al-Khayr; está convencido de que los musulmanes están oprimidos en todas partes, que todos los gobiernos árabes son apóstatas y deberían ser cambiados y reemplazados por un único Estado basado en la Califato Islámico. Según su confesión, fundó Al-Takfir wa al-Hijrah como una célula de Al Qaeda tomando como modelo a Osama Bin Laden, a quien llama "el primer muyahidín".

16. El Gobierno informa además de que los miembros de Al-Takfir wa al-Hijrah suscriben los siguientes principios: a) culpan a los gobiernos árabes y musulmanes de apostasía (*takfir*) porque no se aplican la sharia islámica, b) acusan a los eruditos musulmanes de hipocresía y duplicidad, c) aprueban el robo de fondos del Estado porque son producto de la "usura", d) prohíben la aceptación de un empleo en las instituciones del Estado, ya que el Estado es apóstata; e) permiten el perjurio si es al servicio de la doctrina *takfir*, f) aprueban el robo de bienes de musulmanes que no apoyen a la organización, g) prohíben la oración en las mezquitas debido a la presencia de apóstatas, h) combaten en cualquier Estado donde se ataque a musulmanes.

17. Las personas mencionadas *supra* fueron detenidas por pertenecer a Al Qaeda y perpetrar actos terroristas punibles con arreglo a la legislación siria. Las denuncias de que sólo se les permitió una visita familiar en la cárcel y de que fueron torturadas carecen de fundamento; ni la Constitución ni la ley permiten la tortura física o mental ni el maltrato (Constitución de Siria, art. 28). En cuanto a la designación de abogados defensores por parte del tribunal, se hizo debido a que las personas mencionadas se negaron a ser defendidas por abogados que aplican la ley secular. El tribunal pidió por lo tanto al Colegio de Abogados la asignación de un abogado apropiado para su defensa.

18. El Gobierno considera que la denuncia de que el Tribunal de Seguridad del Estado no cumple las normas internacionales de juicio imparcial es exagerada: las personas en cuestión fueron detenidas por las autoridades competentes, y la Fiscalía competente inició las actuaciones judiciales en su contra. Fueron juzgados en una vista pública, en presencia de sus abogados y familiares, así como de funcionarios públicos y de embajadas extranjeras que suelen asistir a las audiencias del Tribunal de Seguridad del Estado. Se escuchó su testimonio en el tribunal y ellos admitieron los cargos que se les formulaban. El Gobierno señaló además que en los procedimientos penales los tribunales no aceptan como prueba las confesiones hechas ante las instancias encargadas de las investigaciones iniciales, pero admitió que se utilizan con fines de información.

19. El Gobierno informó de que el tribunal condenó al Sr. Ahmad Bin Omar Aynayn a nueve años de trabajos forzados en virtud del artículo 306 del Código Penal; a los Sres. Khalid Jama'Abd al-Al, Mohamed Bin Ahmad As'ad y Khalid Mohamed al-Hammami, a siete años de trabajos forzados en virtud del artículo 306 del Código Penal; a los Sres. Ahmad Bin Ali Huraniyah, Husayn Bin Jama'Uthman, Na'im Bin Kasim Marwah, Mohamed Bin Ali Huraniyah, Abd al-Mu'ti Bin al-Hakim al-Kilani y Mohamed Ahmed al-Kilani, a seis años de trabajos forzados en virtud del artículo 306 del Código Penal; al Sr. Samir Ben Mustafa Abu al-Khayr, a seis de prisión en virtud del artículo 147 del Código Penal Militar; y al Sr. Mohamed Bin'Izz al-Din, a seis años de trabajos forzados en virtud del artículo 306 del Código Penal. El período de detención previo a la condena se dedujo en cada caso de la condena original.

20. La respuesta del Gobierno fue transmitida a la fuente. El Grupo de Trabajo considera que está en condiciones de emitir una Opinión sobre el caso en base a la información recibida.

21. El Grupo de Trabajo toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, de que las 12 personas mencionadas *supra* son miembros de Al-Takfir wa al-Hijra, una organización vinculada a Al Qaeda; de que fueron adiestrados en el uso de armas con el fin de llevar a cabo actos terroristas, no sólo en Siria, sino también en otros Estados árabes; y de que sus condenas no se basaron en sus confesiones, sino en las pruebas reunidas por la Fiscalía a través de sus investigaciones. Sin embargo, el Gobierno reconoce que se utilizaron las confesiones con fines informativos, y que estas personas admitieron los cargos que se les formularon.

22. Además, el Grupo de Trabajo observa que el Gobierno no ha negado que estas 12 personas permanecieron durante varios meses en régimen de incomunicación en una instalación de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea y en una instalación de las fuerzas de Seguridad del Estado; que no se ha llevado a cabo ninguna investigación sobre las presuntas torturas sufridas por estas personas; y que las audiencias debieron aplazarse por lo menos en tres ocasiones porque no se informó a los abogados defensores, designados por el propio Tribunal, de las fechas de las mismas. El Grupo de Trabajo observa además que el Gobierno no proporcionó información sobre los Sres. Ziad Kilani, 'Ali'Othman y Na'em Qasem Marwa, que también fueron detenidos el 23 de abril de 2004, aparentemente en relación con los demás.

23. El Grupo de Trabajo ya ha expresado en otras ocasiones su punto de vista acerca de los juicios celebrados ante el Tribunal Supremo, que según el Grupo de Trabajo no cumplen las normas internacionales aplicables a un juicio imparcial. El Grupo de Trabajo cree que los procedimientos ante este tribunal violan una serie de derechos de los acusados e incumplen obligaciones del Estado, entre ellos los siguientes:

- a) El derecho a un juicio público y justo ante un tribunal competente, independiente e imparcial;
- b) El derecho a ser informado sin demora y en detalle de la naturaleza y causa de los cargos formulados;
- c) El derecho de toda persona a impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal independiente e imparcial;
- d) El derecho del acusado a disponer de tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un abogado defensor de su elección;
- e) El derecho del acusado a defenderse por sí mismo o a través de asistencia jurídica;
- f) El derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas;
- g) La obligación del Estado de investigar las denuncias de tortura y de no utilizar como prueba confesiones obtenidas mediante coacción;
- h) El derecho a someter a un tribunal superior el fallo condenatorio y la pena impuesta.

24. El Grupo de Trabajo considera que los derechos de estas 12 personas a un juicio imparcial se violaron a tal punto que su detención pasó a ser arbitraria. La respuesta del Gobierno no contiene pruebas claras y convincentes de que se haya respetado el derecho de las personas mencionadas *supra* a no ser privadas arbitrariamente de su libertad o perseguidas, de acuerdo con las garantías jurídicas internacionales.

25. El Grupo de Trabajo considera que, como al parecer no se han presentado pruebas ante un tribunal independiente e imparcial para fundamentar los cargos, sigue vigente la acusación de que fueron detenidas por sus supuestos "antecedentes islámicos" y por el libre ejercicio de su derecho a la libertad de opinión y expresión. Las confesiones hechas ante los organismos encargados de las investigaciones iniciales, es decir, los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea y la Oficina de Seguridad del Estado, en cuyas instalaciones los detenidos pasaron varios meses en régimen de incomunicación, se utilizaron con fines informativos.

26. El Grupo de Trabajo desea recordar al Gobierno las resoluciones y recomendaciones aprobadas por las Naciones Unidas relativas a una estrategia mundial de lucha contra el terrorismo, que indican que las medidas que adopten los Estados para combatir el terrorismo deben ajustarse plenamente a sus obligaciones en virtud de las normas

internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Las personas detenidas por acusaciones de terrorismo o en el marco de la guerra contra el terrorismo deben gozar de todas las garantías consagradas en el derecho internacional, en particular la de ser juzgadas de conformidad con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial. La detención de esas personas debe ajustarse a instituciones y procedimientos penales que respeten las salvaguardias y garantías consagradas en el derecho internacional.

27. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La privación de libertad de los Sres. Ahmed Omar Einein, Khaled Hammaami, Khaled Jema'Abd al-'Aal, Mustafa Qashesha, Muhammad Asa'd, Ahmed Huraania, Hussein Jema' Othmaan, Samer Abu al-Kheir, Abd al-Ma'ti Kilani, Muhammad 'Ali Huraania, Muhammad 'Ezz al-Din Dhiyab y Muhammad Kilani es arbitraria, pues contraviene los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a las categorías II y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

28. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que facilite información sobre el fundamento jurídico de la acusación contra los Sres. Ziad Kilani, 'Ali 'Othman y Na'em Qasem Marwa, así como sobre su situación actual.

29. Consecuentemente con la Opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación y la ponga en conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 12 de septiembre de 2008.

## **Opinión N° 29/2008 (China)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 21 de abril de 2008.**

**Relativa al Sr. Alimujiang Yimiti (Alimjan Yimit).**

**El Estado ha firmado pero no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo agradece la cooperación recibida del Gobierno, que facilitó información sobre las alegaciones presentadas por la fuente.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El caso que se resume a continuación se comunicó al Grupo de Trabajo de la siguiente manera: el Sr. Alimujiang Yimiti (Alimjan Yimit en uigur), varón, de etnia uigur, cristiano de Xinjiang, casado y con dos hijos, residente en Hami, provincia de Xinjiang, fue detenido el 12 de enero 2008. Su familia no fue informada de la detención. Más tarde fue acusado de subversión contra el Gobierno nacional y de poner en peligro la seguridad nacional, un delito grave que puede acarrear la pena de muerte.
5. La fuente informa además de que el Sr. Alimujiang Yimiti estaba trabajando como gerente de proyecto para una empresa británica, Jirehouse, conocida como Xinjiang Jiaerhao Foodstuff Company Limited. Estaba a cargo de la gestión del huerto frutal fundado por la empresa y ubicado en la aldea de Boyakeqigele, municipio de Hannanlike, región de Shule. La compañía, según se informa, era una de las empresas extranjeras

pertenecientes a cristianos de Xinjiang que figuraba entre las que estaba previsto clausurar en septiembre de 2007. El Sr. Alimujiang Yimiti fue acusado de actividades ilegales de infiltración en grupos religiosos en la región de Kashi bajo el pretexto de realizar negocios para su compañía. Fue acusado de predicar el cristianismo entre las personas de la etnia uigur y de distribuir propaganda religiosa. Según se informa, el Sr. Yimiti se encuentra actualmente en el centro de detención de Kashi.

6. El 25 de febrero de 2008 no se permitió al abogado del Sr. Yimiti reunirse con su cliente por razones de seguridad nacional. Las investigaciones contra el Sr. Yimiti se estaban llevando a cabo en secreto. Su detención se produjo tras años de intimidación e interrogatorios mientras trabajaba con su empleador más reciente, la empresa ya mencionada, y con su empleador anterior, una empresa de propiedad estadounidense, la Xinjiang Taipingyang Nongye Gongsi. La oficina local de Seguridad del Estado convocaba al Sr. Yimiti regularmente, de día o de noche, para interrogarlo. Presuntamente sufrió maltratos físicos y lesiones. También saquearon su casa y confiscaron sus posesiones, incluido su ordenador personal. Denunció todo ello al cuartel de la Seguridad del Estado en Urumqi, pero sin resultados. Se prohibió a Sr. Yimiti revelar los detalles de estos interrogatorios, ya que tal acción sería considerada una "filtración de secretos de Estado".

7. Los allegados al Sr. Yimiti aseguran que no existen pruebas de mala conducta y están muy preocupados por el alto nivel de secreto que rodea su caso. Les inquieta profundamente su bienestar. Según explican, el Sr. Yimiti es un joven tranquilo y muy profesional, de gran integridad, y que tuvo cuidado de no mezclar su fe con sus actividades empresariales. No se trata de un terrorista ni un separatista, sino de un ciudadano chino leal.

8. En su respuesta, el Gobierno informó de que el Sr. Alimujiang Yimiti, nacido el 10 de junio de 1973 en Hami, provincia de Xinjiang, originalmente musulmán y convertido al cristianismo en 1995, fue detenido en enero de 2008 por las autoridades de seguridad pública de Kashi, de conformidad con los artículos 103 y 111 del Código Penal chino, bajo la sospecha de participar en el fomento del separatismo y comunicar ilegalmente secretos de Estado al extranjero. El 20 de febrero de 2008 fue detenido con la aprobación de la Fiscalía. Su juicio comenzó el 27 de mayo de 2008 en el Tribunal Intermedio Popular de Kashi, en la provincia de Xinjiang, el cual ordenó una investigación adicional a cargo de las autoridades de la seguridad pública.

9. El Sr. Alimujiang Yimiti permanece en la prisión de Kashi. Está en buenas condiciones físicas y se le permite recibir visitas, designar abogado, etc., de conformidad con la ley. Su caso se encuentra actualmente en fase de procedimiento judicial. Según el Gobierno, su detención no tiene nada que ver con sus creencias religiosas.

10. El Gobierno declara además que el derecho de los ciudadanos chinos a la libertad de creencia religiosa está protegido por la Constitución y la ley. El artículo 36 de la Constitución establece: "Los ciudadanos de la República Popular China disfrutan de libertad de culto". Todo ciudadano de China es libre de creer en una religión o no, de creer en diferentes religiones y de cambiar de una religión a otra. La legislación y la práctica en China están en consonancia con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos y acuerdos internacionales.

11. Por último, el Gobierno señala que China es un país con muchas religiones, y sus ciudadanos pueden elegir libremente y profesar la suya, así como manifestar su pertenencia a ella. Se informa de que en la actualidad hay más de 100 millones de creyentes religiosos de todo tipo, incluidos 16 millones de cristianos protestantes, 5 millones de católicos y más de 20 millones de musulmanes. Hay 100.000 lugares de culto religioso, 300.000 clérigos y más de 30 millones de asociaciones religiosas. Todas las religiones poseen la misma

condición y coexisten armoniosamente; las personas religiosas y no religiosas se respetan mutuamente y se mezclan.

12. La fuente señala que el Sr. Alimujiang Yimiti fue detenido por distribuir material de propaganda religiosa y tratar de convertir personas al Cristianismo, violando así varias leyes y estatutos chinos, entre ellos los artículos 20, 43 y 45 del Reglamento sobre asuntos religiosos de 1º de marzo de 2005, así como algunas directrices para la aplicación del reglamento, emitidas por el Comité de Partidos de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. La Ley de autonomía étnica regional ofrece un marco específico para que las Regiones Autónomas adapten las legislaciones nacionales en función de las condiciones locales. El Sr. Yimiti fue anteriormente acusado de violar los artículos 3, 4 y 5 del Reglamento N° 1166 de 1984, la Notificación N° 30 de 1990 y el Reglamento N° 42 de 1992.

13. Según la fuente, el Sr. Alimujiang Yimiti fue detenido por llevar a cabo actividades ilegales de infiltración religiosa en la región de Kashi. Si bien el Reglamento sobre asuntos religiosos protege las creencias religiosas en general y los derechos de las organizaciones religiosas registradas, también trata de controlar el crecimiento y el alcance de las actividades de los grupos religiosos registrados y los no registrados. Este reglamento tiene al parecer el propósito de fortalecer determinados aspectos del control gubernamental sobre las actividades religiosas, y distingue entre las actividades religiosas normales y el extremismo religioso que puede dar lugar a alteraciones de orden público. Los funcionarios locales pueden tomar decisiones de detener y encarcelar a creyentes religiosos. Un tema especialmente delicado son las actividades religiosas en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, pues se trata de una región de mayoría musulmana y con problemas separatistas.

14. El Grupo de Trabajo observa que el Sr. Alimujiang Yimiti (Alimjam Yimit) fue acusado de fomentar el separatismo y de comunicar ilegalmente secretos de Estado al extranjero. Si era declarado culpable, podía ser castigado con la pena capital. Sin embargo, el Tribunal Intermedio Popular de Kashi no encontró pruebas suficientes contra él respecto a los cargos por delitos políticos, y ordenó a la Oficina de Seguridad Pública que llevara a cabo nuevas investigaciones.

15. El Sr. Alimujiang Yimiti ha sido detenido y permanece en prisión únicamente debido a su fe y sus actividades religiosas. La libertad de religión es un derecho reconocido en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que China ha firmado, pero no ha ratificado. La detención del Sr. Yimiti es también contraria a la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, aprobada por la Asamblea General en su resolución 36/55 de 25 de noviembre de 1981.

16. El Grupo de Trabajo recuerda que la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza a las personas la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, y el derecho a no ser discriminadas en función de su religión y a no estar sujetas a reglamentaciones innecesarias y arbitrarias por parte de los gobiernos en el ejercicio de sus convicciones religiosas.

17. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La privación de libertad del Sr. Alimujiang Yimiti (Alimjan Yimit en uigur) es arbitraria, pues contraviene los artículos 7, 9, 10, 11.1), 12 y 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y corresponde a las categorías II y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

18. Consecuentemente con la Opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno de China que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de la persona

mencionada *supra*, y para ponerla en conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

19. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que considere la posibilidad de una pronta ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 12 de septiembre 2008.

## **Opinión N° 30/2008 (Sri Lanka)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 19 de diciembre de 2007.**

**Relativa al Sr. Gunasundaram Jayasundaram.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado información sobre las alegaciones de la fuente.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. En vista de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta facilitada por el Gobierno a la fuente y recibió sus comentarios.
5. El caso se comunicó al Grupo de Trabajo de la siguiente manera: el Sr. Gunasundaram Jayasundaram, con doble nacionalidad esrilanquesa-irlandesa, residente en Singapur, casado y padre de tres hijos, fue detenido el 4 de septiembre de 2007 en el aeropuerto internacional de Katunayake por agentes de la División de Investigación del Terrorismo de la Policía. Acababa de llegar a Colombo procedente de Singapur en viaje de negocios.
6. Al parecer, se mantuvo al Sr. Jayasundaram en prisión preventiva durante tres meses y medio siguiendo órdenes del Secretario del Ministerio de Defensa. No se le comunicaron los motivos de su detención.
7. Durante ese período, tan sólo se permitió al Sr. Jayasundaram tener un abogado defensor en una ocasión, a pesar de las reiteradas peticiones por escrito a las autoridades para disponer de asistencia letrada de forma regular. El 29 de octubre de 2007, el Defensor del Pueblo, Sr. Appapillai Vinayagamoorthy, presentó una petición de hábeas corpus en su nombre, pero no obtuvo ninguna respuesta.
8. La fuente añade que también se restringió severamente el acceso consular al detenido. El Cónsul Honorario de la República de Irlanda en Colombo tuvo permiso para visitarlo una sola vez, el 14 de diciembre de 2007.
9. Según la fuente, la detención y encarcelamiento del Sr. Jayasundaram es arbitraria, pues no se le mostró una orden de detención ni se le comunicaron los motivos de la misma. La fuente añade que, a pesar del tiempo transcurrido, no se han formulado cargos contra el Sr. Jayasundaram. Tampoco ha sido llevado ante un juez ni se ha fijado fecha para un juicio. La fuente concluye que la detención del Sr. Jayasundaram es arbitraria.
10. En su respuesta, el Gobierno de Sri Lanka declara que, de acuerdo con la investigación llevada a cabo por las autoridades, el 4 de abril de 2007 funcionarios de aduanas detuvieron en el aeropuerto internacional de Colombo a Visvalingam Gobidas, residente en Colombo, por introducir equipos de telecomunicaciones de alta potencia en Sri Lanka sin permiso.

11. Las investigaciones posteriores revelaron que Visvalingam Gobidas es miembro del equipo de apoyo logístico de los LTTE, un grupo terrorista prohibido en muchos países, incluidos los Estados Unidos de América y los países miembros de la Unión Europea. Estos equipos de telecomunicaciones de alta potencia fueron introducidos para su utilización por los LTTE. Gobidas reveló que el Sr. Jayasundaram estaba prestando apoyo financiero y material a los LTTE. El Sr. Jayasundaram fue informado de estos cargos, y fue detenido por la División de Investigación del Terrorismo en Colombo, en virtud del Reglamento de emergencia N° 19 2). Se entregó al Sr. Jayasundaram una copia de la orden de detención.

12. Se notificó oficialmente la detención del Sr. Jayasundaram al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Sri Lanka. Como consecuencia de ello, unos representantes del CICR lo visitaron en un par de ocasiones. El Cónsul Honorario de la República de Irlanda en Sri Lanka visitó al Sr. Jayasundaram el 18 de septiembre, el 26 de octubre, el 15 de noviembre y el 14 de diciembre de 2007. Los abogados de la defensa, el Sr. Appapillai Vinayagamoorthy y K. D. Kalupahana, visitaron al Sr. Jayasundaram el 24 de octubre, el 20 de noviembre, y el 21 de diciembre de 2007.

13. Según el Gobierno, investigaciones posteriores han revelado que el Sr. Gunasundaram Jayasundaram es miembro del equipo internacional de apoyo logístico de los LTTE, y que previamente había participado en las siguientes acciones:

a) Después de la firma del acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno de Sri Lanka y los LTTE en 2002, visitó Vanni (una zona de Sri Lanka temporalmente controlada por los LTTE) con su esposa Biretta y sus hijos, y se reunió con el líder de los LTTE Velupillai Prabhakaran y con el líder de los Sea Tigers, Soosai, y discutieron sobre la apertura de negocios en el extranjero para los LTTE;

b) Envío una máquina de fabricación de bolsas de plástico valorada en 5 millones de rupias a los LTTE a través de su empresa en Sri Lanka, llamada Lamipack Private Ltd.;

c) A principios de 2005, el Sr. Gunasundaram Jayasundaram visitó Vanni con una ciudadana australiana y mantuvo conversaciones con los LTTE y su organización fachada, la Organización para la Rehabilitación Tamil, en relación con la recaudación de fondos para un centro de educación primaria en la región de Vanni para los familiares de los mandos de los LTTE.

14. Siguiendo instrucciones del líder de los LTTE en Londres en 2005/06, el Sr. Jayasundaram compró en Singapur en seis ocasiones radares, teléfonos satelitales, cámaras submarinas, aparatos de *walkie-talkie*, generadores, motores de barcos, equipos de buceo y piezas de repuesto para radares, que fueron enviados a Colombo y desde allí a los LTTE a través de su compañía y de sus contactos en Colombo y Vanni. (El Gobierno informa de que el nombre del líder en Londres, los nombres de los barcos, las facturas, y los correos electrónicos no se revelan por razones de seguridad.) El Sr. Gunasundaram Jayasundaram se encuentra actualmente en detención en la División a la espera de la acusación.

15. En sus observaciones sobre la respuesta del Gobierno, la fuente niega que el Sr. Jayasundaram sea miembro del equipo internacional de apoyo logístico de los LTTE. También afirma que la orden original de detención del Sr. Jayasundaram ha expirado y que nunca se le ha notificado otra orden por la que se prolongue su detención. Por lo que respecta a las revelaciones de Visvalingam Gobidas sobre la entrega de equipos de telecomunicaciones alta potencia a los LTTE por parte del Sr. Jayasundaram, la fuente señala que se trata de una mera denuncia carente de pruebas. El Sr. Jayasundaram no conoce a nadie, ni se ha reunido nunca con nadie, llamado Gobidas Visvalingam.

16. El Sr. Jayasundaram no había visitado Vanni en 17 años, y cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, en 2003, fue con el único fin de ver a su familia y ayudar a reconstruir el orfanato en ese lugar. El Sr. Jayasundaram no se encontró con ningún líder de los LTTE. De hecho, él y su familia se reunieron con muchos dignatarios extranjeros y simpatizantes del pueblo tamil, entre ellos el Embajador de Noruega.

17. El envío de la máquina de fabricación de bolsas de plástico a Sri Lanka no fue más que parte de un acuerdo comercial en el que el Sr. Jayasundaram tenía participación. Por otra parte, su socio en Lamipak Private Ltd. es cingalés y no ha sido detenido ni encarcelado, en los cinco años transcurridos, por el envío de esta máquina a Sri Lanka, ni tampoco por el envío del otro equipo mencionado.

18. La fuente no niega que el Sr. Jayasundaram visitó Vanni con una mujer australiana. Contaba con el apoyo del Banco Mundial y del Gobierno de Noruega, que accedieron a financiar conjuntamente una revisión del plan de estudios de la enseñanza preescolar y de primaria para el norte y el este de Sri Lanka. El Sr. Jayasundaram sólo presentó a esa mujer de Australia como experta en esa materia. Se concibió el proyecto para el público en general, no sólo para los familiares de los mandos de LTTE.

19. La fuente afirma además que el Sr. Jayasundaram sólo ha tenido acceso al abogado designado para su defensa en dos ocasiones, y no tres. La otra abogada, K. D. Kalupahana, fue designada por el Sr. Jayasundaram por recomendación de la División de la Policía, y le pidió 1.000 dólares al día para representarlo. Más tarde dejó de desempeñar esa tarea, por actuar más en interés de la policía que del Sr. Jayasundaram.

20. El 29 de octubre de 2007 se presentó una petición de hábeas corpus dirigida al Gobierno de Sri Lanka y posteriormente se celebraron tres audiencias en fechas tan tardías como el 23 de enero, y el 5 y 26 de marzo de 2008. Sin embargo, no se llevó al Sr. Jayasundaram ante el tribunal en ninguna ocasión.

21. El Grupo de Trabajo, recapitulando esta información, quisiera señalar a la atención las siguientes circunstancias: el Sr. Jayasundaram fue detenido sin una orden de detención, cumpliendo órdenes de las autoridades militares en base al Reglamento de emergencia N° 19 2), que dio lugar a su prolongada detención. Las acusaciones en su contra se basaron únicamente en las declaraciones de otra persona, a la que, según atestigua la fuente, el Sr. Jayasundaram no conoce. Por otra parte, el Grupo de Trabajo considera que carece de fundamento el argumento del Gobierno en el sentido de que el Sr. Jayasundaram estaba prestando apoyo financiero y material a los LTTE.

22. En cualquier caso, las actividades enumeradas en la respuesta del Gobierno difícilmente constituirían un delito que justificara la detención y encarcelamiento del Sr. Jayasundaram durante un período tan prolongado sin respetar el proceder adecuado en la formulación de cargos y la detención. Estas dudas se ven acentuadas por el hecho de que el socio del Sr. Jayasundaram, miembro de la etnia cingalesa, nunca fue detenido por realizar negocios similares. La detención y encarcelamiento parecen ser, entre otras cosas, discriminatorios hacia el Sr. Jayasundaram por formar parte de la etnia tamil.

23. El Grupo de Trabajo observa además que el Sr. Jayasundaram ha permanecido detenido sin ser acusado ante una autoridad judicial independiente. Fue detenido y permaneció en prisión sin acceso inmediato a un abogado. No fue informado oportunamente sobre su derecho a comunicarse con el Cónsul de la República de Irlanda, como está previsto en la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares. Además, la respuesta del Gobierno no contiene ninguna información sobre una prórroga oficial de la detención del Sr. Jayasundaram, una vez que venció la orden de detención inicial. Por último, el Grupo de Trabajo también toma nota de que no se llevó al Sr. Jayasundaram *in personam* ante el tribunal durante las audiencias de hábeas corpus.

24. Todos estos actos violan los derechos humanos fundamentales garantizados por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone en particular lo siguiente: "1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley. (...) 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; (...) d) (...) si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; (...) e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo".

25. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La privación de libertad del Sr. Gunasundaram Jayasundaram es arbitraria, pues contraviene los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y corresponde a las categorías II y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

26. Consecuentemente con la Opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Sri Lanka que remedie la situación del Sr. Gunasundaram Jayasundaram y la ponga en conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

27. Por último, el Grupo de Trabajo recuerda al Gobierno que, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos<sup>4</sup>, las leyes nacionales y las medidas destinadas a combatir el terrorismo deberán cumplir con todas las obligaciones dimanantes del derecho internacional, en particular las normas internacionales sobre derechos humanos.

Aprobada el 12 de septiembre de 2008.

### **Opinión N° 31/2008 (Arabia Saudita)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 11 de junio de 2008.**

**Relativa al Sr. Abdel Rahman Marwan Ahmad Samara.**

**El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado información sobre las alegaciones de la fuente.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. Según la fuente, el Sr. Abdel Rahman Marwan Ahmad Samara (en adelante, el Sr. Abdel Samara), ciudadano palestino nacido en 1984 y residente en Riad con un permiso de residencia regular, casado con Soundous Houssam Eddine Lofti y padre de una niña, fue detenido el 17 de julio de 2007 en su tienda de Riad por agentes de los Servicios de Inteligencia. No se le mostró ninguna orden de detención ni se le informó de las razones o

<sup>4</sup> Resolución 7/7 de 27 de marzo de 2008 del Consejo de Derechos Humanos.

el fundamento jurídico de la misma. Al final de esa noche registraron su casa sin una orden y le confiscaron el ordenador familiar.

5. Durante el primer mes tras su detención el Sr. Abdel Samara estuvo detenido en secreto en las instalaciones de la policía, y después fue trasladado, primero a la prisión de Alichá, donde permaneció aproximadamente cinco meses, y luego a la prisión de Al Hayr. Finalmente fue trasladado a su actual lugar de detención, la prisión de Asir.

6. Los familiares del Sr. Abdel Samara han presentado varios recursos, en un principio para conocer su paradero, y luego las razones de su detención. Después de muchos meses han logrado que les permitan visitarlo en la cárcel dos veces al mes.

7. El Sr. Abdel Samara permanece detenido sin que se le haya acusado formalmente de ningún delito; sin recibir información alguna sobre el procedimiento incoado contra él ni sobre el fundamento jurídico de su detención; sin acceso a un abogado, a pesar de sus reiteradas peticiones a las autoridades penitenciarias en este sentido; y sin que se le haya llevado ante un juez. En consecuencia, no ha tenido la posibilidad de impugnar la legalidad de su detención ante una autoridad judicial.

8. La fuente considera que la detención del Sr. Abdel Samara es arbitraria y contraria a la Declaración Universal de Derechos Humanos y al Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, aprobado por la Asamblea General en su resolución 43/173 de 9 de diciembre de 1988. También es contrario a la legislación nacional de Arabia Saudita, en particular a los artículos 2 y 4 del Real decreto N° M.39 de 16 de octubre de 2001, que reglamenta el procedimiento penal y establece las garantías de todas las personas sometidas a detención y encarcelamiento.

9. El Gobierno informó de que no hay ningún detenido bajo el nombre de Abdel Rahman Marwan Ahmad Samara, aunque sí hay uno con el nombre de Abdel Rahman Marwan Ahmad Abdel Hamid, un ciudadano jordano detenido el 18 de julio de 2007 tras ser nombrado por otro detenido. Una investigación demostró que había viajado a Afganistán, donde recibió adiestramiento con armas antes de regresar al Reino. Se le remitirá a la autoridad judicial para determinar las acciones jurídicas que han de iniciarse contra él.

10. La fuente, en sus observaciones a la respuesta del Gobierno, informó de que el Sr. Abdel Samara y el Sr. Abdel Hamid son la misma persona. El Sr. Abdel Samara, aunque de origen palestino, es titular de un pasaporte jordano y de un permiso de residencia en Arabia Saudita, con el N° 201 487 4966. La fuente manifestó además que se ha mantenido al Sr. Abdel Samara en régimen de incomunicación, sin posibilidad alguna de contactar con un abogado defensor o cualquier otra persona. El 1° de junio de 2008 fue trasladado a la prisión de Asir.

11. La fuente confirmó que el Sr. Abdel Samara efectivamente visitó Afganistán en 2000, cuando tenía 16 años, y permaneció varios meses en ese país. A su regreso al Reino, fue interrogado acerca de su viaje, pero no se tomaron medidas contra él. No se le imputó ningún hecho reprochable. Según la fuente, en su exposición el Gobierno no responde a las alegaciones sobre el carácter arbitrario de la privación de libertad del Sr. Abdel Samara.

12. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno no puede ignorar la identidad de la persona detenida. Además, observa que la fuente ha proporcionado el número concreto de identificación del permiso de residencia ordinario del Sr. Abdel Samara. Además, la fuente ha confirmado que, efectivamente, el Sr. Abdel Samara realizó un viaje a Afganistán. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo está en condiciones de considerar que la persona detenida desde el 18 de julio de 2007 es, en efecto, la misma persona a la que se refiere la comunicación.

13. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno, en su respuesta, no ha refutado las siguientes alegaciones presentadas por la fuente:

- a) El Sr. Abdel Samara fue detenido y permanece encarcelado sin orden judicial desde julio de 2007.
- b) Se allanó su casa sin una orden judicial de registro y se confiscó su ordenador personal.
- c) No se le notificaron los motivos de su detención;
- d) Permaneció detenido en régimen de incomunicación;
- e) No fue llevado ante un juez ni se le dio la oportunidad de impugnar la legalidad de su detención;
- f) No se le ofreció la posibilidad de contar con la asistencia de un abogado defensor.

14. Según el Grupo de Trabajo, si el Gobierno, después de mantener al Sr. Abdel Samara en prisión durante 16 meses, no es capaz de determinar con claridad si debe iniciarse un procedimiento judicial contra él, está reconociendo por este simple hecho las alegaciones formuladas por la fuente.

15. En consecuencia, el Grupo de Trabajo debe considerar que se ha mantenido al Sr. Abdel Samara en régimen de incomunicación y sin acceso a un abogado defensor; sin contacto con el mundo exterior; sin una orden judicial que autorice su detención; sin la posibilidad de impugnar la legalidad de su detención; sin ser llevado ante un juez; sin cargos concretos y sin la perspectiva de un juicio imparcial.

16. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La detención del Sr. Abdel Rahman Marwan Ahmad Samara (Sr. Abdel Rahman Marwan Ahman Abdel Hamid) es arbitraria, pues contraviene los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y corresponde a las categorías I y III de las aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

17. Consecuentemente con la Opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para remediar la situación de la persona mencionada *supra* a fin de ponerla en conformidad con las disposiciones y principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

18. El Grupo de Trabajo invita al Gobierno a que considere la posibilidad de ser parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 20 de noviembre de 2008.

### **Opinión N° 32/2008 (Malasia)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 10 de junio de 2008.**

**Relativa al Sr. Mat Sah bin Mohammad Satray.**

**El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

- 1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
- 2. A la luz de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado la información requerida. El Grupo de

Trabajo transmitió la respuesta facilitada por el Gobierno a la fuente, que no ha proporcionado sus comentarios.

3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El Grupo de Trabajo considera que está en condiciones de emitir una Opinión sobre los hechos y circunstancias del caso, tomando como contexto las denuncias formuladas y la respuesta del Gobierno a las mismas.
5. Según la fuente, el Sr. Mat Sah bin Mohammad Satray, de 39 años, con nacionalidad malaya, técnico en una institución semigubernamental llamada Dewan Bahasa dan Pustaka, empresa que produce textos escolares, y que solía residir en Kuala Lumpur, fue detenido por orden del Ministerio del Interior el 17 de abril de 2002 en su domicilio por tres agentes de policía y 15 agentes de paisano. No se le mostró ninguna orden de detención. El Sr. Satray permaneció detenido durante 55 días en el Centro de Detención Preventiva de la Policía en Kampung Batu.
6. El 12 de junio de 2002 el Sr. Satray fue trasladado por una sección especial de la policía al Campo de Detención de Kamunting, en Taiping, estado de Perak, donde se le confinó en régimen de aislamiento sin cargos ni juicio. El Ministro del Interior emitió una orden de detención por un período inicial de dos años, invocando las disposiciones de la Ley de seguridad interna, y desde entonces la ha prorrogado en dos ocasiones.
7. El Gobierno denunció inicialmente que el Sr. Satray era miembro de la Kumpulan Militan Malasia. A partir de entonces, lo acusó de ser miembro de la Jemaah Islamiyyah (JI), organización cuyo propósito es establecer un Estado panislámico en el Asia sudoriental. De conformidad con la resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad, esta organización se incorporó el 25 de octubre de 2002 a la lista del Comité de Naciones Unidas de grupos terroristas vinculados a Al Qaeda o los talibanes.
8. El Sr. Abu Bakr Bashir, ciudadano indonesio y presunto líder espiritual de la JI, solía ofrecer conferencias durante las clases sobre el Islam organizadas en el lugar de trabajo del Sr. Satray, donde el 90 por ciento del personal es musulmán. El Sr. Satray se sumó a ese grupo de estudio.
9. En septiembre de 2003 se presentó una petición de hábeas corpus en nombre del Sr. Satray. Fue rechazada por el Tribunal Superior de Kuala Lumpur en febrero de 2004 y en apelación por el Tribunal Federal en julio de 2004. El recurso de hábeas corpus como vía única contemplada por la Ley de seguridad interna sólo se refiere a los aspectos técnicos de la detención. El Gobierno no tiene la obligación de presentar pruebas sustanciales que justifiquen la detención.
10. El Sr. Satray, en un comunicado de prensa emitido en septiembre de 2003 junto con otros 30 detenidos en régimen de prisión preventiva, negó su colaboración con cualquier supuesta organización secreta como la JI y declaró que únicamente había tomado parte en las actividades islámicas como un musulmán devoto más, de acuerdo con las disposiciones constitucionales sobre la libertad de religión.
11. El 11 de junio de 2004, agentes de una sección especial de la policía trasladaron al Sr. Satray, junto con otros siete detenidos bajo la Ley de seguridad interna, al Centro de Detención Preventiva de la Policía en Kuala Lumpur, donde lo interrogaron sobre sus presuntos vínculos con organizaciones de activistas islámicos. Al día siguiente su detención se prorrogó por dos años más.
12. Sólo se permitió al Sr. Satray un acceso limitado a su familia y abogados. El 9 de diciembre de 2004 fue maltratado, junto con otros 25 detenidos, por los funcionarios de prisiones a raíz de un control de seguridad realizado sin previo aviso en los pabellones T2B y T4, donde se ubicaban los presuntos miembros de la JI. Los guardias de la prisión

arrojaron al Sr. Satray con fuerza contra el suelo de cemento y le pusieron las rodillas en el cuello. También fue obligado a sentarse con las piernas cruzadas en la sala de oración del centro de detención mirando a la pared, y los funcionarios de la prisión le golpearon la cabeza contra ella. A pesar de que tenía una costilla fracturada, se le negó tratamiento médico hasta el 13 de diciembre de 2004, fecha en que fue llevado al hospital.

13. Se ha informado de que el Gobierno justificó las acciones por haberse descubierto objetos susceptibles de ser usados como armas, lo que obligó a utilizar la coacción para reducir a los detenidos, que se mostraron violentos y amenazantes. Ellos, sin embargo, afirman que las autoridades habían aprobado el uso de esos objetos y que los estaban utilizando como herramientas para hacer artesanía.

14. La fuente sostiene que la detención del Sr. Satray es arbitraria, ya que el fundamento jurídico invocado para su prolongada permanencia en prisión sin cargos ni juicio, la Ley de seguridad interna, es un acto de legislación arbitrario sobre la detención preventiva. La Ley de seguridad interna se promulgó en la década de 1960 durante la lucha contra las guerrillas comunistas como una legislación contra el terrorismo, y se ha mantenido en vigor desde entonces. De conformidad con su artículo 73 1), la policía puede detener a cualquier persona durante un plazo de hasta 60 días sin una orden de detención o un juicio, y sin acceso a asistencia letrada, si sospecha que la persona "ha actuado o está a punto de actuar o es probable que actúe de manera perjudicial para la seguridad de Malasia o cualquiera de las partes que la integran, o bien para el mantenimiento de los servicios esenciales o la vida económica del país". Después de esos 60 días, el Ministro del Interior tiene la capacidad, en virtud del artículo 8, de prorrogar el período de detención sin juicio durante dos años, sin necesidad de someter ninguna prueba al examen por los tribunales, mediante la emisión de una orden de detención renovable indefinidamente.

15. El Gobierno, en su respuesta, informó de que el Sr. Satray ("el sujeto"), fue detenido el 18 de abril de 2002, y no el 17 de abril de 2002, de conformidad con el artículo 73 1) de la Ley de Seguridad Interna de 1960 (Ley 82). La detención se realizó debido a la implicación del sujeto en actividades perjudiciales para la seguridad de Malasia.

16. El artículo 73 de la Ley 82 contiene disposiciones sobre la facultad de cualquier agente de la policía de detener a personas sospechosas. Estas disposiciones son:

*"1) Cualquier agente de policía puede, sin orden de detención y en espera de las investigaciones pertinentes, detener a cualquier persona si hay razones para creer:*

*a) que hay motivos que justificarían su detención en virtud del artículo 8,*  
*y*

*b) que ha actuado o está a punto de actuar o es probable que actúe de manera perjudicial para la seguridad de Malasia o cualquiera de las partes que la integran, o bien para el mantenimiento de los servicios esenciales o la vida económica del país.*

*2) Cualquier agente de policía puede, sin orden de detención y en espera de las investigaciones pertinentes, detener a cualquier persona que al ser interrogada no pueda demostrar su identidad o justificar los fines para los que está en el lugar en que se encuentra, o que induzca al agente a sospechar que ha actuado o está a punto de actuar de manera perjudicial para la seguridad de Malasia o cualquiera de las partes que la integran, o bien para el mantenimiento de los servicios esenciales o la vida económica del país.*

*3) Toda persona detenida en virtud de este artículo puede ser mantenida en detención por un período no superior a sesenta días sin una orden de detención en virtud del artículo 8,*

*siempre y cuando:*

*a) No permanezca detenida durante más de veinticuatro horas, salvo con la autorización de un oficial de policía con rango de inspector o superior.*

*b) No permanezca detenida durante más de cuarenta y ocho horas, salvo con la autorización de un oficial de policía con rango de superintendente auxiliar o superior.*

*c) No sea detenida durante más de treinta días salvo que un oficial de policía con rango de superintendente adjunto o superior informe de las circunstancias de la detención y encarcelamiento al Inspector General o a un oficial de policía designado por el Inspector General para actuar en su nombre, que a su vez informará de ello inmediatamente al Ministro.*

*4)-5) (Suprimidos por la Ley A61).*

*6) Las atribuciones conferidas a un agente de policía por los párrafos 1 y 2 pueden ser ejercidas por cualquier miembro de las fuerzas de seguridad, por cualquier persona que desempeñe las funciones de guardia o vigilancia en un lugar protegido y por cualquier otra persona autorizada por un oficial jefe de la policía.*

*7) Toda persona detenida en virtud de las atribuciones conferidas por este artículo se considerará bajo custodia legal, y podrá ser encarcelada en cualquier prisión, en cualquier comisaría de policía o en cualquier otro lugar similar autorizado con carácter general o especial por el Ministro."*

17. El Sr. Satray estuvo detenido en el Centro de Detención y Custodia de Taiping, Perak, por un período de dos años, que comenzó el 13 de junio de 2002, por una orden de detención ministerial emitida en virtud del artículo 8 1) de la Ley 82 de seguridad interna. El Ministro emitió la orden de detención por considerar que era necesaria para evitar que el sujeto siguiera participando en actividades perjudiciales para la seguridad de Malasia.

18. El artículo 8 de la Ley 82 de Seguridad Interna contiene disposiciones sobre la facultad de ordenar la detención o la limitación de movimientos de las personas. Son las siguientes:

*"1) Si el Ministro está convencido de que la detención de cualquier persona es necesaria con el fin de impedirle actuar de manera perjudicial para la seguridad de Malasia o cualquiera de las partes que la integran, o bien para el mantenimiento de los servicios esenciales o la vida económica del país, puede dictar una orden (en lo sucesivo, "una orden de detención") para que esa persona sea detenida por un período no superior a dos años.*

*2) En el párrafo 1, por "servicios esenciales" se entiende cualquier servicio, negocio, comercio, empresa, fábrica u ocupación incluidos en la Tercera Lista.*

*3) Toda persona detenida en cumplimiento de una orden de detención será detenida en un lugar que ordene el Ministro (en lo sucesivo "un lugar de detención") y con arreglo a las instrucciones emitidas por el propio Ministro y a las normas que figuran en el párrafo 4.*

*4) El Ministro podrá por norma prever el mantenimiento y la gestión de los lugares de detención, y la disciplina y el tratamiento de las personas detenidas en los mismos, así como establecer reglas diferentes para los distintos lugares de detención.*

*5) Si el Ministro está convencido de que para alguno de los fines mencionados en el párrafo 1 es necesario ejercer el control y la supervisión sobre una persona o imponer restricciones y condiciones en relación a sus actividades, a su libertad de movimientos o a su lugar de residencia o de empleo, pero que para ello no es necesario*

*detenerla, puede emitir una orden (en lo sucesivo, "una orden de restricción") que imponga a la persona una limitación o cualquiera de las siguientes limitaciones y condiciones:*

- a) Las restricciones que se especifiquen en la orden con respecto a sus actividades y a sus lugares de residencia y el empleo;*
  - b) La prohibición de salir al aire libre dentro del horario especificado en la orden, salvo con una autorización por escrito otorgada por la autoridad o persona que se especifique en la misma;*
  - c) La obligación de dar cuenta de sus movimientos de la manera, en el momento y a la autoridad o persona que se especifique en la orden;*
  - d) La prohibición de pronunciar discursos en público o de ocupar un cargo, o de participar en las actividades de o asesorar a cualquier organización o asociación, o de participar en actividades políticas; y*
  - e) La prohibición de viajar fuera de los límites de Malasia o de cualquier área que se especifique en la orden, salvo que se obtenga un permiso por parte de la autoridad o persona que también se especifique en dicha orden.*
- 6) Toda orden de restricción permanecerá en vigor por el plazo que se especifique en la misma, que no será superior a dos años, y puede incluir una instrucción del Ministro con respecto a que la persona a la que se dirige contrae una obligación, con o sin garantías, y por la suma que se especifique, por el debido cumplimiento de las restricciones y condiciones que se le han impuesto.*

*7) El Ministro podrá ordenar que la duración de cualquier orden de detención u orden de restricción se prorrogue por un nuevo período, no superior a dos años, según lo especifique, y posteriormente por nuevos períodos, no superiores a dos años cada vez, ya sea:*

- a) sobre los mismos fundamentos de la orden original;*
- b) sobre fundamentos diferentes a los utilizados para la orden original; o*
- c) en parte sobre los mismos fundamentos y en parte sobre fundamentos diferentes;*

*a condición de que si una orden de detención se prorroga por motivos total o parcialmente distintos a los originales, la persona a la que se refiere dicha orden tendrá los mismos derechos en virtud del artículo 11, como si la orden prorrogada fuera una nueva orden, y consecuentemente se aplicará el artículo 12.*

*8) En ocasiones el Ministro puede, mediante la presentación de una notificación por escrito a la persona sujeta a una orden de restricción, variar, cancelar o añadir restricciones o condiciones a las impuestas a la persona por esa orden, y las restricciones o condiciones variadas o adicionales permanecerán en vigor, a menos que se cancelen antes, durante el resto del plazo especificado en los párrafos 6 ó 7."*

19. La orden de detención de fecha 13 de junio de 2002 se renovó en tres ocasiones, el 13 de junio de 2004, el 13 de junio de 2006 y el 13 de junio de 2008, respectivamente, por un período de dos años cada vez, en virtud del artículo 8 7) de la Ley 82, como se cita más arriba. Las órdenes de prórroga se emitieron después de tener la convicción de que el sujeto estaba obstinado en que sus actos no eran perjudiciales para la seguridad de Malasia.

20. El Gobierno señaló que la detención y encarcelamiento del Sr. Satray no se produjo a causa de su participación en la Kumpulan Militan Malasia, como se afirma en la comunicación. La colaboración del sujeto con un grupo disidente peligroso para la

seguridad de Malasia se demostró a través de su confesión durante los interrogatorios, así como por las revelaciones hechas por los otros detenidos, y por lo tanto, su detención en virtud de la Ley 82 de seguridad interna es legítima y válida. Las bases para la detención del sujeto son abundantes y se justifican en virtud de las leyes de Malasia.

21. El Tribunal Superior de Malasia en Kuala Lumpur rechazó la solicitud de hábeas corpus presentada en nombre del sujeto el 17 de mayo de 2004. El sujeto presentó recurso contra esta decisión, pero el 10 de octubre de 2005 el Tribunal Federal, que es la instancia más alta de Malasia, también lo desestimó.

22. Igual que el resto de detenidos, el sujeto tiene derecho a recibir visitas una vez por semana, con un tiempo asignado por visita de 30 minutos. Este derecho está legalmente previsto en la Regla 81 4), del Reglamento de seguridad interna (personas detenidas) de 1960. En el caso de que necesite recibir visitas más de una vez por semana, el sujeto puede presentar una solicitud en este sentido al oficial a cargo del centro de detención.

23. El Gobierno expresa la opinión de que la denuncia en relación con los malos tratos sufridos el 9 de diciembre de 2004 no es precisa. La afirmación de que el sujeto, junto con otros 25 detenidos, fue maltratado por los funcionarios de prisiones, no es fundada, ya que ese día los 25 detenidos provocaron un tumulto en el centro de detención que amenazó la seguridad de la institución. Durante los hechos, hirieron a un comisario adjunto y a un cabo de la prisión, después de lanzarles piedras y rociarlos con un extintor.

24. A fin de contener el tumulto, se desplegó un equipo de agentes de la unidad de seguridad de la prisión, que hicieron un uso razonable de la fuerza con el fin de contener y controlar el comportamiento violento de los detenidos. A todos aquellos que resultaron heridos se les proporcionó el tratamiento necesario en el Hospital de Taiping. La presunta utilización de herramientas de artesanía durante el tumulto tampoco es exacta en absoluto. Se confiscaron raquetas de bádminton, objetos de acero, un extintor y piedras.

25. La Ley 82 de seguridad interna, aprobada por el Parlamento, establece disposiciones al respecto de la seguridad interna de Malasia, la prevención de la subversión, la supresión de la violencia organizada contra personas y bienes en áreas específicas de Malasia, y otros asuntos. La aplicación de la Ley 82 está contemplada en el artículo 149 de la Constitución Federal. La Ley 82 autoriza al Ministro del Interior a ordenar la prisión preventiva (art. 8) y a la policía (art. 73).

26. Los tribunales de Malasia pueden proceder al examen judicial de las órdenes de detención emitidas, en virtud de los artículos 73 y 8 de la Ley 82. En la causa *Mohamed Ezam bin Mohd Noor v. The Inspector General of Police, Malaysia & Others Appeals* [2002] 4 MLJ 449], el Tribunal Federal (la instancia judicial más alta en Malasia) decidió lo siguiente:

"Los términos del artículo 73 1) de la Ley de seguridad interna son objetivos. (*Chng Suan Tze v. The Minister of Home Affairs & Ors* (1981] 1 LNS 162 followed).) En consecuencia, el tribunal está facultado para valorar si el acusado tenía los motivos suficientes y razonables para considerar que existía base jurídica suficiente que justificara su detención en virtud del artículo 8 de la Ley de seguridad interna, y que los recurrentes habían actuado o estaban a punto de actuar o era probable que actuaran de manera perjudicial para la seguridad de Malasia."

27. De acuerdo con el caso anterior, la discreción de la policía en la emisión de órdenes de detención en virtud del artículo 73 de la Ley 82 puede ser objeto de revisión judicial por parte del tribunal. En este sentido, la carga de la prueba recae sobre la policía para demostrar, de modo convincente para el tribunal, que se cumplen los requisitos de la existencia de motivos que justifiquen la detención de una persona en virtud del artículo 73. Con respecto a la orden de detención dictada por el Ministro de conformidad con el

artículo 8 de la Ley 82, el artículo 8 b) establece que las cuestiones de procedimiento de las órdenes de detención estarán sujetas a revisión judicial.

28. En la causa *Abd Malek Hussin v. Borhan Hi Daud & Ors* [200811 CLJ 264], el Tribunal Superior de Malasia en Kuala Lumpur mantuvo que la detención y encarcelamiento del autor de la queja fue ilegal porque: a) el autor nunca fue debidamente informado de los motivos de su detención como exige el artículo 5 3) de la Constitución Federal, b) el primer demandado no aportó al tribunal datos suficientes y pruebas materiales de las actividades del demandante que justificaran su detención y encarcelamiento en virtud del artículo 73 1) de la Ley de seguridad interna, y c) la detención y encarcelamiento fue *mala fide*. También se sostuvo que el primer demandado tiene que aportar pruebas materiales suficientes y datos que muestren el fundamento que le ha llevado a creer que la detención del demandante era necesaria para prevenir una actuación perjudicial para la seguridad de Malasia y, además, que el demandante ha actuado (o es probable que actúe o está a punto de actuar) de una manera perjudicial para la seguridad del país.

29. Las personas detenidas bajo la Ley 82 disponen de varias salvaguardias en virtud de la legislación de Malasia, incluido el derecho a ser informadas de las razones y los motivos de su detención, el derecho a presentar observaciones y el derecho a un abogado. El Gobierno menciona la existencia del mecanismo del Consejo Asesor, compuesto por un Presidente y dos miembros nombrados por el Yang di-Pertuan Agong (Rey de Malasia), en virtud del artículo 151 cláusula 2 de la Constitución Federal. En este sentido, el Presidente de ese Consejo Asesor deberá ser o haber sido magistrado del Tribunal Federal, del Tribunal de Apelación o del Tribunal Superior, o reunir las condiciones para serlo, o haber sido magistrado del Tribunal Supremo antes del Día de Malasia.

30. El artículo 11 de la Ley 82 establece disposiciones sobre las reclamaciones contra las órdenes de detención. El párrafo 1 dispone que se debe entregar a la persona interesada una copia de cada orden dictada por el Ministro en virtud del párrafo 8 1). Dicha persona tendrá derecho a presentar reclamaciones contra la orden a un Consejo Asesor. A los efectos de permitir a una persona presentar reclamaciones en virtud del párrafo 1, el detenido deberá ser informado, en el momento de la notificación de la orden, de su derecho a recurrir ante un Consejo Asesor en virtud del párrafo 1 y se le entregará una declaración por escrito firmada por el Ministro con los motivos que justifican la orden, las alegaciones de los hechos en que se basa la orden, y todos los detalles, si los hubiera, que razonablemente puedan, en opinión del Ministro, ser necesarios para presentar la reclamación contra la orden del Consejo Asesor.

31. Los detenidos tienen también garantizado el derecho a recibir la visita de sus familiares y asesores jurídicos, así como a presentar una petición de hábeas corpus en cualquier momento después de su detención. En virtud del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, el Tribunal Superior podrá, a petición de la persona detenida, ponerla en libertad si considera que ha sido detenida de forma ilegal o indebida.

32. Los detenidos sujetos a las órdenes de detención no permanecen en régimen de incomunicación. El artículo 81 1) de la Ley 82 contiene disposiciones sobre la publicidad de las órdenes, entre ellas que cada vez que se emita una orden o reglamento en virtud de la ley, incluidas las órdenes de detención, el Ministro o la autoridad que emita esa orden o ese reglamento notificará sobre su efecto. Dicha orden, reglamentación, directiva o instrucción tendrá efecto en el momento en que se entregue la notificación, sin necesidad de su publicación en el *Diario Oficial*.

33. Los artículos 73 y 8 de la Ley 82 contienen disposiciones suficientes para asegurar que no se infringen los derechos básicos de las personas en la aplicación de la ley. En este sentido, por ejemplo, el artículo 73 1) establece que las atribuciones de la policía para detener sin orden judicial y encarcelar a cualquier persona están sujetas a su convicción

razonable de que existen motivos que justifican la detención en virtud del artículo 8 de la ley y de que las acciones de la persona detenida son perjudiciales para la seguridad de Malasia. Asimismo, el artículo 8 1) de la Ley 82 establece que el Ministro, antes de emitir una orden de detención, debe estar convencido de que la detención es necesaria para evitar que el detenido actúe de manera perjudicial para Malasia. En este sentido, el Gobierno sostiene que la Ley 82 proporciona una justificación razonable y/o aceptable, así como las garantías adecuadas y el estricto proceso en relación con atribuciones para detener y emitir órdenes de detención.

34. La Ley 82 de seguridad interna pretende velar por la seguridad interna de Malasia, prevenir la subversión, suprimir la violencia organizada contra las personas y los bienes en una zona específica de Malasia, y los asuntos conexos. Dicha ley autoriza la detención preventiva.

35. Aunque el Gobierno reafirma su compromiso en relación con los principios contenidos en diversos tratados internacionales de derechos humanos sobre esta materia, incluido el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, aprobado por la Asamblea General en su resolución 43/173 de 9 de diciembre de 1988, recuerda que el Conjunto de Principios es un texto no vinculante. Además, el Gobierno reitera su adhesión al artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos derechos no son absolutos, tal como se desprende de las restricciones descritas en el artículo 29, párrafo 2, de la Declaración Universal, y del empleo de medidas de excepción por parte del Estado previstas en el artículo 4, párrafo 1, del Pacto Internacional. Así, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permite ciertas restricciones o limitaciones, por lo que si un Estado parte opta por limitar o restringir este derecho dentro de los límites establecidos, ello es admisible y no constituye una violación del derecho en cuestión. Cabe destacar, no obstante, que en términos del compromiso con respecto a esta cuestión, Malasia no está obligada en virtud del artículo 9 del Pacto por no ser todavía un Estado parte en el mismo. Aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos no es un instrumento internacional jurídicamente vinculante, Malasia, como Estado miembro de las Naciones Unidas, se adhiere a sus normas y principios.

36. El Gobierno considera que un Estado debe ser capaz de justificar que la imposición de ciertas limitaciones cumple con los criterios de legalidad, necesidad, razonabilidad y finalidad legítima. La promulgación de la Ley 82 se justifica a la luz de estos criterios y no constituye una violación de los derechos humanos.

37. Por último, el Gobierno señala que el resumen del caso que figura en la comunicación del Grupo de Trabajo no es del todo exacto y no refleja los hechos de forma fidedigna y fehaciente conforme a lo previsto en el mandato del Grupo de Trabajo. La detención y encarcelamiento de los sujetos se llevó a cabo de conformidad con la legislación de Malasia y teniendo en cuenta los requisitos legales, que tienen como objetivo contener a los elementos subversivos y garantizar la seguridad y el orden públicos, la estabilidad y la seguridad del país. El sujeto no está en régimen de incomunicación, como sería normal en otras jurisdicciones diferentes a la de Malasia, y ha tenido a su disposición todos los recursos a que tienen derecho las personas sometidas a órdenes de detención. La aplicación de la Ley 82, por tanto, es válida y justificable habida cuenta de la responsabilidad del Gobierno de prevenir la subversión y proteger la seguridad de la nación y su población. Durante el período de detención, el sujeto, como los demás detenidos, se someterá a programas de rehabilitación con el único propósito de que deje de ser considerado una amenaza para la seguridad del país.

38. El Grupo de Trabajo observa que la fuente y el Gobierno han facilitado la misma información sobre el hecho de que el Sr. Mat Sah bin Mat Satray fue detenido en abril de

2002, y que desde entonces permanece privado de libertad. No se han presentado cargos contra él y no ha tenido acceso de una audiencia justa y pública ante un tribunal independiente e imparcial.

39. El Grupo de Trabajo considera que ninguna persona debe permanecer detenida sin juicio. El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que: "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal". Por lo tanto, una detención llevada a cabo en virtud de la decisión exclusiva de unos agentes de policía y derivada de una orden emitida por una autoridad ejecutiva como el Ministro del Interior, y no por un juez o magistrado, no está en conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos.

40. El Grupo de Trabajo agradece al Gobierno que haya proporcionado, en su respuesta, la información detallada sobre las normas y procedimientos legales en virtud de los cuales se llevaron a la práctica las detenciones, en concreto sobre Ley 82 de seguridad interna. Según el Gobierno, la discrecionalidad del Ministro para emitir órdenes de detención en virtud del artículo 73 de la Ley 82 puede ser objeto de revisión judicial por un tribunal. En este sentido, la carga de la prueba recae en las autoridades ejecutivas, que deben demostrar, a satisfacción del tribunal, que se cumplen los requisitos sobre la existencia de razones suficientes que justifiquen la detención. Según la fuente, los detenidos en virtud de la Ley 82 no disponen de ningún recurso efectivo para impugnar su detención porque la ley impide que los tribunales examinen el fondo de las detenciones realizadas en virtud de dicha ley.

41. El Grupo de Trabajo considera que un control judicial simplemente formal de los requisitos procesales para la detención no puede sustituir el derecho universal de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal independiente e imparcial.

42. El Grupo de Trabajo observa que en virtud de la Ley 82 se puede, simplemente sobre la base de una sospecha, detener a una persona hasta 60 días sin una orden de detención y sin la posibilidad de ser llevada ante un juez, sin acceso a un abogado ni convocatoria a juicio. Cuando finaliza ese plazo de 60 días, el caso del detenido se remite al Ministro del Interior, que puede prorrogar el período de detención por dos años más, y después puede seguir renovándolo indefinidamente. El Sr. Satray ha pasado más de seis años y medio en prisión sin que se le formulen cargos ni sea llevado ante un juez para ser juzgado.

43. El Sr. Satray ha sido acusado de ser miembro de la Jemaah Islamiyyah (JI). Sin embargo, durante los seis años y medio que ya ha pasado en prisión no se han presentado pruebas que sustenten esta acusación. En cambio, se le ha exigido asistir a programas de asesoramiento en los que se le ha alentado a admitir las acusaciones vertidas contra él.

44. En este contexto, el Grupo de Trabajo recuerda la validez universal del principio fundamental de la presunción de inocencia. El Sr. Satray ya ha pasado varios años en la cárcel y las autoridades aún no han demostrado que efectivamente haya participado en alguna actividad ilegal.

45. Tanto la fuente como el Gobierno informan de que los abogados del Sr. Satray presentaron una petición de hábeas corpus en su nombre, que fue rechazada por el Tribunal Superior de Kuala Lumpur en febrero de 2004, y en apelación por el Tribunal Federal en julio de 2004. El Grupo de Trabajo considera que el recurso de hábeas corpus no es un mecanismo eficaz para una detención de las características descritas, ya que no puede sustituir el derecho universal de toda persona sospechosa de la comisión de un delito o

crimen a una audiencia pública y con las debidas garantías ante un tribunal independiente e imparcial.

46. El Grupo de Trabajo considera que se debe conceder al Sr. Satray el recurso a un juicio imparcial de conformidad con las normas internacionales del debido proceso, así como el acceso a una plena representación jurídica.

47. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La detención del Sr. Mat Sah bin Mohammad Satray es arbitraria, pues contraviene los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y corresponde a las categorías I y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

48. Consecuentemente con esta Opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para remediar la situación de esta persona con el fin de ponerla en conformidad con las disposiciones y principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

49. El Grupo de Trabajo recomienda además al Gobierno que considere la posibilidad de estudiar la compatibilidad de la Ley 82 de seguridad interna con los principios y normas internacionales de derechos humanos, y que considere su posible adhesión al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 20 de noviembre de 2008.

### **Opinión N° 33/2008 (Argelia)**

**Comunicación al Gobierno 10 julio de 2008.**

**Relativa al Sr. Mohamed Rahmouni.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya proporcionado información sobre el caso de que se trata cuando tuvo la oportunidad para hacer comentarios.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El Sr. Mohamed Rahmouni, ciudadano argelino, nacido el 12 de noviembre 1980, residente en Bourouba, Argel, fue detenido en Bourouba 18 de julio 2007 a las 7.30 horas, mientras esperaba el autobús para ir a trabajar, por tres agentes del orden, delante de muchos testigos. Los tres agentes que lo detuvieron lo llamaron por su apodo, Samir, presentaron sus documentos oficiales de identificación, pero no la orden de detención, y lo conminaron a que les siguiera.
5. Seis días después, el 24 de julio de 2007, cuatro agentes vestidos de civil y armados realizaron una búsqueda de la casa de Rahmouni. El 29 de julio, 11 días después de la detención, los mismos oficiales regresaron a la casa y exigieron que el hermano y el primo del Sr. Rahmouni, Ali y Fatah, escribieran una declaración en el sentido de que, durante la búsqueda, las autoridades habían encontrado las llaves de un coche Mercedes y un camión de marca JAC. Ahora bien, la familia no posee ninguno de esos dos vehículos.
6. El Sr. Rahmouni ha permanecido detenido durante más de seis meses en régimen de incomunicación y sin contacto con el exterior. Su familia no tenía información alguna sobre las razones de su captura o su lugar de detención.

7. La madre del Sr. Rahmouni decidió presentar una denuncia ante el Fiscal del tribunal de Hussein Dey. Éste la invitó a dirigirse a la comisaría de Bourouba donde la policía se negó a registrar la denuncia y le indicó que el Sr. Rahmouni había pasado a la clandestinidad. Seguidamente, la familia del Sr. Rahmouni presentó una denuncia ante el Fiscal de El Harrach. Desde entonces, la familia del Sr. Rahmouni ha seguido presentando recursos y realizando gestiones en diversas instituciones, pero sin resultados.
8. En noviembre de 2007, el Fiscal del tribunal de Hussein Dey le habría asegurado que el Sr. Rahmouni se encontraba detenido en la prisión de Serkadji. La Sra. Rahmouni fue a esa prisión con su abogado, pero el Sr. Rahmouni tampoco estaba allí.
9. El 26 de enero de 2008, los guardias de la prisión militar de Blida reconocieron finalmente que el Sr. Rahmouni se encontraba en ese establecimiento militar. Se indicó a la Sra. Rahmouni que no se le concedería el derecho de visita hasta que finalizara la instrucción, pero que podía llevar comida y ropa a su hijo.
10. El 19 de febrero de 2008, la madre del Sr. Rahmouni presentó reclamaciones ante el Ministro de Defensa, el Ministro de Justicia, el Comandante de la 1ª región militar de Blida y el Fiscal del Tribunal Militar de Blida con el fin de que se respetase su derecho de visita. Finalmente, el 20 de mayo de 2008 obtuvo ese derecho. Las autoridades militares comunicaron a la Sra. Rahmouni que no podría volver hasta un mes más tarde, aunque en un cartel situado a la entrada se indicaba que las visitas a los reclusos tenían lugar cada 15 días. Según la fuente, esta restricción injustificada del derecho de visita agrava considerablemente la situación mental del recluso y de su madre.
11. En enero de 2008, un oficial de la comisaría de Bourouba comunicó a la Sra. Rahmouni, durante una conversación, que su hijo estaría implicado en un caso de atentado contra la seguridad del Estado. El Código de Justicia Militar establece la competencia de los tribunales militares para juzgar a civiles acusados de esos delitos.
12. Mediante una carta enviada el 4 de mayo de 2008 a la madre del Sr. Rahmouni, el Ministerio de Defensa autorizó al abogado del Sr. Rahmouni a visitar a su cliente. A pesar de esta carta oficial, se denegó al abogado del Sr. Rahmouni el acceso a la prisión, y todavía no ha podido consultar su expediente, lo que le impide preparar su defensa.
13. La fuente añade que en la visita a su hijo del 20 de junio de 2008, la Sra. Rahmouni lo encontró en un estado lamentable: presentaba varias lesiones en la mano y la cara, lo que parecería indicar que el detenido habría sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes en la cárcel.
14. No se ha informado al Sr. Rahmouni de los cargos presentados contra él. A pesar de su condición de civil, será juzgado por un tribunal militar que no es independiente y está directamente subordinado al Poder Ejecutivo.
15. El Sr. Rahmouni no ha podido en ningún momento ejercer su derecho a la asistencia letrada. Según la fuente, las autoridades ya lo consideran culpable, lo que constituye una violación del principio de presunción de inocencia.
16. La fuente concluye que es necesario que el Sr. Rahmouni esté detenido en una prisión civil y que sea juzgado por un tribunal civil para garantizar el respeto de sus derechos y la imparcialidad del juicio. Además, tras 11 meses de detención, aún no se ha juzgado al detenido, lo que constituye un retraso excesivo de acuerdo con el artículo 14 3) c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
17. Según la fuente, la situación de desaparición forzada de esta persona durante más de seis meses y la violación de sus derechos fundamentales es lo suficientemente grave y manifiesta como para considerar que la detención es arbitraria y contraviene lo dispuesto en los artículos 7, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

18. Mediante nota verbal de fecha 14 de julio de 2008, el Gobierno acusó recibo de la comunicación, e informó de que la había transmitido a las autoridades argelinas competentes, sin darle curso. El Grupo de Trabajo reiteró su solicitud de información el 3 de noviembre de 2008 mediante nota verbal, pero no ha obtenido ninguna respuesta.

19. Por lo tanto, de conformidad con el párrafo 16, *in fine*, de los métodos de trabajo del Grupo, una vez cumplido el plazo dado al Gobierno para que presente sus comentarios y observaciones, el Grupo puede emitir una Opinión, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno no ha solicitado un plazo adicional o una prórroga.

20. Por otra parte, esta actitud parece indicar que las alegaciones de la fuente tienen fundamento. Esto significa que el Sr. Rahmouni fue detenido el 18 de julio de 2007 sin orden judicial; permaneció incomunicado durante más de seis meses sin que se le formularan cargos específicos que le permitieran defenderse; sin que tuviera oportunidad de impugnar su privación de libertad; sin contar con asistencia letrada y sin que se lo hiciera comparecer ante un tribunal.

21. Además, el Sr. Rahmouni fue detenido en un centro militar y será juzgado por un tribunal militar, a pesar de su condición de civil.

22. Todos estos elementos, confirmados asimismo por la información de otras organizaciones y periódicos, deben considerarse fehacientes.

23. Habida cuenta de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La privación de libertad del Sr. Mohamed Rahmouni es arbitraria, ya que contraviene lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a las categorías I y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

24. Consecuentemente con la Opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno argelino que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Mohamed Rahmouni conforme a las normas y los principios enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 20 de noviembre de 2008.

### **Opinión N° 34/2008 (República Islámica del Irán)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 23 de mayo de 2008.**

**Relativa a las Sras. Mahvash Sabet y Fariba Kamalabadi; y a los Sres. Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rezaie, Behrouz Tavakkoli y Vahid Tizfahm.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya proporcionado la información solicitada sobre las alegaciones transmitidas, a pesar de las reiteradas invitaciones a hacerlo.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El caso que se resume a continuación se comunicó al Grupo de Trabajo de la siguiente manera: La Sra. Mahvash Sabet, residente en Teherán y Secretaria en funciones del grupo que coordina las actividades de la comunidad bahá'í en la República Islámica del Irán, permanece detenida desde el 5 de marzo de 2008, fecha en que el Ministerio de Inteligencia la convocó en Mashhad. Según la fuente, se pidió a la Sra. Sabet que

respondiera a preguntas relacionadas con el entierro de un individuo en el cementerio bahá'í de Mashhad.

5. La Sra. Fariba Kamalabadi y los Sres. Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rezaie, Behrouz Tavakkoli, de 57 años de edad, y Vahid Tizfahm, seis de los siete miembros del grupo mencionado *supra*, fueron detenidos en sus domicilios y llevados a la prisión de Evin en Teherán en las primeras horas del 14 de mayo de 2008 por agentes del Ministerio de Inteligencia. Sus casas fueron registradas exhaustivamente durante unas cinco horas. No se les ha acusado de ningún delito reconocible.

6. Según la fuente, estas siete personas fueron detenidas únicamente por sus creencias religiosas y por sus actividades pacíficas en nombre de la comunidad bahá'í. El grupo se encarga de la gestión de los asuntos religiosos y administrativos de la comunidad bahá'í en el Irán, en ausencia de la Asamblea Espiritual Nacional del Irán, cuyos nueve miembros fueron secuestrados el 21 de agosto de 1980 y están desaparecidos. Se informó de que, después de este suceso, las autoridades dieron instrucciones a la comunidad bahá'í para que disolviera sus asambleas nacionales y locales, lo que dio lugar a la formación de estos grupos ad hoc.

7. Según la fuente, en Irán los bahá'ís son víctimas de leyes y reglamentos discriminatorios que les niegan la igualdad de derechos en materia de educación, trabajo y nivel de vida digno, al restringirles su acceso al empleo y a prestaciones como las pensiones. No se les permite reunirse, celebrar ceremonias religiosas ni practicar su religión en comunidad. Su fe no está reconocida en la Constitución del Irán.

8. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno de la República Islámica del Irán no haya respondido a las alegaciones transmitidas por el Grupo. El Grupo desea recordar a los gobiernos que si precisan una prórroga del plazo para transmitir sus respuestas deberán solicitarla al menos 90 días antes de la fecha límite e informar de las razones que la motivan. De acuerdo con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo puede conceder un nuevo plazo de dos meses.

9. El Grupo de Trabajo considera que, incluso en ausencia de cualquier información por parte del Gobierno, está en condiciones de emitir una Opinión sobre las detenciones de las personas mencionadas *supra*, de conformidad con el párrafo 16 de sus métodos de trabajo.

10. La Sra. Mahvash Sabet fue detenida el 5 de marzo de 2008, y la Sra. Fariba Kamalabadi y los Sres. Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rezaie, Behrouz Tavakkoli y Vahid Tizfahm fueron detenidos el 14 de mayo de 2008 en Teherán. El común denominador de estas detenciones es que todos los detenidos son líderes activos de la comunidad bahá'í en el Irán. La Sra. Sabet fue trasladada a Mashhad, mientras que el resto fueron llevados a la prisión de Evin, en Teherán, por agentes del Ministerio de Inteligencia.

11. La República Islámica del Irán no reconoce la fe bahá'í como una religión, y sus miembros son a menudo objeto de hostigamiento, intimidación y actos discriminatorios. La fuente ha expresado su profunda preocupación por la discriminación sistemática y el acoso que sufren los bahá'ís del Irán a causa de su religión. El Grupo de Trabajo ha enviado durante la última década varios llamamientos urgentes al Gobierno sobre casos de detención de miembros de esta comunidad.

12. De acuerdo con el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia". El artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que: "1) Toda persona tiene derecho

a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2) Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3) La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 4) Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

13. La privación de la libertad que afecta a estas siete personas constituye una violación de los artículos mencionados de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De conformidad con los métodos del Grupo de Trabajo, la detención de estas personas debería considerarse arbitraria. Estas personas están detenidas únicamente por razón de su religión. Mientras que los cristianos armenios, los judíos y los seguidores de Zoroastro están reconocidos como minorías religiosas en la Constitución iraní y tienen sus propios representantes en el Majlis iraní, no sucede lo mismo con la fe bahá'í.

14. En consecuencia, el caso de la detención de las personas mencionadas *supra* correspondería a la categoría II de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo. La fuente no ha proporcionado nuevos elementos para que el Grupo de Trabajo valore si la privación de libertad de esas siete personas entraría también en las categorías I y III.

15. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La detención de la Sras. Mahvash Sabet y Fariba Kamalabadi, y los Sres. Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rezaie, Behrouz Tavakkoli y Vahid Tizfahm es arbitraria y contraviene los artículos 9, 10 y 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que la República Islámica del Irán es Estado parte, y corresponde a la categoría II de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

16. Consecuentemente con esta Opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que libere inmediata e incondicionalmente a las personas mencionadas *supra*. El Grupo de Trabajo pide además al Gobierno que le informe de las medidas adoptadas en este sentido.

Aprobada el 20 de noviembre de 2008.

## **Opinión N° 35/2008 (Egipto)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 6 de diciembre de 2007.**

**Relativa al Sr. Abdul Kareem Nabil Suliman Amer (también conocido en la comunidad de Internet como Karim Amer).**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado la información solicitada.

3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. A la luz de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió a la fuente la respuesta proporcionada por el Gobierno y estima que está en condiciones de emitir una Opinión sobre los hechos y las circunstancias del caso, tomando como contexto las alegaciones formuladas y la respuesta del Gobierno a las mismas, así como las observaciones de la fuente.
5. Según la fuente, el Sr. Abdul Kareem Nabil Suliman Amer (también conocido en Internet como Karim Amer), escritor egipcio y ex estudiante de la Universidad de al-Azhar, fue detenido en octubre de 2005 a causa de los escritos publicados en su *blog* (karam903.blogspot.com) acerca de los disturbios religiosos que tuvieron lugar ese mismo mes en el distrito de Maharram Bek, en Alejandría. Estos disturbios se produjeron después de que informara de que se estaba proyectando en una iglesia copta de ese distrito un vídeo de una obra considerada antiislámica. El Sr. Amer permaneció detenido 12 días y fue liberado sin cargos.
6. Después de su liberación, la Universidad de Al-Azhar tomó medidas disciplinarias contra el Sr. Amer. Fue despedido en marzo de 2006, tras una decisión de la Junta Disciplinaria de la Universidad, que lo declaró culpable de blasfemia. La Universidad presentó también una denuncia contra él ante el Fiscal del distrito de Maharram Bek. Se exigió al Sr. Amer que compareciera ante el Fiscal, que el 7 de noviembre de 2006 ordenó su detención durante cuatro días.
7. El plazo de detención se prorrogó por un período de 15 días más para permitir que la Fiscalía dispusiera de tiempo suficiente para la investigación. Posteriormente se prorrogó la detención del Sr. Amer en varias ocasiones hasta el 22 de febrero de 2007. Ese día fue condenado a cuatro años de prisión por el Tribunal de Faltas de Maharram Bek en Alejandría, norte de Egipto (causa N° 887 de 2007).
8. El juicio del Sr. Karim Amer tuvo al parecer un carácter de advertencia del Gobierno a otros *bloggers* para que no se atrevieran a criticarlo o a usar sus *blogs* para difundir información considerada perjudicial para la reputación del país. Dada la represión sufrida por los periodistas de los medios convencionales, Internet se ha convertido en un foro cada vez más importante para los egipcios a la hora de emitir opiniones personales y puntos de vista.
9. El Sr. Amer fue condenado a tres años de prisión por el primer delito y a un año de prisión por el segundo. Las condenas se basaron en los artículos 171, 176 y 179 del Código Penal egipcio. El 12 de marzo de 2007, el Tribunal de Apelación confirmó la condena.
10. El 21 de abril de 2007 el Sr. Amer llevó el caso ante el Tribunal de Casación, y el 12 de mayo de 2007 los abogados defensores hicieron público su memorando ante el Tribunal de Casación. El tribunal aún no ha fijado fecha de audiencia. Según los abogados defensores, el Tribunal de Casación no tiene la obligación de hacerlo dentro de un plazo determinado.
11. El 4 de marzo de 2007 el Director de la prisión Borg al-Arab de Alejandría ordenó que se pusiera al Sr. Amer en régimen de aislamiento. Tras una visita a la prisión por parte de la Fiscalía de Alejandría el 8 de mayo de 2007, se volvió a poner al Sr. Karim Amer con los otros prisioneros. Actualmente está cumpliendo su pena de prisión de cuatro años. Su madre y uno de sus dos hermanos fueron autorizados a visitarlo en una ocasión.
12. El 24 de octubre de 2007 un guardia de la prisión y un preso, que actuaban bajo la supervisión de un funcionario de investigaciones de la prisión, propinaron al Sr. Amer puñetazos y patadas. Como consecuencia de los golpes, sufrió la rotura del canino superior derecho y numerosas contusiones. Esto sucedió después de que el Sr. Amer desvelara

algunos actos de corrupción en la cárcel. Las mismas personas, siguiendo las órdenes del funcionario de investigaciones de la prisión, lo llevaron a un calabozo de castigo, donde lo esposaron y le ataron las piernas antes de golpearlo nuevamente. Durante este período sólo recibió una comida y una botella de agua al día, y no se le permitió enviar cartas.

13. Posteriormente, los mismos individuos llevaron a su celda a un preso desconocido para el Sr. Karim Amer, y lo desnudaron y golpearon en su presencia. Amenazaron al Sr. Amer con dispensarle el mismo trato que al preso si volvía a inmiscuirse en los asuntos de la cárcel. Después el Sr. Amer fue examinado por el médico de la prisión, que no mencionó en su informe el diente roto. No se permitió al Sr. Amer presentar una queja sobre lo sucedido.

14. Después de ese período en régimen de aislamiento, el Sr. Karim Amer estuvo alojado durante cinco días en una celda individual en la sección de la prisión que normalmente ocupaban los presos peligrosos y con problemas psicológicos. El 7 de noviembre de 2007 se le trasladó de nuevo a la sección de la prisión donde había estado inicialmente y se le alojó en una celda individual. A pesar de lo que marcan en los artículos 126, 127 y 129 del Código Penal, no se abrió ninguna investigación administrativa ni judicial sobre las presuntas torturas sufridas por el Sr. Amer en la cárcel. En la actualidad, sigue siendo objeto de malos tratos y de prácticas discriminatorias por parte de los funcionarios de la prisión.

15. La fuente considera que el Sr. Karim Amer fue detenido únicamente por la expresión pacífica de sus opiniones a través de Internet, en que criticaba a las autoridades de Al-Azhar, así como a personalidades religiosas y al Gobierno. Se convirtió así en el primer *blogger* condenado a una pena de prisión larga por los artículos publicados en su página web.

16. El Gobierno, en su respuesta, informó de que el Sr. Abdul Karim Suliman Amer está alojado en una celda corriente y de conformidad con las normas, y no en régimen de aislamiento. Recibió la visita a la que tenía derecho durante ese período, así como una visita extraordinaria con motivo del cumpleaños del Profeta el 31 de marzo de 2007, además de una visita especial el 3 de abril de 2007 y la visita de su abogado el 17 de abril de 2007.

17. Según la respuesta del Gobierno, el 24 de octubre de 2007 el Sr. Amer se vio involucrado en una pelea a la hora del almuerzo con otro preso, el Sr. Wissam Tal'at Fahmi al-Sayyid, que resultó con lesiones por ambas partes. Se trasladó a los dos presos al hospital de la prisión y se les sometió a un examen médico, el cual estableció que el Sr. Amer había sufrido una contusión en el lado izquierdo de la frente, además de numerosas escoriaciones y contusiones en el pecho, y que necesitaba un tratamiento de menos de 21 días a fin de evitar complicaciones. El examen también estableció que el otro preso había sufrido raspaduras en la parte superior del brazo derecho, la parte posterior del hombro izquierdo y el antebrazo izquierdo. En su declaración, el Sr. Amer no indicó que hubiera sido agredido por guardias o instigado por funcionarios. Se envió a ambos presos a la Fiscalía y se les aplicó una sanción administrativa consistente en ponerles en régimen de aislamiento hasta el 2 de noviembre de 2007. Mediante un juicio *in absentia*, el tribunal dictó una pena de prisión con trabajos de un mes y una fianza de 300 libras egipcias (LE) por cada preso, a la cual ambos se opusieron.

18. Se permitió al Sr. Amer encontrarse con su abogado en la zona de visitas durante un tiempo asignado de conformidad con las normas y reglamentos. La visita no se limitó a tres minutos y ni él ni su abogado formularon objeción alguna sobre la duración tras la misma.

19. La afirmación de que el Sr. Amer fue testigo de la agresión de un guardia a otro preso (a quien no pudo identificar) tras desnudarlo, y que el guardia lo amenazó con el mismo trato, carece de fundamento. El Sr. Amer no ha identificado ni al preso ni al guardia

en cuestión. Por otra parte, se ubicó al Sr. Amer en una habitación de la zona habitual de alojamiento de prisioneros, no en régimen de aislamiento.

20. El médico de la prisión firmó el 10 de febrero de 2008 un informe médico en que aseguraba que los signos vitales del Sr. Amer se situaban dentro de los rangos normales; que el pecho, el corazón y el abdomen estaban clínicamente sanos; y que no había lesiones recientes manifiestas. El dentista redactó un informe médico el 27 de febrero de 2008 en que afirmaba que el preso había perdido cuatro incisivos superiores (12/12) probablemente como resultado de una inflamación crónica de las encías debida a una mala higiene bucal. Todo parecía indicar que el problema venía de lejos, pues no había ninguna señal de daño reciente en los tejidos de la boca ni en la cara ni en la mandíbula. Se entregó al Sr. Amer el informe sobre el incidente con el otro preso, el Sr. Wissam Tal'at. Dicho informe contiene su declaración detallada sobre el incidente y las lesiones que alegó. Se llevó al preso al hospital de la prisión, donde se realizó un informe médico detallado de sus heridas. Este informe no mencionó ningún daño en los dientes del preso, y en su declaración tampoco hizo referencia a esa lesión.

21. El Gobierno añade que el Sr. Amer cumplió anteriormente una sanción por ocasionar disturbios a título individual que le obligó a permanecer en régimen de aislamiento durante tres días, del 27 al 30 abril de 2008. También estuvo en régimen de aislamiento desde el 24 de octubre al 2 de noviembre de 2007 sobre la base de un informe. El artículo 847 del Manual de procedimientos en vigor en las prisiones egipcias establece que un prisionero hallado culpable después de una investigación será castigado con un período en régimen de aislamiento, según lo estipulado en el informe y siempre que no sea superior a 15 días. El Sr. Amer permaneció en régimen de aislamiento menos de 10 días.

22. El Sr. Amer recibió el mismo trato que los demás presos, siempre en el marco de las normas y reglamentos de la prisión. En diversas ocasiones que lo solicitó se le envió al hospital de la prisión y recibió tratamiento, la última vez el 10 de marzo de 2008, a causa de una infección de hongos en la piel. Se le permitió intercambiar correspondencia e introducir en la prisión los libros que le llevaron durante las visitas. Igualmente, se le entregaron los giros postales enviados a su nombre. No se sometió al Sr. Amer a ningún tipo de agresión o tortura.

23. El Gobierno añade que el Sr. Amer fue encarcelado sobre la base de un fallo judicial emitido por un organismo independiente e imparcial, de conformidad con el Código Penal, por haber cometido actos delictivos. Ejerció sus derechos constitucionales durante todo el procedimiento judicial y en todas las etapas del mismo gozó de las garantías jurídicas de un juicio justo, incluido el derecho a disponer de un asesor legal y comunicarse con él, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a recurrir mediante apelación a dos instancias judiciales. No estuvo sujeto, por tanto, a ninguna forma de discriminación.

24. Las instituciones penitenciarias están obligadas a utilizar la fuerza necesaria para mantener el orden. El castigo y el establecimiento de la seguridad están amparados por un marco jurídico que está de acuerdo con los principios internacionales. La Fiscalía es la autoridad competente para vigilar las prácticas de la autoridad administrativa en la gestión de los establecimientos penitenciarios, y también para recibir las quejas de los presos. Lleva a cabo su labor de manera independiente, libre y confidencial.

25. El Gobierno considera que los detalles mencionados en la denuncia carecen de fundamento. El Sr. Amer tuvo un juicio imparcial por un tribunal independiente y disfrutó de todas las garantías de fondo y procesales, de conformidad con los principios del derecho internacional. Fue condenado a un año de prisión por injurias contra el Presidente de la República y a tres años por ofensas contra una religión.

26. Con respecto a la acusación de injurias contra el Presidente de la República, la ley egipcia distingue entre la cobertura de prensa responsable y adecuada de los medios de

comunicación, realizada sobre la base de datos e información, y el uso de la libertad de expresión para dañar el honor y la reputación de personas amparadas por la ley egipcia. La ley tipifica como delito y castiga sólo esta última forma de expresión, de conformidad con la disposición que afirma que los individuos tienen derecho a que la ley les proteja frente a los ataques contra su honra y reputación.

27. Con respecto a la acusación de ofensas a una religión, es necesario distinguir entre la libertad de pensamiento y el derecho a tener una opinión, por una parte, y la libertad de expresar este pensamiento u opinión, por otra. El primero es un derecho absoluto y no puede ser derogado, mientras que la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales y está, por tanto, sujeta a ciertas restricciones, aunque sólo a aquellas previstas en la ley y que sean necesarias para garantizar el respeto a los derechos y la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o bien la salud o la moral públicas. Existen numerosos documentos de Naciones Unidas referidos a estos derechos y responsabilidades. La libertad de expresión debe estar limitada en algunos casos con el fin de proteger la libertad de creencias y evitar la incitación al odio y la discriminación contra un grupo de personas. Con el fin de no discriminar a ningún ciudadano por razón de su credo, la ley egipcia penaliza las ofensas contra cualquier religión o creencia que sean particularmente santas para un grupo de ciudadanos. El Sr. Amer no presentó ninguna queja en este sentido a la Fiscalía, que es el organismo competente a nivel nacional para recibir e investigar las denuncias en este ámbito.

28. Después de la presentación inicial del caso, la fuente proporcionó al Grupo de Trabajo información actualizada según la cual el Sr. Amer presentó una denuncia ante el Fiscal referida a los malos tratos que sufrió el 24 de octubre de 2007 en la prisión de Borg al-Arab. La denuncia se registró en la Fiscalía General con el N° 18564 de fecha 14 de noviembre de 2007. Se envió ese mismo día a los fines de su investigación por el Fiscal de Alejandría con el N° 15005, y se presentó ante la Fiscalía de Alejandría con el N° 712 el 21 de noviembre de 2007. A continuación se registró en la Fiscalía de Alejandría occidental con el N° 5003 el 24 de noviembre de 2007. Hasta la fecha, sin embargo, la Fiscalía General todavía no ha llevado a cabo una investigación oficial de la denuncia. La dirección de la prisión Borg al-Arab abrió su propia investigación administrativa y concluyó que el Sr. Amer y el preso que presuntamente le golpeó eran en realidad responsables de agredir a otro preso.

29. El 19 de marzo de 2008, el Tribunal de Faltas de Borg al-Arab en Alejandría absolvió al Sr. Amer de la acusación de agredir a un preso. El otro preso acusado junto con él fue condenado a un mes adicional de prisión.

30. El Grupo de Trabajo considera que, de acuerdo con la información recibida, Internet se ha convertido en un foro cada vez más importante para los egipcios a la hora de emitir opiniones personales y puntos de vista. El caso del Sr. Amer es el primero en el que se ha condenado a un *blogger* a una pena de prisión por el material que publicó. En sus informes anteriores, el Grupo de Trabajo ha indicado ya que la libertad de difundir información por Internet está protegida por el derecho internacional de la misma manera que cualquier otra forma de expresión de opiniones, ideas o convicciones. Cualquier restricción al ejercicio de la libertad de opinión y de expresión que no cumpla con las condiciones prescritas por el derecho internacional se considera arbitraria y por lo tanto ilegal (E/CN.4/2006/7, párr. 39).

31. El artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación"; y que: "Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques". Sin embargo, este artículo no establece que la violación de la intimidad, el honor o la reputación constituya un delito o una infracción penal que deban ser castigados con una sanción penal.

32. Está claramente establecido en la normativa internacional de derechos humanos que los funcionarios públicos deben observar una mayor tolerancia ante las críticas que los particulares. El Grupo de Trabajo observa que el artículo 17 antes citado no permite concluir que una persona con una posición política o prominente en la sociedad deba gozar, en su desempeño institucional, de una mayor protección en relación con su vida privada, su honor o su reputación que un particular anónimo. Por el contrario, las leyes contra la difamación no deben proporcionar una protección especial a los Jefes de Estado, Presidentes de la República u otras figuras políticas de alto nivel.

33. Es particularmente inapropiado invocar el derecho penal en el caso de una supuesta difamación contra funcionarios públicos, pues sería de esperar de estos una mayor tolerancia a las críticas que los ciudadanos particulares. El derecho penal tiene un efecto inhibitorio sobre el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión en los debates sobre asuntos de interés público. El ejercicio de esta libertad como parte de los principios y fundamentos del sistema democrático de gobierno implica el derecho a criticar libremente a los políticos, los funcionarios públicos y las autoridades y personalidades públicas. El derecho fundamental a la libertad de opinión y de expresión, que está en el centro mismo del sistema de derechos humanos, debe prevalecer cuando se trata de crítica política, incluso cuando esta crítica se centra en las actividades de personas concretas que han asumido altas responsabilidades políticas.

34. Cualquier restricción al ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión debe cumplir con tres premisas de forma simultánea: a) estar prevista en la ley, b) perseguir un objetivo reconocido como legítimo, y c) ser proporcionada respecto al objetivo que se desea alcanzar. El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su párrafo 3 que el ejercicio de este derecho puede estar sujeto a ciertas restricciones cuando se trata de: a) "Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás"; b) garantizar "la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas". Estas restricciones deben ser fijadas por ley, ser necesarias y tener un límite temporal bien definido. Según la información proporcionada por el Gobierno, ninguna de las restricciones mencionadas parece ser plenamente aplicable, en un sentido estricto, al caso del Sr. Amer.

35. Las restricciones a la libertad de opinión y de expresión sólo deben imponerse cuando sean necesarias. En su Observación general N° 22, el Comité de Derechos Humanos consideró que el requisito de necesidad implica que la injerencia concreta en cualquier caso particular debe ser proporcionada respecto al objetivo legítimo que se persigue. En su Observación general N° 10, el Comité estimó que las restricciones impuestas al ejercicio de la libertad de expresión no pueden poner en peligro el ejercicio de este derecho. Debe observarse estrictamente y en todos los casos el principio de proporcionalidad.

36. En su informe al Consejo de Derechos Humanos presentado en 2007 (A/HRC/4/27, párr. 12), el Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Ambeyi Ligabo, señaló, como una tendencia positiva, la adopción por un número creciente de países de una legislación relativa a la despenalización de los cargos de difamación, calumnias y libelo. Sin embargo, la lentitud en esta tendencia muestra de forma cruda la dificultad a la hora de abandonar los hábitos nocivos relacionados con la preservación de la influencia política y económica. El Grupo de Trabajo coincide con el Relator Especial en su afirmación de que "la imposición de penas de prisión y multas desproporcionadas debería quedar totalmente excluida en delitos como la difamación" (ibíd., párr. 48). Estos delitos deben ser tratados conforme al derecho civil, no al penal. En Opinión del Grupo de Trabajo, se deben excluir en estos casos las penas de prisión.

37. La condena de periodistas o *bloggers* a penas severas de prisión por cargos de difamación o por insultar a las autoridades del Estado parece desproporcionada y afecta

gravemente a la libertad de opinión y de expresión. Como señaló el Relator Especial, la disponibilidad universal de nuevas herramientas de comunicación e información, entre ellas Internet, puede dar un gran impulso al progreso social y a la difusión del conocimiento, ampliando así el alcance de este derecho fundamental.

38. El Grupo de Trabajo reitera que no hay contradicción entre la libertad de opinión y de expresión y la libertad de religión, pues ambas se refuerzan mutuamente. Los derechos a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión deben coexistir con el derecho a la libertad de opinión y de expresión, en el sentido de que ciertas creencias no pueden limitar el derecho de las personas con otras creencias u opiniones a expresar sus ideas y puntos de vista. La difamación de las religiones puede ofender a las personas y herir sus sentimientos, pero no da directamente como resultado una violación de su derecho a la libertad de religión. El derecho internacional no permite restricciones a la expresión de opiniones o creencias que difieran de aquellas consideradas mayoritarias entre la población o de aquella que prescribe el Estado.

39. A este respecto, la Relatora Especial sobre la libertad de religión o de creencias, Asma Jahangir, afirmó en su informe de 2006 (A/HRC/2/3, párr. 38) que: "El derecho a la libertad de religión o de creencias protege principalmente los derechos de la persona y, en cierta medida, los derechos colectivos de la comunidad del caso, pero no protege a las religiones ni las creencias en sí". Siguiendo el espíritu del artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se debería despenalizar la blasfemia como insulto a una religión y, en cambio, se deberían penalizar las exhortaciones al odio, la discriminación o la violencia contra un grupo determinado de personas. Más que una religión, lo que debería ser objeto de protección por parte de la ley, los jueces y los fiscales es la libertad de religión o de creencias.

40. El Grupo de Trabajo considera que el Sr. Amer ha sido condenado por sus críticas en Internet y por el ejercicio de sus derechos a la libertad de opinión y de expresión.

41. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La privación de libertad del Sr. Abdul Kareem Nabil Suliman Amer es arbitraria, pues contraviene los artículos 9, 10 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 10, 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría II de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

42. Consecuentemente con esta Opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para remediar la situación con el fin de ponerla en conformidad con las disposiciones y principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 20 de noviembre de 2008.

### **Opinión N° 36/2008 (Arabia Saudita)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 12 de junio de 2008.**

**Relativa al Dr. Said b. Mubarek b. Zair.**

**El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado la información referida a las alegaciones de la fuente.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)

4. Según la fuente, el Dr. Said b. Mubarek b. Zair (en adelante, el Dr. b. Zair), de 58 años, profesor de Ciencias de la Información en la Universidad de Riad y personalidad bien conocida por su posición abierta a favor de las reformas institucionales en el país y por su apoyo al llamado Movimiento de la Reforma, fue detenido el 6 de junio de 2007 en Riad por agentes de los servicios de inteligencia.
5. Inicialmente el Dr. b. Zair estuvo en la prisión de Al Aicha, y luego se le trasladó a un lugar desconocido, donde permanece en detención secreta. No se ha informado a su familia acerca de su paradero actual.
6. Se informó además de que el Dr. b. Zair había sido detenido y encarcelado varias veces antes sin condena ni actuaciones judiciales. Durante los más de diez años en que permaneció detenido experimentó condiciones especialmente difíciles. En ese tiempo nunca tuvo acceso a un abogado o a visitas familiares. El Dr. b. Zair estuvo en prisión desde el 5 de marzo de 1995 hasta el 24 de marzo de 2003, y fue nuevamente detenido el 20 de abril de 2004 por conceder una entrevista a la cadena de televisión por satélite Al Yazira. El 19 de septiembre de 2004 fue condenado a cinco años de prisión tras un proceso judicial en que presuntamente no se respetaron las garantías mínimas de un juicio imparcial. No se le permitió tener un abogado defensor ni consultar los expedientes judiciales que contenían los cargos en su contra. El 8 de abril de 2005 fue puesto en libertad después de un decreto real de amnistía promulgado en esa fecha (véase la Opinión N° 22/2005 (Arabia Saudita), aprobada el 29 de agosto de 2005 (E/CN.4/2006/7/Add.1, pág. 74)). Estas detenciones sucesivas, según se informa, han afectado seriamente su salud.
7. La fuente considera que el Dr. b. Zair permanece en prisión sólo por expresar sus puntos de vista e ideas políticas. Está en detención secreta sin que se le haya acusado de un delito concreto y sin acceso a un abogado defensor ni a sus familiares; tampoco se le ha llevado ante un juez. Su detención no sólo contraviene los artículos 9, 10 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino también los artículos 2 y 4 del Real decreto N° M.39 sobre los derechos de los detenidos.
8. En su respuesta, el Gobierno indica que la persona en cuestión se encuentra actualmente detenida sobre la base de la información puesta de manifiesto durante una investigación y que dio motivos para creer que:
  - a) Apoyó y participó en actos de terrorismo cometidos en el Reino;
  - b) Ocultó información importante sobre algunos de los autores del intento de atentado contra instalaciones petroleras;
  - c) Contribuyó con cierta suma de dinero a financiar el atentado contra la refinería de petróleo de Abqaiq;
  - d) Ayudó a personas que participaron en los disturbios que tuvieron lugar en zonas conflictivas;
  - e) Expresó la opinión de que existía la obligación de combatir en el Iraq.
9. Desde su detención, se ha tratado al Dr. b. Zair de acuerdo con las normas jurídicas en vigor en la Arabia Saudita. Está recibiendo la atención social y sanitaria precisa, y se le permitió salir de la prisión por un período de tres días para recibir las condolencias tras la muerte de su hijo en un accidente de tráfico. También se ha autorizado a su familia a visitarle en la cárcel.
10. En su respuesta, el Gobierno no proporciona información suficiente sobre los principales elementos de hecho relacionados con el caso, es decir, sobre la participación del Dr. b. Zair en los hechos que se le atribuyen y sobre los cargos y acusaciones en su contra.

11. En su comentario a la información proporcionada por el Gobierno, la fuente destacó que el Dr. b. Zair permanece en detención secreta, que nunca ha tenido acceso a un abogado o a cualquier persona del mundo exterior y que no ha podido impugnar la legalidad de su detención. La fuente añade que durante el permiso mencionado por el Gobierno, en el que se reunió con su familia (fue autorizado para asistir al entierro de su hijo, que murió en un accidente), el Dr. b. Zair informó a su familia de que había sido objeto de tortura y malos tratos. Explicó además que los servicios de seguridad le reprocharon su posición política y sus declaraciones públicas en contra de la política de los Estados Unidos de América en la región, y en particular en el Iraq.

12. La fuente insiste en que se mantiene al Dr. b. Zair en detención secreta por razones políticas. Sus familiares están muy preocupados porque no tienen noticias suyas y porque las autoridades se niegan a facilitarles información sobre su lugar de detención o su suerte. Antes de su detención, el Dr. b. Zair sufría ya algunas enfermedades crónicas causadas por sus largos años en prisión.

13. La fuente señala que el Dr. b. Zair ha mantenido siempre posiciones públicas contra el terrorismo y es bien conocido en el mundo árabe por sus declaraciones en contra de cualquier forma de violencia en la actividad política. No obstante, es cierto que condenó en Al Yazira la política de los Estados Unidos de América en la región árabe y las violaciones de derechos humanos en el Iraq.

14. El Grupo de Trabajo observa que, en su respuesta, el Gobierno no explica:

- a) Cuáles son los actos de terrorismo que se imputan o de los que se acusa al Dr. b. Zair;
- b) En qué fechas y lugares se produjeron o se habrían producido dichos actos;
- c) Si los actos causaron o habrían causado heridos o muertos; y
- d) De qué forma ayudó el Dr. b. Zair a cometer actos terroristas, a quién habría ayudado, y si esos actos se cometieron en los hechos.

15. Además, el Gobierno no proporciona información sobre:

- a) Las autoridades que ordenaron la detención;
- b) Si se hizo comparecer al Dr. b. Zair ante una autoridad judicial y, si fue así, cuándo, dónde y ante quién;
- c) Si algún juez intervino durante su detención y, en caso afirmativo, si fue un juez civil o militar;
- d) Si el Dr. b. Zair tuvo acceso a un abogado defensor; y
- e) Si el Dr. b. Zair está cumpliendo una pena de prisión y, de ser así, quién la dictó y cuál es su duración.

16. El Gobierno no aclara si el Dr. b. Zair está en detención secreta y no proporciona información sobre su lugar de reclusión.

17. El Grupo de Trabajo observa que se detuvo al Dr. b. Zair al menos en dos ocasiones por acusaciones similares: la primera durante ocho años, entre el 5 de marzo de 1995 y el 24 de marzo de 2003, y la segunda entre el 20 de abril de 2004 y el 8 de abril de 2005, por conceder una entrevista a la cadena de televisión por satélite Al Yazira. Aunque esta segunda detención se llevó a la atención del Grupo de Trabajo, éste decidió archivar el caso de conformidad con el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo, debido a que el Dr. b. Zair había sido liberado (Opinión N° 22/2005).

18. El Grupo de Trabajo considera que la actual detención del Dr. b. Zair es arbitraria, ya que carece de base legal, o en todo caso el Gobierno no ha proporcionado ninguna información a este respecto. Por lo tanto, su detención corresponde a la categoría I de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

19. No se han formulado cargos contra el Dr. b. Zair ni se lo ha acusado de un delito de naturaleza terrorista ni de ningún otro delito penal concreto. No obstante, se le acusa de haber expresado la opinión de que existía la obligación de combatir en el Iraq. Como resultado, el Dr. b. Zair está sufriendo una situación de privación arbitraria de libertad a causa de sus opiniones políticas, lo cual es contrario al ejercicio de su legítimo derecho a la libertad de opinión y de expresión, según lo establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo considera que su detención también corresponde a la categoría II de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

20. Por último, el hecho de que el Dr. b. Zair: a) no haya sido llevado ante un juez, b) no haya tenido un juicio con las debidas garantías ante un tribunal imparcial e independiente, c) no haya podido impugnar la legalidad de su detención, d) no haya tenido un abogado defensor, y e) haya permanecido en régimen de incomunicación durante más de un año y cinco meses, sitúan su caso en la categoría III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

21. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La detención del Dr. Said b. Mubarek b. Zair contraviene los artículos 9, 10 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y corresponde a las categorías I, II y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

22. Consecuentemente con esta Opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para remediar la situación de esta persona con el fin de ponerla en conformidad con las disposiciones y principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

23. El Grupo de Trabajo alienta al Gobierno a que considere la posibilidad de adherirse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 21 de noviembre de 2008.

### **Opinión N° 37/2008 (Arabia Saudita)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 19 de junio de 2008.**

**Relativa al Sr. Matrouk b. Hais b. Khalif Al-Faleh.**

**El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya proporcionado la información solicitada sobre el caso a pesar de la oportunidad que se le dio de formular observaciones en el plazo de 90 días, y de las reiteradas peticiones al respecto.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El caso se refiere al Dr. Matrouk b. Hais b. Khalif Al-Faleh (en adelante, Dr. Al-Faleh), nacido en Sekaka el 17 de mayo de 1953, ex profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Sa'ud de la Arabia Saudita en Riad y Jefe del Departamento de Ciencias Políticas, actualmente detenido en la prisión de Al Alhayer,

cerca de Riad. Es particularmente conocido por ser el autor de un estudio de amplia difusión en que reclama reformas políticas en el Reino, así como de un artículo publicado en el periódico londinense *Al Qods Al Arabi*. En 2003 perdió temporalmente su puesto en la universidad por escribir esos textos. El Dr. Al-Faleh es miembro de la Comisión Árabe de Derechos Humanos.

5. El caso se comunicó al Grupo de Trabajo de la siguiente manera: el Dr. Al-Faleh fue detenido el 16 de marzo de 2004 en sus oficinas de Riad por agentes del Servicio General de Inteligencia de la Arabia Saudita, que no presentaron la correspondiente orden de detención ni dieron razones que la justificaran.

6. No se dio al Dr. Al-Faleh la oportunidad de ser oído por una autoridad judicial. Tampoco se le formularon cargos ni se le llevó inmediatamente ante un juez. Más tarde, se le pidió que retirara su firma de una carta abierta dirigida en enero de 2003 al Príncipe Heredero Abdellah Ben Abdelaziz y que firmara el compromiso de colaborar con las autoridades antes de realizar cualquier actividad pública. La carta, firmada por 104 intelectuales sauditas, interpelaba al Gobierno sobre varias cuestiones políticas, entre ellas la necesidad de adoptar reformas institucionales exhaustivas con el fin de establecer una monarquía constitucional, fortalecer las relaciones entre los dirigentes y la comunidad, y garantizar la unidad y estabilidad del Reino. El texto señalaba que la falta de libertad de expresión y de reunión fomenta el crecimiento de la intolerancia y el extremismo. El Dr. Al-Faleh se negó a retirar su firma de la carta abierta.

7. Posteriormente, se acusó al Dr. Al-Faleh de los delitos siguientes: propagación de la discordia y la tensión social; incitación e instigación contra el Estado; rebelión contra la autoridad; cuestionamiento de la independencia y equidad del Poder Judicial; celebración de reuniones políticas y atentado contra la unidad nacional. Según la fuente, todos estos cargos son de carácter político.

8. La fuente informa de que el trato dado a los firmantes de la carta abierta fue bastante desigual, y por tanto discriminatorio: a algunos nunca se les reprochó que la hubieran firmado, mientras que a otros se les detuvo y se les puso posteriormente en libertad, tras retirar sus firmas; a algunos, como al Dr. Al-Faleh, se les detuvo y se les acusó formalmente, y a otros se les mantiene arbitrariamente detenidos sin presentarlos ante un juez, sin cargos y sin expectativas claras de ser juzgados en breve. Varios de los detenidos fueron puestos en libertad a condición de que se comprometieran a no firmar otras peticiones y a no hablar en público sobre cuestiones políticas.

9. La fuente informa además de que el Dr. Al-Faleh no dispuso de ningún mecanismo jurídico para impugnar la legalidad de su detención. No existen pruebas de que llevara a cabo acciones que violaran las leyes del Reino o que amenazaran el orden público. La fuente afirma también que la detención de esta persona viola las leyes internas de la Arabia Saudita, en particular el artículo 36 de la Ley básica saudita, que garantiza que ningún ciudadano puede ser detenido sin las garantías del debido proceso, y los artículos 2 y 4 del Real decreto N° M.39 de 16 de octubre de 2001, por no presentar la orden correspondiente en el momento de la detención ni hacer comparecer al detenido ante una autoridad judicial para establecer la legalidad y duración de su detención. El Dr. Al-Faleh fue condenado a cinco años de prisión y puesto en libertad después de 17 meses de detención en virtud de un indulto real.

10. El Dr. Al-Faleh fue detenido nuevamente el 19 de mayo de 2008 en su oficina de la Universidad del Rey Sa'ud por un grupo de aproximadamente 15 policías de uniforme y civiles armados. Fue esposado y conducido fuera de su oficina. Según la fuente, esta nueva detención se debió al poder de representación jurídica que le había conferido el Dr. Abdallah Al Hamed, que estaba cumpliendo una condena de seis meses en la Prisión

General de Buraidah. El Dr. Al-Faleh emitió un informe sobre las malas condiciones de reclusión del Dr. Al Hamed.

11. Desde su nueva detención, no se ha permitido al Dr. Al-Faleh consultar a un juez ni a un abogado. Se encuentra recluso en régimen de incomunicación. No tiene acceso a tratamiento médico, a pesar de ser diabético y tener la hipertensión arterial.

12. A falta de una respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo considera que debe emitir una Opinión de acuerdo con la información puesta a su disposición. El Dr. Al-Faleh fue detenido y arrestado de nuevo, y permanece en régimen de incomunicación, por el ejercicio pacífico de sus derechos de reunión pacífica, asociación y libertad de opinión y de expresión, garantizados en los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como por sus actividades humanitarias en nombre del Dr. Al Hamed.

13. La firma por parte del Dr. Al-Faleh de la carta dirigida al Príncipe Heredero se enmarcaba en el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de opinión y de expresión. Constituyó también un esfuerzo por su parte para participar en el gobierno de su país, mediante la petición a sus autoridades. Su detención está relacionada con sus esfuerzos de petición a su Gobierno, y muestra una violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en virtud de su artículo 21, párrafo 1. La carta era una expresión pacífica de las aspiraciones políticas de los signatarios dentro de los límites legales de las normas internacionales.

14. No se han presentado pruebas de que el Dr. Al-Faleh, que es un conocido intelectual y defensor de los derechos humanos, hiciera otra cosa que expresar sus opiniones de manera pacífica. El Grupo de Trabajo aprobó una Opinión a su favor (Opinión N° 25/2004 (Arabia Saudita)) antes de su nueva detención.

15. No existen pruebas de que el Dr. Al-Fadeh haya ejecutado acciones que violen las leyes de la Arabia Saudita o que amenacen el orden público. Fue detenido por agentes del Servicio General de Inteligencia, y detenido de nuevo por policías uniformados y civiles armados que no presentaron la orden correspondiente.

16. De conformidad con lo anterior, y en ausencia de cualquier información proporcionada por el Gobierno, el Grupo de Trabajo concluye que la detención del Dr. Al-Faleh es arbitraria y corresponde a la categoría I de las aplicadas por el Grupo de Trabajo, ya que no existe una base legal que justifique su detención.

17. La detención del Dr. Al-Faleh también corresponde a la categoría II, ya que la única explicación posible de su detención parece ser el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión a través de la publicación de artículos en periódicos londinenses, la firma de una carta abierta al Príncipe Heredero (firma que se le pidió que retirase) y su intervención humanitaria en nombre del Dr. Al Hamed. El Dr. Al-Faleh permanece en prisión sólo por manifestar pacíficamente opiniones críticas con las políticas del Gobierno y demostrar su solidaridad con un colega encarcelado.

18. El hecho de que los agentes del Servicio General de Inteligencia, los policías uniformados y los civiles armados que detuvieron y volvieron a arrestar al Dr. Al-Faleh no presentaran órdenes de detención ni le informaran de los motivos de su detención; y el hecho de que siga sometido a un régimen de incomunicación y no se le haya llevado ante un juez en el más breve plazo posible ni se le haya dado la oportunidad de impugnar su privación de libertad, son todas circunstancias de tal gravedad que otorgan a su privación de libertad un carácter arbitrario, según a la categoría III de las aplicadas por el Grupo de Trabajo.

19. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La privación de libertad del Dr. Matrouk b. Hais b. Khalif Al-Faleh es arbitraria, pues contraviene lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y corresponde a las categorías I, II y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

20. Consecuentemente con esta Opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para remediar la situación del Dr. Al-Faleh, con el fin de ponerla en conformidad con las disposiciones establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso y el prolongado período de privación de libertad, la reparación adecuada sería su liberación inmediata y la concesión de algún tipo de reparación.

21. El Grupo de Trabajo invita al Gobierno a que considere la posibilidad de adherirse, lo antes posible, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 21 de noviembre de 2008.

### **Opinión N° 38/2008 (Sudán)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 22 de agosto de 2008.**

**Relativa a los Sres. Ishag Al Sanosi Juma, Abdulhai Omer Mohamed Al Kalifa, Al Taieb Abdelaziz Ishag, Mustafa Adam Mohamed Suleiman, Mohamed Abdelnabi Adam, Saber Zakaria Hasan, Hasan Adam Fadel, Adam Ibrahim Al Haj, Jamal Al Deen Issa Al Haj y Abdulmajeed Ali Abdulmajeed.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no le haya proporcionado la información solicitada.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. Según la fuente, los Sres. Ishag Al Sanosi Juma (mayor de 70 años de edad), Abdulhai Omer Mohamed Al Kalifa, Al Taieb Abdelaziz Ishag (nacido el 17 de diciembre de 1989), Mustafa Adam Mohamed Suleiman, Mohamed Abdelnabi Adam, Saber Zakaria Hasan, Hasan Adam Fadel, Adam Ibrahim Al Haj, Jamal Al Deen Issa Al Haj y Abdulmajeed Ali Abdulmajeed fueron declarados culpables y condenados a muerte el 10 de noviembre de 2007 por un tribunal en el distrito de Bahri, en el norte de Jartum, por el asesinato del Sr. Mohamed Taha Mohamed Ahmed. Actualmente se encuentran en el corredor de la muerte en la prisión de Kober, en Jartum.
5. Los 10 acusados son originarios de Darfur y fueron detenidos en Jartum y sus alrededores entre el 9 de septiembre y diciembre de 2006 por los Servicios Nacionales de Seguridad e Inteligencia (NISS) y las fuerzas policiales después de que el Fiscal General creara por decreto un equipo de investigación de alto nivel con representantes del Estado para encargarse del caso. Poco antes, el 6 de septiembre de 2006, se había encontrado en la zona Kalakla de Jartum el cuerpo decapitado del Sr. Mohamed Taha, que según las informaciones recibidas había sido secuestrado por hombres armados la noche anterior. Las autoridades sudanesas manifestaron que encontrarían a los autores.
6. La fuente informa de que las detenciones, llevadas a cabo en respuesta al asesinato del Sr. Mohamed Taha, fundador y editor jefe del diario sudanés *Al Wifaq*, formaban parte de una campaña más amplia de detenciones y encarcelamientos de hombres y mujeres

principalmente originarios de Darfur, la mayoría de ellos de etnia Fur. Según la información proporcionada más tarde por el investigador de la policía judicial, se realizaron un total de 73 detenciones.

7. El 11 de noviembre de 2006, los abogados de la defensa presentaron una solicitud por escrito al Fiscal del Estado de Jartum que estaba al frente del equipo de investigación para reunirse con los acusados. En su respuesta de 22 de noviembre de 2006, el Fiscal rechazó la petición de los abogados sobre la base de que ello podría afectar a la investigación. Los abogados apelaron al Fiscal general para que revocara esta decisión. El 11 de diciembre de 2006, el Fiscal General emitió una decisión en el sentido de que los abogados debían tener acceso a los acusados. En enero de 2007, cuando los acusados ya habían sido trasladados a la sección de prisión preventiva de la cárcel de Kober, los abogados de la defensa finalmente pudieron acceder a algunos de ellos, aunque no a todos.

8. El 21 de noviembre de 2006, el Ministro de Justicia presentó oficialmente los primeros resultados del equipo de investigación, que indicaban que se había identificado a los 28 sospechosos, que permanecerían en prisión, mientras que se pondría en libertad a 41 personas por falta de pruebas. Sin embargo, continuaron las detenciones de ciudadanos de Darfur, lo que incitaba a sospechar que la investigación del asesinato podía estar sirviendo como pretexto para llevar a cabo detenciones de cariz político entre la comunidad de Darfur en Jartum.

9. El 10 de febrero de 2007, el Ministerio de Justicia anunció que había completado la investigación sobre el asesinato. El 28 de febrero de 2007 dio comienzo el juicio, inicialmente contra 19 acusados, todos originarios de Darfur (con mayoría étnica Fur), menos uno. Nueve de ellos, incluidas dos mujeres, de las que una era menor de edad, fueron absueltos y liberados el 27 de agosto de 2007. Al menos uno de los absueltos fue detenido de nuevo y mantenido en régimen de incomunicación por los NISS entre el 21 de octubre de 2007 y el 21 de enero de 2008 por presuntos vínculos con el Ejército de Liberación de Sudán/Abdel Wahed (SLA/AW); sin embargo nunca fue acusado ni juzgado.

10. La acusación se basó casi exclusivamente en las declaraciones de los acusados, obtenidas por la policía durante la investigación previa al juicio. Estas declaraciones se hicieron durante el tiempo, que en algún caso llegó a los cuatro meses, que los detenidos permanecieron en régimen de incomunicación, es decir, sin que pudieran acceder a ellos los abogados defensores ni los familiares, en el Departamento de Pruebas Forenses y el Departamento de Investigaciones Criminales, administrados por la policía, así como en los centros de detención de los Servicios Nacionales de Seguridad e Inteligencia en Jartum.

11. Los 10 acusados revocaron sus confesiones incriminatorias en el tribunal, afirmando que los investigadores les habían obligado a hacer esas confesiones mediante amenazas, intimidación, malos tratos y torturas. Varios de los detenidos informaron de que les había propinado golpes con las manos, mangueras y tubos de plástico. Cinco detenidos declararon que les habían golpeado mientras estaban inmovilizados o suspendidos del techo, y en algunos casos colgados de los pies y cabeza abajo. Según las informaciones recibidas, uno de ellos habría sido atado por los genitales y otro sodomizado con una botella de vidrio. A otro acusado le ocasionaron quemaduras con fuego y electricidad, lo rociaron con gasolina y lo amenazaron con matarlo; fue en ese momento en que habría accedido a decir lo que le exigían sus interrogadores. Algunas de las personas absueltas también confirmaron que se habían visto obligadas a confesar el asesinato siguiendo las órdenes de los investigadores policiales. Dos de los sospechosos liberados informaron de que, después de ser torturados o maltratados, les habían llevado a la oficina del Fiscal. Uno explicó que se presentó ante el Fiscal con sus ropas cubiertas de sangre. Según las informaciones, durante la investigación lo expusieron a los perros de la policía, que lo agredieron y mordieron. Posteriormente no recibió ningún tratamiento médico para curar las heridas que le habían infligido.

12. Cuando empezó el juicio, muchos de los acusados todavía presentaban huellas físicas visibles de las lesiones, así como cicatrices en sus brazos, manos, muslos y hombros producto de las presuntas torturas. Uno de los abogados de la defensa informó de que otros detenidos que más tarde fueron liberados presenciaron las torturas y los malos tratos, pero que no estaban dispuestos a testificar en el tribunal en favor de los acusados por temor a represalias.

13. El 3 de febrero de 2007, después de reunirse con los acusados, los abogados de la defensa presentaron una solicitud ante el Fiscal que dirigía la investigación para que se sometiera a los acusados a un reconocimiento médico sobre la base de que se sospechaba que habían sido objeto de graves torturas. El Fiscal rechazó la petición argumentando que ya no tenía jurisdicción sobre la petición, pues el caso se había transferido al tribunal.

14. El 24 de marzo de 2007, los abogados de la defensa presentaron una solicitud ante el presidente del tribunal para que facilitara la realización de reconocimientos médicos a los acusados por parte de médicos de su elección, citando ejemplos concretos de las graves torturas denunciadas por los acusados y de lesiones que ellos mismos habían observado. El Juez remitió la solicitud al Fiscal que supervisaba la investigación, el cual desestimó las denuncias de tortura, afirmando que la administración de la prisión de Kober, a la que habían sido trasladados los acusados en enero de 2007, no habría aceptado a los acusados si se hubieran quejado de problemas de salud en el momento de su admisión. El equipo de investigación alegó que tenía constancias que demostraban que los acusados se encontraban en un buen estado de salud, pero no aportó ninguna documentación al respecto. Aunque la administración penitenciaria lleva a cabo reconocimientos básicos de forma rutinaria en el momento de la admisión, el objetivo general es dejar constancia del estado general de salud de los detenidos con el fin de evitar cualquier reclamación posterior de malos tratos. El Juez finalmente rechazó la petición de la defensa de realizar reconocimientos médicos sobre la base de que ya se habían hecho durante la etapa del juicio reservada a los alegatos de la Fiscalía. El tribunal no emitió ninguna decisión por escrito. Los abogados defensores realizaron posteriormente varias peticiones verbales para que se realizaran reconocimientos médicos en relación a las denuncias de tortura, pero el Juez las denegó una y otra vez, aduciendo que esas peticiones eran inoportunas en esa etapa del juicio. De este modo, ninguno de los acusados fue examinado nunca por un médico.

15. Algunos de los acusados también declararon que no sabían que estaban confesando ante un juez. Afirmaron que los interrogadores los amenazaron con nuevas torturas si se apartaban de la declaración que se les había dicho que tenían que hacer ante el Juez, o si le contaban que habían sido torturados o maltratados. Algunos informaron de que los obligaron a realizar grabaciones filmadas de las confesiones, que la Fiscalía empezó a presentar al tribunal a partir del 17 de marzo de 2007.

16. A pesar de que todos los acusados se retractaron de sus supuestas confesiones, atestiguando que las habían hecho bajo tortura o malos tratos mientras permanecían en régimen de incomunicación, dichas declaraciones se utilizaron durante el juicio en varias ocasiones, tanto por parte de los investigadores de la policía como del Juez, y se admitieron como prueba. Además, la Fiscalía presentó las grabaciones en vídeo de las declaraciones de los acusados, realizadas durante la investigación previa al juicio, en las que reiteraban su participación en el crimen. La Fiscalía también presentó un DVD que contenía una reconstrucción grabada de los hechos, en la que se mostraba a los acusados interpretando la comisión del delito. La Fiscalía declaró que los acusados habían dado voluntariamente su consentimiento, tanto escrito como filmado, para reconstruir el crimen. Sin embargo, en las grabaciones presentadas al tribunal, tanto de las declaraciones como de la reconstrucción de los hechos, se pudo observar que los acusados a menudo presentaban un aspecto débil y confuso, incluso ensangrentado y abatido. En un caso, un acusado incluso se volvía hacia su

interrogador, que no aparece en pantalla, para pedirle aclaraciones sobre lo que debía decir. También podía apreciarse que los acusados llevaban grilletes en las piernas.

17. Las principales pruebas presentadas por la Fiscalía consistieron en un cuchillo ensangrentado encontrado en el domicilio del primer acusado, una prenda de vestir igualmente ensangrentada usada por la víctima, y algunos documentos presuntamente encontrados durante los registros de las viviendas de varios de los acusados. Un investigador declaró ante el tribunal que un laboratorio forense había analizado la sangre del cuchillo y que el resultado demostraba de forma concluyente que ésta no pertenecía de la víctima. La Fiscalía no presentó ninguna prueba de huellas dactilares en el cuchillo ni ninguna otra prueba que relacionara la presunta arma del delito con los acusados. La Fiscalía admitió que la sangre encontrada en el presunto lugar de los hechos tampoco se correspondía con la de la víctima. No se encontró ninguna otra prueba en el presunto lugar de los hechos que demostrara que el crimen en realidad se había perpetrado allí, ni tampoco que lo habían cometido los acusados. El equipo de investigación atribuyó esta ausencia de pruebas materiales en el lugar de los hechos a la astucia criminal de los acusados, que supuestamente habrían eliminado todos los rastros del delito. Esta afirmación parecía basarse en la presunción de culpabilidad de los acusados, en lugar de establecerla mediante la aportación de pruebas.

18. Entre los documentos incautados en los registros en los domicilios de los acusados figuraba un ejemplar de *Al Wifaq* supuestamente abierto por una página donde se hablaba de forma ofensiva sobre las mujeres de Darfur, así como otros recortes de periódico que explicaban un método de ejecución utilizado en el Iraq que se asemejaba a la forma en que decapitaron al Sr. Mohamed Taha. Otra de las pruebas presentadas por la acusación fue un pedazo de papel escrito a mano que se encontró en la casa del primer acusado y que contenía las expresiones "grupo de asesinato" y "grupo de incendiarios". Además, un testigo de cargo declaró que el vehículo presuntamente utilizado para secuestrar al Sr. Mohamed Taha en la noche de su asesinato había estado en posesión de uno de los acusados. No se presentaron pruebas, sin embargo, de que este acusado participara realmente en el secuestro y posterior asesinato del Sr. Mohamed Taha.

19. Otros factores incidieron negativamente en el derecho de los acusados a un juicio imparcial. Los abogados defensores fueron objeto de amenazas anónimas, y uno de ellos incluso fue detenido, todo ello, al parecer, para tratar de perjudicar el trabajo de la defensa. El 2 de septiembre de 2007, el Sr. Kamal Omar, jefe de la defensa y asesor jurídico del Partido Popular del Congreso (PCP), fue detenido en su domicilio bajo la acusación de difamación. Estuvo recluido en régimen de aislamiento durante una noche, acusado de desacreditar a la policía mediante la difusión de un artículo, publicado en el diario del PCP la semana anterior, en el que daba detalles de las torturas infligidas a los diez acusados en el caso del Sr. Mohamed Taha. El Sr. Kamal Omar fue puesto en libertad sin cargos el 3 de septiembre de 2007 a las 17.00 horas, después de la audiencia de ese día en el juicio del Sr. Mohamed Taha.

20. Los interrogadores supuestamente amenazaron también a algunos de los acusados con detener y agredir sexualmente a sus esposas e hijas. Las mujeres de la familia de varios de ellos fueron, de hecho, detenidas y encarceladas durante varias semanas, entre ellas la esposa embarazada de uno de los acusados. Según se informa, igualmente detuvieron a la madre de otro, a la que desnudaron delante de su hijo, para obligarlo a confesar. Los investigadores negaron este hecho y declararon que habían convocado a la madre del acusado para que tratara de convencer a su hijo, que estaba supuestamente en huelga de hambre, de que comiera.

21. Además, la investigación y el juicio estuvieron sustraídos al análisis y debate público. Desde el inicio de la investigación, las autoridades impusieron a los periódicos y otros medios de comunicación la prohibición de informar sobre la misma, en un claro

intento de evitar que influyeran en el curso de la justicia. Desde el 6 de septiembre de 2006, día en que se encontró el cadáver del Sr. Mohamed Taha, se reinstauró la censura directa y sistemática de la prensa de propiedad privada por parte del NISS, una práctica utilizada para restringir la información independiente sobre cuestiones políticamente delicadas. El 1º de febrero de 2007, tres semanas antes del comienzo del juicio, el Ministro de Justicia impuso una nueva prohibición de publicar crónicas relacionadas con el juicio, que se aplicó a todos los medios de comunicación excepto la agencia estatal SUNA (Agencia Sudanesa de Noticias). Se suspendieron temporalmente los periódicos que publicaron artículos sobre el juicio por asesinato. El 21 de febrero de 2007, el presidente del tribunal se reunió en privado con los periodistas para informarles de la decisión del tribunal de prohibir la presencia en la sala de cualquier medio que no fuera la SUNA. Esta medida estaba en conformidad con el artículo 133 de la Ley de enjuiciamiento criminal de 1991, que permite al tribunal excluir a su entera discreción "al público en general o a cualquiera de los asistentes". El 12 de marzo de 2007, la policía prohibió la entrada al palacio de justicia a periodistas de cuatro periódicos publicados en árabe (*Al Sudani*, *Akhbar Alyoum*, *Al Dar* y *Al Adwa*) y les informó de que no podrían asistir a las sesiones del juicio a menos que presentaran una disculpa por escrito por haber publicado comentarios sobre el juicio. El 27 de marzo de 2007, tras las protestas de numerosos diarios, el presidente del tribunal reconoció a los periódicos el derecho a informar sobre los hechos objetivos del juicio, sin ningún tipo de comentario o análisis independiente. Sin embargo, como nunca se anuló la orden de censura de los contenidos de los periódicos y el NISS siguió practicándola, los periodistas no tenían claro en qué medida podían hacer comentarios sobre el juicio, por lo que en general han pecado de exceso de precaución, para evitar problemas con las autoridades.

22. El 10 de noviembre de 2007, los diez acusados mencionados *supra* fueron condenados a muerte. En su sentencia de noviembre de 2007, el tribunal describió como sólidas las pruebas presentadas por la Fiscalía. El veredicto se basó en gran medida en las declaraciones de los acusados. El resto de pruebas presentadas por la Fiscalía no establecían por sí mismas la culpabilidad de los acusados ni daban veracidad a las declaraciones. El tribunal aceptó implícitamente que las declaraciones se correspondían con la verdad, pero no explicó cómo había llegado a esta conclusión. El Juez no dio ninguna justificación para no investigar las denuncias de tortura y malos tratos formuladas por los demandados.

23. En su fallo de 10 de marzo de 2008, el Tribunal de Apelación confirmó el veredicto del tribunal de primera instancia. Basó su decisión en un precedente judicial de 1975, en el que se determinó que se aceptaba como prueba de peso una confesión seguida de una retractación. Los abogados de la defensa presentaron nuevas apelaciones, pero les preocupa que, dada la naturaleza política del caso, no se llegue nunca a una auténtica revisión del proceso.

24. El Sr. Mohamed Taha generó una gran controversia política como editor de *Al Wifaq*, un periódico en árabe con una tendencia islamista crítica con el Gobierno. En 2005, un grupo islamista llamado Ansar al Sunna presentó una denuncia contra el periódico por un artículo publicado en abril de ese año en el que se cuestionaba el linaje del profeta Mahoma. El Sr. Mohamed Taha fue acusado posteriormente de apostasía, detenido, juzgado y finalmente absuelto. Sin embargo, el tribunal le impuso una multa y cerró *Al Wifaq* durante tres meses. En respuesta a la publicación del artículo, algunos grupos islamistas manifestaron frente al tribunal y pidieron que se condenara al Sr. Mohamed Taha a muerte. El artículo enfureció a los musulmanes de diversas sectas, por lo que después de las protestas que pedían su ejecución, el Sr. Mohamed Taha se disculpó públicamente, declarando que no pretendía insultar al profeta. Otros artículos de *Al Wifaq* despertaron igualmente las protestas de varios grupos, entre ellos del opositor Partido Popular del Congreso (PCP) y de colectivos de Darfur. En enero de 2006, *Al Wifaq* publicó un artículo en el que se cuestionaba la moralidad de las mujeres de Darfur en el contexto de los

informes generalizados sobre violaciones en esta ciudad. Este artículo provocó una demanda por difamación presentada por un colectivo de ciudadanos de Darfur, entre los que se contaban varios de los acusados en el juicio del Sr. Mohamed Taha. El Ministerio de Justicia desestimó la demanda.

25. La Fiscalía argumentó durante el juicio que el asesinato se organizó bien y se planeó durante meses antes de llevarse a cabo. El presunto móvil del asesinato del Sr. Mohamed Taha parece derivar de la indignación de los acusados por un artículo publicado en *Al Wifaq* el 6 de enero de 2006. El artículo restaba importancia a las denuncias generalizadas de violaciones y actos de violencia sexual que tuvieron lugar durante el conflicto de Darfur, y en su lugar ponía en duda la moralidad de las mujeres y las niñas darfurianas. Tras la publicación del artículo, algunos de los acusados y otros habitantes de Darfur indignados presentaron una demanda por difamación contra el Sr. Mohamed Taha, pero el caso fue desestimado más tarde por el Ministro de Justicia. La Fiscalía mencionó la frustración de los acusados a causa de este rechazo como uno de los motivos que llevaron a los acusados a asesinar al Sr. Mohamed Taha. El investigador jefe declaró ante el tribunal que los acusados creían que el Sr. Mohamed Taha había presionado al Ministro de Justicia para que desestimara la denuncia contra él por difamación y que había solicitado la intervención del Vicepresidente de Sudán, después de lo cual los acusados habrían llegado a la conclusión de que el Sr. Mohamed Taha había interferido en su caso. La acusación afirmó que a raíz de esto los acusados empezaron a celebrar reuniones para planificar meticulosamente el asesinato del Sr. Mohamed Taha. Se dice que establecieron una célula secreta para llevar a cabo el plan y participaron en sus actividades. Planearon ejecutar el crimen de una manera particularmente brutal, inspirada en los asesinatos de presuntos infieles cometidos por los movimientos islamistas radicales en el Iraq.

26. La fuente denuncia que la detención de las personas mencionadas *supra* es arbitraria. Considera que su detención, encarcelamiento, enjuiciamiento y condena violó los artículos 6, 7, 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que la República del Sudán es Estado parte, y forman parte de su Carta de Derechos. El artículo 27 3) de la Constitución Provisional de la República del Sudán (2005) afirma que "todos los derechos y libertades consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos, pactos y otros instrumentos ratificados por la República del Sudán serán parte integrante de la presente Carta de Derechos", además de diversas disposiciones de la Ley de enjuiciamiento criminal del Sudán.

27. En particular, el artículo 79 de la Ley de enjuiciamiento criminal del Sudán permite a la policía mantener a una persona detenida por un período de 24 horas para fines de investigación, pero a continuación debe presentarla ante el Ministerio Público. El Fiscal puede prorrogar la detención por un máximo de tres días si la investigación sigue adelante. Si se precisa más tiempo, un magistrado puede prorrogar la detención, no más de dos veces ni de una semana cada vez, dejando siempre constancia de las razones que motivan la prórroga. Si se formulan los cargos a la persona, un magistrado de rango superior podrá ordenar una nueva prórroga de la detención cada semana con fines de investigación. El período de detención no excederá en total de seis meses (excepto con la aprobación de un alto responsable del órgano judicial).

28. De acuerdo con las disposiciones anteriores, se debería haber presentado a los acusados ante el Ministerio Público en los primeros días de su detención. Además, se les debería haber presentado ante un juez como muy tarde 18 días después de su detención; sin embargo esto no se hizo, según se informa, hasta varios meses después de su detención, e incluso entonces fue sólo para grabar las confesiones que habían arrancado mediante tortura u otras formas de malos tratos.

29. Se alega que el Fiscal visitó diariamente a los acusados detenidos, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de enjuiciamiento criminal, aunque varios de ellos negaron tal

afirmación. Si realmente los visitó a diario, parece que no aclaró su función de Fiscal ni el propósito de sus visitas, lo que pone en duda su supervisión de la investigación, así como de las condiciones de la detención.

30. Por otra parte, la Ley de enjuiciamiento criminal define algunos derechos fundamentales de las personas detenidas. El artículo 83, párrafo 3, dispone que "toda persona detenida tendrá derecho a comunicarse con su abogado, así como a reunirse con el Fiscal o el magistrado", aunque no se especifican los plazos ni se estipulan los propósitos. Sin embargo, la mayoría de las disposiciones de la Ley de enjuiciamiento criminal confieren atribuciones a la policía, los investigadores y la judicatura, y reconocen pocos derechos a los sospechosos o a los detenidos. El equipo de investigación manifestó que había acatado la Ley de enjuiciamiento criminal y que había respetado la presunción de inocencia de los acusados.

31. Las disposiciones destinadas a proteger a los detenidos en el ordenamiento jurídico sudanés son muy débiles. La Ley de enjuiciamiento criminal no contiene ninguna disposición sobre la presencia de un abogado en los interrogatorios o el derecho del detenido a la asistencia de un abogado durante los mismos, ni tampoco durante las llamadas "confesiones judiciales", es decir, declaraciones registradas por un juez durante una investigación policial. Aunque el artículo 83, párrafo 3, de la Ley de enjuiciamiento criminal concede a la persona detenida el derecho general a contactar con su abogado, no hay disposiciones que establezcan la frecuencia con que puede entrevistarse con el mismo o que garanticen su derecho a hacerlo de forma confidencial. Por otra parte, no existe ninguna disposición que proteja a los detenidos de la autoincriminación. No obstante, el artículo 60, párrafo 2, de la Ley de enjuiciamiento criminal exige que el juez ante el cual el acusado realiza la confesión confirme que este admite su culpa de forma voluntaria y le lea la confesión antes de la firma.

32. Algunas disposiciones de la legislación del Sudán admiten las pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos durante los procesos judiciales. Sin embargo, los funcionarios que cometan actos de tortura u otros malos tratos pueden ser sancionados de conformidad con el Código Penal. El artículo 89 de dicho Código, que regula la conducta de los funcionarios públicos, establece que la intención de "causar un daño a cualquier persona" se castigará con pena de prisión de hasta dos años o una multa, o con ambas penas. El artículo 90, que regula la conducta de los funcionarios públicos, autorizados por ley "a enviar a personas a juicio o a prisión", establece que se castigará a cualquier funcionario que cometa un acto "a sabiendas de que es contrario a la ley" con una pena de prisión de hasta tres años o una multa.

33. El artículo 81 de la Ley de enjuiciamiento criminal prevé la inspección diaria de los detenidos por el Fiscal, que se encarga de verificar "la validez del procedimiento y el acatamiento de la ley en el trato de las personas detenidas". Al parecer, se había nombrado un fiscal especial de la Oficina de Investigación Criminal para "garantizar que los derechos humanos de los detenidos como parte de la investigación del asesinato de Mohamed Taha se respetaran, y que fueran tratados con dignidad y mantenidos en buenas condiciones", e incluso que se les proporcionara atención médica si lo precisaban. La fuente sostiene, sin embargo, que las denuncias descritas anteriormente arrojan serias dudas sobre el papel del Ministerio Público en la supervisión de los procedimientos de detención.

34. La fuente informa de que hay cierta ambigüedad en la legislación sudanesa sobre la legalidad del uso de la tortura y los malos tratos para obtener pruebas. El artículo 10, párrafo 1, de la Ley de pruebas de 1993 permite explícitamente que se admitan pruebas "obtenidas mediante métodos inadecuados" en los procedimientos judiciales. Sin embargo, el artículo 19, párrafo 1, establece que "toda persona que admite una [responsabilidad] debe estar mentalmente sana [y] con capacidad para elegir". La Ley de enjuiciamiento criminal no excluye explícitamente el uso de la tortura en los interrogatorios, pero el artículo 43,

párrafo 2, establece que: "Ninguna autoridad implicada en la investigación (...) influirá en cualquier parte de la investigación mediante (...) coacción o daño para obligarlo a emitir (...) una declaración o información". El artículo 20, párrafo 1, establece además que "en materia penal, una confesión no será adecuada cuando sea consecuencia de una incitación o coacción", y el artículo 21, párrafo 3, establece que "una confesión no será prueba concluyente si (...) hay dudas sobre su autenticidad". Según los abogados sudaneses, esta disposición permite a los jueces atribuir menos peso a las confesiones obtenidas bajo tortura, y debería impedir que los acusados fueran condenados sobre la base de esas confesiones, en ausencia de otras pruebas más sólidas.

35. Según la fuente, la pena de muerte no está prohibida por el derecho internacional y es legal en el Sudán en los casos de "justo castigo, *hudud*, o pena por delitos extremadamente graves" (artículo 36, párrafo 1, de la Constitución Nacional Provisional), pero la aplicación en el presente caso supondría una violación del derecho a la vida dadas las graves irregularidades cometidas durante el proceso, que ya se han descrito.

36. La imposición de la pena de muerte también tiene implicaciones en cuanto a las condiciones de encarcelamiento de los presos: los presos que están en el corredor de la muerte en el Sudán permanecen en una sección separada de la prisión y están obligados a utilizar grilletes de hierro en las piernas de forma permanente. Están detenidos junto con presos cuyas penas de muerte han sido confirmadas en última instancia y son testigos de cómo se los llevan a ejecución, lo que les provoca una mayor ansiedad sobre su propio destino.

37. Además de las restricciones generales en la imposición de la pena de muerte, el derecho internacional también prohíbe su aplicación a personas menores de 18 años (artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). El artículo 10 promueve la separación entre menores y adultos en los procedimientos judiciales, y el artículo 14, párrafo 4, del Pacto establece que una causa contra un menor tendrá en cuenta la edad del acusado y se desarrollará de manera que favorezca su rehabilitación. El Sudán también es Estado parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la detención arbitraria y la tortura de personas menores de 18 años y establece que en el trato del niño se deberán tener en cuenta "las necesidades de las personas de su edad" (artículo 37 de la Convención).

38. La ley sudanesa limita el uso de la pena de muerte en personas menores de 18 años y mayores de 70. La Constitución Provisional del Sudán establece que la pena capital "no se impondrá a una persona menor de 18 años ni a una que haya cumplido los 70" (art. 36, párrs. 1 y 2). El artículo 47 de la Ley de enjuiciamiento criminal prevé la posibilidad de penas alternativas, sujetas al criterio del tribunal, para "una persona mayor que haya cumplido setenta años de edad". El artículo 193 de la Ley de enjuiciamiento criminal establece lo mismo. La Ley de la infancia de 2004 prohíbe la aplicación de la pena de muerte a los niños (art. 62, párr. d)). El artículo 74, párrafo 1, de la Ley de la infancia establece que un tribunal penal remitirá al menor de edad a "la autoridad competente del tribunal de menores", la cual se pronunciará sobre lo que es más conveniente para el menor. De acuerdo con el artículo 59, párrafo 1, de esta ley, "el tribunal penal no aprobará ninguna sanción o medida condenatoria contra el niño y deberá enviar el expediente a la autoridad competente del Tribunal de Menores para que decida al respecto".

39. A pesar de estas salvaguardias en virtud del derecho nacional e internacional, el tribunal impuso la pena de muerte a dos acusados que deberían haber estado exentos: un hombre de más de 70 años y un menor que, según se cree, tiene 17 años (16 en el momento del crimen). El menor acusado no tenía documentación que probara su edad, pero su familia declaró que nació el 17 de diciembre de 1989 y que su partida de nacimiento se perdió en un incendio de la casa familiar. El investigador de la policía alegó que el acusado tenía 18 años en el momento del crimen. No se sabe que el Fiscal que llevó el caso ni el Juez

hicieran esfuerzos para determinar la edad real del acusado y, en caso de constatar que tenía menos de 18 años, aplicar las disposiciones relativas a menores. En lugar de ello, se juzgó y condenó al acusado en el mismo proceso y ante el mismo tribunal que al resto de acusados.

40. En una nota verbal de fecha 18 de noviembre de 2008, el Gobierno del Sudán solicitó al Grupo de Trabajo una prórroga del plazo de 90 días para responder a las denuncias de la fuente. El Grupo de Trabajo decidió no concederla, no sólo porque no estaba justificada de acuerdo con sus métodos de trabajo, sino por la urgencia de resolver el caso, ya que las personas implicadas habían sido condenadas a muerte. El párrafo 16 de los métodos de trabajo del Grupo le permite conceder a discreción un período adicional para responder de hasta dos meses si el Gobierno así lo desea y si informa al Grupo de las razones que justifican la solicitud de la prórroga. El Gobierno del Sudán, en su solicitud, indicó que todavía había investigaciones en marcha. A pesar de ello, el Grupo de Trabajo considera que el plazo de 90 días para que el Gobierno proporcionara una respuesta era suficiente, y no encuentra razones fundadas en su solicitud que justifiquen la demora en la respuesta a las alegaciones de la fuente, sobre todo cuando está en juego la vida de los diez acusados, como es el caso.

41. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una Opinión sobre los hechos y las circunstancias del caso, a la luz de las denuncias formuladas, a pesar de que el Gobierno no ha ofrecido, dentro del plazo de 90 días, su versión de los hechos ni sus explicaciones sobre las circunstancias del caso.

42. El Grupo de Trabajo considera que las personas a las que se refiere la fuente en su comunicación no han tenido un juicio imparcial y público según lo establecido en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

43. Los diez acusados de asesinar al Sr. Mohamed Taha (Ishag Al Sanosi Juma, Abdulhai Omer Mohamed Al Kalifa, Al Taieb Abdelaziz Ishag, Mustafa Adam Mohamed Suleiman, Mohamed Abdelnabi Adam, Saber Zakaria Hasan, Hasan Adam Fadel, Adam Ibrahim Al Haj, Jamal Al Deen Issa Al Haj, y Abdulmajeed Ali Abdulmajeed) se retractaron de sus confesiones en el tribunal, afirmando que habían sido amenazados, intimidados y sometidos a torturas y malos tratos como medio para obligarlos a realizar, siguiendo las instrucciones de los investigadores, las declaraciones inculpativas. Estas declaraciones se hicieron durante el tiempo que los detenidos permanecieron en régimen de incomunicación, que en algún caso llegó a los cuatro meses, sin que pudieran acceder a ellos los abogados defensores ni los familiares, en el Departamento de Pruebas Forenses y en el Departamento de Investigaciones Criminales, administrados por la policía, así como en los centros de detención de los NISS en Jartum.

44. Se solicitó al Fiscal que dirigía la investigación que sometiera a los acusados a un reconocimiento médico sobre la base de que se sospechaba que habían sido objeto de graves torturas. Sin embargo, el Fiscal y el Juez rechazaron la petición, a pesar de que cuando empezó el juicio muchos de los acusados todavía mostraban huellas físicas visibles de las lesiones, así como cicatrices en brazos, manos, muslos y hombros a raíz de las presuntas torturas.

45. La sentencia que condena a muerte a los acusados se basa exclusivamente en las confesiones realizadas durante su detención en régimen de incomunicación, como se explicó anteriormente. El tribunal no tuvo en cuenta: a) que los acusados se habían retractado de sus confesiones y b) que el Fiscal y el Juez rechazaron la solicitud de un reconocimiento médico.

46. La condena no tuvo en cuenta las pruebas objetivas en favor de los acusados, como el hecho de que los análisis del laboratorio forense no determinaron de forma concluyente que la sangre encontrada en el cuchillo se correspondiera con la de la víctima.

47. Por lo tanto, la violación del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos confirma la arbitrariedad de la privación de libertad de los acusados. El tribunal no ha respetado el derecho de toda persona "a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable", según lo establecido en el artículo 14, párrafo 3, g), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La obtención de pruebas bajo tortura no sólo viola el artículo 7 del Pacto, sino que también constituye una de las más graves violaciones de los derechos humanos. Por esta razón, el Grupo de Trabajo no necesita tener en cuenta la información de contexto proporcionada por la fuente sobre la legislación sudanesa en relación a la legalidad del uso de la tortura y los malos tratos en la obtención de pruebas en forma de confesiones, confesiones que incluso fueron más tarde objeto de una retractación ante un tribunal.

48. Por lo tanto, no se puede mantener ni el veredicto del tribunal que juzgó a los acusados ni su confirmación por el Tribunal de Apelación. Ningún sistema judicial, y aún menos el de un país que el 18 de marzo de 1986 ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, puede considerar como válida una confesión obtenida mediante tortura y objeto de retractación ante un tribunal, ni una condena basada en dicha confesión.

49. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La detención de Ishag Al Sanosi Juma, Abdulhai Omer Mohamed Al Kalifa, Al Taieb Abdelaziz Ishag, Mustafa Adam Mohamed Suleiman, Mohamed Abdelnabi Adam, Saber Zakaria Hasan, Hasan Adam Fadel, Adam Ibrahim Al Haj, Jamal Al Deen Issa Al Haj y Abdulmajeed Ali Abdulmajeed es arbitraria, pues contraviene los artículos 7 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

50. Consecuentemente con estas conclusiones, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para remediar la situación y suspender de inmediato la ejecución de la condenas contra Alshag Al Sanosi Juma, Abdulhai Omer Mohamed Al Kalifa, Al Taieb Abdelaziz Ishag, Mustafa Adam Mohamed Suleiman, Mohamed Abdelnabi Adam, Saber Zakaria Hasan, Hasan Adam Fadel, Adam Ibrahim Al Haj, Jamal Al Deen Issa Al Haj y Abdulmajeed Ali Abdulmajeed. El Grupo de Trabajo pide igualmente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación con el fin de ponerla en conformidad con las disposiciones y principios consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 24 de noviembre de 2008.

### **Opinión N° 39/2008 (República Islámica del Irán)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 10 de junio de 2008.**

**Relativa al Sr. Aziz Pourhamzeh, al Sr. Kamran Aghdasi, al Sr. Fathollah Khatbjavan, al Sr. Pouriya Habibi, a la Sra. Simin Mokhtary, a la Sra. Sima Rahmanian Laghaie, a la Sra. Mina Hamran, a la Sra. Simin Gorji, al Sr. Mohammad Isamel Forouzan, al Sr. Mehrab Hamed, al Sr. Ali Ahmadi, al Sr. Houshang Mohammadabadi, al Sr. Mehraban Farmanbardar y al Sr. Vaheed Zamani Anari.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no le haya proporcionado la información solicitada, a pesar de las reiteradas invitaciones a hacerlo.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)

4. Los casos que se resumen a continuación fueron comunicados al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la siguiente manera.
5. El Sr. Aziz Pourhamzeh y el Sr. Kamran Aghdasi, ambos de Hamadán, y el Sr. Fathollah Khatbjavan, de Mirza Hesari, fueron detenidos el 31 de enero de 2008, después de que agentes de la policía local registraran sus hogares siguiendo órdenes judiciales y confiscaran libros, folletos y discos compactos bahá'ís. Todos ellos son miembros de la comunidad bahá'í y no han sido acusados ni juzgados.
6. El Sr. Pouriya Habibi y la Sra. Simin Mokhtari, de Teherán, fueron detenidos el 27 de enero de 2008 en un parque público después de que unos agentes les registraran y hallaran en su poder un libro de las escrituras bahá'ís y una tarjeta con los datos de un programa de radio bahá'í en lengua persa. Se les acusó de predicar la fe bahá'í y se ordenó su prisión preventiva. Tras dos días tratando de determinar su paradero, sus familias pudieron localizarlos y visitarlos en la prisión de Evin. Las autoridades fijaron una fianza para cada uno, pero cuando los familiares acudieron a la Fiscalía, les dijeron que los presos no podían ser liberados porque el encargado de interrogarlos no había introducido aún sus nombres en el sistema informático. Las mencionadas personas permanecen detenidas.
7. La Sra. Sima Rahmanian Laghaie y la Sra. Mina Amram fueron detenidas el 14 de septiembre de 2005 y liberadas bajo fianza el 2 de octubre de 2005, y la Sra. Simin Gorji fue detenida el 3 de agosto de 2005 y liberada bajo fianza el 17 de septiembre de 2005. El 8 de mayo de 2007, el Tribunal Provincial de Apelaciones de Mazandaran desestimó los recursos de las tres mujeres y las declaró culpables de propaganda en favor de una organización considerada antiislámica. Fueron condenadas a penas de prisión.
8. El Sr. Mohammad Isamel Forouzan, de Abadeh, fue detenido en mayo de 2007, momento en que fue interrogado sobre actividades de enseñanza de la fe bahá'í. El 11 de noviembre de 2007 fue condenado a un año de prisión y diez años de exilio de Abide, por difundir propaganda contra el Gobierno a favor de gobiernos extranjeros. El Sr. Forouzan trató denodadamente de contratar a un abogado, pero no pudo conseguir asistencia letrada. Se le avisó de la fecha de su audiencia de apelación con sólo un día y medio de antelación. Cuando planteó esta cuestión al juez, se le denegó su solicitud de disponer de tiempo adicional y se le transmitió oralmente la condena. No se le permitió ver o recibir una copia de la orden judicial, a pesar de solicitarlo de forma explícita.
9. En septiembre de 2007, el Tribunal de la Provincia de Teherán desestimó el recurso de apelación del Sr. Mehrab Hamed. Se le acusó de difundir propaganda contra el Gobierno mediante la enseñanza de la fe bahá'í. El Sr. Hamed fue condenado a un año de prisión.
10. El 5 de agosto de 2007, el Tribunal Revolucionario de Justicia de Sari condenó al Sr. Ali Ahmadi a penas de prisión. Este es miembro del grupo que coordinaba las actividades de los bahá'ís en Ghaemshahr de manera puntual, y fue acusado de estar involucrado en acciones propagandísticas contra el Gobierno. Las autoridades judiciales se negaron a darle una copia de la sentencia, y sólo le permitieron tomar algunas notas con el fin de presentar un recurso.
11. El Sr. Houshang Mohammadabadi, el Sr. Mehraban Farmanbardar y el Sr. Vaheed Zamani Anari, todos de Karaj, fueron detenidos originalmente el 8 de noviembre de 2005, acusados de difundir propaganda contra el Gobierno, y puestos en libertad bajo fianza un mes más tarde. El 23 de julio de 2007, el tribunal correspondiente desestimó su recurso de apelación. Los tres fueron condenados a un año de prisión.
12. Según la fuente, la detención de estas 14 personas forma parte de los ataques violentos dirigidos contra los miembros de la comunidad bahá'í, sus hogares y bienes, así como los cementerios bahá'ís en todo el país. Estas personas han sido detenidas únicamente

sobre la base de su fe religiosa. La fuente denuncia su detención como una forma de hostigamiento a toda la comunidad bahá'í.

13. A la luz de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo habría acogido con agrado la cooperación del Gobierno. No obstante, considera que está en condiciones de emitir una Opinión sobre la base de la información señalada a su atención.

14. El Grupo de Trabajo asigna gran importancia a la índole de su procedimiento, contencioso y basado en el contraste de las posiciones de las partes; por consiguiente, considera muy importante disponer de la cooperación de los gobiernos para dar respuesta a las alegaciones que se le someten, tanto respecto de los hechos como de la legislación aplicable. Después de 146 días sin recibir ningún tipo de respuesta del Gobierno de la República Islámica del Irán, el Grupo de Trabajo envió un recordatorio mediante nota verbal de fecha 3 de noviembre de 2008, para informar al Gobierno sobre la intención del Grupo de Trabajo de examinar el caso en su 53º período de sesiones. No se recibió respuesta del Gobierno.

15. En este sentido, el Grupo de Trabajo desearía recordar que en otro caso sobre la República Islámica del Irán señalado a su atención, el Gobierno no respondió a sus comunicaciones de fechas 23 de mayo, 22 de agosto y 28 de octubre de 2008, relativas a las denuncias por las detenciones de la Sra. Mahvash Sabet, la Sra. Fariba Kamalabadi, el Sr. Jamaloddin Khanjani, el Sr. Afif Naeimi, el Sr. Saeid Rezaie, el Sr. Behrouz Tavakkoli y el Sr. Vahid Tizfahm, respecto de las cuales el Grupo de Trabajo aprobó su Opinión N° 34/2008 (República Islámica del Irán) el 20 de noviembre de 2008.

16. Después de la comunicación de estos casos al Gobierno, el Grupo de Trabajo recibió información sobre una nueva oleada de detenciones y encarcelamientos de miembros de la comunidad bahá'í de Irán en Shiraz, Hamadán, Isfahán, Teherán y otras ciudades y provincias. Estas detenciones parecen responder a un cuadro de hostigamiento, intimidación, expulsiones de universidades, confiscación de bienes e incluso persecución.

17. El Grupo de Trabajo observa que la detención y el encarcelamiento de miembros de la comunidad bahá'í en Irán parecen ser cada vez más frecuentes y estar adquiriendo un carácter sistemático. Se está deteniendo a estas personas únicamente por practicar su fe religiosa. La libertad de religión es un derecho fundamental reconocido tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

18. El Grupo de Trabajo observa además que no se ha acusado a algunas de estas personas de ningún delito común, y que no se han establecido las fechas de sus juicios. Muchas de ellas permanecen incomunicadas y no se les ha permitido designar un representante legal.

19. En otros casos, se les condenó después de juicios que no reunían las garantías de imparcialidad establecidas por el derecho internacional. Algunas de estas personas fueron obligadas a pagar cantidades considerables de dinero en concepto de fianza, o a entregar al tribunal como depósito escrituras de propiedades por valor de varios cientos de millones de riales, así como licencias de trabajo o de empresas.

20. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La privación de libertad del Sr. Aziz Pourhamzeh, el Sr. Kamran Aghdasi, el Sr. Fathollah Khatbjavan, el Sr. Pouriya Habibi, la Sra. Simin Mokhtary, la Sra. Sima Rahmanian Laghaie, la Sra. Mina Hamran, la Sra. Simin Gorji, el Sr. Mohammad Isamel Forouzan, el Sr. Mehrab Hamed, el Sr. Ali Ahmadi, el Sr. Houshang Mohammadabadi, el Sr. Mehraban Farmanbardar y el Sr. Vaheed Zamani Anari es arbitraria, pues contraviene los artículos 9, 10 y 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 18 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que la República Islámica del Irán es Estado parte, y corresponde a las categorías II y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

21. Consecuentemente con esta Opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para remediar la situación de estas personas y la ponga en conformidad con las disposiciones consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

22. El Grupo de Trabajo reitera al Gobierno su solicitud de recibir una mayor cooperación a través de la respuesta oportuna a las denuncias que se le comunican.

Aprobada el 24 de noviembre de 2008.

### **Opinión N° 40/2008 (Yemen)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 11 de junio de 2008.**

**Relativa al Sr. Abdeladhim Ali Abdeljalil Al-Hattar.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo agradece la respuesta del Gobierno a las alegaciones que le comunicó.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El caso se comunicó al Grupo de Trabajo de la siguiente manera: el Sr. Abdeljalil Ali Abdeladhim Al-Hattar (en adelante, el Sr. Al-Hattar), ciudadano de Yemen nacido en 1982 y residente en Saná, es imán en la mezquita de Al-Haramayn, en Al-Asbahi, Saná. El 14 de diciembre de 2007 fue detenido en la mezquita por agentes de al-Amn al-Siyassi, los Servicios de Seguridad Política, y llevado a un lugar no revelado. No se le mostró una orden de detención ni se le informó de las razones y el fundamento jurídico de la misma.
5. El Sr. Al-Hattar estuvo incomunicado en dependencias policiales durante los primeros tres meses después de su detención. Actualmente permanece en prisión sin que se le haya acusado formalmente de un delito, sin información de ningún tipo sobre el procedimiento incoado contra él o sobre el fundamento jurídico de su detención; sin acceso a un abogado; y sin la posibilidad de impugnar la legalidad de su detención ante una autoridad judicial o de otro tipo. Los padres del Sr. Al-Hattar han pedido a las autoridades que liberen a su hijo, pero no han recibido respuesta.
6. La fuente añade que la Constitución del Yemen estipula que toda persona acusada de un delito debe ser llevada ante un juez dentro de las 24 horas posteriores a su detención. El artículo 73 del Código de Procedimiento Penal del Yemen (Ley N° 31 de 1994) establece que se debe informar inmediatamente a toda persona detenida de las razones de su detención; se le debe mostrar la orden de detención; se le debe permitir ponerse en contacto con cualquier persona que desee para informarle de su detención; y se le debe permitir contactar con un abogado. Según la fuente, en el caso del Sr. Al-Hattar no se ha respetado ninguna de estas garantías, por lo que su detención carece de cualquier justificación válida según la legislación del Yemen.
7. En su respuesta de fecha 19 de noviembre de 2008, el Gobierno informó de que el Sr. Al-Hattar fue detenido en Yemen por sus actividades contra la ley y la seguridad, que fueron clasificadas como actos terroristas. Su detención no es arbitraria, ya que la persona está localizable; nunca ha estado en situación de desaparecida y se encuentra actualmente sujeta a los procedimientos jurídicos normales.

8. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno no ha desmentido las principales alegaciones de la fuente, lo cual implica una aceptación tácita de su veracidad.

9. En consecuencia, el Grupo de Trabajo constata que se detuvo al Sr. Al-Hattar sin una orden judicial válida, se le mantuvo en régimen de incomunicación durante tres meses, y no se le notificaron las razones de su detención. El Grupo de Trabajo también toma nota de que no se ha llevado al Sr. Al-Hattar ante un juez y no se le ha acusado formalmente ni se le ha atribuido ningún delito concreto.

10. El Grupo de Trabajo constata además que no se ha permitido al Sr. Al-Hattar consultar con un abogado defensor. Permanece detenido en las instalaciones de los Servicios de Seguridad Política, sin la posibilidad de impugnar la legalidad de su detención y sin ser llevado ante un tribunal independiente e imparcial.

11. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La detención del Sr. Abdeljalil Abdeladhim Ali Al-Hattar es arbitraria, pues contraviene los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a las categorías I y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

12. Consecuentemente con estas conclusiones, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Al-Hattar, bien para proceder a su inmediata puesta en libertad o, en caso de que existan cargos suficientes contra él, para llevarlo ante un tribunal independiente e imparcial a la mayor brevedad, de conformidad con los principios y normas consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 24 de noviembre de 2008.

### **Opinión N° 41/2008 (Indonesia)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 8 de julio de 2008.**

**Relativa a los Sres. Johan Teterisa, Ruben Saiya, Romanus Basteran, Daniel Malwauw, Fredi Akihary, Abraham Saiya, Jefta Saiya, Alexander Tanate, Yusup Sapakoli, Josias Sinay, Agustinus Abraham Apono, Piter Patiasina, Stevanus Tahapary, Jhordan Saiya, Daniel Akchary, Baree Manuputty, Izaak Saimima, Erw Samual Lesnusa, Renol Ngarbinan, Soni Bonseran, Ferdinan Waas, Samual Hendrik, Apner Litamahaputty, Philip Malwauw, Alex Malwauw, Marlon Pattiwael, Jhon Saranamual, Yacob Supusepa, Jhonatan Riri, Petrus Rahayaan, Elias Sinay, Piter Latumahina, Johan Apono, Domingus Salamena y Deni de Fretes.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado información sobre las alegaciones de la fuente.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. A la luz de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta facilitada por el Gobierno a la fuente, pero no ha recibido sus comentarios.
5. El caso se refiere a la detención y encarcelamiento de las 35 personas siguientes: Johan Teterisa, de 46 años, maestro de escuela, Ruben Saiya, Romanus Basteran, Daniel

Malwauw, Fredi Akihary, Abraham Saiya, Jefta Saiya, Alexander Tanate, Yusup Sapakoli, Josias Sinay, Agustinus Abraham Apono, Piter Patiasina, Stevanus Tahapary, Jhordan Saiya, Daniel Akchary, Baree Manuputty, Izaak Saimima, Erw Samuel Lesnusa, Renol Ngarbinan, Soni Bonseran, Ferdinan Waas, Samuel Hendrik, Apner Litamahaputty, Philip Malwauw, Alex Malwauw, Marlon Pattiwael, Jhon Saranamual, Yacob Supusepa, Jhonatan Riri, Petrus Rahayaan, Elias Sinay, Piter Latumahina, Johanes Apono, Domingus Salamena y Deni de Fretes.

6. Según se informó, el 29 de junio de 2007 un grupo de bailarines de las Molucas (alifuru), con edades comprendidas entre los 19 y los 49 años, ejecutaron, a pesar de las estrictas medidas de seguridad, una danza de guerra tradicional de los alifuru frente al Presidente de la República en Ambon, capital de la provincia de las Molucas, durante una ceremonia oficial de celebración del Día Nacional de la Familia. La danza no estaba en el programa y empezó durante el discurso del Gobernador de las Molucas, Karel Albert Ralahalu. La danza era una forma de protesta pacífica, y cuando acabaron desplegaron frente al escenario donde estaba sentado el Presidente una bandera de la República de las Molucas del Sur (RMS), entidad proscrita. La protesta, que duró menos de cinco minutos, se grabó y televisó a nivel nacional.

7. Agentes del Destacamento 88 de la unidad policial de lucha contra el terrorismo detuvieron inmediatamente a los bailarines alifuru y a otras personas; los interrogaron con severidad, los golpearon e incluso los torturaron. El 1º de julio de 2007 en los medios de comunicación de Indonesia se citaron las declaraciones de un jefe militar en las que manifestaba que el incidente había puesto públicamente en evidencia a la Agencia Nacional de Inteligencia (BIN), que había sido incapaz de prevenir la protesta realizada durante la ceremonia oficial. Según se informó también, se destituyó a autoridades militares provinciales y al jefe de la policía de las Molucas.

8. En marzo de 2008 empezaron en el Tribunal de Distrito de Ambon los juicios contra los bailarines alifuru, que se celebraron a puerta cerrada. Los acusados fueron condenados por los delitos de traición y conspiración contra el Estado, de acuerdo con los artículos 106, 107 y 108 del Código Penal. El Tribunal les impuso penas que iban de diez años de prisión a cadena perpetua. Al Sr. Johan Teterisa se le condenó a cadena perpetua. La sentencia establece que el Sr. Teterisa, como líder de la protesta, había puesto en ridículo al pueblo de Indonesia ante los ojos del mundo. Su condena fue especialmente severa debido a que no mostró ningún remordimiento por su acto. El 3 de abril de 2008 se condenó al Sr. Abraham Saiya a 15 años de cárcel.

9. Según la fuente, estas personas no recibieron asistencia jurídica para su defensa. Muchas de ellas no han presentado recurso por temor a represalias y a condenas severas.

10. Todas estas personas están encarceladas en Lembaga Tahanan Djaksa, situado en Waiheru, isla de Ambon. La fuente muestra su preocupación porque todas siguen siendo víctimas de golpes y torturas en la prisión. También le preocupa que los condenados a penas de prisión de diez años o más serán trasladados a la Kembangan Nusa, una prisión aislada en Java, lejos de sus hogares y familiares.

11. La fuente concluye que se ha detenido, juzgado y condenado a estas personas por una protesta no violenta. Tan sólo hicieron flamear una bandera y no intentaron dañar al Presidente. El Tribunal no tuvo en cuenta que las acciones de estas personas fueron esencialmente no violentas. La fuente considera que una condena a reclusión perpetua es excesiva para un episodio que no puso en peligro la vida de nadie, es decir, que las condenas fueron notablemente desproporcionadas para un acto de desobediencia civil como el suyo.

12. Aunque el Código de Procedimiento Penal limita el período de detención preventiva a un máximo de 61 días y en circunstancias muy específicas, los acusados permanecieron en este régimen más de nueve meses.

13. El Gobierno, en su respuesta, reconoce los hechos del caso como los presenta la fuente. Afirma, sin embargo, que esta protesta no violenta constituye una violación grave de las leyes nacionales, en particular del Reglamento 77/2007 del Gobierno (03/PIM-MRP/2008) sobre la base de que:

- a) Los bailarines no pidieron permiso para actuar<sup>5</sup>;
- b) El baile y el despliegue de la bandera de la RMS constituyeron una exhibición de símbolos separatistas penalizada según las reglamentaciones antes mencionadas<sup>6</sup>;
- c) Los detenidos, al participar en la danza y desplegar la bandera, amenazaron la seguridad nacional, lo que se corresponde con la definición de "makar" o rebelión;
- d) El acto supuso una vergüenza nacional, ya que se produjo en presencia del Presidente de la República con motivo de un importante evento nacional en Indonesia, a saber, el 14º Día Nacional de la Familia (Harganas).

14. El Gobierno también se refiere a las disposiciones constitucionales y legales que amparan la libertad de opinión y de expresión. Este derecho, sin embargo, no se puede utilizar de tal manera que vaya en detrimento de la Constitución del Estado y de la integridad territorial de Indonesia<sup>7</sup>.

15. El Grupo de Trabajo ha concedido la debida atención a las afirmaciones de la fuente, así como a la respuesta del Gobierno, y considera que se trata de un caso de detención arbitraria enmarcado en las categorías II y III, descritas anteriormente, lo cual se justifica de la siguiente forma.

16. Según coinciden en afirmar todas las fuentes, el acto de bailar y desplegar la bandera de la RMS en una reunión pública se llevó a cabo de manera no violenta y no duró más de cinco minutos. Fue una expresión de puntos de vista y opiniones amparada por las leyes nacionales e internacionales. Sin embargo, estos actos entraron en conflicto con la legislación nacional, es decir, con el Reglamento 77/2007. Se creó entonces una jerarquía implícita de derechos y leyes donde el derecho a la libertad de expresión quedó subordinado al derecho a la protección frente a la desintegración nacional. Los actos de bailar y desplegar una bandera de la RMS fueron interpretados por el Gobierno como una amenaza para la seguridad nacional y una traición, pasando por encima del derecho a la libertad de palabra y expresión. Los jueces no tuvieron en cuenta que estas acciones fueron no violentas.

17. El Grupo de Trabajo ha reiterado a lo largo de su labor que las manifestaciones nacionalistas hechas por medios pacíficos, como la danza en el presente caso, que se inscriben en el marco de la libertad de expresión, están protegidas por los instrumentos internacionales de derechos humanos, y en particular por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que el individuo o los individuos en cuestión no deben ser considerados penalmente responsable

<sup>5</sup> Se debe solicitar permiso en virtud del artículo 510 del Código Penal.

<sup>6</sup> El artículo 6 del Reglamento 77/2007 prohíbe la exhibición de la bandera de la RMS en las Molucas. Las personas que incumplan esta prohibición podrán ser acusadas de rebelión, en virtud de los artículos 106 a 110 del Código Penal.

<sup>7</sup> Ley N° 9 de 1998 sobre libertad de opinión en la esfera pública; Ley N° 40 de 1999, que regula la libertad de prensa.

por el Estado (véase, por ejemplo, la Opinión N° 28/2000 en E/CN.4/2001/14/Add.1, pág. 127; la Opinión N° 7/2001 en E/CN.4/2002/77/Add.1, pág. 50; y la Opinión N° 13/2003 en E/CN.4/2004/3/Add.1, pág. 65).

18. Aunque en los casos presentes se invoca la existencia de una ley relativa a delitos equiparables a la traición, el Grupo de Trabajo considera que la libertad fundamental de expresión manifestada de forma pacífica constituye un derecho reconocido en el plano internacional y aceptado por Indonesia en virtud de las obligaciones jurídicas asumidas. Clasificar estas manifestaciones como una traición a la patria que da lugar a una detención prolongada e incluso a cadena perpetua, así como a una respuesta antiterrorista en nombre de la integridad del Estado, viola los derechos antes citados. Citando un informe anual del Grupo de Trabajo, esto constituye un caso de "aplicación excesiva de la pena de prisión":

"61. (...) el Grupo de Trabajo es plenamente consciente de que los Estados tienen una amplia discrecionalidad al elegir sus políticas penales, por ejemplo al decidir si se atiende mejor al interés público con criterios de inflexibilidad frente al delito o, en cambio, con medidas que suponen otras opciones frente a la detención, las sentencias condicionales y la libertad anticipada condicional. También reconoce que la imposición de una pena de prisión prolongada por un delito que en otro país habría sido castigado con una pena leve o condicional no puede considerarse arbitraria, según las categorías utilizadas por el Grupo de Trabajo al examinar las comunicaciones individuales.

62. Sin embargo, el Grupo de Trabajo no es totalmente indiferente a las políticas de los Estados en relación con la imposición de penas. El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos comienza por enunciar el siguiente principio fundamental: 'Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales'. Los acuerdos regionales de derechos humanos consagran el mismo principio.

63. El Grupo de Trabajo opina que este principio no sólo significa que nadie será privado de su libertad en violación de la ley o de resultados del ejercicio de un derecho fundamental, sino que también exige que los Estados recurran a la privación de libertad sólo en tanto sea necesario para satisfacer una necesidad social apremiante y de forma proporcionada a esa necesidad." (E/CN.4/2006/7).

19. Muchas de las personas a las que se refiere el presente caso estuvieron en prisión preventiva por un período muy superior al máximo de 61 días que, según el Código de Procedimiento Penal, se permite sólo en circunstancias muy específicas. En su respuesta, el Gobierno lo admite al afirmar que: "Desde entonces, muchos de ellos han permanecido en prisión preventiva en Polros Ambon, Molucas y Tantui Ambon, Molucas. Mucho tiempo después de su detención, se siguieron los procedimientos ordinarios"<sup>8</sup>.

20. Las personas detenidas no han tenido un juicio público e imparcial, ni han podido acceder a un abogado. El derecho a un juicio con las debidas garantías es un derecho humano básico, tanto en virtud del derecho nacional como internacional, e incide a la hora de considerar si una persona ha sido víctima de una detención arbitraria. El Gobierno no dio una explicación al respecto ni refutó la alegación de la fuente. La presunción del Grupo de Trabajo es, por tanto, que los juicios no reunieron los mínimos requisitos para ser considerados imparciales.

<sup>8</sup> En la página 2 de la respuesta del Gobierno de Indonesia comunicada el 21 de octubre de 2008 a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra a través de la Misión Permanente.

21. Es pertinente señalar que, en el pasado, el Grupo de Trabajo se ha ocupado de casos similares en relación con los nacionalistas de las Molucas y el derecho a expresar sus creencias y puntos de vista (véase la Opinión N° 11/1999, en E/CN.4/2000/4/Add.1), que se han resuelto considerando las detenciones como arbitrarias según lo establecido en la categoría II. Los casos analizados en la presente Opinión son muestras recientes de que persiste la detención y encarcelamiento sin acceso a un juicio público e imparcial, y sin igualdad ante la ley e igual protección de la ley, como lo demuestra el hecho de que otros manifestantes que participaron en actos similares recibieron un trato diferente.

22. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La detención de los Sres. Johan Teterisa, Ruben Saiya, Romanus Basteran, Daniel Malwauw, Fredi Akihary, Abraham Saiya, Jefta Saiya, Alexander Tanate, Yusup Sapakoli, Josias Sinay, Agustinus Abraham Apono, Piter Patiasina, Stevanus Tahapary, Jhordan Saiya, Daniel Akchary, Baree Manuputty, Izaak Saimima, Erw Samuel Lesnusa, Renol Ngarbinan, Soni Bonseran, Ferdinan Waas, Samuel Hendrik, Apner Litamahaputty, Philip Malwauw, Alex Malwauw, Marlon Pattiwael, Jhon Saranamual, Yacob Supusepa, Jhonatan Riri, Petrus Rahayaan, Elias Sinay, Piter Latumahina, Johanes Apono, Domingus Salamina y Deni de Fretes es arbitraria, pues contraviene los artículos 7, 9, 10, 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los artículos 9, 14, 18, 19, 21, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a las categorías II y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

23. En consecuencia, el Grupo de Trabajo insta al Gobierno a liberar inmediatamente a los detenidos, y a considerar seriamente las leyes nacionales sobre la traición a la patria y ponerlas en conformidad con las obligaciones contraídas por el país en materia de normativa internacional sobre derechos humanos.

Aprobada el 25 de noviembre de 2008.

## **Opinión N° 42/2008 (Egipto)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 30 de mayo de 2008.**

**Relativa a los Sres. A, B, C y D (los nombres completos se comunicaron al Gobierno, pero no se publican a petición de la fuente).**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado información sobre las alegaciones de la fuente.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. Según la fuente, los Sres. A, B, C y D fueron detenidos el 20 de noviembre de 2007 en la casa del Sr. A en Agouza. Sólo se había dictado orden de detención contra el Sr. A. Sus detenciones formaban parte de una ofensiva contra personas sospechosas de ser seropositivas.
5. El 13 de enero de 2008, el Tribunal de Faltas de Agouza acusó a los cuatro hombres de mantener relaciones homosexuales y condenó a cada uno a un año de prisión (Expediente N° 26073/2007) de conformidad con el artículo 9 c) de la Ley 10/1961, que considera delito la "práctica habitual del libertinaje sexual (*fujur*)". Además, se acusó al Sr. A de "administrar una casa dedicada al libertinaje sexual" y a los otros tres de

"explotación del libertinaje sexual de otros". El Tribunal de Faltas de Agouza aplicó las disposiciones penales fundamentales que incluyen y tipifican como delito las relaciones homosexuales consentidas. El 2 de febrero de 2008, el Tribunal de Apelación de Faltas de Agouza rechazó los recursos de los cuatro hombres y confirmó sus condenas de prisión.

6. Los Sres. A, C y D están actualmente en la prisión de Al Qota, en Giza. El Sr. B permaneció detenido en el Hospital Imbaba Fevers de El Cairo, encadenado a su cama 23 horas al día, hasta que se confirmó su condena el 2 de febrero de 2008. Se creyó entonces que se le trasladaría al hospital de la prisión de Al Qota, pero no ha sido posible establecer su lugar actual de detención.

7. La fuente alega que las condenas no se basaron en pruebas, sino en las declaraciones que se obtuvieron de los hombres mediante coacción en el Departamento de la Policía Moral del Ministerio del Interior, cuyo contenido no se les dejó leer, y que luego fueron desmentidas. Durante el juicio no se escuchó a ningún testigo. Todos los hombres se declararon inocentes de los cargos y negaron la acusación tener relaciones homosexuales.

8. Según el informe de la detención, en el momento en que esta se produjo los cuatro hombres se encontraban en el apartamento del Sr. A, estaban completamente vestidos y no participaban en ninguna actividad ilegal. El informe afirmaba más adelante que las detenciones se basaron en "investigaciones secretas" realizadas por el agente que procedió a las detenciones. Sin embargo, la naturaleza o los resultados de esas investigaciones nunca se expusieron ante el Fiscal, ni éste tampoco las solicitó. El Tribunal de Faltas de Agouza rechazó la solicitud de los abogados de la defensa para que el Juez ordenara a la policía presentar en el tribunal el contenido del informe relativo a las "investigaciones secretas" y para que convocara al agente encargado de las detenciones a fin de interrogarlo.

9. La fuente alega que los agentes de policía de la comisaría de Al-Agouza maltrataron al Sr. B después de su detención golpeándolo en la cabeza varias veces, y que se obligó a los cuatro hombres a permanecer durante tres horas con los brazos levantados, es decir, en una postura dolorosa. Durante los primeros cuatro días de detención no se les proporcionó ningún alimento ni agua ni mantas. Las autoridades también les hicieron pruebas del VIH sin su consentimiento. Según las informaciones recibidas, cuando se comunicó al Fiscal que la prueba del VIH realizada al Sr. B había dado positivo, manifestó lo siguiente: "La gente como usted debería ser quemada viva. No merece vivir".

10. Se informó de que la detención de las personas antes mencionadas únicamente podría estar relacionada con el hecho de que estaban presentes en un apartamento que anteriormente había sido alquilado por los Sres. E y F. Esta afirmación está respaldada por el hecho de que, según se informa, se dictó una orden de detención contra el Sr. A en relación con la investigación del caso N° 16087/2007, y también por la información que indica que el apartamento se puso bajo vigilancia policial después de las detenciones llevadas a cabo en relación con este caso.

11. La fuente sostiene que la detención, el encarcelamiento y la condena de los cuatro hombres mencionados viola su derecho a un juicio con las debidas garantías y constituye un caso de detención arbitraria. La tipificación como delito de las relaciones homosexuales consentidas entre adultos constituye una violación de las obligaciones asumidas por Egipto en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, y en particular supone una aplicación discriminatoria del artículo 9 c) de la Ley 10/1961, pues se detuvo a los cuatro hombres sobre la base de su condición, real o presunta, de seropositivos, se les obligó a hacerse la prueba del VIH, se les maltrató durante la detención y sus juicios se basaron en prejuicios y sus condenas no se fundaron en pruebas, todo ello en violación de las normas que prohíben la privación arbitraria de libertad.

12. Estas alegaciones de la fuente se comunicaron al Gobierno, que las refutó, aunque reconoció la detención y posterior juicio y condena de los cuatro detenidos. Afirmó que en

todas las etapas de la detención, encarcelamiento, enjuiciamiento y condena se siguieron los procesos y procedimientos jurídicos adecuados, y no se recibió ninguna queja sobre irregularidades o violación del debido proceso. Estas personas se detuvieron en virtud de una orden emitida por el Ministerio Fiscal a raíz de la vigilancia de los locales que el Sr. A utilizaba, según las informaciones recogidas, para actividades relacionadas con el libertinaje sexual. El artículo 9 c) del Decreto-ley N° 10/1961 de lucha contra la prostitución tipifica como delito la prostitución, es decir, la comisión indiscriminada de actos lascivos y obscenos, sin hacer distinción entre los autores de tales actos. De este modo, el Estado actúa dentro del margen de apreciación que le permite el derecho internacional para proteger la moral y la seguridad públicas.

13. El Gobierno procede entonces a justificar las pruebas obligatorias del VIH como una medida del Ministerio de Salud para proteger la salud y la seguridad de todos los ciudadanos y para proporcionar una cobertura médica adecuada, incluido el tratamiento gratuito con antirretrovirales. La prueba del VIH se puso al alcance de todos los ciudadanos egipcios en 2004 con el fin de contrarrestar cualquier discriminación contra las personas que se someten a las pruebas de la enfermedad.

14. Según el Gobierno, el hecho de que tanto la prostitución (cuando la persona que comete el delito es una mujer) como el libertinaje sexual (cuando la persona que lo comete es un hombre) se consideren delitos en el derecho penal egipcio muestra que no hay discriminación por razón de sexo. Se considera una "necesidad" proteger la moral en Egipto para preservar así la cohesión de la sociedad y el orden público. No obstante, el Juez de primera instancia dictó condenas mínimas contra los acusados, lo que demuestra que no los trató de manera arbitraria.

15. El Grupo de Trabajo ha examinado las alegaciones recibidas de la fuente, así como la información proporcionada por el Gobierno, y considera que está en condiciones de emitir una Opinión.

16. El Grupo de Trabajo considera que las circunstancias de la detención, encarcelamiento, enjuiciamiento y condena forman parte del conjunto de elementos que se deben considerar para determinar si una detención es arbitraria. En el presente caso, el Gobierno no ha respondido a la pregunta formulada por la fuente en el sentido de si las detenciones podían ser resultado de un error y que fueran los inquilinos anteriores, los Sres. E y F, los que estaban sujetos a vigilancia policial. Al parecer, la coincidencia de estos vínculos podría ser la razón fundamental de la detención de las cuatro personas. Se trata de un hecho material importante en el caso que ha sido pasado por alto y que sin duda necesitaría aclararse.

17. El Gobierno no refutó ni hizo comentario alguno sobre una afirmación fundamental, a saber, que uno de los detenidos permaneció encadenado a su cama de hospital durante meses y sólo se le liberó de las cadenas tras una orden del Ministerio del Interior del 25 de febrero de 2008. El Grupo de Trabajo considera que el encadenamiento de un detenido a una cama no tiene ningún fundamento jurídico en el derecho nacional o internacional y que no puede formar parte de ningún régimen de detención.

18. El amplio margen de apreciación concedido a la policía encargada de la moral y las buenas costumbres, que debe supervisar el comportamiento y determinar cuándo es "moral" y cuando "inmoral", es un motivo de preocupación para el Grupo de Trabajo a la hora de establecer cuándo una detención es arbitraria o no lo es. Este amplio margen de apreciación dado a la policía para determinar lo que constituye una acción "inmoral" no presagia nada bueno para los derechos humanos fundamentales como el derecho a la intimidad, a la propia libertad, a la libertad de opinión y a la libertad de expresión.

19. De la información recibida se desprende que la orientación y el comportamiento homosexuales están en desventaja en este sentido y son objeto de una serie de presunciones

que no se ajustan a la realidad. Así, se cree que la homosexualidad conduce forzosamente al VIH/SIDA, como una consecuencia de las relaciones entre personas del mismo sexo. Por lo tanto, el detenido que informó al agente de policía de que era seropositivo fue considerado de inmediato homosexual, inmoral y culpable de dedicarse al libertinaje sexual. Todas las personas detenidas tras el interrogatorio de esta persona también fueron etiquetadas como homosexuales, sometidas a un trato despectivo por parte de los agentes del orden y obligadas a someterse a la prueba del VIH.

20. El Grupo de Trabajo no puede estar de acuerdo con la opinión del Gobierno respecto a que estas pruebas se realizan en interés de los ciudadanos egipcios, sobre todo teniendo en cuenta el gran estigma asociado a las personas seropositivas o con sida y que, unido a la homosexualidad, resulta suficiente para marginar y victimizar a una persona de por vida. La investigación y las actuaciones judiciales, así como el trato dispensado a los detenidos, constituyen una discriminación múltiple, y se apartan bastante de conceptos como igualdad ante la ley, igual protección de la ley y juicio justo.

21. El Grupo de Trabajo observa además que en el presente caso los detenidos no disfrutaron de las debidas garantías y salvaguardias de un juicio justo, según los estándares legales. Las autoridades no investigaron las acusaciones de malos tratos, palizas y privación de alimentos y ropa de cama, que tampoco fueron explícitamente refutadas o abordadas de forma significativa por el Gobierno en su respuesta.

22. Cabe señalar que en un caso similar acontecido en Egipto en 2002, el denominado *Queen Boat*, el Grupo de Trabajo consideró que la detención de más de 50 hombres después de una redada policial en un club nocturno ubicado en un buque y procesados a causa de su orientación sexual, constituyó una detención arbitraria por contravenir el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Opinión N° 7/2002, E/CN.4/2003/8/Add.1).

23. Si bien el Grupo de Trabajo respeta las leyes nacionales, así como las leyes relacionadas con la salud destinadas a salvaguardar los intereses de los ciudadanos, el derecho a la privacidad de la información médica y a la no divulgación de la orientación sexual sin el consentimiento formal de la persona en cuestión sigue siendo un derecho fundamental reconocido en las normas internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo considera que la exposición de la condición de seropositivos de los detenidos como información de apoyo acerca de su orientación sexual o su homosexualidad contribuye a la arbitrariedad de su detención, ya que los agentes de policía y el resto del personal encargado de hacer cumplir la ley han señalado que estas personas son una amenaza para la seguridad de los demás y no deberían circular libremente por las calles.

24. Es un principio bien establecido en el derecho internacional la posibilidad de invocar, con el fin de restringir un derecho, las disposiciones relativas a la moral y salud públicas y a la seguridad en aquellos actos indeseables y controvertidos que se cometan en el ámbito público y puedan perjudicar el orden público. Ahora bien, nada sugiere que esta fuera la situación en el presente caso. Por último, en aras de la justicia y la equidad, se precisa de cautela y equilibrio a la hora de abordar aquellas cuestiones de gran sensibilidad personal y social que, de hacerse públicas, podrían perjudicar la reputación de una persona y dar lugar a su posible marginación social, o bien podrían avergonzar a la persona y su familia.

25. El Grupo de Trabajo considera que se violaron los derechos fundamentales de estas cuatro personas durante su detención, así como durante las investigaciones y actuaciones judiciales, y que fueron víctimas de discriminación por razón de su orientación sexual y de su condición de seropositivos o afectados por el sida. Como la ley egipcia no prohíbe expresamente la homosexualidad, fueron juzgados por dedicarse al libertinaje sexual. La

denigración y persecución de personas por su sexualidad viola los principios de las normas internacionales de derechos humanos. El derecho a la no discriminación por razón de sexo incluye la orientación sexual.

26. El Grupo de Trabajo considera que la invocación en estos casos del artículo 9 c) del Decreto-ley N° 10/1961 de lucha contra la prostitución para detener a las personas sobre la base de su condición declarada de seropositivas, y para someterlas sin su consentimiento a la prueba de infección por el VIH, viola los derechos humanos que protegen la intimidad individual y la autonomía personal. Por otra parte, la detención de personas sobre la base de su condición de seropositivas vulnera los principios acordados en 2001 por los Estados Miembros en la Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA.

27. El Grupo de Trabajo también considera que la prohibición de toda discriminación por razón de sexo, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, incluye la discriminación sobre la base de la homosexualidad.

28. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La detención de los Sres. A, B, C y D es arbitraria de acuerdo con las categorías II y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo. Constituye una violación de los artículos 2, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los artículos 2, 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

29. En consecuencia, el Grupo de Trabajo exige la liberación inmediata de estas personas. Además, insta al Gobierno a poner fin a las detenciones arbitrarias basadas en la condición de seropositivo, y a estudiar la posibilidad de revisar el Decreto-ley de lucha contra la prostitución y su aplicación con el fin de ponerlo en conformidad con las obligaciones en materia de derechos humanos internacionales asumidas por la República Árabe de Egipto como Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 25 de noviembre de 2008.

### **Opinión N° 43/2008 (Myanmar)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 23 de julio de 2008.**

**Relativa a los Sres. Min Zayar (Aung Myin), Kyaw Min Yu (Ko Jimmy), Min Ko Naing (Paw Oo Tun) y Pyone Cho (Mtay Win Aung).**

**El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado información sobre las alegaciones de la fuente.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. A la luz de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta facilitada por el Gobierno a la fuente y ha recibido sus comentarios.
5. La fuente comunicó el caso que se resume a continuación al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la siguiente manera:

a) El Sr. Min Zayar, denominado Aung Myin a su nacimiento el 16 de junio de 1958, ciudadano de Myanmar, con residencia habitual en el municipio de Dagón Sur, en Rangún, y miembro del Grupo de Estudiantes de la Generación del 88 (en adelante, "la

Generación del 88"), fue detenido por oficiales militares el 21 de agosto de 2007 en su domicilio. Se trasladó a Min Zayar a la prisión de Insein en Rangún, donde se encuentra detenido en régimen de incomunicación. Min Zayar tiene graves problemas de columna causados por la tortura durante encarcelamientos anteriores y también sufre de presión arterial alta aguda.

b) El Sr. Kyaw Min Yu, también conocido como Ko Jimmy, nacido el 13 de febrero de 1969, ciudadano de Myanmar, con residencia habitual en el municipio de Hlaing, Ba Yin Naung Road, en Rangún, es miembro de la Generación del 88. Según se informó, fue detenido por oficiales militares en su domicilio el 22 de agosto de 2007. Se le trasladó a la prisión de Insein, en Rangún, donde se encuentra detenido en régimen de incomunicación. Kyaw Min Yu ya estuvo encarcelado entre 1989 y 2005 y fue víctima de torturas.

c) El Sr. Min Ko Naing, denominado Paw Oo Tun a su nacimiento el 18 de octubre de 1962, ciudadano de Myanmar, con residencia habitual en el municipio de Thingangyun, Rangún, y miembro de la Generación del 88, fue detenido el 22 de agosto de 2007 en su domicilio por militares. Actualmente se encuentra en régimen de incomunicación en la prisión de Insein en Rangún. El Sr. Min Ko Naing ha sido galardonado con varios premios internacionales de derechos humanos en reconocimiento a su labor pacífica de defensa de las libertades fundamentales. Anteriormente había pasado varios períodos en prisión, desde marzo de 1989 hasta noviembre de 2004 y de nuevo de septiembre de 2006 a enero de 2007. Se le torturó y se le mantuvo en régimen de incomunicación la mayor parte del tiempo que estuvo encarcelado. Según se informó, el 16 de octubre de 2007 tuvo que ser hospitalizado en la prisión de Insein debido a lesiones no especificadas. Existen serias preocupaciones en cuanto a su salud.

d) El Sr. Pyone Cho, denominado Htay Aung a su nacimiento, ciudadano de Myanmar, con domicilio en Sanpyamaung House 82, en el municipio de Tamwe, en Rangún, también miembro de la Generación del 88, fue detenido por oficiales militares el 22 de agosto de 2007 en su domicilio. Se le trasladó a la prisión de Insein, en Rangún, donde se encuentra recluido en régimen de incomunicación. Pyone Cho ha estado en prisión de forma intermitente desde 1989, sumando un total de más de 15 años de reclusión, y también fue torturado en el pasado. Durante las detenciones anteriores desarrolló cataratas, como consecuencia de las cuales se ha vuelto casi ciego. Lo pusieron a dieta de arroz y sal, que provoca desnutrición severa y, a largo plazo, fragilidad física.

6. Según la fuente, se detuvo y se mantiene en prisión a estas cuatro personas por ser miembros de la Generación del 88, un movimiento pacífico que promueve el diálogo nacional en Myanmar. Ellos han trabajado desinteresada y pacíficamente en favor de la reconciliación nacional, la sostenibilidad de la democracia y la búsqueda de una solución política a largo plazo. Se les detuvo para prevenir protestas y frenar a la disidencia después del aumento del precio del combustible del 500 por ciento aplicado el 15 de agosto de 2007. En consecuencia, su detención y su encarcelamiento responden totalmente a motivos políticos y forman parte de una estrategia dirigida por las autoridades contra la Generación del 88 como grupo.

7. La fuente añade que la detención y encarcelamiento persistente de estas personas contraviene varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos; se viola el artículo 13, que garantiza la libertad de circulación y de residencia, porque con su detención se trata de evitar que viajen dentro del país para encontrarse con otros miembros de la Generación del 88 y con otros ciudadanos; se infringe el artículo 18, que protege la libertad de pensamiento y de conciencia, porque su detención es una reacción a sus convicciones sobre la importancia del diálogo y de los valores democráticos; se vulnera el artículo 19, que versa sobre la libertad de opinión y de expresión, porque se mantiene su detención para evitar que expresen sus puntos de vista, critiquen a las autoridades y comuniquen a otras

personas sus opiniones; y se infringe el artículo 21, que garantiza el derecho a participar en el gobierno del propio país, pues su detención va dirigida a asegurarse que no desempeñen ningún papel en la vida política ni influyan en la misma.

8. Las cuatro personas permanecen detenidas en régimen de incomunicación. No han tenido acceso a un abogado ni se les ha ofrecido la posibilidad de ejercer su derecho a una asistencia letrada. No se les ha permitido ver a sus familias, que no han sido informadas sobre su paradero y no han podido contactar con ellos. Además, estas personas no han disfrutado de su derecho a acceder a un tribunal independiente e imparcial. No han tenido una audiencia inmediata, con representación de un abogado para obtener su liberación, ni la posibilidad de impugnar a través de su abogado la legalidad de su detención.

9. No se les ha facilitado ninguna posibilidad de contacto o correspondencia con el mundo exterior. No se les ha permitido leer los periódicos ni ningún otro material de información. La fuente añade que se ha sometido a estas personas a un trato inhumano y degradante, que no han tenido acceso a servicios o tratamientos médicos adecuados y que no se les ha brindado ninguna oportunidad para quejarse de las condiciones de su detención.

10. En consecuencia, las circunstancias de su detención y encarcelamiento violan de forma flagrante la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, aprobados por la Asamblea General en su resolución 43/173, en particular los Principios 1, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 28, 32 y 33.

11. La fuente informa además de que Win Shwe, miembro de la Liga Nacional para la Democracia detenido el 26 de septiembre de 2007, murió mientras estaba en prisión. Su muerte acentúa la preocupación de que podría suceder algo similar con otros detenidos, entre ellos las personas antes mencionadas.

12. La fuente concluye que la detención de las cuatro personas mencionadas *supra* es arbitraria y contraria a los preceptos del derecho internacional, y viola las normas fundamentales de derechos humanos. Han sido detenidas con el único fin de reprimir la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de reunión.

13. En su respuesta a las alegaciones de la fuente, el Gobierno proporcionó la siguiente información:

a) El Sr. Min Zayar (Aung Myin), el Sr. Kyaw Min Yu (Ko Jimmy), el Sr. Min Ko Naing (Paw Oo Tun) y el Sr. Pyone Cho (Htay Win Aung) fueron detenidos por atentar contra el orden público, la paz y la estabilidad de la comunidad; maniobrar para crear disturbios civiles; emitir declaraciones; distribuir cartas insolentes y que exhortaban a destruir el trabajo llevado a cabo por la Convención Nacional en su esfuerzo por lograr una sólida Constitución del Estado; aceptar dinero ilegal procedente del extranjero; formar organizaciones ilícitas; imprimir documentos y declaraciones de forma ilegal, sin el debido registro; violar la Ley de comunicación electrónica, difundiendo en Internet, a través de sitios web, información y manifestaciones contrarias al Gobierno; buscar el enfrentamiento con el Gobierno; y comunicarse con organizaciones antisistema declaradas grupos terroristas;

b) Se están adoptando medidas contra de ellos de conformidad con las leyes y artículos siguientes:

- Artículo 6 de la Ley sobre la formación de organizaciones;
- Artículo 17 20) de la Ley sobre el registro de imprentas y editoriales, de 1962;

- Artículo 32 b) de la Ley de televisión y vídeo;
- Artículo 17 1) de la Ley de asociaciones ilícitas, de 1908;
- Artículo 130 b) del Código Penal;
- Artículo 4 de la Ley de protección de la transferencia pacífica y sistemática de la responsabilidad y de la buena ejecución de las funciones de la Convención Nacional frente al desorden y la oposición;
- Artículo 124 b) del Código Penal;
- Artículo 33 a) de la Ley de comunicación electrónica;
- Artículo 24 1) de la Ley de regulación de divisas;

c) Además, el Gobierno informa de que están en marcha los procesos judiciales contra el Sr. Min Zayar, el Sr. Kyaw Min Yu, el Sr. Min Ko Naing y el Sr. Pyone Cho, así como contra aquellas personas relacionadas con los miembros del movimiento Estudiantes de la Generación del 88.

14. En sus comentarios a las observaciones del Gobierno, la fuente reitera que la detención de las personas mencionadas es ilegal y arbitraria. Señala que el Gobierno presentó los cargos entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre de 2008, más de un año después de las detenciones de las cuatro personas, que se produjeron el 21 y 22 de agosto de 2007. Después de ser acusados formalmente, también cambió su régimen de detención. Ahora se conoce su paradero y se les permiten las visitas de familiares de vez en cuando. Los cuatro han tenido acceso a algún tipo de representación legal, aunque indebidamente limitada y controlada por las autoridades gubernamentales.

15. Alrededor del 24 octubre de 2008, el juez designado por los militares acusó al Sr. Min Ko Naing y al Sr. Pyone Cho de desacato al tribunal por solicitar que se permitiera a sus familiares asistir al juicio. El Tribunal del Distrito Norte, en un juicio celebrado en las instalaciones de la prisión de Insein, condenó al Sr. Min Ko Naing y al Sr. Pyone Cho a penas de prisión de seis meses por desacato al tribunal en respuesta a su petición verbal al Juez de una administración de justicia libre y equitativa. La fuente informa de que los abogados de la defensa fueron asimismo detenidos y encarcelados en relación con sus actividades como asesores de los acusados.

16. El 31 de octubre de 2008, el Sr. Min Ko Naing y el Sr. Pyone Cho fueron trasladados a la prisión de Maubin, en la región del delta del Irrawaddy. El Tribunal Especial del Distrito de Maubin escuchó sus causas principales en ausencia del abogado defensor, y el 15 de noviembre de 2008 los condenó a cada uno a 65 años de prisión por 5 de los 21 cargos que se les imputaban.

17. El 11 de noviembre de 2008, el Tribunal del Distrito de Rangún condenó al Sr. Min Zayar y al Sr. Kyaw Min Yu, en relación con 5 de los cargos que se les imputaban, a 65 años de reclusión con trabajos forzados cada uno. Se les condenó a 15 años por cada uno de los cuatro cargos basados en el artículo 33 a) de la Ley de comunicaciones electrónicas, y a cinco años más por un cargo derivado de la aplicación del artículo 6 de la Ley de formación de organizaciones. El juicio se celebró a puerta cerrada en las instalaciones de la prisión de Insein y estuvo dirigido por un tribunal parcial, sin representación legal de los acusados. La fuente presume que se les impondrán nuevas penas cuando se les condene por los restantes 16 cargos contenidos en el auto de procesamiento. Se informa de que otros 12 miembros de la Generación del 88 fueron condenados igualmente a 65 años de prisión, en el mismo momento y con los mismos cargos.

18. La fuente concluye que los cargos presentados contra los acusados resultan puramente del ejercicio no violento de sus derechos y libertades, garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Contactaron entre ellos tan sólo para exhortar al diálogo entre la Liga Nacional para la Democracia y el Gobierno militar de Myanmar; recoger firmas para presentar una petición; vestirse de blanco e invitar a otros a hacer lo mismo; iniciar una campaña de oración en la que se pidió a personas de todas las religiones que rezaran por una solución pacífica a los problemas políticos de Myanmar; y alentar a los ciudadanos a escribir cartas explicando su difícil situación a las autoridades militares.

19. El Sr. Min Zayar, el Sr. Pyone Cho y el Sr. Min Ko Naing fueron ya objeto de un llamamiento conjunto urgente enviado el 6 de octubre de 2006 por el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y otros titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, al que el Gobierno de Myanmar respondió el 8 de diciembre de 2006. Otro llamamiento urgente en relación con el Sr. Min Ko Naing, enviado el 28 de agosto de 2007 por el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo y otros relatores especiales, permanece sin respuesta del Gobierno.

20. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria cree que está en condiciones de ofrecer su Opinión sobre la privación de libertad de los Sres. Min Zayar, Kyaw Min Yu, Min Ko Naing y Pyone Cho, teniendo en cuenta toda la información recibida de la fuente y del Gobierno.

21. El Grupo de Trabajo desea señalar a la atención del Gobierno las disposiciones del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". El Grupo de Trabajo también desea subrayar el carácter fundamental del derecho a la libertad de asociación, reconocido en el artículo 20, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que: "Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas". El artículo 21, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: "Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos".

22. El Grupo de Trabajo considera que no hay en la alegación original nada que indique que las actividades totalmente pacíficas de los cuatro miembros de la Generación del 88 descritas por la fuente quedarían fuera de los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que constituyen el núcleo de los derechos políticos en una sociedad libre y democrática basada en el estado de derecho. El Grupo de Trabajo no tiene razones para dudar de que se han impuesto a los cuatro acusados penas de prisión severas en represalia por sus actividades políticas pacíficas y su pertenencia a movimientos opositores.

23. El Gobierno, en su respuesta, se contentó con referirse a las leyes nacionales que presuntamente violaron los acusados, sin apoyar esta afirmación con hechos reales. Declaró que los cuatro individuos "fueron detenidos por atentar contra el orden público, la paz y la estabilidad de la comunidad; maniobrar para crear disturbios civiles; emitir declaraciones; distribuir cartas insolentes y que exhortaban a destruir el trabajo llevado a cabo por la Convención Nacional en su esfuerzo por dar lugar a una sólida Constitución del Estado; (...) formar organizaciones ilegales; imprimir documentos y declaraciones de forma ilegal, sin el debido registro; violar la Ley de comunicación electrónica, difundiendo a través de sitios web de Internet información y manifestaciones contrarias al gobierno; [y] buscar el enfrentamiento con el Gobierno". La sanción, incluso si nos referimos a la penal, de cualquiera de estas actividades, no debería vulnerar los derechos y libertades contenidos en

la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie tiene que pedir permiso para ejercer, solo o colectivamente, de forma oral o por escrito, su derecho a la libertad de expresión, incluso si las opiniones expresadas no se corresponden con las del Gobierno del momento. Tal como sostuvo el Grupo de Trabajo en su Opinión N° 25/2000 (Unión de Myanmar): "La expresión pacífica de la oposición a un régimen no puede justificar una detención arbitraria". (E/CN.4/2001/14/Add.1, párr. 12).

24. Por otra parte, el Gobierno menciona que se detuvo a estas personas por comunicarse con "organizaciones antisistema declaradas grupos terroristas", y que aceptaron "dinero ilegal procedente del extranjero", sin aclarar lo que significa "organizaciones antisistema" o qué autoridad las declaró grupos terroristas o de dónde provienen los fondos y por qué es ilegal aceptar esos recursos financieros. Esto significa que la detención y el encarcelamiento de estas personas tienen una motivación únicamente política, derivada de su pertenencia al movimiento de la Generación del 88 y sus intentos de promover la democracia en el país. En este sentido, el Grupo de Trabajo observa que todos los acusados fueron detenidos prácticamente al mismo tiempo, entre el 21 y 22 de agosto de 2007. El Grupo de Trabajo concluye que la detención, la prisión preventiva y el encarcelamiento de los Sres. Min Zayar, Kyaw Min Yu, Min Ko Naing y Pyone Cho son arbitrarios de acuerdo con la categoría II de los criterios aplicables al examen de los casos que se le presentan, sin necesidad de entrar a considerar los cargos específicos que finalmente han dado lugar a sus condenas.

25. El Grupo de Trabajo desea además señalar a la atención del Gobierno las siguientes disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos:

a) El artículo 10, que garantiza el derecho de las personas antes mencionadas a un juicio con las debidas garantías ante un tribunal independiente e imparcial;

b) El artículo 11, párrafo 1, que establece: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa".

26. Todos los acusados fueron detenidos por oficiales militares sin orden de detención. Se les mantuvo en régimen de incomunicación durante períodos prolongados, sin que sus familiares y abogados tuvieran acceso a ellos y ni siquiera conocieran su situación. Ninguno tuvo la posibilidad de presentar una solicitud para impugnar la legalidad de su detención. Se les acusó y se les hizo comparecer ante los tribunales después de más de un año de reclusión. Los juicios se celebraron a puerta cerrada, dentro del recinto de la prisión de Insein o en un tribunal especial en Maubin, y en ausencia de sus abogados defensores. Dichas violaciones son de tal gravedad que confieren a su detención y encarcelamiento un carácter arbitrario. Por si fuera poco, las violaciones del derecho a un juicio con las debidas garantías adquieren un carácter grotesco si se considera que también se detuvo y encarceló a los abogados de los acusados por actuar como sus defensores, y que se acusó a los detenidos de desacato al tribunal, y se les condenó, sólo por pedir que se permitiera a sus familias asistir a sus juicios y por solicitar una administración de justicia libre e imparcial.

27. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La detención de los Sres. Min Zayar (Aung Myin), Kyaw Min Yu (Ko Jimmy), Min Ko Naing (Paw Oo Tun) y Pyone Cho (Mtay Win Aung) es arbitraria, pues contraviene los artículos 9, 10, 11, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y corresponde a las categorías II y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

28. Consecuentemente con la Opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para remediar la situación de las personas mencionadas con el fin de ponerla en conformidad con las disposiciones y principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dadas las circunstancias del caso, el Grupo de Trabajo considera que el único remedio apropiado sería su liberación inmediata. El Grupo de Trabajo recomienda además que el Gobierno considere la posibilidad de convertirse en Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 25 de noviembre de 2008.

### **Opinión N° 44/2008 (Myanmar)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 30 de junio de 2008.**

**Relativa al Sr. U Ohn Than.**

**El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no le haya facilitado información sobre las alegaciones de la fuente en el plazo de 90 días establecido en sus métodos de trabajo.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El caso que se resume a continuación se comunicó al Grupo de Trabajo de la siguiente manera: el Sr. U Ohn Than (en adelante el Sr. Than), ciudadano de Myanmar, de 61 años, hijo de U Tha Nu, funcionario del Departamento de Bosques, fue detenido el 23 de agosto de 2007. Ese día, poco después de las 1.00 horas, un grupo de hombres vestidos de civil aprehendió al Sr. Than en plena calle frente a la antigua Embajada de los Estados Unidos de América en Rangún. El Sr. Than nació en Ngathinechaung Tsp, División de Irrawaddy. Tiene un diploma en Ciencias Forestales de la Universidad de Rangún, y trabajaba como Director adjunto en la Corporación Estatal de la Madera (STC).
5. La detención del Sr. Than se produjo mientras expresaba, mediante una protesta silenciosa y en solitario, su descontento legítimo por la subida espectacular de los precios del combustible. Hizo un llamamiento para la intervención de las Naciones Unidas sobre la situación en Myanmar, pidiéndole que supervisara la celebración de unas elecciones libres para establecer un parlamento popular. Según se informa, el Sr. Than ya había protagonizado anteriormente protestas similares, las últimas de ellas el 22 de febrero y el 25 de abril de 2007.
6. Un grupo de hombres vestidos de civil, que no se identificaron, aprehendió al Sr. Than y lo introdujo en un vehículo. Según la información recibida, habrían participado en los hechos al menos dos policías, el agente Bo Bo Soe (ID La-211326, policía del municipio de Kyauktada) y el Superintendente adjunto Thein Naing (policía del municipio de Kyauktada). Otros dos se identificaron a sí mismos como colaboradores de la policía y los ayuntamientos en la ejecución de detenciones de este tipo, en calidad de miembros de Swan-arshin, un grupo que no tiene una identidad pública en Myanmar, y al que el Código de Procedimiento Penal no reconoce ninguna atribución jurídica para participar en este tipo de detenciones.
7. El Sr. Than fue trasladado al campamento de interrogatorios de Kyaikkasan, una instalación militar especial, en lugar de una comisaría de policía, como exige el procedimiento normal, en violación del artículo 59 del Código. Esto se hizo al parecer con la autorización de los agentes de policía referidos. Permaneció en ese lugar sin que se

respetara el límite máximo de detención de 24 horas, también en infracción del artículo 61 del Código.

8. El Sr. Than permaneció en el campamento de Kyaikkasan sin que se le comunicara ninguna referencia jurídica sobre su situación. No se presentó su caso ante un tribunal hasta cinco meses después. Posteriormente se le trasladó a la prisión de Insein, donde se le puso en régimen de aislamiento, se le prohibió hacer ejercicio y se le negaron las visitas de familiares durante 160 días. El 30 de enero de 2008 se le acusó de sedición, en base al artículo 124 a) de la Ley del Código Penal, ante el Tribunal del Distrito Occidental de Rangún (Palacio de Justicia Independiente), causa N° 12/2008. El 2 de abril de 2008 se le condenó a cadena perpetua por incitar a la hostilidad hacia el Gobierno, y a una multa de 1.000 kyats o, en caso de no pagarla, a seis meses de prisión adicionales. Desde su condena, ha sido trasladado tres veces, y ahora se encuentra detenido en la prisión de Khamti, en la división de Sagaing, en el noroeste de Myanmar.

9. Durante el juicio a puerta cerrada, el Sr. Than no pudo llamar a testigos de descargo, lo que según la fuente viola el artículo 2 e) de la Ley de la Judicatura de 2000, y el artículo 352 del Código de Procedimiento Penal. Los únicos testigos de la acusación fueron funcionarios del gobierno y policías, incluidas las dos personas que se identificaron ante el tribunal como miembros de los grupos operativos de la Swan-arshin, que operan con la policía bajo las órdenes de los concejos municipales. No hubo testigos independientes.

10. Sólo cinco de los testigos tenían relación con la protesta del 23 de agosto de 2007, y eran las siguientes personas: a) El Superintendente Soe Naing (ID N° La-147569, policía del municipio de Kyauktada); b) el agente Bo Bo Soe (ID La-211326, policía del municipio de Kyauktada); c) el Superintendente adjunto Thein Naing Oo, policía del municipio de Papedan; d) U Nyi Lin Hpyoe, agente inmobiliario (DNI 12KaTaTa (Naing) 008822, miembro de Swan-arshin); y e) U Khin Maung Myint, comerciante (DNI ERGM-022560, miembro de Swan-arshin). Se llamó a declarar a otros testigos en relación con las otras dos protestas realizadas por el Sr. Than anteriormente ese mismo año, por las que no se le detuvo ni se le formularon cargos.

11. La fuente añade que el Sr. Than sufre problemas de hipertensión e insuficiencia renal y necesita atención médica urgente. En la prisión ha contraído paludismo cerebral, una enfermedad que si no se trata es casi siempre mortal. Al parecer, su paludismo cerebral está en una fase avanzada. En un intento por encubrir su estado crítico de salud, las autoridades de la prisión habrían escrito a la familia en su nombre para decirle que no necesitaba nuevas visitas, y que en cambio le enviaran dinero.

12. La fuente añade que esta era la sexta vez que se detenía al Sr. Than, siempre debido a sus actividades políticas de carácter pacífico. En total ha pasado ya más de 14 años en prisión. Estuvo encarcelado desde 1988 hasta 1996, después de ser condenado a ocho años de cárcel en base al artículo 5 j) de la Ley de disposiciones de emergencia. En 1997 fue de nuevo detenido y condenado a siete años de cárcel por distribuir un panfleto titulado *Un llamamiento a la lucha por los derechos humanos de Birmania*. Se le liberó en 2003 y nuevamente se le detuvo en 2004 por organizar una protesta en solitario en el exterior del recinto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se le condenó entonces a dos años de prisión en base al artículo 505 b). Fue nuevamente detenido en febrero y en abril de 2007.

13. La fuente concluye que los tribunales castigaron al Sr. Than por ejercer su derecho a expresar libremente su opinión en contra de las políticas aplicadas por el Gobierno. El tribunal no permitió al Sr. Than contar con la asistencia de un abogado defensor ni proponer el testimonio de un perito independiente para que evaluara la legalidad de su detención.

14. La fuente concluye que se violó gravemente el derecho del Sr. Than a un juicio con las debidas garantías. Además, no se autorizó ningún proceso de revisión de su condena.

15. En su carta de fecha 30 de junio de 2008, y en la nota verbal de fecha 3 de noviembre de 2008, el Grupo de Trabajo informó al Gobierno acerca de su intención de considerar el caso de la detención del Sr. U Ohn Than durante su 53º período de sesiones. No se recibió respuesta del Gobierno en el plazo de 90 días establecido en los métodos de trabajo del Grupo.

16. El Grupo de Trabajo considera que está en condiciones de emitir una Opinión sobre la privación de libertad sufrida por el Sr. U Ohn Than.

17. El Grupo de Trabajo observa que el Sr. Than fue detenido por un grupo de hombres, la mayoría de los cuales eran miembros del grupo paramilitar Swan-arshin, vinculado al Gobierno. Se le detuvo por organizar una protesta en solitario en la que mostraba un cartel con la petición de elecciones libres y justas, bajo la supervisión directa de las Naciones Unidas, para constituir un parlamento popular.

18. El Grupo de Trabajo observa además que el Sr. Than permaneció en régimen de incomunicación durante 160 días. Se le detuvo por llevar a cabo actividades similares a aquellas por las que había purgado más de 14 años de prisión. El juicio al Sr. Than se celebró a puerta cerrada, sin asistencia de un abogado ni la declaración de testigos independientes. La mayoría de los testigos de cargo eran personas que habían participado en su detención. No se le permitió presentar testigos ni contar con un abogado defensor. El 2 de abril de 2008 se le condenó a cadena perpetua sin posibilidad alguna de apelación. El Grupo de Trabajo considera que su juicio fue manifiestamente injusto.

19. El Grupo de Trabajo observa además que el Sr. Than, encarcelado en la remota prisión de Khamti, sufre paludismo cerebral, una enfermedad con una alta tasa de mortalidad. Si no se trata, el paludismo cerebral es casi siempre mortal. Su familia no ha podido reunirse con él. La fuente sospecha que, en un intento de encubrir su estado crítico de salud, las autoridades penitenciarias hacen todo lo posible para impedir que reciba visitas, incluidas las de los miembros de su familia.

20. El Grupo de Trabajo considera que en el caso que nos ocupa se han violado varias disposiciones de los instrumentos internacionales invocados por el Grupo de Trabajo en el examen de los casos que se le presentan.

21. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La detención del Sr. U Ohn Than es arbitraria, pues contraviene los artículos 8, 9, 10, 11, 19 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y corresponde a las categorías II y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

22. El Grupo de Trabajo recuerda al Gobierno que en virtud de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, las autoridades tienen el deber de prestar los servicios de un médico calificado dentro de los centros penitenciarios; trasladar a los reclusos y detenidos que requieran una atención especial a establecimientos especializados o a hospitales civiles; y proporcionar a los reclusos y detenidos una alimentación adecuada cuyo valor nutritivo sea suficiente para mantener su salud y sus fuerzas.

23. Consecuentemente con estas conclusiones, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que ordene la liberación inmediata e incondicional del Sr. U Ohn Than a fin de poner esta situación en conformidad con las normas y principios internacionales en materia de derechos humanos.

24. Por último, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que considere la posibilidad de convertirse en Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 26 de noviembre de 2008.

### **Opinión N° 45/2008 (India)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 27 de agosto de 2007.**

**Relativa a los Sres. Manzoor Ahmad Waza, Nisar Ahmad Wani, Farooq Ahmad Kana, Mohammed Yousuf Mir, Mehraj-ud-Din Khanday, Nazir Ahmad Dar, Mohammed Younis Bhat, Umar Jan, Reyaz Ahmad Teeli y Abdul Qadeer.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. A pesar de que el Gobierno ha presentado con retraso la información relativa a las alegaciones de la fuente, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción su cooperación.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El caso que se resume a continuación se comunicó al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la siguiente manera: los Sres. Manzoor Ahmad Waza, Nisar Ahmad Wani, Farooq Ahmad Kana, Mohammed Yousuf Mir, Mehraj-ud-Din Khanday (menor de edad), Nazir Ahmad Dar, Mohammed Younis Bhat, Umar Jan, Reyaz Ahmad Teeli, todos ellos de Cachemira, y el Sr. Abdul Qadeer, de Tayikistán, están en prisión preventiva en diferentes lugares, algunos de ellos desconocidos, de conformidad con las disposiciones de la Ley de seguridad pública de Jammu y Cachemira (Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira) de 1978.
5. El Sr. Manzoor Ahmad Waza, de 29 años, con residencia habitual en el distrito de Barmulla, fue detenido sin una orden judicial el 16 de noviembre de 2005 en Barmulla por oficiales del Ejército indio en colaboración con agentes del Grupo de Operaciones Especiales, por los cargos contemplados en el artículo 307 del Código Penal Ranbeer (RPC) y el artículo 7 27) de la Ley de armas de la India (IAA) de 1959 (causa penal FIR N° 283/05). Posteriormente fue entregado a la comisaría de Policía de Barmulla. El Sr. Waza fue detenido de nuevo el 6 de marzo de 2006 en virtud de una orden de detención preventiva del Juez del distrito de Barmulla, que invocaba las disposiciones de la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira, sobre la base de que sus actividades eran supuestamente perjudiciales para la seguridad del Estado. Actualmente está detenido en un lugar desconocido bajo la custodia de la policía de Jammu y Cachemira en Barmulla. Se encuentra pendiente de resolución un recurso contra la orden de detención dictada por el Juez del distrito, presentado ante el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira en Srinagar.
6. El Sr. Nisar Ahmad Wani, con residencia habitual en el distrito de Anantnag, fue detenido sin una orden judicial el 14 de septiembre de 2004 en Kelam, Kulgam, por agentes del Grupo de Operaciones Especiales, por los cargos formulados en virtud de los artículos 7 25) de la IAA y 4 5) de la Ley de sustancias explosivas (causa penal FIR N° 1205/04). Está detenido desde el 10 de diciembre de 2005 en un lugar desconocido, bajo la custodia de la policía de Jammu y Cachemira en Kulgam, respondiendo al mandato de una orden de prisión preventiva emitida por el Juez del distrito de Anantnag. La orden invocaba las disposiciones de la Ley de seguridad pública de Jammu y Cachemira y consideraba que las actividades del Sr. Wani eran presuntamente perjudiciales para la seguridad del Estado. La orden de detención es actualmente objeto de un recurso presentado ante el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira en Srinagar por un primo del detenido.

7. El Sr. Farooq Ahmad Kana, de 20 años, con residencia habitual en el distrito de Barmulla, fue detenido el 10 de septiembre de 2005 en Shahbad Sopore por agentes de la Fuerza de Seguridad Fronteriza del BW 112, por cargos formulados en virtud del artículo 7 25) de la IAA (causa penal FIR N° 306/05). No se le mostró ninguna orden de detención. Con posterioridad al 20 de diciembre de 2005 estuvo algunos días en la comisaría de Sopore custodiado por la policía de Jammu y Cachemira, y posteriormente se le trasladó a un lugar de detención desconocido para sus familiares. El Juez del distrito de Barmulla dictó la orden de detención invocando la Ley de seguridad pública, por considerar que las actividades del detenido eran presuntamente perjudiciales para la seguridad del Estado. El 25 de febrero de 2005 se presentó un recurso contra la orden de detención ante el Honorable Tribunal Superior de Jammu y Cachemira en Srinagar.

8. El Sr. Mohammed Yousuf Mir, con residencia habitual en el distrito de Kupwara, fue detenido sin una orden judicial el 14 de diciembre de 2004 en Srinagar por las fuerzas policiales de la Unidad de Lucha contra la Insurgencia de Cachemira (CIK), por cargos formulados en virtud de los artículos 7 25) de la IAA, 2 3) de la Ordenanza de control de salidas del país y circulación interna, 120 b) del Código Penal Ranbeer (causa penal FIR N° 22/2004) y por los artículos 2 3) de la Ordenanza; 153 a), 153 b) y 120 b) del Código Penal Ranbeer; y 7 25) de la IAA (causa penal FIR N° 16/2004), el último de los cuales está castigado con cadena perpetua. El Sr. Mir se encuentra actualmente detenido en la Prisión Central de Kotbalwal Jammu bajo la custodia de la policía de Jammu y Cachemira.

9. El Juez del distrito de Kupwara dictó la primera orden de detención, la N° DMK/PSA/05, contra el Sr. Mir el 8 de enero de 2005, y el Tribunal Superior la anuló a raíz de la presentación del recurso de hábeas corpus N° 29/05. El 14 de diciembre de 2005, el segundo Juez auxiliar del distrito y de la vista de la causa concedió al acusado la libertad bajo fianza (causa FIR N° 22/2004) y se dieron instrucciones al Comisario de la Prisión Central de Kotbalwal para que lo liberara. Inmediatamente después de su liberación, el Sr. Mir fue aprehendido por agentes de la Unidad de Contraespionaje de Jammu (CIJ) y llevado a las instalaciones de la Prisión Central de Kotbalwal. Después estuvo en el Centro de Interrogatorios de Tallab Tallo, antes de ser trasladado a las celdas de detención de la CIK en Srinagar. Desde allí se le trasladó al Centro de Interrogatorios en Humhama, donde permaneció hasta el 10 de enero de 2006. Durante todo ese tiempo no se hizo comparecer al Sr. Mir ante un tribunal para celebrar la audiencia sobre su prisión preventiva, como requiere la ley. Mientras estaba en el Centro de Interrogatorios de Humhama, se le formularon cargos en otra causa penal, la FIR N° 16/2004. Posteriormente se le trasladó de nuevo a la Prisión Central de Kotbalwal y se le mantuvo en prisión preventiva.

10. La segunda detención del Sr. Mir se llevó a cabo siguiendo la orden N° 05/DMK/PSA/2006, dictada el 27 de febrero de 2006 y basada en la presunción de que sus actividades eran perjudiciales para la seguridad del Estado, según las disposiciones de la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira. Esta orden de detención nunca se notificó al Sr. Mir. Un recurso presentado contra esta orden está pendiente de resolución en el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira desde el 25 de abril de 2006.

11. El Sr. Mehraj-ud-Din Khanday, de 16 años de edad, ciudadano indio de la región de Cachemira, con residencia habitual en el distrito de Pulwama, fue detenido sin orden judicial el 5 de agosto de 2005 en su domicilio de Panner Jagar, en Tral, por agentes del Equipo Especial de Investigación del distrito Sur de Srinagar, acusado de dos delitos en virtud de los artículos 307 y 427 del RPC, y 3 5) de la Ley de sustancias explosivas (causa penal FIR N° 56/2005), y por un tercer delito en virtud de los artículos 302 y 307 del Código Penal y del artículo 3 5) de la Ley de sustancias explosivas (causa penal FIR N° 142/2005). Las acusaciones formuladas contra el Sr. Khanday se castigan con cadena perpetua. El menor fue primero detenido por la policía de Jammu y Cachemira en la comisaría de Rajbagh Srinagar el 28 de febrero de 2006 en virtud de una orden del Juez del

distrito de Srinagar sobre la base de que sus actividades eran supuestamente perjudiciales para la seguridad del Estado, con arreglo a las disposiciones de la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira, pero se le trasladó posteriormente a un centro de detención en un lugar desconocido por su familia. El 13 de abril de 2006 se recurrió la orden de detención dictada por el Juez del distrito ante el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira en Srinagar.

12. El Sr. Nazir Ahmad Dar, con residencia habitual en el distrito de Baramulla, fue detenido el 10 de diciembre de 2003 sin una orden judicial en JVC Bemina Srinagar por agentes de la policía de Jammu y Cachemira y del Grupo de Operaciones Especiales, por cargos formulados en virtud de los artículos 7 25) de la IAA y 3 6) de la Ley de (prevención de) actividades terroristas y disturbios (TADA) de 1987, y registrado en la comisaría de la CIK en Srinagar (causa penal FIR N° 18/2003). La policía de Jammu y Cachemira lo mantiene en prisión preventiva desde el 3 de marzo de 2004 en la cárcel del distrito de Udhampur Jammu. La orden de detención fue dictada por el Juez del distrito de Srinagar sobre la base de que sus actividades eran supuestamente perjudiciales para la seguridad del Estado según los términos de la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira.

13. La orden de detención se impugnó con resultados favorables ante el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira, mediante la petición de hábeas corpus N° 210 de 2004, y fue anulada el 12 de marzo de 2005. Se envió una copia de la orden del Tribunal a las autoridades de la prisión; éstas, en lugar de liberar al Sr. Dar, lo retuvieron en carácter de procesado. Posteriormente, el Juez auxiliar del distrito y de la vista de la causa de Srinagar, a petición del Sr. Dar, lo puso en libertad bajo fianza después de escuchar al Estado. La orden de libertad bajo fianza se notificó debidamente a las autoridades de la prisión, que, sin embargo, no lo dejaron en libertad, sino que lo pusieron bajo custodia del Comité Conjunto de Inteligencia (JIC) en Humhama. Funcionarios del JIC en Humhamale lo acusaron en otra causa penal, la FIR N° 3/2002, en virtud de los artículos 2 3) de la Ordenanza de control de salidas del país y circulación interna, 7 25) de la IAA, y 302 y 120 b) del Código Penal. Se mantuvo al Sr. Dar en custodia en los locales del JIC Srinagar durante unos días. Posteriormente, se le trasladó a la prisión de distrito de Kotbalwal, donde estuvo en prisión preventiva de nuevo en virtud de las disposiciones de la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira (orden N° 257 de 2006, de fecha 6 de marzo de 2006). Esta orden de detención dictada por el Juez del distrito de Barmulla se recurrió ante el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira en Srinagar el 26 de abril de 2006.

14. El Sr. Mohammed Yunis Bhat, con residencia habitual en el distrito de Srinagar, fue detenido en 1999 por las fuerzas de la policía de Jammu y Cachemira, y acusado de dos delitos en virtud del artículo 7 25) de IAA (causa penal FIR N° 8/99), uno registrado en la comisaría de Panth Chowk y otro en la comisaría de Kheer Bawani. Más tarde se formularon contra él nuevos cargos en virtud del artículo 7 25) de la IAA (causas penales FIR N° 78/2002 y FIR N° 81/2005). No se mostró al Sr. Bhat ninguna orden judicial en el momento de su detención. La causa FIR N° 8/99 se presentó ante el tribunal de la jurisdicción competente y el Sr. Bhat quedó a la espera de juicio. Aunque ya estaba detenido en relación con esta causa, se dispuso de forma concurrente la prisión preventiva del Sr. Bhat conforme a las disposiciones de la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira. El Juez del distrito de Srinagar dictó la orden de detención por considerar que sus actividades eran presuntamente perjudiciales para la seguridad del Estado. Sin embargo, después de expirar la mencionada orden de detención no se lo puso en libertad. En 2002, se formularon nuevos cargos al Sr. Bhat en la causa penal FIR N° 78/2002 en virtud del artículo 7 25) de IAA. El 29 de septiembre de 2005 se dictó auto de procesamiento contra el Sr. Bhat en la causa penal FIR N° 81/2005, y el 18 de octubre de 2005, mientras estaba bajo custodia a la espera de juicio, el Juez del distrito de Srinagar dictó una orden de prisión preventiva. Su padre recurrió una de las órdenes de detención ante el Tribunal Superior de

Jammu y Cachemira, en Srinagar, y el recurso está pendiente de resolución desde mayo de 2006. El Sr. Bhat permanece detenido de forma continuada desde 1999.

15. El Sr. Umar Jan, con residencia habitual en el distrito de Anantnag Cachemira, fue detenido sin orden judicial el 16 de agosto de 2005 en su domicilio de Takya Behram Shah, Tehsil y distrito de Anantnag, por las fuerzas de la 1ª Rashtria Rifles (RR) de Khanabal Anantnag, por cargos formulados contra él en virtud del artículo 7 25) de la IAA (causa penal FIR N° 651/2005). En el Centro de Interrogatorios de la 1ª RR de Khanabal, el Sr. Jan fue objeto de malos tratos. Más tarde se le trasladó al Centro de Interrogatorios de Air Cargo en Srinagar, donde permaneció durante unos nueve días. Luego estuvo detenido en el Centro Conjunto de Interrogatorios (JIC) durante aproximadamente un mes, antes de ser devuelto a la 1ª RR de Khanabal y retenido allí por unos días. Debido también a la presión pública ejercida por las manifestaciones de los vecinos, los agentes de la 1ª RR de Khanabal entregaron al Sr. Jan a la policía de Anantnag, que procesó al detenido en la causa penal FIR N° 651/2005, y formuló contra él cargos de conformidad con el artículo 7 25) de la IAA. El Juez del distrito de Anantnag dictó la orden de prisión preventiva el 26 de noviembre de 2005 (orden N° Det/PSA/05/176) conforme a las disposiciones de la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira, alegando que las actividades del Sr. Jan eran perjudiciales para la seguridad del Estado. Quedó ulteriormente detenido en la Prisión Central de Kotbalwal Jammu bajo la autoridad de su Director.

16. El Sr. Jan presentó un recurso (N° 418/2005) ante el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira para impugnar la legalidad de su detención. El 6 de febrero de 2006, durante la tramitación del mismo, el Gobierno revocó la orden de detención. Posteriormente, se entregó al Sr. Jan a las fuerzas de la CIK en Jammu, que lo retuvieron durante 40 días. El 22 de abril de 2006 el Juez de primera instancia de Anantnag concedió al Sr. Jan la libertad bajo fianza en relación a los cargos formulados contra él en la causa FIR N° 651/2005. La orden de libertad bajo fianza se notificó a la policía, que en lugar de liberar al Sr. Jan lo trasladó de nuevo a la Prisión Central de Kotbalwal Jammu y lo retuvo en virtud de las disposiciones de la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira. El Sr. Jan permanece en prisión desde su detención inicial, el 16 de agosto de 2005. Está pendiente de resolución desde mayo de 2005 un recurso presentado contra su orden de detención ante el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira.

17. El Sr. Reyaz Ahmad Teeli, de 27 años, con residencia habitual en el distrito de Anantnag, fue detenido sin una orden judicial el 23 de marzo de 2004 en Bijbehara por agentes de la policía de Jammu y Cachemira y del Grupo de Operaciones Especiales. Se formularon cargos contra él en virtud de los artículos 307 del RPC y 7.25 de la IAA (causa penal FIR N° 117/04), y más adelante se le plantearon otros cargos en una causa diferente, pero con arreglo a las mismas disposiciones (FIR N° 84/04), ambas registradas en la comisaría de Bijbehara. El detenido no solicitó la libertad bajo fianza en relación a los primeros cargos presentados en su contra en la causa FIR N° 117/04. El 6 de agosto de 2004, mientras estaba bajo custodia, el Juez del distrito de Anantnag dictó, a petición de la policía de Jammu y Cachemira, la orden de detención preventiva por un período de tiempo indefinido, invocando las disposiciones de la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira sobre la base de que las actividades del Sr. Teeli eran presuntamente perjudiciales para la integridad y la soberanía del Estado (orden N° 303/DMA/PSA/2004/549-54). Actualmente está detenido en el Centro Conjunto de Interrogatorios de Humhama.

18. Mediante una petición de hábeas corpus se impugnó ante el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira la orden de detención preventiva de fecha 6 de septiembre de 2004, con resultados favorables. El Tribunal ordenó a las autoridades que liberaran al Sr. Teeli mediante una sentencia de fecha 27 de septiembre de 2005. En el ínterin, el tribunal de primera instancia de la jurisdicción competente concedió la libertad bajo fianza al detenido

en relación con la causa penal FIR N° 117/04. Se notificaron ambas órdenes a la policía para su liberación. Sin embargo, en lugar de liberar al Sr. Teeli, la policía lo trasladó al Centro de Interrogatorios, donde se le sometió a malos tratos durante varios días. A continuación se implicó al Sr. Teeli en otra causa penal (FIR N° 84/04). El Juez de vista de la causa de Anantnag aceptó la correspondiente solicitud de libertad bajo fianza. La orden de libertad bajo fianza se notificó debidamente a las autoridades policiales en cuestión; sin embargo, el Sr. Teeli tampoco fue liberado en esta ocasión. El Comisario adjunto de la policía del Centro Conjunto de Interrogatorios de Hayhama, en virtud de la causa penal FIR N° 84/04 y de acuerdo con la carta N° JIC/06/H-O/13333, de fecha 4 de enero de 2006, solicitó de nuevo la detención del Sr. Teeli. El 29 de abril de 2006, el Juez del distrito de Anantnag aprobó la solicitud de prisión preventiva de acuerdo con las disposiciones de la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira (orden N° Det/PSA/06/09). El 29 de mayo de 2006 se impugnó esta orden ante el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira en Srinagar.

19. El Sr. Abdul Qadeer, de 45 años de edad, ciudadano de Tayikistán, con residencia habitual en R/O Shaheed Mazar, en Tayikistán, fue detenido en 1995 en la región de Cachemira sin orden judicial por las fuerzas de seguridad indias, que invocaron las disposiciones de la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira (causa penal FIR N° 101/1995). Se formularon cargos contra él en virtud del artículo 7 25) de la IAA. El tribunal competente absolvió al Sr. Qadeer de estos cargos el 20 de junio de 2006. El 19 de enero de 2006, aún durante la celebración de su juicio, se procedió a su detención preventiva por un período indefinido, de conformidad con las disposiciones de la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira, y bajo la autoridad del Director adjunto del Departamento del Interior, Secretaría Civil de Jammu/Srinagar, para tomar las disposiciones necesarias para su deportación a su país natal. Se desconoce el lugar de detención del Sr. Qadeer. Está pendiente de resolución un recurso presentado el 24 de abril de 2006 ante el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira en Srinagar. Se ha pedido al tribunal que ordene a las autoridades responsables que liberen al Sr. Qadeer y lo envíen a Tayikistán.

20. La fuente afirma que las detenciones de las diez personas mencionadas anteriormente son arbitrarias. Con respecto al Sr. Manzoor Ahmad Waza, su detención es arbitraria porque los agentes que lo arrestaron lo maltrataron y retuvieron ilegalmente en prisión preventiva. Las leyes ordinarias del territorio habrían sido suficientes para tratar su caso e impedirle la actividad que se deseaba restringir, y además no se presentaron ante las autoridades elementos concluyentes que justificaran la aprobación de una orden de detención. Además, se le privó de su derecho a una representación efectiva ante el Gobierno y a un proceso con las debidas garantías, pues no se le dio la oportunidad de refutar, en virtud del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal, la prueba recogida que presuntamente el Comisario Superior de la policía de Barmulla facilitó a las autoridades encargadas de su detención y que, en cambio, no se comunicó al Sr. Waza como persona afectada. Por otra parte, el proceso de detención incumple las garantías procesales, en violación de los artículos 13, 15 y 16 de la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira. La orden de detención del Sr. Waza no se dictó en el plazo establecido por la ley aplicable ni se remitió este caso a la Junta Asesora en el plazo estipulado. Nunca se ha hecho comparecer al detenido ante la Junta Asesora y nunca se le ha dado la oportunidad de ser oído, personalmente o a través de su abogado. La Junta Asesora no ha presentado su opinión al Gobierno para la confirmación de la orden de detención en el plazo estipulado. Por último, el Sr. Waza permanece aislado en su celda.

21. El Sr. Nisar Ahmad Wani fue detenido el 14 de septiembre de 2004, y continuaba detenido el 10 de diciembre de 2005, cuando se emitió la orden de detención. Las autoridades no han proporcionado ninguna razón convincente que justifique la aprobación de esta orden de detención ni su tardía ejecución. La orden no se emitió dentro del plazo ni

el Sr. Wani pudo presentar su exposición a la Junta Asesora. El Sr. Wani está detenido de forma concurrente en virtud de las disposiciones de la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira, a pesar de que ya había sido sometido antes a la custodia punitiva del Estado. Según afirma la fuente, la orden de detención y el procedimiento seguido por las autoridades encargadas de su detención violan el artículo 22/5 de la Constitución de la India y las salvaguardias pertinentes previstas en el marco de la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira.

22. La fuente sostiene también que la detención del Sr. Farooq Ahmad Kana es arbitraria debido a que fue maltratado durante varios días por agentes de la 112 Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF). No se presentaron ante las autoridades que justificaran la aprobación de la orden de detención en el marco de la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira. El Sr. Kana presentó una solicitud de libertad bajo fianza ante el Juez de la vista de la causa Barmulla, que fue aceptada por el tribunal el 20 de noviembre de 2005, pero no mencionada por las autoridades en la orden de detención. No se comunicaron al detenido los hechos que justificaban la orden ni se le informó de su derecho de representación ante la Junta Asesora, en infracción de las disposiciones de la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira.

23. Según la fuente, las órdenes de detención dictadas por el Juez del distrito de Kupwara relativas al Sr. Mohammed Yousuf Mir son ilegales. Su detención fue arbitraria, si se consideran los malos tratos que le infligieron las fuerzas de la policía encargadas de su detención. Dada la naturaleza y gravedad de los cargos relacionados con la causa penal FIR N° 16/2004, una segunda solicitud de libertad bajo fianza no habría dado ningún resultado. Por lo tanto, habría sido suficiente aplicar al Sr. Mir el derecho penal ordinario, en lugar de ordenar su prisión preventiva en virtud de las disposiciones de la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira. En cualquier caso, no había elementos convincentes ni razones imperiosas que las autoridades pudieran esgrimir para dictar la segunda orden de detención con arreglo a las disposiciones de la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira. Como no se notificó al Sr. Mir la segunda orden de detención, se le privó de su derecho a una asistencia letrada efectiva, en violación del artículo 22 5) de la Constitución de la India. Por último, el Juez del distrito de Kupwara sostuvo erróneamente que el Tribunal Superior anuló la primera orden de detención por cuestiones meramente formales, cuando en realidad la revocó por cuestiones de fondo. Por lo tanto, el Juez del distrito no podía dictar otra orden de detención sin establecer nuevos cargos contra el Sr. Mir.

24. La detención del Sr. Mehraj-ud-Din Khanday es arbitraria por las siguientes razones. El detenido era menor de edad, pues tenía 16 años. Los funcionarios del Equipo Especial de Investigación lo maltrataron y luego lo mantuvieron en prisión preventiva en virtud de las disposiciones de la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira. El Juez del distrito de Srinagar dictó la orden de detención preventiva a petición de la policía, sin esperar la decisión del tribunal de primera instancia designado en virtud de la aplicación de la Ley de (prevención de) actividades terroristas y disturbios (TADA) de 1987. Este tribunal sería el órgano competente encargado de dirigir, en virtud de la legislación ordinaria, el juicio contra el Sr. Khanday, dada su condición de menor de edad. Sin embargo, el Juez del distrito no tuvo en cuenta estas circunstancias cuando ordenó su detención preventiva. Por último, no se notificaron al Sr. Khanday ni la orden de detención ni los elementos materiales en que se basó su detención. Esto le impidió reaccionar de forma eficaz contra la solicitud de detención.

25. La detención del Sr. Nazir Ahmad Dar es arbitraria, ya que se le detuvo sin una orden y se le maltrató después de la detención. Por otra parte, a la hora de dictar la orden de detención preventiva el 26 de abril de 2006, el Juez del distrito de Barmulla no tuvo en cuenta que el Sr. Dar estaba sujeto a custodia desde el 10 de diciembre de 2003 y por lo tanto no pudo cometer ningún delito de los que se le imputan en la segunda causa penal

instruida en su contra, la FIR N° 3/2003. En el momento de su detención inicial las autoridades no mencionaron esta causa penal. Además, nunca se hizo comparecer al detenido ante un juez, como exige la legislación penal aplicable. Por lo tanto, según sostiene la fuente, las autoridades dictaron la orden de detención preventiva de conformidad con la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira sólo para frustrar el curso ordinario de la justicia penal.

26. Con respecto al Sr. Mohamed Younis Bhat, la fuente sostiene que su detención es arbitraria porque en repetidas ocasiones, cada vez que un tribunal de justicia ordenaba su liberación, la policía volvía a detenerlo y ponerlo en prisión preventiva sobre la base de nuevos cargos. Además, no se le informó de su derecho de representación ante la Junta Asesora, en violación del artículo 22 5) de la Constitución.

27. Por otra parte, la detención del Sr. Umar Jan es ilegal, inconstitucional y arbitraria, y viola los principios reconocidos internacionalmente por las razones que se enuncian a continuación. El Sr. Jan fue objeto de malos tratos después de su detención, durante la reclusión en el Centro de Interrogatorios de la Iª RR de Khanabal. Permanece detenido desde su arresto inicial el 16 de agosto de 2005, a pesar de que el Gobierno revocó una orden de detención y el magistrado judicial de Anantnag le concedió la libertad bajo fianza. No se presentaron nuevas pruebas ni se dieron razones valederas que justificaran la decisión de las autoridades de prolongar la detención del Sr. Jan. El Juez del distrito de Anantnag, siguiendo el consejo de la policía, dictó la segunda orden de detención (preventiva) contra el Sr. Jan exactamente sobre las mismas causales conocidas por el Gobierno cuando revocó la primera. Además, no se comunicaron al detenido los elementos que sirvieron de base para que las autoridades dictaran la orden de detención, de modo que no pudo hacer una presentación efectiva contra la orden ante la Junta Asesora. Tampoco se informó al Sr. Jan de su derecho a la presentación. Según la fuente, esta conducta viola el artículo 22 5) de la Constitución.

28. La fuente añade que la detención del Sr. Reyaz Ahmad Teeli es arbitraria, ya que la policía ha desatendido varias órdenes judiciales en que se daban instrucciones para su liberación. Además, la segunda orden de detención se dictó sobre las mismas bases que la primera. No se presentaron ante las autoridades elementos bien fundamentados que justificaran la aprobación de la segunda orden de detención. No era preciso prevenir ninguna actuación del Sr. Teeli, puesto que estaba bajo custodia de las autoridades gubernamentales desde el 23 de junio de 2004. En consecuencia, el Juez del distrito de Anantnag no tomó en consideración todos los hechos pertinentes cuando dictó la segunda orden de detención ni alcanzó el umbral de "íntima convicción" que exigen las disposiciones de la Ley de seguridad del Estado de Jammu y Cachemira. No se proporcionó al Sr. Teeli la oportunidad de realizar una presentación efectiva ante la Junta Asesora, ya que no se le proporcionaron los elementos pertinentes, en particular una copia de la FIR, un memorando de la detención u otros expedientes pertinentes. Por último, las autoridades no comunicaron su caso a la Junta, como exige la ley.

29. Por último, la detención del Sr. Abdul Qadeer es arbitraria y viola las normas internacionales de derechos humanos, ya que se trata de un extranjero que ha sido absuelto de todos los cargos penales formulados en su contra por el tribunal de la jurisdicción competente. Sin embargo, permanece privado injustificadamente de su derecho a la libertad. En lugar de enviarlo a Tayikistán, las autoridades lo retienen en prisión preventiva sin motivo alguno. Según la fuente, las autoridades gubernamentales tienen el deber, en virtud del derecho internacional aplicable, de devolver al Sr. Qadeer a su país natal.

30. Estas alegaciones de la fuente se transmitieron al Gobierno el 27 de agosto de 2007. El Grupo de Trabajo recibió la respuesta del Gobierno el 4 de septiembre de 2008, y puede resumirse de la siguiente manera.

31. El Sr. Manzoor Ahmed Waza, hijo de Abdul Khaliq, residente en Tawheed Guni, Baramulla, es miembro del grupo Hizbul Muyahidín. Se le detuvo por atacar a las fuerzas de seguridad con una granada en el Puente de Cemento de Baramulla el 16 de noviembre de 2005. Fue detenido por el Juez del distrito de Baramulla en virtud de la Ley de seguridad pública. El 10 de marzo de 2006 lo internó en la prisión del distrito de Udampur. En mayo de 2007, a raíz de la anulación de la orden de detención por el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira, el tribunal de primera instancia lo puso en libertad bajo fianza.

32. El Sr. Nishar Ahmed Wani, hijo de Abdul Gani, residente de Kelan Kulgam, es miembro del grupo Hizbul Muyahidín. Se le detuvo el 4 de septiembre de 2004 por proporcionar alimentos y refugio a militantes de HM y por ocultar armas y municiones en su domicilio. En el momento de la detención se encontraron en su casa una pistola, un cargador con cuatro cartuchos, un paquete de RDX (20 kg) y una varilla de limpieza. El Juez del distrito de Anantnag lo detuvo en virtud de Ley de seguridad pública y lo encarceló con efecto 17 de febrero de 2006 en la prisión de Kotbalwal Jammu. El 14 de noviembre de 2006, a raíz de la anulación de la orden de detención por el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira, el tribunal de primera instancia lo puso en libertad bajo fianza.

33. El Sr. Farooq Ahmed Kana, hijo de Abdul Khaliq, residente en Shahabad Sopore, Baramulla, es miembro del grupo Lashkar-e-Taiba. Proporcionaba alimento y refugio a terroristas a la vez que les informaba sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad. Se le detuvo el 7 de septiembre de 2005 en la comisaría de Sopore por violar la Ley de armas, y se encontraron en su posesión una granada de mano y un detonador. El Juez del distrito de Baramulla ordenó su detención en virtud de la Ley de seguridad pública y lo internó en la prisión del distrito de Udampur el 12 de enero de 2006. En diciembre de 2006 salió en libertad bajo fianza a raíz de la anulación de la orden de detención por parte del Tribunal Superior de Jammu y Cachemira.

34. El Sr. Mohammad Yousuf Mir, hijo de Abdul Gani, residente en Gagal Lolab, Kupwara, es miembro del grupo Frente Islámico, del que es guía y promotor. El 13 de enero de 2005, el Juez del distrito de Kupwara ordenó su detención en virtud de la Ley de seguridad pública y lo envió a la prisión de Kotbalwal Jammu. El Tribunal Superior de Jammu y Cachemira anuló la orden de detención el 17 de noviembre de 2005. El sujeto continuó con sus actividades contra el Estado. Se le arrestó de nuevo, entre otras cosas, por violar la Ley de armas. El Juez del distrito de Kupwara ordenó su detención por una nueva denuncia en virtud de la misma ley y lo envió a la prisión central de Srinagar, con efectos a partir del 1º de marzo de 2006. El 6 de junio de 2006 el Gobierno revocó esta orden de detención, y el 3 de agosto de 2006 se puso al Sr. Mir en libertad bajo fianza.

35. El Sr. Mehraj-ud-Din Khanday, hijo de Ghulam Nabi, residente de Panner, Tral, Pulwama, fue detenido el 5 de agosto de 2005 acusado de militar en el grupo Hizbul Muyahidín y de participar en tres ataques contra las fuerzas de seguridad. Se le acusó de violar la Ley de sustancias explosivas y la Ley de armas. En el momento de la detención se encontró en su posesión un dispositivo de control remoto. El Juez del distrito de Srinagar ordenó su detención en virtud de la Ley de seguridad pública, y el 9 de marzo de 2006 lo envió a la prisión de Kotbalwal Jammu. El Tribunal Superior de Jammu y Cachemira anuló la orden de detención el 16 de octubre de 2006. El Sr. Khanday está actualmente bajo custodia judicial y será enjuiciado en relación con la denuncia registrada en la comisaría de Nishat.

36. El Sr. Nazir Ahmed Dar, hijo de Sonaullah Dar, residente en Doora Sopore, Baramulla, es un militante adiestrado y jefe de comando del grupo Tehreek-ul-Mujahideen (TuM). Se le arrestó el 28 de octubre de 2003 por violar la Ley de armas. Durante la detención se encontró en su posesión un fusil AK, un aparato de radio, una pistola y 120 cartuchos. El Juez del distrito de Barmulla ordenó su detención en virtud de Ley de seguridad pública, y lo envió a la prisión del distrito de Udampur con efectos a partir del 5

de abril de 2004. El Tribunal Superior anuló la orden de detención el 30 de agosto de 2005. El Juez del distrito de Baramulla ordenó nuevamente su detención por violación de la Ley de armas y lo envió a la cárcel del distrito de Udhampur con efectos a partir del 10 de marzo de 2006. Esta orden se anuló y el Sr. Dar fue puesto en libertad el 29 de junio de 2007.

37. El Sr. Mohammad Younis Bhat, hijo de Ghulam Mohammad, residente en Khonmuh Srinagar, está afiliado al grupo Hizbul Muyahidín como militante local adiestrado. Estuvo asociado con Peer Abdul Rashid, supuesto Comandante en Jefe del grupo HM. Se detuvo al Sr. Bhat en 1999 por violar la Ley de armas y se encontraron en su posesión una pistola china, un cargador de pistola, siete cartuchos y una granada de mano. Se le detuvo en virtud de la Ley de seguridad pública y se le puso en libertad en 2002. Se le detuvo nuevamente en la comisaría de Kheerbhawani el 30 de noviembre de 2002 por violación de la Ley de armas. Desde el 6 de marzo de 2003 estuvo en la prisión de Kotbalwal Jammu por sus actividades terroristas y en virtud de la PSA. El Gobierno, sin embargo, anuló y revocó la orden de detención, y se puso en libertad al Sr. Bhat el 11 de septiembre de 2005. Como prosiguió sus actividades subversivas, se le detuvo en Zakoora, Srinagar, donde se le incautó un dispositivo explosivo improvisado con temporizador, un detonador, una batería y 15 cartuchos AK. Se registró una denuncia en la comisaría de Pantha Chowk. Se procedió a su detención en virtud de la Ley de seguridad pública en la prisión de Kotbalwal Jammu a partir del 10 de noviembre de 2005. El tribunal de primera instancia lo puso en libertad el 18 de agosto de 2007, después de que el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira anulara la detención.

38. El Sr. Umar Jan, hijo de Ghulam Najar, residente en Takiya Bahram Shah, Anantnag, fue detenido el 18 de octubre de 2005 por ser un militante local adiestrado del grupo Hizbul Muyahidín y por suministrar a otros militantes alimentos, refugio e información sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad. Se registró una denuncia contra él en la comisaría de Anantnag. Se le detuvo, en virtud de la Ley de seguridad pública, por orden del Juez del distrito de Anantnag, que lo envió a la prisión de Kotbalwal el 29 de noviembre de 2005. El Gobierno revocó la orden de detención y se le puso en libertad el 11 de febrero de 2006. Después de su liberación, siguió asociado a Javed Sepan, militante de HM, al cual facilitó alimento y refugio. Como consecuencia, el Juez del distrito de Anantnag ordenó nuevamente su detención en base a la Ley de seguridad pública y lo envió a la prisión de Kotbalwal Jammu a partir del 26 de abril de 2006. Tras la anulación de la orden de detención, el 6 de octubre de 2006, el Sr. Umar Jan fue puesto en libertad. Después de su liberación, la policía de Anantnag lo detuvo de nuevo por encontrar en su posesión cinco kilos de RDX y una granada UBGL. Sigue registrada una denuncia en su contra en la comisaría de Anantnag. El Juez del distrito de Anantnag ordenó su detención en virtud de la Ley de seguridad pública y lo envió a la prisión de Kotbalwal el 6 de noviembre de 2006. El tribunal anuló esta orden de detención y la causa está en curso.

39. El Sr. Reyaz Ahmed Teeli, hijo de Abdul Majeed Teeli, residente en Teeli Mohalla Biibehara, Anantnag, empleado del Gobierno, estaba afiliado al grupo Hizbul Muyahidín. Se le detuvo el 4 de octubre de 2004 por las denuncias registradas en la comisaría de Bijebhera, que lo acusaban de violar la Ley de armas. Durante el interrogatorio, el sujeto admitió que había perpetrado un ataque con granadas contra las fuerzas de seguridad cerca de hospital del distrito de Bijebhera en el que resultaron heridos 24 civiles. El Juez del distrito de Anantnag ordenó su detención en virtud de la Ley de seguridad pública el 6 de agosto de 2004 y lo envió a la prisión del distrito de Kathua con efectos desde el 16 de octubre de 2004. El Tribunal Superior de Jammu y Cachemira anuló la orden de detención y lo puso en libertad. El 29 de abril de 2006, el Juez del distrito de Anantnag lo detuvo de nuevo en base a la Ley de seguridad pública por continuar participando en actividades subversivas, y en esa misma fecha lo envió a la prisión de Kotbalwal. El Gobierno revocó esta orden y el Sr. Teeli fue entregado a la policía local para que diera curso al proceso.

40. La respuesta del Gobierno se transmitió a la fuente, que no ha presentado sus comentarios u observaciones. El Grupo de Trabajo está en condiciones de emitir una Opinión sobre la base de la información que se le ha proporcionado.

41. En primer lugar, el Grupo de Trabajo observa con satisfacción la función positiva de la judicatura india, en particular de los tribunales de mayor jerarquía (los Tribunales Superiores y el Tribunal Supremo), en la protección y defensa de la libertad individual y los derechos fundamentales de las personas. Esto resulta evidente por el número significativo de casos de detención que han sido impugnados con éxito ante el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira.

42. La posibilidad de recurrir a un foro judicial imparcial e independiente es importante en vista del hecho de que algunas de las leyes invocadas para detener a las personas permiten una amplia discrecionalidad y un gran margen de apreciación a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, incluida la policía y las fuerzas militares y paramilitares. Merece una consideración especial, en este sentido, la Ley de seguridad pública, en virtud de la cual se detuvo a todas las personas interesadas en el presente caso. El Gobierno no ha refutado la alegación de que las fuerzas de seguridad detuvieron a estas personas con arreglo a dicha ley sin la orden correspondiente, lo que constituye una violación de las debidas garantías en la detención.

43. Todas las personas detenidas son, según alega el Gobierno, miembros de grupos terroristas y están implicadas en actos que, por omisión y comisión, constituyen una amenaza para las fuerzas de seguridad, así como para la población en general. Los cargos que les imputa el Gobierno incluyen: atacar a las fuerzas de seguridad, proporcionar refugio a terroristas y estar en posesión de armas y municiones. Se trata, en efecto, de cargos muy graves. Ahora bien, si estas personas están acusadas de delitos tan graves como los mencionados, e incluso se les ha encontrado en posesión de material de contrabando, como granadas, explosivos, pistolas, fusiles, etc., ¿cómo es posible que hayan logrado impugnar con éxito su detención?

44. El Grupo de Trabajo no está convencido de que las detenciones de estas personas estén realmente motivadas por actividades terroristas de los detenidos que constituyan una amenaza para el Estado, ya que las detenciones (excepto en dos casos) no fueron seguidas de una condena, como sería de esperar, sino que acabaron dejadas de lado por la judicatura después de pocos meses.

45. El Grupo de Trabajo también encuentra deficiencias de las garantías procesales en el mecanismo de "detención en serie" aplicado por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley con el fin de privar a estas personas de su libertad. El Grupo de Trabajo observa con preocupación que, tan pronto como el tribunal ordenaba la puesta en libertad bajo fianza, el sujeto era de nuevo detenido y encarcelado con una nueva acusación, y no se le permitía así salir de la cárcel, prisión o lugar de detención.

46. El Grupo de Trabajo observa además que no se explicó ni comunicó a los detenidos las razones de su detención. En particular, los cargos se formularon durante sus períodos de detención, lo que dio lugar a privaciones de libertad sucesivas/continuas.

47. El Grupo de Trabajo observa con preocupación que uno de los detenidos, el Sr. Mehraj-ud Din Khanday, era menor de edad, pues tenía 16 años, y por lo tanto era más vulnerable que sus compañeros adultos. El Gobierno no ha hecho observaciones ni dado ninguna razón para no aplicar en este caso los derechos reconocidos por el derecho internacional a los menores de edad. De hecho, en su respuesta el Gobierno señala que esta persona está bajo custodia judicial y en proceso de juicio por una denuncia registrada en la comisaría de Nishat, a pesar de que el Tribunal Superior ha anulado la orden de detención dictada por el Juez.

48. El Grupo de Trabajo es consciente de que en la India, como en algunos otros Estados, el concepto de "detención preventiva" sigue aplicándose de forma amplia. Este mecanismo permite a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, como la policía, detener a personas como medida preventiva y sin tener que presentar un caso claro y convincente ante los tribunales que justifique la privación de libertad. Algunas disposiciones, como la Ley de seguridad del Estado y la Ley de (prevención de) actividades terroristas y disturbios, crean un espacio legal para detener a personas sospechosas de actividades subversivas contra el Estado. Es entonces cuando el concepto de "detención preventiva" que sostienen las leyes de un país presenta el riesgo de establecer estándares mínimos por debajo de los requeridos para que un juicio se considere justo e imparcial, para que garantice la asistencia de un abogado y dé al acusado la oportunidad de estructurar una defensa eficaz.

49. Como se indicó anteriormente, el Grupo de Trabajo aprecia la función de los órganos superiores de la judicatura a la hora de proteger la libertad individual, pero también toma nota de que sus órdenes de puesta en libertad no son efectivas, pues los encargados de ejecutarlas no liberan a los detenidos, sino que los vuelven a detener de inmediato, en las mismas instalaciones de detención o poco después, acusándolos de nuevos cargos. Es imprescindible un control más estricto de la aplicación y el respeto de las decisiones de detención adoptadas por los tribunales, para evitar así la arbitrariedad en la detención de acuerdo con el Principio 4 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

50. Por último, en el marco del debido proceso, es importante que se informe lo antes posible de la detención de una persona a sus abogados y a los miembros de su familia, y que se les dé a conocer el lugar de su detención. En el presente caso, los detenidos han sido trasladados a diferentes lugares sin que lo supieran sus familiares. Esto los coloca en clara desventaja a la hora de pedir la administración de justicia.

51. El Grupo de Trabajo es consciente de las sensibilidades políticas en relación con el estado de Jammu y Cachemira y de la compleja situación por lo que respecta a la ley y el orden público en esta zona del país. Como parte de su estrategia de gestión de crisis, el Gobierno recurre a las leyes de detención preventiva, en particular la Ley de seguridad del Estado y la Ley de (prevención de) actividades terroristas y disturbios. Sea como fuere, cualquier mecanismo jurídico, administrativo o de otro tipo empleado debe ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos y a las obligaciones asumidas por el Gobierno de la India.

52. De acuerdo con los párrafos 17 a) y e) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

a) La detención de los Sres. Manzoor Ahmad Waza, Nisar Ahmad Wani, Farooq Ahmad Kana, Mohammed Yousuf Mir, Nazir Ahmad Dar y Mohammed Younis Bhat es arbitraria y corresponde a las categorías II y III de los criterios aplicables por el Grupo de Trabajo al examen de los casos de privación de libertad, y está en contradicción con los artículos 7, 9, 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y con los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

b) El Grupo de Trabajo considera que la detención de los Sres. Mehraj-ud-Din Khanday, Umar Jan, Reyaz Ahmad Teeli y Abdul Qadeer es arbitraria y corresponde a las categorías II y III de las aplicadas por el Grupo de Trabajo al examen de los casos de privación de libertad, y está en contradicción con los artículos 7, 9, 10 y 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y con los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Grupo de Trabajo pide la liberación inmediata de las personas mencionadas *supra*.

c) En el caso del menor de edad Mehraj-ud-Din Khanday también se viola el artículo 14, párrafo 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Principio 16/3 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

53. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que considere la posibilidad de una revisión de la legislación nacional pertinente para ponerla en conformidad con las obligaciones internacionales adoptadas por el Estado en materia de derechos humanos.

Aprobada el 26 de noviembre de 2008.

## **Opinión N° 46/2008 (Myanmar)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 29 de agosto de 2008.**

**Relativa a la Sra. Aung San Suu Kyi.**

**El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
3. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha aprobado cuatro Opiniones relativas a la Sra. Aung San Suu Kyi, en relación con sus detenciones anteriores en 1992, 2002, 2004 y 2007.
4. La información adicional sobre el caso de la Sra. Aung San Suu Kyi que se resume a continuación se comunicó al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la siguiente manera: la Sra. Aung San Suu Kyi, Secretaria General de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) y Premio Nobel de la Paz, de 62 años de edad, con domicilio en Rangún, permanece desde el 30 de mayo de 2003 en arresto domiciliario sobre una base de prórrogas anuales. Las fuerzas de seguridad prorrogaron su orden de arresto domiciliario por última vez el 28 de mayo de 2008, invocando el artículo 10, párrafo b), de la Ley de protección del Estado de 1975 (Ley Puithu Hluttaw N° 3, 1975), que establece que "en caso necesario, se pueden restringir por un período de hasta un año los movimientos de una persona contra la cual se hayan iniciado acciones"<sup>9</sup>.
5. No se presentó a la Sra. Aung San Suu Kyi ninguna orden o decisión. Tampoco se le explicaron las razones para prolongar su arresto domiciliario, ni se la acusó de ningún delito. Además, según informa la fuente, no existe la posibilidad de una revisión judicial de su detención en el marco de las leyes nacionales. Desde que empezó su arresto domiciliario, la Sra. Aung San Suu Kyi apenas ha tenido acceso al mundo exterior. Según la fuente, el Subsecretario General de las Naciones Unidas, Sr. Ibrahim Gambari, ha sido su único visitante, además de su médico, una persona que le lleva alimentos y, en raras ocasiones, un diplomático. No tiene acceso a familiares o abogados, y sus comunicaciones y visitas dependen enteramente de la discrecionalidad del Gobierno.
6. La fuente recuerda que durante los 12 años que la Sra. Suu Kyi lleva detenida, el Grupo de Trabajo ha aprobado cuatro Opiniones (Nos. 8/1992, 2/2002, 9/2004 y 2/2007) en que declaró que sus respectivas privaciones de libertad eran arbitrarias, por contravenir los artículos 9, 10 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La fuente sostiene que con la expiración de la detención de la Sra. Suu, el 25 de mayo de 2008, también dejó

<sup>9</sup> El artículo 1 describe la Ley de protección del Estado como la "ley de salvaguardia del Estado contra la amenaza de los que pretenden causar actos subversivos".

de tener vigencia la Opinión N° 2/2007 del Grupo de Trabajo. La nueva orden de detención dictada por el Gobierno de Myanmar el 28 de mayo de 2008 todavía no ha sido sometida al examen del Grupo de Trabajo.

7. La Sra. Suu Kyi es la figura más destacada del movimiento en pro de la democracia en Myanmar. Es Secretaria General de la NLD, líder del partido de la oposición e hija del general Aung San, comandante del Ejército Independiente Birmano y presidente de la Liga Antifascista por la Libertad de los Pueblos, que dirigió la lucha por la independencia del país. Aung San, héroe máximo de la independencia de Birmania, fue asesinado en 1947. Desde 1988, la Sra. Suu Kyi ha luchado para llevar la democracia a Myanmar. Su respuesta desafiante a su detención persistente la ha convertido en un símbolo mundial de la resistencia no violenta a las autocracias militares. En 1991 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. A pesar de sus frecuentes detenciones, la Sra. Suu Kyi sigue hablando claramente en contra del Gobierno y desempeña un papel activo en la oposición cada vez que puede.

8. La fuente sostiene que la última prórroga de la orden de arresto domiciliario de la Sra. Suu Kyi no sólo viola el derecho internacional, sino también la legislación nacional de Myanmar, ya que la situación no se ajusta a los términos de la Ley de protección del Estado de 1975, que sólo permite emitir órdenes de arresto domiciliario renovables anualmente por un período máximo de cinco años en total. Este período acabó a finales de mayo de 2008.

9. La Sra. Suu Kyi se encuentra detenida en virtud de la Ley de protección del Estado de 1975, que permite a las autoridades ordenar la detención o el arresto domiciliario, sin cargos ni juicio, de cualquier persona que crean que lleva a cabo o puede llevar a cabo "cualquier acto que ponga en peligro la soberanía y la seguridad del Estado, o la paz y la tranquilidad públicas" (véase el artículo 7 de esta ley). No obstante, incluso según las propias autoridades, la privación prolongada de libertad de la Sra. Suu Kyi no cumple con este valor de umbral, ya muy bajo y subjetivo. El 23 de mayo de 2006, el General Khin Yi, que desempeña el cargo de Jefe de la Policía de la Nación, explicó en una conferencia de la policía regional que la liberación de la Sra. Suu Kyi probablemente tendría poco efecto en la estabilidad política del país y que no daría lugar a manifestaciones ni disturbios, ya que su apoyo público había disminuido. Además, como el Grupo de Trabajo señaló en su Opinión N° 2/2002, la Sra. Suu Kyi "es una conocida partidaria del cambio político exclusivamente por medios pacíficos. (...) Ningún agente del orden público, actuando de buena fe, puede determinar o creer que constituye un peligro en potencia para el Estado".

10. Según la fuente, no es posible encontrar ninguna justificación legal para la privación de libertad de la Sra. Suu Kyi en la legislación nacional de la Unión de Myanmar, sobre todo, si su liberación no pone en peligro la soberanía del Estado o la paz y la tranquilidad públicas.

11. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno las alegaciones contenidas en la comunicación de la fuente. Sin embargo, el Gobierno no ha respondido ni ha comunicado sus observaciones o comentarios al respecto. El Grupo de Trabajo considera que está en situación de emitir una Opinión con los elementos puestos a su disposición.

12. El Grupo de Trabajo considera que el continuo arresto domiciliario de la Sra. Aung San Suu Kyi es arbitrario y viola del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Incluso si pudiera considerarse que su liberación pone en peligro la soberanía del Estado o la paz y la tranquilidad públicas, la Ley de protección del Estado sólo permite mantener a una persona en su situación durante un máximo de cinco años, mediante renovaciones anuales. La detención de la Sra. Suu Kyi comenzó en mayo de 2003 y se ha prorrogado cada uno de los últimos cinco años. Una simple lectura de la Ley de protección del Estado de 1975 pone de manifiesto que la prolongación no es posible más allá de finales de mayo de 2008, fecha en que la Sra. Suu Kyi cumplió cinco años de arresto domiciliario.

Por lo tanto, una prórroga más allá del 28 de mayo de 2008 constituye una violación *prima facie* de las propias leyes de la Unión de Myanmar.

13. En virtud del artículo 10 de la Ley de protección del Estado de 1975, "para proteger al Estado contra los peligros", el Gobierno y, en particular, la Junta Central, incluidos los Ministros de Defensa, Asuntos Exteriores, e Interior y Asuntos Religiosos tienen "el derecho a aplicar las siguientes medidas restrictivas: (...) b) si es necesario, se pueden restringir por un período de hasta un año los movimientos de una persona contra la cual se inician acciones". El artículo 14 establece que "el Consejo de Ministros podrá conceder una autorización previa para prolongar la detención o restricción de los derechos de una persona contra la cual se inician acciones por un período (...) de hasta tres años". En las enmiendas posteriores a la Ley de protección del Estado se elevó el límite a cinco años. Aunque inicialmente se detuvo a la Sra. Suu Kyi el 30 de mayo de 2003, en virtud del artículo 10 b), el Gobierno prorrogó el período de su arresto domiciliario antes de la fecha prevista, por lo cual el vencimiento de la prórroga se adelantó unos días en mayo. Concretamente, su quinto período de arresto domiciliario se prorrogó por un año el 25 de mayo de 2007. Como resultado, ese período de arresto venció el 24 de mayo de 2008. El Gobierno había declarado anteriormente que el Consejo General no había dictado su orden de arresto hasta el 28 de noviembre de 2003, y que las sucesivas prórrogas debían aplicarse tomando esa fecha como referencia, y no finales de mayo. Si eso fuera correcto, sólo se podría mantener a la Sra. Suu Kyi bajo arresto domiciliario hasta el 27 de noviembre de 2008.

14. Sin embargo, este argumento tampoco tendría validez. La Ley de protección del Estado de 1975 no establece con claridad si la detención se inicia cuando la persona es detenida o en el momento en que se emite la orden. La ley define "cometer", "Junta Central" y "persona contra la cual se inician acciones", pero no "detener". Sería contrario a los principios básicos del estado de derecho sostener que una detención comienza cuando se dicta una orden en virtud de la ley, y no cuando se restringe la libertad o se coarta la libertad de movimiento de una persona. Los movimientos de la Sra. Suu Kyi se restringieron por la fuerza desde que se tomó en "custodia protectora" el 30 de mayo de 2003. Es razonable concluir que, en virtud de la Ley de protección del Estado de 1975, la Sra. Suu Kyi permanece detenida desde el 30 de mayo de 2003, y por tanto se la debió poner en libertad, de conformidad con la legislación nacional, antes del 30 de mayo de 2008. Si bien la Ley de protección del Estado es demasiado amplia e imprecisa en varios aspectos, resulta claro que el período máximo por el que se puede mantener a una persona en arresto domiciliario es de cinco años. Si la prisión se prorroga de un año, la Sra. Suu Kyi estará encarcelada mucho más del período de cinco años al que se refiere el Gobierno, que venció el 27 de noviembre de 2008, y por tanto se violaría la Ley de protección del Estado de 1975.

15. La renovación del arresto domiciliario de la Sra. Aung San Suu Kyi es arbitraria, ya que infringe los derechos y libertades fundamentales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, y corresponde a las categorías I, II y III de los criterios aplicables a los casos presentados al examen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

16. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

a) El Grupo de Trabajo confirma sus Opiniones anteriores (Nos. 8/1992, 2/2002, 9/2004 y 2/2007) y declara que el arresto domiciliario de la Sra. Aung San Suu Kyi es arbitrario, pues contraviene los artículos 9, 10 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

b) El Grupo de Trabajo considera que la nueva prórroga del arresto domiciliario de la Sra. Aung San Suu Kyi por vía administrativa es arbitraria, ya que viola los derechos y libertades fundamentales establecidos en los artículos 9, 10 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos e incluso la legislación nacional, en particular la Ley de protección del Estado de 1975, la cual en sí misma contradice los principios y normas básicos del derecho internacional moderno. Las violaciones de la libertad de la Sra. Aung San Suu Kyi corresponden a las categorías I, II y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

c) El Grupo de Trabajo decide transmitir la presente Opinión para su examen al Sr. Ibrahim Gambari, Asesor Especial del Secretario General, así como al Sr. Tomás Ojea Quintana, Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos en Myanmar.

17. Consecuentemente con esta Opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que ponga fin, inmediatamente y sin condiciones, a la situación de arresto domiciliario continuado de la Sra. Aung San Suu Kyi. También pide al Gobierno que tome medidas concretas para remediar la situación con miras a ponerla en conformidad con las normas internacionales relativas a los derechos humanos y que estudie la posibilidad de una pronta adhesión al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a otros tratados fundamentales de derechos humanos.

Aprobada el 28 de noviembre de 2008.

### **Opinión N° 1/2009 (Viet Nam)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 14 de octubre de 2008.**

**Relativa al Sr. Nguyen Hoang Hai (también conocido como Dieu Cay), al Sr. Nguyen Van Hai, al Sr. Nguyen Viet Chien, al Sr. Truong Minh Duc, al Sr. Pham Van Troi, al Sr. Nguyen Xuan Nghia, a la Sra. Pham Thanh Nghien, al Sr. Vu Hung, a la Sra. Ngo Quynh y al Sr. Nguyen Van Tuc.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por proporcionarle la información relativa a las alegaciones de la fuente dentro del plazo establecido y con mucha antelación al 54° período de sesiones, en que se aprobó esta Opinión. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta facilitada por el Gobierno a la fuente; sin embargo, no ha recibido de la misma ningún comentario.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. Los casos que se resumen a continuación se comunicaron al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la siguiente manera.
5. El Sr. Nguyen Hoang Hai (también conocido como Dieu Cay), uno de los miembros fundadores del Club de Periodistas Libres (Can Lac Bo Nha Bao Tu Do), fue detenido por agentes de la policía el 19 de abril de 2008 en la ciudad de Dalat. Antes de esta detención, la policía había convocado al Sr. Hoang Hai para ser interrogado en 15 ocasiones.
6. El Sr. Hoang Hai, escritor y *blogger*, publicó una serie de artículos en Internet en los que hacía un llamamiento en favor de los derechos humanos y las reformas democráticas. Algunos de estos artículos respondían a las pretensiones chinas con respecto a los archipiélagos de Spratly (Truong Sa) y Paracel (Hoang Sa), cuya soberanía se disputan Viet Nam y China. En enero de 2008, el Sr. Hoang Hai y otros activistas desplegaron pancartas frente al edificio de la Opera de Ho Chi Minh, para denunciar las reivindicaciones

de China sobre esas islas. La detención del Sr. Hoang Hai se produjo poco antes de la llegada del relevo de la antorcha de los Juegos Olímpicos de Beijing a Ho Chi Minh. Las autoridades vietnamitas estaban decididas a garantizar que no se produjeran protestas durante este acontecimiento.

7. El 10 de septiembre de 2008, un tribunal de Ho Chi Minh condenó al Sr. Hoang Hai a 30 meses de cárcel después de un juicio a puerta cerrada. Se le acusó de evasión de impuestos en el alquiler de una propiedad. Sus abogados argumentaron que incumbía al inquilino, y no al Sr. Hoang Hai, pagar todos impuestos de la propiedad, tal como quedaba recogido en el contrato de alquiler y como permite la ley vietnamita.

8. Según informó la fuente, los agentes que detuvieron al Sr. Hoang Hai formaban parte de los Departamentos de Seguridad Interior y Contraespionaje (Cue An Ninh Noi Chinh y Cue Phan Gian) del Ministerio de Seguridad Pública en Ho Chi Minh. Según la fuente, estos departamentos son los principales responsables del seguimiento e intervención de casos políticos. La fuente afirma que la evasión de impuestos fue un pretexto sin fundamento para castigar al Sr. Hoang Hai por su activismo político.

9. La fuente considera que se ha privado al Sr. Nguyen Hoang de la posibilidad de ejercer los derechos y libertades garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

10. Según la fuente, el Sr. Nguyen Van Hai, periodista que trabajaba en *Tuoi Tre* (*Revista de la Juventud*) y el Sr. Nguyen Viet Chien, periodista que trabajaba en *Thanh Men* (*Jóvenes*), fueron detenidos por haber cubierto un importante escándalo de corrupción en que estaban implicados varios funcionarios de alto rango. Se informó de que la detención de ambos periodistas se produjo el 13 de mayo de 2008 bajo la acusación de "presentación de información inexacta y abuso de poder". Sus detenciones se llevaron a cabo sólo dos meses después de que se absolviera inesperadamente de todos los cargos y se pusiera en libertad por falta de pruebas a uno de los principales sospechosos del escándalo de corrupción, el Viceministro de Transporte, Sr. Nguyen Viet Tien.

11. Los periodistas estuvieron dos meses en prisión preventiva mientras eran objeto de investigación. En julio de 2008, el Gobierno prorrogó su detención dos meses más. Los Sres. Van Hai y Viet Chien todavía no han sido puestos en libertad y se encuentran en riesgo de reclusión permanente. En virtud del Código de Procedimiento Penal vietnamita, la prisión preventiva no debe exceder de cuatro meses. Más allá de este plazo, los detenidos deben ser acusados formalmente o puestos en libertad. Sin embargo, este período de cuatro meses podría ser prorrogado hasta cuatro veces en el caso de delitos que atenten contra de seguridad nacional (es decir, un total de 20 meses), tras lo cual el Fiscal popular está facultado para aplicar "otras medidas disuasorias" (artículo 120 del Código de Procedimiento Penal).

12. El Sr. Truong Minh Duc, periodista independiente, fue detenido en mayo de 2007 y condenado a cinco años de prisión el 18 de julio de 2008, tras su juicio en la provincia meridional de Kien Giang. Se acusó al Sr. Minh Duc, según se informa, de "aprovechar las libertades y derechos democráticos para perjudicar los intereses del Estado" (artículo 258 del Código Penal). El abogado del Sr. Duc dijo que su cliente "escribió sobre la difícil situación de la población rural, la corrupción y falta de sinceridad del Gobierno, y las limitaciones impuestas a los campesinos de Kien Giang", y agregó que se le obligó a firmar confesiones. El Sr. Minh Duc se encuentra en un estado precario de salud debido a las duras condiciones de su detención.

13. La fuente considera que se ha privado a los Sres. Nguyen Van Hai, Nguyen Viet Chien y Truong Minh Duc de la libertad de ejercer los derechos y libertades que garantizan la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

14. El Sr. Pham Van Troi, miembro del Comité de Derechos Humanos en Viet Nam, fue detenido en Hanoi el 10 de septiembre de 2008. El Sr. Nguyen Xuan Nghia fue detenido en su domicilio de Haiphong el 11 de septiembre de 2008. La Sra. Pham Thanh Nghien fue detenida por diez agentes de policía el 11 de septiembre de 2008, en su domicilio de Haiphong, y llevada a Hanoi para ser interrogada.
15. En junio de 2008, las autoridades municipales de Hanoi rechazaron una solicitud presentada por estas tres personas para organizar una manifestación de protesta contra la presencia china en las islas de Paracel y Spratly. Después de los interrogatorios se puso en libertad temporalmente a la Sra. Pham Thanh Nghien, pero se la detuvo de nuevo en su domicilio de Haiphong el 18 de septiembre de 2008. Actualmente se encuentra detenida junto con otros activistas en la prisión B14 (Thanh Liet), cerca de Hanoi, acusada de "hacer propaganda contra la República Socialista del Viet Nam" (artículo 88 del Código Penal).
16. El Sr. Vu Hung fue detenido en su domicilio de la provincia de Ha Tay el 11 de septiembre de 2008. Se lo puso en libertad temporalmente después de los interrogatorios, pero volvieron a detenerlo en su domicilio el 18 de septiembre de 2008. Le despidieron de su trabajo como profesor de Física de secundaria, supuestamente debido a su relación con activistas vietnamitas en pro de la democracia.
17. La Sra. Ngo Quynh fue detenida en Hanoi el 10 de septiembre de 2008 cuando se dirigía a la parroquia Thai ha, donde tenía lugar una protesta masiva de creyentes católicos contra las políticas del Gobierno.
18. El Sr. Nguyen Van Tuc fue detenido el 11 de septiembre de 2008 en su domicilio de la provincia de Thai Binh por agentes de la policía durante una redada nocturna.
19. Según la fuente, las detenciones del Sr. Pham Van Troi, el Sr. Nguyen Xuan Nghia, la Sra. Pham Thanh Nghien, el Sr. Vu Hung, la Sra. Ngo Quynh y el Sr. Nguyen Van Tuc están al parecer relacionadas con una manifestación prevista para el 14 de septiembre de 2008 frente a la Embajada de la República Popular China en Hanoi. En esta fecha se conmemoraba el 50º aniversario de la firma de una nota diplomática por parte del ex Primer Ministro de Viet Nam del Norte Pham Van Dong en la que reconocía la soberanía de China sobre las islas de Spratly y Paracel. Según se informa, la policía estableció estrechos controles de seguridad en Hanoi para anticiparse a cualquier intento de reunión.
20. La fuente considera que se ha privado al Sr. Pham Van Troi, al Sr. Nguyen Xuan Nghia, a la Sra. Pham Thanh Nghien, al Sr. Vu Hung, a la Sra. Ngo Quynh y al Sr. Nguyen Van Tuc de su libertad de ejercer los derechos y libertades que garantizan la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
21. El 12 de enero de 2009, el Gobierno transmitió su respuesta y proporcionó al Grupo de Trabajo la información que figura a continuación.
22. Nguyen Hoang Hai, *blogger* también conocido como Dieu Cay, nació en 1952 y reside en Ho Chi Minh. El Tribunal Popular del Distrito 3 de Ho Chi Minh lo condenó a 30 meses de prisión el 10 de septiembre de 2008. Se le declaró culpable de evasión fiscal de conformidad con el artículo 161 del Código Penal. El juicio fue público, y no a puerta cerrada, como se ha mencionado.
23. Nguyen Van Hai nació en 1975 y reside en Hanoi. Trabajaba como periodista para la revista *Tuoi Tre*.
24. Nguyen Viet Chien nació en 1952 y reside en Hanoi. Trabajaba como periodista para el periódico *Thanh Nien*.
25. Se presentaron denuncias contra de estos dos ex periodistas en las que se les acusó de "abuso de cargo y de poder en el ejercicio de una misión oficial", de conformidad con el artículo 281 del Código Penal. El 12 de mayo de 2008 fueron detenidos y encarcelados

provisionalmente. Del 14 al 15 octubre de 2008, el Tribunal Popular de Hanoi los juzgó en audiencia pública. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 258 del Código Penal, se condenó a Nguyen Van Hai a 24 meses de reeducación sin prisión y a Nguyen Viet Chien a dos años de prisión.

26. Truong Minh Duc nació en 1960 y reside en la provincia de Kien Giang. El 5 de mayo de 2007 fue detenido y encarcelado provisionalmente. El 28 de marzo de 2008, el Tribunal Popular Provincial de Kien Giang lo juzgó en primera instancia y lo condenó a cinco años de prisión. El 18 de julio de 2008, el Tribunal Popular Provincial de Kien Giang lo juzgó nuevamente y decidió mantener el veredicto del primer juicio. Truong Minh Duc, al igual que Nguyen Van Hai y Nguyen Viet Chien, había abusado deliberadamente de su cargo, de su poder y de su libertad para llevar a cabo actividades contrarias a los intereses legítimos del Estado, las organizaciones y el resto de ciudadanos. Sus actividades violaban las disposiciones del Código Penal.

27. Con respecto al Sr. Pham Van Troi (nacido en 1972, residente en Hanoi); al Sr. Nguyen Xuan Nghia (nacido en 1949, residente en Hai Phong); a la Sra. Pham Thanh Nghien (nacida en 1977, residente en Hai Phong); al Sr. Vu Hung (nacido en 1966, residente en Hanoi); a la Sra. Ngo Quynh (nacida en 1984 en la provincia de Bac Giang, con residencia provisional en Hanoi); y al Sr. Nguyen Van Tuc (nacido en 1964, residente en la provincia de Thai Binh), se encuentran en prisión provisionalmente mientras los organismos profesionales competentes llevan a cabo investigaciones para determinar en cada caso si han llevado a cabo actividades contrarias a la ley.

28. Todas las personas mencionadas *supra* son sospechosas de violar las leyes vigentes en Viet Nam. La detención, la prisión provisional y la investigación se han ajustado a los plazos que establecen las leyes de Viet Nam y están en conformidad con la práctica internacional. El Gobierno afirma categóricamente que no existen casos de detención arbitraria en Viet Nam. Sólo se detiene, se encarcela y se juzga a las personas que violan las leyes, y se hace de conformidad con los términos establecidos en las mismas.

29. El Grupo de Trabajo lamenta que la fuente no haya aportado sus comentarios sobre la información presentada por el Gobierno, a pesar de haber sido invitada a hacerlo. No obstante, el Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una Opinión sobre los hechos y circunstancias de los casos, teniendo en cuenta toda la información que tiene a su disposición.

30. La fuente informó de que el Sr. Nguyen Hoang Hai fue detenido el 19 de abril de 2008, y condenado a 30 meses de prisión el 10 de septiembre de 2008. En su respuesta, el Gobierno confirma la condena de 30 meses de prisión, así como la fecha de la sentencia, pero no menciona la fecha de su detención, el 19 de abril de 2008, ni explica por qué el Sr. Nguyen Hoang Hai estuvo detenido casi cinco meses antes de su juicio. Tampoco responde a la pregunta de por qué el Sr. Nguyen Hoang Hai fue citado por la policía para ser interrogado 15 veces antes de su detención. Además, si los cargos contra el Sr. Nguyen Hoang Hai tenían relación con la evasión de impuestos en el alquiler de una propiedad, no se entiende que lo detuvieran agentes de los Departamentos de Seguridad Interior y Contraespionaje del Ministerio de Seguridad Pública.

31. Teniendo en cuenta la información de contexto que facilitó la fuente sobre la fecha de detención del Sr. Nguyen Hoang Hai y sobre sus actividades periodísticas y políticas anteriores a la detención, cuya legitimidad y carácter pacífico no han sido discutidos por el Gobierno, así como la ausencia de razones válidas por parte del Gobierno que justifiquen su detención, el Grupo de Trabajo concluye que la detención del Sr. Nguyen Hoang Hai es arbitraria y corresponde a la categoría II de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo, ya que supone un intento de reprimir el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como de reunión pacífica.

32. En su respuesta, el Gobierno confirmó que el Sr. Nguyen Van Hai y el Sr. Nguyen Viet Chien fueron detenidos el 12 de mayo de 2008 (la fuente informó de que fue el 13 de mayo de 2008) y condenados el 15 de octubre de 2008. En virtud del Código de Procedimiento Penal, la detención con fines de investigación no debe exceder de cuatro meses, tras los cuales el detenido debe ser acusado formalmente o puesto en libertad, a menos que las acusaciones se refieran a un delito contra la seguridad nacional.

33. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya explicado si se acusó a los dos periodistas después de vencer el plazo máximo general de cuatro meses de prisión preventiva o si el delito se enmarcaba, en términos del artículo 281 del Código Penal, en la categoría de delitos contra la seguridad nacional, lo que permitiría una nueva prórroga del período de prisión preventiva con arreglo al derecho vietnamita, como informó la fuente. Además, el Gobierno no aportó al Grupo de Trabajo información sobre las razones reales que motivaron la condena del Sr. Van Hai y del Sr. Viet Chien, basada en un delito de "abuso de cargo y de poder en el ejercicio de una misión oficial". El Gobierno no aporta luz sobre cómo abusaron los acusados de sus cargos o sus atribuciones, qué misión oficial estaban llevando a cabo y si se retiraron los cargos de "presentación de información inexacta", de los que informó la fuente.

34. Además, si se toma en consideración el artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Gobierno no proporciona ninguna justificación para detener con fines de investigación ni para imponer una sanción penal por actos que se ajustan plenamente al ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión, a saber, la publicación de información sobre un caso de corrupción en el Gobierno por parte de los Sres. Van Hai y Viet Chien, en su calidad profesional de periodistas. El Gobierno parece contentarse con dar una explicación general en el sentido de que las medidas adoptadas se llevaron a cabo de conformidad con la legislación nacional y con las prácticas internacionales.

35. El Grupo de Trabajo concluye que la detención del Sr. Ngyuen Viet Chien es arbitraria, pues resulta del ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de opinión y expresión, consagrado en los artículos 19 tanto de la Declaración Universal de Derechos Humanos como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría II de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo. Lo mismo puede decirse del período de detención arbitraria del Sr. Ngyuen Van Hai, que abarca desde el momento de su detención el 12 de mayo de 2008 hasta su liberación en régimen de "reeducación sin detención", que presumiblemente tuvo lugar en el momento en que se dictó la sentencia, el 15 de octubre de 2008, o bien poco después.

36. El Grupo de Trabajo recuerda su Deliberación N° 4 sobre "Medidas de reeducación por el trabajo"<sup>10</sup>, en la que, entre otras cosas, sostuvo que una medida administrativa coercitiva en la forma de trabajo obligatorio, cuya finalidad no sea sólo la reeducación profesional, sino sobre todo la reeducación política y cultural mediante la autocrítica, hacen que la privación de libertad sea arbitraria. Sin embargo, si, como en el presente caso, la "reeducación" no está ligada a la detención, el Grupo de Trabajo no puede expresar una Opinión, aunque el carácter coercitivo de la medida impuesta al Sr. Van Hai plantea serias dudas en cuanto a su conformidad con el derecho a la libertad de opinión y de expresión.

37. Tomando como base la información que se le ha presentado, el Grupo de Trabajo concluye que el caso del Sr. Truong Minh Duc es un caso especialmente grave de detención arbitraria en los términos de la categoría II de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo. En su Opinión N° 1/2003 (Viet Nam), el Grupo de

<sup>10</sup> E/CN.4/1993/24, pág. 16.

Trabajo reiteró que "en cuanto a la cuestión de la violación de la legislación nacional mencionada por el Gobierno, el Grupo de Trabajo recuerda que, de conformidad con su mandato, debe garantizar la coherencia de la ley nacional con las disposiciones internacionales pertinentes previstas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes a los que el Estado en cuestión se ha adherido. Como consecuencia, incluso si la detención es conforme a la legislación nacional, el Grupo de Trabajo debe garantizar que también sea coherente con las disposiciones pertinentes del derecho internacional"<sup>11</sup>.

38. Las disposiciones generales del derecho penal que convierten en delito el "aprovechar las libertades y derechos democráticos para perjudicar los intereses del Estado", como figura en el artículo 258 del Código Penal de Viet Nam, son intrínsecamente incompatibles con cualquiera de los derechos y libertades garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Viet Nam es un Estado parte. En su respuesta, el Gobierno no intenta conciliar el artículo 258 del Código Penal con el derecho a la libertad de opinión y de expresión, aplicable en el caso del Sr. Minh Duc, ni responde a las afirmaciones de la fuente en el sentido de que el Sr. Minh Duc, como periodista, estaba simplemente informando de asuntos públicos que se desarrollaban en la provincia meridional de Kien Giang. Su condena penal como resultado de dichas actividades convierte su detención en arbitraria según los términos de la categoría II.

39. A la gravedad del carácter arbitrario de su detención hay que sumar la duración de más de un año de la prisión provisional del Sr. Minh Duc, sobre la cual el Gobierno no ha dado ninguna explicación, así como la severa condena a cinco años de prisión. Dado que la fuente no aportó más elementos sobre la alegación de que el Sr. Minh Duc fue obligado a firmar confesiones, el Grupo de Trabajo no puede concluir que también hubo violaciones graves del derecho a un juicio con las debidas garantías, lo cual haría que su detención fuera arbitraria de conformidad también con la categoría III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo.

40. No hay confirmación en la respuesta del Gobierno sobre las fechas o los motivos de las detenciones del Sr. Pham Van Troi, el Sr. Nguyen Xuan Nghia, la Sra. Pham Thanh Nghien, el Sr. Vu Hung, la Sra. Ngo Quynh y el Sr. Nguyen Van Tuc. La fuente informó de que estas personas fueron detenidas los días 10 y 11 de septiembre de 2008 (o detenidas nuevamente el 18 de septiembre, después de su liberación inicial), todas ellas en relación con una manifestación prevista para el 14 de septiembre de 2008. Esto significa, en primer lugar, que todas estas personas habían estado detenidas sin juicio durante aproximadamente cuatro meses en el momento de la respuesta del Gobierno.

41. En segundo lugar, también parece que los seis detenidos podrían haber estado en prisión preventiva sin ser sospechosos de haber cometido un delito contrario a la legislación penal vietnamita, ya que las autoridades, actuando por cuenta del Gobierno, estaban todavía en el proceso de identificar qué violaciones de la ley habían cometido, lo que acercaría su detención a la consideración de arbitraria de conformidad con la categoría I, pues dicha detención carecería de cualquier fundamento jurídico. El Gobierno no explica en su respuesta qué disposiciones de "las leyes vigentes en Viet Nam" se violaron y cómo las detenciones, la prisión provisional y las investigaciones se llevaron a cabo de "conformidad con la práctica internacional". El Grupo de Trabajo esperaba un relato más detallado dadas las alegaciones de la fuente que se transmitieron al Gobierno en el sentido de que la Sra. Pham Thanh Nghien fue acusada de "hacer propaganda contra la República Socialista de Viet Nam", de conformidad con el artículo 88 del Código Penal.

<sup>11</sup> E/CN.4/2004/3/Add.1, párr. 17.

42. Como el Gobierno no especifica la naturaleza de los cargos, si los hay, contemplados en el artículo 88 o en otras disposiciones de carácter penal, ni los actos que podrían dar pie a esos cargos, el Grupo de Trabajo considera, consecuentemente, que los hechos por los cuales estos seis hombres y mujeres permanecen detenidos son efectivamente los que se describen en la comunicación de la fuente, a saber, la organización e intento de participación en una manifestación. El Grupo de Trabajo concluye que estas acciones sólo representan el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de reunión, de opinión y de expresión, que están garantizados por los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

43. Sobre la base de la información disponible, que no ha sido cuestionada por el Gobierno, el Grupo de Trabajo concluye que la detención del Sr. Van Troi, el Sr. Xuan Nghia, la Sra. Thanh Nghien, el Sr. Vu Hung, la Sra. Ngo Quynh y el Sr. Van Tuc es arbitraria, y corresponde a la categoría II. Las consecuencias de las medidas del Gobierno son especialmente graves para el Sr. Vu Hung, ya que fue despedido de su puesto como profesor de secundaria.

44. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

a) La detención del Sr. Nguyen Hoang Hai, el Sr. Pham Van Troi, el Sr. Nguyen Xuan Nghia, la Sra. Pham Thanh Nghien, el Sr. Vu Hung, la Sra. Ngo Quynh y el Sr. Nguyen Van Tuc es arbitraria, pues contraviene los artículos 9, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría II de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria;

b) La detención del Sr. Nguyen Viet Chien y el Sr. Truong Minh Duc es arbitraria, pues contraviene los artículos 9 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría II de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo;

c) La detención del Sr. Nguyen Van Hai fue arbitraria entre la fecha de su detención, el 12 de mayo de 2008, y su puesta en libertad, que tuvo lugar tras la sentencia del 15 de octubre de 2008, que lo condenaba a "reeducación sin detención", pues contraviene los artículos 9 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría II de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

45. Consecuentemente con esta Opinión, se solicita al Gobierno de Viet Nam que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Nguyen Hoang Hai, el Sr. Nguyen Viet Chien, el Sr. Truong Minh Duc, el Sr. Pham Van Troi, el Sr. Nguyen Xuan Nghia, la Sra. Pham Thanh Nghien, el Sr. Vu Hung, la Sra. Ngo Quynh y el Sr. Nguyen Van, con el fin de ponerla en conformidad con las normas y principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

46. Según la información recibida, el estado de salud del Sr. Truong Minh Duc es precario debido a las penosas condiciones de su detención, hecho que no fue desmentido por el Gobierno. Dada esta circunstancia, así como la especial gravedad de su caso de detención arbitraria, a juicio del Grupo de Trabajo la reparación adecuada en su caso sería su inmediata puesta en libertad.

Aprobada el 5 de mayo de 2009.

## **Opinión N° 2/2009 (Estados Unidos de América)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 1° de julio de 2008.**

**Relativa al Sr. Mohammed Abdul Rahman Al-Shimrani.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos de América por facilitarle, el 21 de noviembre de 2008, información sobre las alegaciones de la fuente. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente y ha recibido sus comentarios.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. Según la fuente, el Sr. Mohammed Abdul Rahman Al-Shimrani (en adelante, el Sr. Al-Shimrani), de 31 años de edad, ciudadano de Arabia Saudita, estudiante de un *master* y profesor en una escuela pública de secundaria de Najran, Arabia Saudita, está actualmente detenido en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, en Cuba. Obtuvo su licenciatura (Bachelor of Arts) en la Universidad Imam Mohammed Bin Saud en 1999. Mientras vivía en Arabia Saudita fundó una organización que proporciona comida y libros a los pobres.
5. El Sr. Al-Shimrani fue capturado por fuerzas pakistaníes en noviembre de 2001 e interrogado en una base militar pakistaní en Kohat, Pakistán. El ejército pakistaní lo entregó a continuación al ejército estadounidense, que lo trasladó a la base militar de los Estados Unidos en Kandahar, Afganistán, donde habría sido sometido a interrogatorios abusivos. Después de 12 días, se le trasladó a la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba (en lo sucesivo, Guantánamo), donde ha permanecido recluido durante más de seis años y medio sin que se le formulen cargos.
6. Algunas informaciones indican que la prisión continuada del Sr. Al-Shimrani constituye un grave peligro para su salud física y mental, y finalmente para su vida. Al parecer fue hospitalizado por problemas de salud mental causados por su reclusión permanente en condiciones opresivas. Tiene también problemas de estómago, que le hacen escupir sangre después de comer, y una afección pulmonar que le causa sangrado y tos con sangre.
7. La fuente recuerda que en 2004, tras el fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso *Hamdi v. Rumsfeld*, 542 U.S. 507 (2004), el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó los Tribunales de revisión de la condición de combatiente para examinar la situación de los detenidos como "combatientes enemigos". Se señala que los procedimientos de estos tribunales se apartan de las normas básicas de un proceso imparcial y con las debidas garantías, así como de los derechos humanos fundamentales. El jurado de tales tribunales está compuesto por personal militar que debe lealtad oficial a las autoridades responsables de las detenciones. Las normas de los tribunales establecen una presunción favorable a las pruebas del Gobierno.
8. La fuente informa de que durante las audiencias en los tribunales de revisión, que se celebran a puerta cerrada, se prohíbe a los detenidos refutar pruebas, se les niega un abogado, se les pide que desmientan su culpabilidad, y se les obliga a reconocer su culpabilidad. Además, aunque los procedimientos de los tribunales requieren que su propio personal se encargue de recabar pruebas de descargo de los organismos gubernamentales, estos sólo le permiten acceder a la información preseleccionada y filtrada. Se le deniega también el acceso a muchas bases de datos de información confidencial, que es necesario para encontrar más información relevante. Los procedimientos de los tribunales, además,

conceden valor a pruebas poco fidedignas, pues permiten al jurado tener en cuenta "rumores" y declaraciones supuestamente obtenidas mediante tortura. Así, se permite al tribunal confiar en conclusiones y pruebas obtenidas mediante coacción y tortura y no se exige ninguna investigación, ni siquiera superficial, para evaluar la fiabilidad y el valor probatorio de la fuente de dicha información. La gran mayoría de las decisiones de los jurados de estos tribunales se basan en pruebas clasificadas como secretas, a las que los detenidos tienen vetado el acceso.

9. Según la fuente, el tribunal, por su estructura y en los hechos, demostró prejuicio contra el Sr. Al-Shimrani. Los procedimientos no incluyeron ninguna notificación útil al Sr. Al-Shimrani de los hechos alegados para su prolongada detención. Prácticamente todas las pruebas que el Gobierno presentó al tribunal estaban clasificadas como secretas, y por tanto eran inaccesibles para el Sr. Al-Shimrani. Además, las pruebas a las que tuvo acceso eran poco fiables y unilaterales. El Sr. Al-Shimrani no tuvo en la práctica la oportunidad de defenderse de manera justa y eficaz ni de presentar pruebas de descargo. Si sumamos a esto el hecho de que las pruebas del Gobierno se presumían como verdaderas y la incapacidad de disponer de un abogado defensor, resulta obvio que para el Sr. Al-Kazimi fue imposible refutar los cargos en su contra.

10. En su audiencia ante el Tribunal de revisión, se negó al Sr. Al-Shimrani el derecho a un juicio imparcial y público, pues no tuvo acceso a un abogado defensor, se le condenó sobre la base de pruebas poco fiables y unilaterales que no pudo refutar, no se le llevó ante una autoridad judicial en un plazo razonable y nunca se le informó de sus derechos básicos. La fuente considera que los procedimientos del Tribunal no garantizan en absoluto que se apliquen al Sr. Al-Shimrani las normas internacionales mínimas contempladas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

11. La fuente sostiene que aunque el Grupo de Trabajo no se considere en condiciones de determinar si los detenidos en Guantánamo tienen derecho a la condición de prisionero de guerra en virtud de los Convenios de Ginebra, en cambio sí es competente, dentro del ámbito de su mandato, para la tarea de valorar si debido a la ausencia de las garantías mínimas previstas en los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la detención tendría un carácter arbitrario. Además, la fuente considera que las obligaciones asumidas por los Estados Unidos en relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son aplicables de forma inequívoca, pues en ningún momento el Estado ha considerado, y mucho menos ha iniciado, los requisitos de procedimiento para derogarlas.

12. La fuente concluye que la detención del Sr. Al-Shimrani es arbitraria, ya que no cumple las normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo recogidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Sr. Al-Shimrani no fue oído por un tribunal independiente e imparcial. No se le llevó ante una autoridad judicial en un plazo razonable, no se le informó de ninguno de sus derechos y se le negó la comunicación con el mundo exterior. Además, no hay constancia de que el Gobierno de los Estados Unidos le diera la opción de comunicarse con un funcionario consular o con el Gobierno de Arabia Saudita con el fin de solicitar la asistencia de un funcionario de su propio país.

13. El Gobierno de los Estados Unidos respondió a las alegaciones anteriores y expresó su opinión mediante una presentación dividida en tres grandes áreas: la detención de combatientes enemigos, el tratamiento en prisión y el derecho internacional aplicable.

14. En cuanto al primer punto, el Gobierno reitera su posición ya declarada sobre el estatuto de los detenidos en Guantánamo, considerados "combatientes enemigos". En consecuencia, no gozan del derecho a un juicio imparcial ni de otros derechos conexos que se reconocen a las personas acusadas. Se argumenta que el Sr. Al-Shimrani es un combatiente enemigo y por tanto merece la detención y el trato que se le dispensa; dicha clasificación da al Gobierno de los Estados Unidos el derecho a mantenerlo en prisión mientras dure el conflicto. Tomando como base esta posición, se muestra en desacuerdo con una Opinión aprobada anteriormente por el Grupo de Trabajo (Opinión N° 43/2006), donde este declara que "la lucha contra el terrorismo internacional no puede caracterizarse como un conflicto armado en el sentido que ese concepto tiene en el derecho internacional moderno"<sup>12</sup>.

15. Además, el Gobierno considera que los procedimientos del Tribunal de revisión, la Junta de revisión administrativa y el derecho, recientemente incorporado, a impugnar su detención ante el tribunal federal "proporcionan a los detenidos una protección sin precedentes en la historia de la guerra".

16. En cuanto al tratamiento de la detención del Sr. Al-Shimrani y las preocupaciones planteadas por el Grupo de Trabajo en este sentido, el Gobierno de los Estados Unidos niega cualquier acto de tortura y/o abuso. Se presenta una relación detallada de los servicios médicos disponibles y accesibles a los detenidos, así como de las vías para la reparación en caso de padecer malos tratos infligidos por un funcionario en el centro de detención. El Gobierno negó la información ofrecida por la fuente con respecto a los problemas médicos del Sr. Al-Shimrani. A su vez, proporcionó algunos detalles confidenciales acerca de su salud e historial médico que, a su juicio, no revelan ningún riesgo para su bienestar, y argumentó que se trató de forma bastante adecuada cualquier enfermedad que pudo haberse manifestado en el pasado.

17. Sobre el tercer y último punto, las disposiciones del derecho internacional aplicables al Sr. Al-Shimrani, el Gobierno de los Estados Unidos considera que dada la clasificación de éste como "combatiente enemigo", no se aplica el derecho a un juicio imparcial ni otras garantías descritas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, según su interpretación del artículo 2, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dado que la ubicación geográfica de Guantánamo queda fuera de su territorio, el Gobierno no está obligado a extender a los detenidos en ese centro los derechos pertinentes enunciados en el Pacto.

18. De acuerdo con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente, cuyos comentarios se resumen a continuación.

19. La fuente considera que el Gobierno no responde plenamente a su presentación inicial. Afirma, por ejemplo, que aunque el Tribunal de revisión examinó la detención del Sr. Al-Shimrani, en el caso *Boumediene v. Bush* el Tribunal Supremo de los Estados Unidos concluyó que el examen de este tribunal fue "inadecuado". Los procedimientos del Tribunal se apartaron en muchos aspectos de los requisitos básicos del debido proceso, de lo que se considera un juicio imparcial y, en general, de los derechos humanos fundamentales. En este sentido, la fuente se refiere a su presentación y explica que el Sr. Al-Shimrani a) no fue llevado ante una autoridad judicial en un plazo razonable, b) no fue informado de sus derechos, c) se le exigió que probara que no era culpable, y d) no pudo disponer de asistencia letrada. El examen se realizó sólo casi tres años después de que se le detuviera en secreto, se le torturara y luego se le trasladara a Guantánamo.

<sup>12</sup> Opinión N° 43/2006 (Estados Unidos de América), A/HRC/7/4/Add.1, pág. 29, párr. 31.

20. Aunque el Gobierno afirma que el Sr. Al-Shimrani está "detenido en cumplimiento de la ley de la guerra", la fuente argumenta que esa detención no se ha examinado con arreglo a ningún procedimiento que justifique que realmente se ajusta al derecho internacional humanitario. Los procedimientos del Tribunal se concibieron para confirmar que los prisioneros en Guantánamo eran "combatientes enemigos", pero las leyes de la guerra no autorizan una detención militar indefinida sobre la base de la definición extensiva de esta designación que utiliza el Gobierno de los Estados Unidos.

21. Según la fuente, aunque el Gobierno de los Estados Unidos afirma que "el propósito de esta detención es impedir que vuelvan al campo de batalla", no existe un procedimiento en el que se aplique este factor para valorar si es necesario o no seguir con la detención. Ni siquiera la Junta de revisión administrativa, que lleva a cabo revisiones anuales posteriores al fallo del CSRT para determinar la necesidad de continuar con la detención, considera esta circunstancia como un factor clave en su proceso de toma de decisiones, sino que se evalúa a) si el detenido representa un peligro para los Estados Unidos y sus aliados, b) si el detenido sigue teniendo algún valor para los servicios de inteligencia, y c) si existe alguna otra razón para detenerlo<sup>13</sup>.

22. La fuente también sospecha que el Gobierno de los Estados Unidos sigue demorando la importante revisión del Tribunal Federal a la que tiene derecho el detenido, presentando una moción tras otra para frustrar los esfuerzos de los jueces en pro de la rápida resolución de los recursos de hábeas corpus presentados ante ellos. Igualmente, sigue usando pruebas secretas y se resiste a dar a conocer las pruebas de descargo. Dicho comportamiento demuestra la reiterada inobservancia por parte del Gobierno del Principio 11, párrafo 1, del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión<sup>14</sup>, que establece que "nadie será mantenido en detención sin tener la posibilidad real de ser oído sin demora por un juez u otra autoridad".

23. La fuente sostiene que la afirmación del Gobierno de los Estados Unidos sobre que la permanencia del Sr. Al-Shimrani en prisión tiene como propósito impedir su regreso al campo de batalla queda desmentida por las circunstancias particulares del acusado. El Gobierno local de Arabia Saudita ha aprobado la incorporación del Sr. Al-Shimrani, ciudadano de este Estado, en un programa de reinserción muy perfeccionado y eficaz. Se trata de un programa ampliamente reconocido que ha servido para que más de 100 hombres liberados de Guantánamo se hayan reintegrado con éxito en la sociedad saudita. Consiste en un período inicial de intensa "desprogramación" en un establecimiento penitenciario saudita, tras el cual se realiza un seguimiento estrecho de los hombres de conformidad con sus familias. La fuente afirma que las acusaciones contra el Sr. Al-Shimrani no difieren de las planteadas contra muchos de sus compatriotas que ya han sido puestos en libertad para entrar en este programa, que también impide que viajen fuera del Reino y, por tanto, su retorno al campo de batalla.

24. La fuente cuestiona enérgicamente la información contenida en la respuesta del Gobierno de los Estados Unidos sobre el estado de salud del Sr. Al-Shimrani. Considera que es incompleta y que como tal no aborda las preocupaciones expuestas en su presentación. Las afirmaciones en relación a que el Sr. Al-Shimrani no ha sido tratado de

<sup>13</sup> Memorandum del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Procesos de la Junta de revisión administrativa, §3(f) "Standards and Factors to be Considered by the ARB" (13 de julio de 2006) disponible en: <http://www.defenselink.mil/news/Aug2006/d20060809ARBProceduresMemo.pdf>. La detención indefinida para interrogatorios no está permitida en el marco de la Ley de la guerra. Véase *Hamdi v. Rumsfeld*, 542 U.S. 507, 521 (2006).

<sup>14</sup> Resolución 43/173 de la Asamblea General.

una serie de afecciones concretas o que dichas afecciones no aparecen en su historia clínica no disipan las preocupaciones sobre su salud. El Gobierno de los Estados Unidos parece sugerir que el Sr. Al-Shimrani no ha sufrido ningún problema de salud en los siete años que ha estado encarcelado en Guantánamo, a excepción de un ardor de estómago que duró tres días y del que fue tratado en 2002. A la fuente le resulta difícil aceptar esta afirmación y señala que en gran medida aumenta su preocupación sobre el acceso del Sr. Al-Shimrani a la atención médica.

25. En base a la documentación e información recibida, el Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una Opinión sobre este caso.

26. El Gobierno de los Estados Unidos parece adoptar la postura de que la definición de estado de guerra o de combatiente enemigo, así como lo establecido en las leyes internacionales que rigen los conflictos armados, ha cambiado en el mundo tras el 11 de septiembre. Esta parece ser la principal justificación para detener personas de cualquier jurisdicción del mundo sin una orden judicial y sin informar a su familia, y denegarles los derechos básicos mínimos contemplados en el derecho internacional humanitario y la normativa de los derechos humanos (como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Estados Unidos es un Estado parte).

27. El Grupo de Trabajo percibe una serie de deficiencias en la posición y actitud del Gobierno y desea recordar la postura adoptada en su "Opinión jurídica sobre las medidas de privación de libertad de las personas detenidas en la bahía de Guantánamo"<sup>15</sup>. Sería conveniente hacer referencia a una Opinión emitida anteriormente por el Grupo de Trabajo que dice: "Desearía subrayar que, por una cuestión de principio, la aplicación del derecho internacional humanitario a un conflicto armado internacional o no internacional no impide aplicar las normas de derechos humanos. Los dos regímenes jurídicos son complementarios y no se excluyen recíprocamente. En caso de que las disposiciones de los dos regímenes entren en conflicto respecto de una determinada situación, deberá determinarse cuál es la *lex specialis* y ésta será la ley aplicable"<sup>16</sup>.

28. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria no encuentra apoyo en el derecho internacional para justificar y situar en la legalidad los métodos secretos de detención, interrogatorio y ejecución adoptados por el Gobierno en la detención del Sr. Al-Shimrani, practicada inicialmente por las fuerzas paquistaníes, que lo entregaron al ejército estadounidense, el cual lo trasladó a su base militar en Kandahar, Afganistán, donde presuntamente lo sometió a interrogatorios abusivos. Después de 12 días lo trasladó a la Base Naval de Guantánamo, donde ha estado recluso sin que se le formulen cargos ni se convoque un juicio. La duración total de la detención es actualmente de casi ocho años.

29. El Grupo de Trabajo desea señalar que ha sido informado de casos similares de detención en Guantánamo durante más de siete años, lo que le ha llevado a liderar un análisis coherente de la naturaleza de dichas detenciones y a emitir las correspondientes Opiniones. Como consecuencia de esto, está generando una jurisprudencia sólida y constante que puede ser consultada en los informes anuales del Grupo de Trabajo, así como en las Opiniones emitidas sobre el tema<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> E/CN.4/2003/8, pág. 19, párrs. 64 *et seq.*

<sup>16</sup> Opinión N° 44/2005 (Iraq y Estados Unidos de América), A/HRC/4/40/Add.1, pág. 26, párr. 13.

<sup>17</sup> Véanse, por ejemplo, los siguientes informes anuales del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria: E/CN.4/2006/7, pág. 20, párrs. 68 *et seq.*; A/HRC/4/40, pág. 16, párrs. 30 *et seq.*; E/CN.4/2005/6, pág. 20, párrs. 59 *et seq.*; E/CN.4/2004/3, pág. 17, párrs. 50 *et seq.*; E/CN.4/2003/8, pág. 19, párrs. 61 *et seq.*

30. El Grupo de Trabajo quiere recordar además el informe conjunto<sup>18</sup> de cinco titulares de mandatos de procedimientos especiales de la antigua Comisión de Derechos Humanos. En él se afirmó bastante categóricamente que "las personas detenidas en la bahía de Guantánamo tienen derecho a impugnar la legalidad de su detención ante un órgano judicial, de conformidad con el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y a obtener que se los ponga en libertad si se concluye que la detención carece de fundamento jurídico apropiado. Ese derecho se está vulnerando en la actualidad y la detención continua de todas las personas retenidas en la bahía de Guantánamo constituye una detención arbitraria en violación del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos"<sup>19</sup>.

31. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno no aprovecha la oportunidad para ofrecer una explicación de los diferentes hechos relacionados con la detención, el interrogatorio y la reclusión, ya sea reconociendo que estos se produjeron según lo indicado por la fuente, o negando los diferentes períodos de detención.

32. El Grupo de Trabajo observa además que el Gobierno no aborda adecuadamente los graves problemas derivados de las denuncias de malos tratos y detención prolongada, de la negación del debido proceso y de un juicio imparcial, y de cualquier revisión significativa en relación con ambos. Desde 1991, el Grupo de Trabajo ha adoptado una posición clara en cuanto a que no está convencido de que los tribunales militares y los procesos de adjudicación ofrezcan la protección necesaria del debido proceso. En este sentido, los procedimientos del Tribunal de revisión y la Junta de revisión administrativa no son adecuados para garantizar el derecho a un juicio imparcial e independiente, ya que se trata de tribunales militares de carácter sumario.

33. Es pertinente señalar que los Estados Unidos no ha suspendido su obligación de aplicar las disposiciones sustantivas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y siguen estando obligados por esas disposiciones. Incluso si lo hubieran hecho, el derecho de hábeas corpus, aunque no explícitamente enumerado en la lista contenida en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pertenece al grupo de derechos que no se pueden suspender, ni siquiera en estados de excepción<sup>20</sup>.

34. Teniendo en cuenta el análisis anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La detención del Sr. Mohammed Abdul Rahman Al-Shimrani es arbitraria, pues contraviene los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

35. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de los Estados Unidos de América que remedie la situación del Sr. Mohammed Abdul Rahman Al-Shimrani y la ponga en conformidad con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, como los contenidos, entre otros, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En estas circunstancias, el Grupo de Trabajo

<sup>18</sup> E/CN.4/2006/120.

<sup>19</sup> *Ibid.*, párr. 84.

<sup>20</sup> Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Opinión N° 43/2006 (Estados Unidos de América), A/HRC/7/4/Add.1, pág. 29, párr. 36, que coincide con la Observación general N° 29 de la Comisión de Derechos Humanos, artículo 4 (Suspensión de obligaciones durante un estado de excepción), párr. 15.

pide al Gobierno de los Estados Unidos de América que ponga inmediatamente en libertad al Sr. Al-Shimrani.

36. Por último, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la declaración del nuevo Gobierno de los Estados Unidos con respecto a su intención de cerrar el centro de detención de la Base Naval de Guantánamo en Cuba, y lo alienta a aplicar esta decisión tan pronto como sea posible.

Aprobada el 6 de mayo de 2009.

### **Opinión N° 3/2009 (Estados Unidos de América)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 7 de julio de 2008.**

**Relativa al Sr. Sanad Ali Yislam Al-Kazimi.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos de América por facilitarle, el 21 de noviembre de 2008, información sobre las alegaciones de la fuente. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente, y ha recibido sus comentarios.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. Según la fuente, el Sr. Sanad Ali Yislam Al-Kazimi (en adelante, el Sr. Al-Kazimi), ciudadano del Yemen, nacido el 17 de febrero de 1970, está actualmente recluido en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba (en lo sucesivo Guantánamo). El Sr. Al-Kazimi, casado en 1994, tiene dos hijas, de 13 y 11 años, y dos hijos, de 12 y 9. Salió del Yemen en mayo de 2002 para buscar trabajo en los Emiratos Árabes Unidos.
5. El Sr. Al-Kazimi fue detenido en Dubai en enero de 2003 y recluido en un lugar no revelado en Dubai o en sus cercanías durante dos meses. Luego fue trasladado a otro lugar a unas dos horas de distancia. Se le mantuvo desnudo durante 22 días, a veces con grilletes, y se le sometió a condiciones climáticas extremas y a simulacros de estrangulamiento. Después de seis meses, fue puesto bajo la custodia de los Estados Unidos, supuestamente en virtud de un programa ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), y trasladado a Kabul, Afganistán, donde estuvo detenido en la llamada "prisión de la oscuridad" durante nueve meses. En esta prisión sufrió graves torturas físicas y psicológicas por parte de personas no identificadas. Luego fue trasladado a la base aérea de Bagram, en Afganistán, donde estuvo detenido durante cuatro meses más bajo custodia de los Estados Unidos. Una vez más fue presuntamente sometido a severas torturas físicas y psicológicas, infligidas, según cree el Sr. Al-Kazimi, por las mismas personas no identificadas que se encontraban en la "prisión de la oscuridad".
6. El 18 septiembre de 2004, o en una fecha cercana, el Sr. Al-Kazimi fue trasladado a Guantánamo, donde se encuentra actualmente detenido sin cargos y en régimen de incomunicación. Se cree que ha vuelto a sufrir malos tratos físicos y psicológicos severos.
7. Hay información que indica que la detención continuada del Sr. Al-Kazimi constituye un grave peligro para su salud física y psicológica. Se le ha diagnosticado trastorno adaptativo y trastorno de personalidad, y, además, puede tener depresión clínica.
8. Se recuerda que en 2004, tras el fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso *Hamdi v. Rumsfeld*, 542 U.S. 507 (2004), el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó los Tribunales de revisión de la condición de combatiente para revisar la situación de los detenidos como "combatientes enemigos". Se señala que los

procedimientos de esos tribunales se apartan de las normas básicas de un proceso imparcial y con las debidas garantías, así como de los derechos humanos fundamentales. Se informa de que durante las audiencias en los tribunales de revisión, que se celebran a puerta cerrada, se prohíbe a los detenidos refutar pruebas, se les niega un abogado, se les pide que no desmientan su culpabilidad, y se les obliga a reconocer su culpabilidad.

9. Además, aunque los procedimientos de los tribunales requieren que su propio personal se encargue de recabar pruebas de descargo a los organismos gubernamentales, estos sólo le permiten acceder a la información preseleccionada y filtrada. Se deniega también el acceso a muchas bases de datos de información confidencial, que es necesario para encontrar más información relevante. Los procedimientos de los tribunales, además, conceden valor a pruebas poco fidedignas, pues permiten al jurado tener en cuenta "rumores" y declaraciones supuestamente obtenidas mediante tortura. Así, se permite al tribunal confiar en conclusiones y pruebas obtenidas mediante coacción y tortura y no se exige ninguna investigación, ni siquiera superficial, para evaluar la fiabilidad y el valor probatorio de la fuente de dicha información. La gran mayoría de las decisiones de los jurados de estos tribunales se basan en pruebas clasificadas como secretas, a las que los detenidos tienen vetado el acceso.

10. Prácticamente todas las pruebas que el Gobierno presentó al tribunal eran clasificadas secretas, y por tanto inaccesibles para el Sr. Al-Kazimi. Las pruebas a las que tuvo acceso eran poco fiables y unilaterales. El Sr. Al-Kazimi no tuvo en la práctica la oportunidad de defenderse de manera justa y eficaz ni de presentar ninguna prueba de descargo. Si sumamos a esto el hecho de que las pruebas del Gobierno se presumían como verdaderas y la incapacidad de disponer de un abogado defensor, resulta obvio que para el Sr. Al-Kazimi fue imposible refutar los cargos en su contra.

11. La fuente añade que los procedimientos del Tribunal de revisión no incluyeron ninguna notificación válida al Sr. Al-Kazimi de los fundamentos de hecho alegados para su prolongada detención. En su audiencia ante el tribunal, se negó al Sr. Al-Kazimi un juicio imparcial y público, pues no tuvo acceso a un abogado defensor, se le condenó sobre la base de pruebas poco fiables y unilaterales que no pudo refutar, no se le llevó ante una autoridad judicial en un plazo razonable y nunca fue informado de sus derechos básicos. La fuente considera que los procedimientos del tribunal no garantizaron de ninguna manera al Sr. Al-Kazimi la aplicación de las normas internacionales mínimas contempladas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que los Estados Unidos de América es un Estado parte.

12. Los procedimientos del Tribunal de revisión establecen que el "detenido no estará representado por un abogado" (ex. 10, Procedimientos de aplicación en anexo 1, pág. 4). El "representante personal" que se asigna a cada detenido no es un abogado y no defiende los intereses del detenido. En su primera reunión con el detenido, su representante personal tiene instrucciones de explicarle: "No soy abogado ni su defensor... La información que me proporcione no será confidencial, ya que estoy obligado a darla a conocer en la audiencia" (ex. 10, Procedimientos de aplicación en anexo 3, pág. 3). El nombramiento de un "representante personal" para el Sr. Al-Kazimi de ninguna manera daba cumplimiento a su derecho a un abogado, tal como exige el derecho internacional.

13. Las normas del Tribunal presuponen que las pruebas del Gobierno en caso de aplicación de la "condición de combatiente enemigo" son verdaderas y exactas (ex. 10, Procedimientos de aplicación en anexo 1, pág. 6). Esta presunción impone al detenido la carga de refutar su culpabilidad.

14. Los procedimientos del tribunal, por su estructura, presentan un sesgo en contra de los detenidos, tanto por el hecho de que el jurado del tribunal se compone de personal militar (en concreto, de tres oficiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos), que

debe lealtad formal a la autoridad encargada de las detenciones, como porque las normas del Tribunal de revisión establecen una presunción en favor de las pruebas del Gobierno. El Sr. Al-Kazimi no fue oído por un tribunal independiente e imparcial, como exige el derecho internacional.

15. La fuente añade que no se hizo comparecer al Sr. Al-Kazimi ante una autoridad judicial en un plazo razonable. En ningún momento durante su detención en los Emiratos Árabes Unidos, Afganistán o Guantánamo se presentó al Sr. Al-Kazimi ante algún tipo de autoridad judicial. Nunca se le informó de sus derechos fundamentales. Además, el Gobierno de los Estados Unidos no le dio la opción de comunicarse con un representante consular del Gobierno del Yemen con el fin de solicitar la asistencia de un funcionario de su propio país. Se le negó la comunicación con el mundo exterior.

16. Aunque el Grupo de Trabajo no se considera en condiciones de determinar si los detenidos en Guantánamo tienen derecho a la condición de prisionero de guerra en virtud de los Convenios de Ginebra, sin embargo sí es competente, dentro del ámbito de su mandato, para valorar si la ausencia de las garantías mínimas previstas en los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos otorgarían a la detención un carácter arbitrario. Por otra parte, la fuente considera que el compromiso de los Estados Unidos con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es inequívoco, pues en ningún momento el Estado ha considerado, y mucho menos ha implantado, un proceso para suspender su cumplimiento. Por lo tanto, las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del Pacto Internacional se aplican de manera inequívoca.

17. La fuente concluye que la detención del Sr. Al-Kazimi es arbitraria, ya que no cumple las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial recogidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

18. El Gobierno de los Estados Unidos respondió a las denuncias anteriores y expresó su opinión mediante una presentación dividida en tres grandes aspectos: la detención de combatientes enemigos, el tratamiento en prisión y el derecho internacional aplicable.

19. En cuanto al primer punto, el Gobierno reitera su posición ya declarada sobre la condición de los detenidos en Guantánamo, al considerarlos "combatientes enemigos". En consecuencia, no gozan del derecho a un juicio imparcial ni de otros derechos conexos que se reconocen a las personas acusadas. Se argumenta que el Sr. Al-Kazami es un combatiente enemigo y por tanto merece la detención y el trato que se le dispensa. Además, el Gobierno considera que los procedimientos del Tribunal de revisión, la Junta de Revisión Administrativa (ARB) y el derecho, recientemente incorporado, a impugnar su detención ante el Tribunal federal "proporcionan a los detenidos una protección sin precedentes en la historia de la guerra".

20. En cuanto al tratamiento de la detención del Sr. Al-Kazami y las preocupaciones planteadas por el Grupo de Trabajo en este sentido, el Gobierno de los Estados Unidos niega cualquier acto de tortura y/o abuso. Se presenta una relación detallada de los servicios médicos disponibles y accesibles a los detenidos, así como de las vías para la reparación en caso de padecer malos tratos infligidos por un funcionario en el centro de detención. El Gobierno también proporcionó algunos detalles confidenciales acerca del estado de salud del Sr. Al-Kazami, que en su opinión recibió el tratamiento adecuado.

21. Sobre el tercer y último punto, la adecuación de la detención del Sr. Al-Kazami al derecho internacional, el Gobierno de los Estados Unidos considera que dada la clasificación de éste como "combatiente enemigo" no aplica el derecho a un juicio imparcial ni otras garantías descritas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, según su interpretación del artículo 2, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y dado que la ubicación geográfica de Guantánamo queda

fuera de su territorio, el Gobierno no está obligado a extender a los detenidos en ese centro los derechos pertinentes enunciados en el Pacto.

22. De acuerdo con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente, cuyos comentarios se resumen a continuación.

23. La fuente considera que el Gobierno no responde plenamente a su presentación inicial. Afirma, por ejemplo, que aunque el Tribunal de revisión examinó la detención del Sr. Al-Kazami, en el caso *Boumediene v. Bush* el Tribunal Supremo de los Estados Unidos concluyó que la revisión realizada por este tribunal fue "inadecuada". Los procedimientos del Tribunal se apartaron en muchos aspectos de los requisitos básicos del debido proceso, de lo que se considera un juicio imparcial y, en general, de los derechos humanos fundamentales. En este sentido, la fuente se refiere a su presentación y explica que el Sr. Al-Kazami a) no fue llevado ante una autoridad judicial en un plazo razonable, b) no fue informado de sus derechos, c) se le pidió que probara que no era culpable, y d) no pudo disponer de asistencia letrada. El examen se realizó sólo casi dos años después de que se le detuviera en secreto, se le torturara y luego se le trasladara a Guantánamo.

24. Aunque el Gobierno afirma que el Sr. Al-Shimrani está "detenido en cumplimiento de la ley de la guerra", la fuente argumenta que esa detención no se ha examinado con arreglo a ningún procedimiento que justifique que realmente se ajusta al derecho internacional humanitario. Los procedimientos del Tribunal se concibieron para confirmar que los prisioneros en Guantánamo eran "combatientes enemigos", pero las leyes de la guerra no autorizan una detención militar indefinida sobre la base de la definición extensiva de esta designación que utiliza el Gobierno de los Estados Unidos.

25. Según la fuente, aunque el Gobierno de los Estados Unidos afirma que "el propósito de esta detención es impedir que vuelvan al campo de batalla", no existe un procedimiento en el que se aplique este factor para valorar si es necesario o no seguir con la detención. Ni siquiera la Junta de revisión administrativa, que lleva a cabo revisiones anuales posteriores al fallo del Tribunal para determinar la necesidad de continuar con la detención, considera esta circunstancia como un factor clave en su proceso de toma de decisiones, sino que se evalúa a) si el detenido representa un peligro para los Estados Unidos y sus aliados, b) si el detenido sigue teniendo algún valor para los servicios de inteligencia, y c) si existe alguna otra razón para detenerlo<sup>21</sup>.

26. La fuente también sospecha que el Gobierno de los Estados Unidos sigue demorando la importante revisión del Tribunal Federal a la que tiene derecho el detenido, presentando una moción tras otra para frustrar los esfuerzos de los jueces en pro de la rápida resolución de los recursos de hábeas corpus presentados ante ellos. Igualmente, sigue usando pruebas secretas y se resiste a dar a conocer las pruebas de descargo. Dicho comportamiento demuestra la reiterada inobservancia por parte del Gobierno del Principio 11, párrafo 1, del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión<sup>22</sup>, que establece que "nadie será mantenido en detención sin tener la posibilidad real de ser oído sin demora por un juez u otra autoridad"

<sup>21</sup> Memorandum del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Procesos de la Junta de revisión administrativa, §3(f) "Standards and Factors to be Considered by the ARB" (13 de julio de 2006) disponible en: <http://www.defenselink.mil/news/Aug2006/d20060809ARBProceduresMemo.pdf>. La detención indefinida para interrogatorios no está permitida en el marco de la Ley de la guerra. Véase *Hamdi v. Rumsfeld*, 542 U.S. 507, 521 (2006).

<sup>22</sup> Resolución 43/173 de la Asamblea General.

27. La fuente también afirma que la respuesta del Gobierno no aborda la detención secreta del Sr. Al-Kazimi en los Emiratos Árabes Unidos y Afganistán, ni las denuncias de tortura y abusos durante este período de detención secreta o el hecho de que sólo se aplicara el artículo común 3 de los Convenios de Ginebra después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostuviera que era obligatorio hacerlo en el caso *Hamdan v. Rumsfeld*, a finales de junio de 2006. Por último, la fuente señaló la insuficiente atención en la respuesta del Gobierno sobre las severas técnicas de interrogatorio aplicadas contra el Sr. Al-Kazami y sobre su estado de salud.

28. En base a la documentación e información recibida, el Grupo de Trabajo cree estar en condiciones de emitir una Opinión sobre este caso.

29. El Gobierno de los Estados Unidos parece adoptar la postura de que la definición de estado de guerra o de combatiente enemigo, así como lo establecido en las leyes internacionales que rigen los conflictos armados, ha cambiado en el mundo tras el 11 de septiembre. Esta parece ser la principal justificación para la detención de personas de cualquier jurisdicción del mundo sin una orden judicial y sin informar a su familia, negándoles los derechos mínimos contemplados en los pactos del derecho internacional humanitario y la normativa de los derechos humanos (como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Estados Unidos es un Estado parte).

30. El Grupo de Trabajo percibe una serie de deficiencias en la posición y actitud del Gobierno y desea recordar la postura adoptada en su "Opinión jurídica sobre las medidas de privación de libertad de las personas detenidas en la bahía de Guantánamo"<sup>23</sup>. Sería conveniente hacer referencia a una opinión emitida anteriormente por el Grupo de Trabajo que dice: "Desearía subrayar que, por una cuestión de principio, la aplicación del derecho internacional humanitario a un conflicto armado internacional o no internacional no impide aplicar las normas de derechos humanos. Los dos regímenes jurídicos son complementarios y no se excluyen recíprocamente. En caso de que las disposiciones de los dos regímenes entren en conflicto respecto de una determinada situación, deberá determinarse cuál es la *lex specialis* y ésta será la ley aplicable"<sup>24</sup>.

31. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria no encuentra apoyo en el derecho internacional para justificar y situar en la legalidad los métodos secretos de detención, interrogatorio y ejecución adoptados por el Gobierno en la detención del Sr. Al-Kazimi en Dubai, su envío a un lugar no identificado durante seis meses, su reubicación en Afganistán y la permanencia allí durante nueve meses, seguidos por otros cuatro meses antes de ser trasladado a la bahía de Guantánamo el 18 de septiembre de 2004, donde continúa recluido.

32. El Grupo de Trabajo observa además que el Gobierno de los Estados Unidos no aborda adecuadamente los graves problemas derivados de las denuncias de malos tratos, detención prolongada, negación del debido proceso y de un juicio imparcial, y cualquier examen significativo en relación con ambos.

33. El Grupo de Trabajo quiere recordar además el informe conjunto<sup>25</sup> de cinco titulares de mandatos de procedimientos especiales de la antigua Comisión de Derechos Humanos. En él se afirmó bastante categóricamente que "las personas detenidas en la bahía de Guantánamo tienen derecho a impugnar la legalidad de su detención ante un órgano judicial, de conformidad con el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y a obtener que se los ponga en libertad si se concluye que la detención carece de fundamento jurídico apropiado. Ese derecho se está vulnerando en la actualidad y la

<sup>23</sup> E/CN.4/2003/8, pág. 19, párrs. 64 *et seq.*

<sup>24</sup> Opinión N° 44/2005 (Irak y Estados Unidos de América), A/HRC/4/40/Add.1, pág. 26, párr. 13.

<sup>25</sup> E/CN.4/2006/120.

detención continua de todas las personas retenidas en la bahía de Guantánamo constituye una detención arbitraria en violación del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos"<sup>26</sup>.

34. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno no aprovecha la oportunidad para ofrecer una explicación de los diferentes hechos relacionados con la detención, el interrogatorio y la reclusión, ya sea reconociendo que estos se produjeron según lo indicado por la fuente, o negando los diferentes períodos de detención.

35. El Grupo de Trabajo observa además que el Gobierno no aborda adecuadamente los graves problemas derivados de las denuncias de malos tratos y detención prolongada, de la negación del debido proceso y de un juicio imparcial, y de cualquier revisión significativa en relación con ambos. Desde 1991, el Grupo de Trabajo ha adoptado una posición clara en cuanto a que no está convencido de que los tribunales militares y los procesos de adjudicación ofrezcan la protección necesaria del debido proceso. En este sentido, los procedimientos del Tribunal de revisión y la Junta de revisión administrativa no son adecuados para garantizar el derecho a un juicio imparcial e independiente, ya que se trata de tribunales militares de carácter sumario.

36. Es pertinente señalar que los Estados Unidos no han suspendido su obligación de aplicar las disposiciones sustantivas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y siguen estando obligados por esas disposiciones. Incluso si lo hubieran hecho, el derecho de hábeas corpus, aunque no explícitamente enumerado en la lista contenida en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pertenece al grupo de derechos que no se pueden suspender, ni siquiera en estados de excepción<sup>27</sup>.

37. Teniendo en cuenta el análisis anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La detención del Sr. Sanad Ali Yislam Al-Kazimi es arbitraria, pues contraviene los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

38. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de los Estados Unidos de América que remedie la situación del Sr. Sanad Ali Yislam Al-Kazimi y la ponga en conformidad con las normas y estándares internacionales de derechos humanos como los contenidos, entre otros, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En estas circunstancias, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno de los Estados Unidos de América que ponga inmediatamente en libertad al Sr. Al-Kazimi.

39. Por último, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la declaración del nuevo Gobierno de los Estados Unidos con respecto a su intención de cerrar el centro de detención en la Base Naval de Guantánamo en Cuba, y lo alienta a aplicar esta decisión tan pronto como sea posible.

Aprobada el 6 de mayo de 2009.

<sup>26</sup> *Ibíd.*, párr. 84.

<sup>27</sup> Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Opinión N° 43/2006 (Estados Unidos de América), A/HRC/7/4/Add.1, pág. 29, párr. 36, que coincide con la Observación general N° 29 de la Comisión de Derechos Humanos, artículo 4 (Suspensión de obligaciones durante un estado de excepción), párr. 15.

## **Opinión N° 4/2009 (Maldivas)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 28 de agosto de 2008.**

**Relativa al Sr. Richard Wu Mei De.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por proporcionarle información relativa a las alegaciones de la fuente dentro del plazo establecido y mucho antes del 54° período de sesiones, en que se aprobó esta Opinión. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente, y recibió sus comentarios.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El caso que se resume a continuación se comunicó al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la siguiente manera.
5. El Sr. Richard Wu Mei De, de 40 años de edad y nacionalidad china, gerente del restaurante Shanghai y del Grace Inn en Malé, fue detenido sin orden judicial el 4 de noviembre de 1993 en Malé por fuerzas del Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional, que invocaron las leyes de inmigración y de inversión extranjera, y lo acusaron de incumplir las directivas de las autoridades. Permanece recluido desde entonces bajo la autoridad del Ministerio, los Servicios Policiales de las Maldivas y el Departamento de Servicios Penitenciarios y de Rehabilitación, en un principio, en la prisión de Gaamaadhool. No está claro, sin embargo, qué autoridad ordenó su detención. Más tarde fue trasladado a su actual lugar de detención, la prisión de Mafushi.
6. La fuente afirma que esta detención pudo deberse a la connivencia de un antiguo patrón del Sr. Wu Mei De, el Sr. Mohamed Musthafa Hussain, ex Ministro del Gobierno y representante ante las Naciones Unidas, con el Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional, por denunciar que no le habían renovado el permiso de trabajo por razones dudosas.
7. A petición de su ex esposa, la Sra. Zhang Lin Zheng, el Ministerio de Asuntos Exteriores explicó que el Sr. Wu Mei De había invertido en el país sin atender a los procedimientos establecidos en la normativa de inversiones de las Maldivas. El Ministerio informó, sin embargo, de que fue detenido por formular declaraciones incriminatorias contra el Gobierno y altos funcionarios del mismo.
8. El Sr. Wu Mei De expone que cinco ciudadanos chinos reunieron más de 70.000 dólares de los EE.UU. para montar el restaurante Shanghai y alquilar el Grace Inn. Aunque ambos establecimientos se registraron a nombre del Sr. Musthafa Hussain, los cinco ciudadanos chinos se hacían cargo de los gastos y recibían los beneficios. Como resultado de un litigio con su patrón, no se renovó el permiso de trabajo al Sr. Wu Mei De, quien presentó una demanda contra el patrón ante un tribunal. Además, escribió al Ministro de Obras Públicas y Trabajo el 29 de agosto de 1993 solicitando 60 días adicionales de estancia en las Maldivas y exponiendo que tenía una causa judicial en curso contra el Sr. Musthafa Hussain para la devolución de la inversión. Se le detuvo y se le encarceló dos meses después de presentar una demanda civil ante el Tribunal de Justicia N° 2 por un litigio comercial con su empleador y socio. Se informó a la Embajada de China de su detención y se permitió a funcionarios de la embajada acceder a él.
9. En 1997, el Gobierno acordó ponerlo en libertad. Sin embargo, el Sr. Wu Mei De se negó a que se lo liberara hasta que su caso fuese examinado en un tribunal de justicia. El Gobierno de Maldivas, en consulta con las autoridades chinas, intentó también en varias ocasiones expulsarlo, a lo cual él se negó por las mismas razones. En una carta de fecha 30

de abril de 1997, dirigida al Presidente de la República de Maldivas, el Sr. Wu Mei De afirmó que estaría dispuesto a aceptar su puesta en libertad o un acuerdo bajo dos condiciones: la primera, que el proceso de su liberación fuera conducido oficialmente por la Embajada de China y que estuvieran presentes en el momento de su puesta en libertad un representante de la embajada y otro de una organización internacional de derechos humanos; y la segunda, que se garantizara su seguridad personal hasta el momento de abandonar el país. El Sr. Wu Mei De también exigió al Gobierno de Maldivas una disculpa; una declaración por escrito que certificara su inocencia; una compensación por todas las pérdidas, tanto materiales como inmateriales, causadas por su largo encarcelamiento; y que se investigara el caso y se llevara a los responsables ante la justicia. Reiteró estas peticiones el 25 de julio de 2005. Varias instituciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales se interesaron en el caso del Sr. Wu Mei De.

10. Dicho caso ya fue objeto de un llamamiento urgente por parte del ex Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria el 6 de septiembre de 2006, que ha permanecido sin respuesta del Gobierno hasta la fecha.

11. El Grupo de Trabajo observa que la República de las Maldivas se convirtió en parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 13 días después de este llamamiento urgente, el 19 de septiembre de 2006.

12. El 25 de septiembre de 2008, el Gobierno solicitó una prórroga del plazo de 90 días para presentar su respuesta, "a fin de poder facilitar un intenso proceso de consultas e investigaciones en relación con el asunto antes mencionado". El 23 de abril de 2009, el Grupo de Trabajo recibió la respuesta del Gobierno, que consta de tres partes.

13. En la primera, el Gobierno declara que "el caso del Sr. Wu Mei De debería examinarse en el contexto de los cambios amplios y profundos en las Maldivas que está introduciendo el nuevo gobierno y que apuntan a mejorar la promoción y protección de los derechos humanos para todas las personas, con independencia de su nacionalidad. Una muestra ilustrativa de estos cambios es la adopción, el 7 de agosto de 2008, de la nueva Constitución, que se basa en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Esta parte de la respuesta contiene una serie de medidas adoptadas por el Gobierno para promover los derechos humanos mediante el diálogo con diferentes mecanismos, tanto de las Naciones Unidas como nacionales. Dos Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos han visitado recientemente el país. Ambos estuvieron en diferentes lugares de detención y se reunieron con detenidos no maldivos, entre ellos el Sr. Wu Mei De, que resultó estar en un buen estado de salud. Desde el año 2003, pese a las graves limitaciones de recursos humanos y técnicos, el Gobierno ha respondido a los llamamientos y comunicaciones relacionadas con los derechos humanos, y tiene una de las tasas de respuesta más altas de la región Asia-Pacífico.

14. En la segunda parte de su respuesta, el Gobierno reconoce que antes de la implantación de las reformas de los últimos años los procedimientos y las condiciones de detención no eran plenamente compatibles con las normas internacionales de derechos humanos. No se habían establecido garantías adecuadas para prevenir y responder a todas las cuestiones relacionadas con esta materia. El Gobierno reconoce que no existía un sistema regulado de visitas a las cárceles por parte de autoridades independientes con mandato para hacerlo. Sin embargo, el Gobierno señala que ahora se siguen rigurosamente los procedimientos policiales, judiciales y de detención, y las personas disfrutaban de una plena protección en este sentido.

15. En la tercera parte de su respuesta, el Gobierno confirma que el Sr. Richard Wu Mei De es un ciudadano chino detenido en 1991 en relación con un contencioso civil derivado de unas denuncias de violación de las leyes de inversión extranjera. Fue puesto en libertad poco después. En ese momento, las atribuciones de detención recaían en el Ministerio de

Defensa y Seguridad Nacional. En 2006, el Servicio de Policía de las Maldivas se estableció como una fuerza civil, y en 2008 asumió todos los poderes sobre detención e investigación en virtud de la Ley de la policía de ese año.

16. El Sr. Wu Mei De fue detenido nuevamente en agosto de 1993 por desorden público, aparentemente motivado por su enfado ante la evolución del contencioso civil. Poco después de su detención, y debido a su comportamiento extremadamente rebelde, el Gobierno de las Maldivas, en colaboración con la Embajada de la República Popular, puso en marcha el primero de muchos intentos de deportarlo a China. El Sr. Wu, sin embargo, se negó reiteradamente a abandonar los centros de detención, optando por la detención voluntaria, y se resistió a la fuerza a todos los intentos de trasladarlo hasta que se resolvieran satisfactoriamente, según su criterio, las quejas relativas a su actividad económica.

17. El 30 de abril de 1997 dirigió al Gobierno de las Maldivas una serie de cuatro peticiones para hacerle justicia, y dijo que, de no atenderlas, presentaría su caso contra las Maldivas ante un tribunal internacional. Estas peticiones eran: una disculpa del Gobierno de las Maldivas por su detención arbitraria; una declaración por escrito que certificara su inocencia; una compensación por todas las pérdidas, tanto materiales como inmateriales, causadas por su largo encarcelamiento; y que el Gobierno investigara el caso contra su socio y llevara a los responsables ante la justicia.

18. El Gobierno no pudo satisfacer estas demandas porque el Sr. Wu Mei De no había sido condenado por ningún delito: sus agravios pertenecían al fuero civil y no estaban relacionados con el Gobierno, y permanecía en prisión por voluntad propia.

19. En 2007, después de nuevos intentos fracasados de liberarlo y deportarlo a China, el Gobierno, con el fin de resolver la situación de estancamiento, accedió a concederle la suma de 30.000 dólares de los EE.UU. por razones humanitarias, junto con una nota detallada de su caso. El Sr. Wu rechazó esta solución y decidió permanecer en detención voluntaria.

20. El Gobierno también informa de que el Sr. Wu fue liberado en febrero de 2009 en virtud de los artículos 45 y 46 de la Constitución. El artículo 45 establece que toda persona tiene derecho a no ser detenida o recluida arbitrariamente, salvo en los casos que dispongan las leyes promulgadas por el Parlamento. El artículo 46, por su parte, establece que nadie podrá ser detenido o encarcelado por un delito a menos que el agente que lo detenga observe que se cometió el delito o tenga motivos razonables y probables, o pruebas, para creer que la persona ha cometido un delito o está a punto de cometerlo, o bien por una orden de detención dictada por un tribunal.

21. Tras su liberación, el Gobierno alojó al Sr. Wu Mei De en una casa de huéspedes y le facilitó el visado necesario para facilitar su estancia. Sin embargo, poco después de su puesta en libertad, el Sr. Wu Mei De insistió al Ministerio del Interior que deseaba volver al centro de detención. Además, empezó a visitar a diario el Departamento de Servicios Penitenciarios y de Rehabilitación, donde exigió de forma continuada que se le encarcelara de nuevo. Ahora, el Sr. Wu se niega a abandonar el Departamento de Servicios Penitenciarios y de Rehabilitación hasta que se le ponga de nuevo en prisión.

22. El Gobierno se ha reunido con el Sr. Wu a través de su representante ante personas detenidas y ha tratado de aclarar y complacer sus deseos y necesidades. El Sr. Wu ha declarado que no quiere regresar a China y que ha presentado su caso ante un tribunal internacional, y que por tanto desea permanecer en prisión hasta que el asunto sea resuelto por el tribunal. El Sr. Wu Mei De insiste en que no quiere regresar a su país de origen aunque los Gobiernos chino y maldivo le faciliten todos los trámites para un retorno seguro. Atendiendo a su solicitud, el Gobierno ha facilitado su conversión a la fe islámica. Igualmente, mantiene su oferta de proporcionar al Sr. Wu la cantidad de 30.000 dólares de

los EE.UU. por razones humanitarias. Se informa además que aunque el Sr. Wu no ha iniciado ninguna causa ante un tribunal del país, la Comisión de Derechos Humanos de las Maldivas está investigando su caso.

23. El 24 de abril de 2009, el Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente, y recibió sus observaciones el 6 de mayo de 2009. No se encontró ninguna inexactitud importante en la respuesta del Gobierno: considerando que el Sr. Wu ha sido puesto en libertad, su detención y encarcelamiento previos fueron ilegales y contrarios a las leyes internacionales de derechos humanos. El Sr. Wu no confía en la justicia de las Maldivas y se apoya en lo que él llama "la justicia internacional". Presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de las Maldivas en relación con su detención arbitraria y con su liberación ilegal de la prisión de Maafushi.

24. La fuente confirma que el Sr. Wu fue oficialmente liberado el 7 de febrero de 2009 para ser ingresado en el hospital IGM y recibir tratamiento médico. El 14 de febrero de 2009 fue dado de alta oficialmente, y todas sus facturas fueron pagadas por el Departamento de Servicios Penitenciarios y de Rehabilitación.

25. El Grupo de Trabajo, teniendo en cuenta toda la información y las circunstancias relacionadas, está en condiciones de emitir su Opinión sobre el caso.

26. El Gobierno informó de que el Sr. Wu fue detenido por primera vez en 1991. La fuente había informado de que fue detenido por primera vez en noviembre de 1993. El Gobierno confirmó que el fundamento jurídico de su detención fue una violación de las leyes de inversión extranjera de las Maldivas. El Grupo de Trabajo observa que las disposiciones legales que justifican los más de 17 años de reclusión del Sr. Wu son contradictorias. Mientras que, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Sr. Wu fue detenido por no invertir en el país de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa de inversiones de las Maldivas, según el Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional fue detenido por realizar declaraciones incriminatorias contra el Gobierno y altos funcionarios del mismo.

27. El Grupo de Trabajo constata que el Gobierno no ha dado una explicación clara sobre las razones por las que el Sr. Wu fue detenido en diversas ocasiones sin una orden de detención legal y por las que se le ha mantenido en prisión durante tanto tiempo sin someterlo a juicio. El Sr. Wu fue detenido a instancias de un ciudadano de Maldivas a quien trató de demandar por irregularidades en una sociedad mercantil.

28. En su respuesta, el Gobierno reconoce que el Sr. Wu "nunca ha sido condenado por ningún delito". En este caso, el Grupo de Trabajo no puede entender las razones de su detención ni puede aceptar la explicación del Gobierno de que el Sr. Wu ha permanecido en prisión "bajo su propia voluntad" o que continúe en una "reclusión voluntaria".

29. Tampoco explica por qué el Gobierno evita la investigación del caso contra el socio del Sr. Wu para llevar a los responsables ante la justicia. El Gobierno únicamente afirma que ha ofrecido la cantidad de 30.000 dólares de los EE.UU. al Sr. Wu "por razones humanitarias" y ha tratado de repatriarlo a China.

30. En consecuencia, el Grupo de Trabajo considera que la detención y encarcelamiento del Sr. Richard Wu Mei De durante más de 15 años sin una orden de detención, sin cargos concretos en su contra y sin un juicio o un fallo de un tribunal es arbitraria, pues carece de fundamento jurídico e incumple gravemente las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial. El Sr. Wu nunca ha sido oficialmente informado de las razones de su detención y encarcelamiento y nunca se le ha permitido impugnar su detención ante un tribunal de justicia.

31. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo, de acuerdo con el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo, emite la siguiente Opinión:

La detención del Sr. Richard Wu Mei De durante más de 15 años fue arbitraria y contraria a los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a las categorías I, II y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

32. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno que agote todos los medios internos a su alcance para proporcionar al Sr. Richard Wu Mei De la posibilidad de llevar el asunto ante un tribunal de justicia para su resolución, no sólo por "razones humanitarias", sino con miras a obtener la potencial reparación de todas sus pérdidas y las correspondientes indemnizaciones, incluidas las relacionadas con sus inversiones, causadas por su período de encarcelamiento ilegal y prolongado.

Aprobada el 6 de mayo de 2009.

### **Opinión N° 5/2009 (Líbano)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 13 de noviembre de 2008.**

**Relativa a los Sres. Alaa Kasem Lefte, Kaseem Atalla Zayer, Walid Taleb Suleiman Muhammad Al Dilimi, Ali Fadel Al Hsaynawi Elyawi, Kheiry Hussein Hajji, Mouayed Allawi Al Kinany Abed, Ali Al-Tamimi, Ahmad Fathi Hamid, Ziad Tarek Al Abdallah Touman, Ramadan Abdelrahman Hajj y Ahmad Naji Al Aamery.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
3. Habida cuenta de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo habría deseado contar con la cooperación del Gobierno. A falta de toda información por parte de éste, el Grupo de Trabajo considera que está en condiciones de emitir una Opinión sobre los hechos y las circunstancias del caso en cuestión, sobre todo si se tiene en cuenta que los hechos mencionados y las afirmaciones contenidas en la comunicación no han sido desmentidos por el Gobierno.
4. Los casos que se resumen a continuación se comunicaron al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la siguiente manera.
5.
  - a) El Sr. Alaa Kasem Lefte, de nacionalidad iraquí, nacido el 1° de enero de 1986, obrero en una fábrica de cemento, residente en Hindiya, Jadwal Al-Gharbi, Towarij, Kerbala, reconocido como refugiado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), fue detenido el 1° de febrero de 2007 por miembros de las fuerzas de seguridad que no le presentaron una orden de detención. Posteriormente fue condenado a dos meses y medio de prisión por entrada ilegal en el territorio libanés.
  - b) El Sr. Kassem Atallah Zayer, de nacionalidad iraquí, nacido en 1982, propietario de una lavandería, con domicilio en Kerbala, Al Hindiya, reconocido como refugiado por el ACNUR, fue detenido el 10 de abril de 2007 por agentes de las fuerzas de seguridad que no le presentaron una orden de detención. Había entrado en el Líbano en mayo de 2005. Fue condenado a un mes de prisión por entrada ilegal en el territorio en virtud del artículo 32 de la Ley de 1962 sobre entrada, permanencia y salida de extranjeros.
  - c) El Sr. Walid Taleb Suleiman Muhammad Al Dilimi, de nacionalidad iraquí, nacido en 1978, con domicilio en la calle 8 de febrero, Hay Al Tamim, Ramadi, reconocido

como refugiado por el ACNUR, fue detenido el 23 de abril de 2007 por miembros de las fuerzas de seguridad que no le presentaron una orden de detención.

d) El Sr. Ali Fadel Al Hsaynawi Elyawi, de nacionalidad iraquí, nacido el 20 de enero de 1969, con domicilio en Basora, Ashar, reconocido como refugiado por el ACNUR, con certificado de refugio N° 245-00C16182, expedido el 6 de julio de 2007, fue detenido el 20 de febrero de 2007 por agentes de la Seguridad General. Fue condenado a un mes de prisión por entrada ilegal en el territorio libanés y por dar el nombre de una persona inexistente como garante.

e) El Sr. Kheiry Hussein Hajji, de nacionalidad iraquí, nacido el 10 de agosto 1972, con documento de identidad iraquí N° 350727, miembro de la minoría religiosa yezidi, empleado en la licorería de su padre, con domicilio en Ninewa, Mosul, reconocido como refugiado por el ACNUR con certificado de refugio N° 245-04C02044, fue detenido el 17 de diciembre de 2006 por agentes de las fuerzas de seguridad que no le presentaron una orden de detención. Fue condenado a un mes de prisión. La fuente añade que, teniendo en cuenta su pertenencia a una minoría religiosa, si continúa detenido, su integridad y seguridad personal pueden verse amenazadas.

f) El Sr. Mouayed Allawi Al Kinany Abed, de nacionalidad iraquí, nacido el 25 de agosto de 1982, residente en la ciudad de Sadr, Bagdad, costurero, reconocido como refugiado por el ACNUR, fue detenido el 9 de abril 2007 por miembros de las fuerzas de seguridad del Ministerio del Interior. Fue condenado a un mes de prisión.

g) El Sr. Ali Al-Tamimi, de nacionalidad iraquí, nacido en 1966, con documento de identidad N° 141092 expedido por el Ministerio del Interior del Iraq el 22 de noviembre 2004, portero, residente en Hay Al Jihad, Bagdad, reconocido como refugiado por el ACNUR, fue detenido el 12 de abril de 2007 en el sector Wadi Khalid de la frontera libanesa con el Iraq por agentes de la Seguridad General. Fue condenado a un mes de prisión y ha estado detenido en las cárceles de Trípoli, Quba, Halba y Roumieh.

h) El Sr. Ahmad Fathi Hamid, de nacionalidad iraquí, nacido en 1974, residente en Hay Al Zuhur, Mousi, reconocido como refugiado por el ACNUR, con certificado de refugio N° 245-07C00429 expedido el 5 de marzo de 2007, fue detenido el 17 de febrero de 2007 por agentes de las fuerzas de seguridad. Fue condenado a un mes de prisión.

i) El Sr. Ziad Tarek Al Abdallah Touman, de nacionalidad iraquí, nacido el 1° de noviembre de 1983, vendedor, domiciliado en Bagdad, reconocido como refugiado por el ACNUR, fue detenido el 12 de abril 2007 por miembros de las fuerzas de seguridad del Ministerio de Interior. Fue condenado a un mes de prisión.

j) El Sr. Ramadan Abdelrahman Hajj, de nacionalidad iraquí, nacido en 1953, conductor de ambulancia en el Iraq y portero en el Líbano, con domicilio en la carretera del aeropuerto, Hay El Jezaer, Mosul, reconocido como refugiado por el ACNUR, fue detenido el 3 de marzo de 2007 por miembros de las fuerzas de seguridad del Ministerio del Interior. Fue condenado a 10 días de prisión.

k) El Sr. Ahmad Naji Al Aamery, de nacionalidad iraquí, nacido en 1988, panadero, con domicilio en Ghazaleya, Bagdad, reconocido como refugiado por el ACNUR, con certificado de refugio N° 245-06C00967 expedido el 9 de marzo de 2007, fue detenido el 27 de julio de 2006 por miembros de las fuerzas de seguridad del Ministerio del Interior. Fue condenado a tres meses de prisión, a una multa de 200 libras libanesas y a la deportación por el tribunal de Beirut, que lo consideró culpable de entrar ilegalmente en el territorio y de posesión de tres documentos de identidad sirios falsificados, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de 1962 sobre entrada, permanencia y salida de extranjeros, y los artículos 463/219, 463/454 y 464/454 del Código Penal.

6. Según la información recibida, estas 11 personas fueron puestas a disposición de la Seguridad General para su deportación y traslado a la prisión de Roumih, edificios C y D, después de haber cumplido sus condenas. En la prisión de Roumih, les retuvieron sus pasaportes y documentos de identidad iraquíes. A pesar de que el ACNUR había reconocido su condición de refugiados, se ordenó su deportación debido a su entrada o permanencia ilegal en el territorio libanés, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de 1962 sobre entrada, permanencia y salida de extranjeros.
7. Estas personas siguen detenidas a pesar de que ya han cumplido sus períodos respectivos de condena. No se tomó ninguna resolución judicial o administrativa para su permanencia en prisión después de vencido el período de sus condenas penales. Además, comparten cárcel con malhechores y delincuentes comunes.
8. La fuente añade que la facultad discrecional de la Seguridad General es muy amplia e imprecisa, y que la detención de estas personas hasta la ejecución de la orden de deportación es contraria a la obligación internacional de la República Libanesa de observar el principio de no devolución. No hay un período máximo de detención para las personas que están en espera de ser deportadas. Además, los detenidos no tienen ninguna posibilidad de comparecer ante un juez para solicitar la revisión judicial de la resolución de deportación.
9. En su Deliberación N° 5 sobre la detención de inmigrantes y solicitantes de asilo (véase E/CN.4/2000/4, anexo II), el Grupo de Trabajo ya ha afirmado claramente que la detención administrativa de inmigrantes y solicitantes de asilo en ningún caso podrá ser indefinida ni tener una duración excesiva, ya que la ley deberá prever un plazo máximo (Deliberación N° 5, Principio 7). La detención indefinida de ciudadanos extranjeros en situación irregular, inmigrantes y solicitantes de asilo es incompatible con el derecho internacional.
10. El Grupo de Trabajo también precisó que el solicitante de asilo o el inmigrante podrá presentar un recurso ante un juez, el cual fallará cuanto antes respecto de la legalidad de la medida y, llegado el caso, ordenará la puesta en libertad del interesado. En la resolución de detención se deberán especificar las condiciones en las que el solicitante de asilo o el inmigrante podrá presentar un recurso judicial (Principio 8).
11. Dada la magnitud que ha cobrado el fenómeno universal de la emigración irregular, el Grupo de Trabajo ha reiterado, desde 1999, diversas decisiones en las que declara que la detención indefinida de los no nacionales debido a su situación irregular es arbitraria.
12. Así, en su último informe (A/HRC/10/21, párr. 67) el Grupo de Trabajo recuerda a los Estados que la detención de solicitantes de asilo, refugiados e inmigrantes en situación irregular debe ser un último recurso, admisible únicamente durante el menor tiempo posible, y que se deberían buscar otras soluciones cuando ello sea factible.
13. El Gobierno no ha negado que la detención de las 11 personas antes mencionadas confirma una práctica de las autoridades libanesas de detener a refugiados iraquíes que no poseen visados válidos y mantenerlos detenidos indefinidamente para obligarlos a regresar al Iraq. Estas personas pueden consumirse indefinidamente en la cárcel a menos que acepten regresar al Iraq.
14. Dado que el Líbano no ha suscrito la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, las autoridades libanesas no atribuyen un valor jurídico sustancial al reconocimiento de la condición de refugiados de los iraquíes por parte del ACNUR.
15. El Grupo de Trabajo considera que obligar a los refugiados a regresar a un país donde su vida y su libertad corren peligro viola claramente el principio de no devolución. Estas personas han sido acusadas y condenadas por entrar o permanecer ilegalmente en el

territorio del Líbano, cuando en realidad buscaban la protección internacional de la República Libanesa, en ejercicio de su derecho a solicitar asilo, y a disfrutar de él, en virtud del artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales de guerra, violencia y persecución en su país, no se puede pretender que estas personas sigan el procedimiento ordinario y las formalidades administrativas requeridas para salir de su país, obtener un pasaporte válido y solicitar un visado para entrar de manera legal en el Líbano.

16. El Grupo de Trabajo considera que se mantiene detenidas a estas personas a pesar de que ya han cumplido sus sentencias penales, y sin autorización judicial, sin posibilidad de interponer un recurso de revisión ante un juez o magistrado o de disponer de otro medio para impugnar la legalidad de su detención, y en violación del derecho internacional consuetudinario y los principios y normas vigentes en materia de derecho de asilo.

17. El Grupo de Trabajo reitera que se debe poder impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal ordinario, y que la petición en ese sentido debe examinarse en la forma adecuada y dentro de un plazo determinado. En toda circunstancia se deberían adoptar las disposiciones para determinar que la detención es ilegal, por ejemplo, cuando la expulsión es imposible por consideraciones jurídicas, como el principio de no devolución, en virtud del cual se excluye la deportación a un país de destino cuando haya riesgos de que la persona sea sometida a tortura o a detención arbitraria en ese país.

18. La privación de libertad de personas que han entrado en un país de manera irregular sólo puede aplicarse como una medida de último recurso antes de proceder a la expulsión: esa detención será lo más breve posible, y sólo podrá aplicarse con arreglo a normas establecidas con claridad y definidas de manera exhaustiva. Los solicitantes de asilo, refugiados o inmigrantes en situación irregular no se deberían calificar de delincuentes, ni ser tratados como tales.

19. Se deberá poder presentar en todo momento recurso ante los tribunales contra la detención administrativa; en ningún caso podrá ser indefinida ni tener una duración excesiva, y su aplicación no dependerá de la conducta de la persona no nacional que haya entrado de manera irregular en el territorio nacional, si hubiera motivos que impiden al Gobierno efectuar la expulsión.

20. El Gobierno del Líbano no ha refutado las afirmaciones de la fuente que demostrarían que se ha privado de libertad a estas 11 personas de forma indefinida por el mero hecho de tratarse de no nacionales que entraron en el país de manera irregular. Ello supone una violación adicional, ya que se trata de personas a las que el ACNUR ha concedido la condición de refugiados de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas de 1951, y que en tales casos no se ha tenido en cuenta el principio de no devolución.

21. El Grupo de Trabajo observa que la negativa de las autoridades libanesas a regularizar la situación de estas personas no sólo afecta a las personas privadas de libertad, sino que puede suscitar en la mayoría de los refugiados iraquíes el temor constante de ser detenidos.

22. Habida cuenta de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La privación de la libertad de los Sres. Alaa Kasem Lefte, Kaseem Atalla Zayer, Walid Taleb Suleiman Muhammad Al Dilimi, Ali Fadel Al Hsaynawi Elyawi, Kheiry Hussein Hajji, Mouayed Allawi Al Kinany Abed, Ali Al-Tamimi, Ahmad Fathi Hamid, Ziad Tarek Al Abdallah Touman, Ramadan Abdelrahman Hajj y Ahmad Naji Al Aamery es arbitraria, pues contraviene los artículos 9, 10 y 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a las categorías I y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

23. Consecuentemente con la Opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias y urgentes para remediar la situación y ponerla en conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 7 de mayo de 2009.

### **Opinión N° 6/2009 (República Islámica del Irán)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 29 de septiembre de 2008.**

**Relativa al Dr. Arash Alaei y el Dr. Kamiar Alaei.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
3. Los dos casos que se resumen a continuación han sido comunicados al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la siguiente manera.
4. a) El Dr. Arash Alaei, ex director de Cooperación Internacional en Educación e Investigación del Instituto Nacional Iraní de Investigación de la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias.  
b) Su hermano, el Dr. Kamiar Alaei, postulante a doctorado en la Escuela de Salud Pública de Albany, Universidad Estatal de Nueva York. Posee una maestría en Población y Salud Internacional por la Escuela de Salud Pública de Harvard y es fundador de clínicas especializadas en planificación de la salud. La Asia Society lo reconoció como Asia Fellow de 2008, calificándolo como "uno de los 23 nuevos miembros considerados entre los nuevos líderes de opinión más prometedores de la zona Asia-Pacífico".
5. Los dos hermanos son médicos especializados en la prevención y tratamiento del VIH y el sida. Están profundamente implicados en este campo y son conocidos internacionalmente por sus esfuerzos para elevar el interés del Gobierno iraní en las cuestiones relacionadas con el VIH/SIDA, así como por la creación de programas para reducir el impacto de esta enfermedad entre los presos y los jóvenes. Desde 1998 ejecutan programas relacionados con el VIH y el sida en la provincia de Kermanshah, especialmente dirigidos a paliar sus efectos perjudiciales entre el grupo de drogadictos por vía intravenosa. Han trabajado para la integración de la prevención y la atención del VIH y el sida en el sistema iraní de salud, y para la reducción de las infecciones por transmisión sexual y de los perjuicios por el consumo de drogas. Además de su trabajo en el Irán, han impartido cursos de formación para trabajadores afganos y tayikos del sector sanitario. Han trabajado para fomentar la cooperación regional entre los 12 países de Oriente Medio y Asia Central.
6. Se informó de que estas dos personas fueron detenidas el 22 y 23 de junio de 2008, respectivamente, por agentes de la policía iraní, que no mostraron órdenes de detención. La policía se llevó documentos de las casas de ambos hermanos. Fueron separados y encarcelados en régimen de incomunicación y sin cargos en la prisión de Evin, en Teherán. Se alegó que la detención estaba motivada por la relación de ambos hermanos "con organizaciones no gubernamentales con sede en los Estados Unidos de América".
7. Se ha expresado preocupación porque los dos médicos podrían haber sido víctimas de severos interrogatorios, que incluirían malos tratos e incluso tortura, con el fin de obligarlos a firmar confesiones falsas que les implicarían en un complot contra el Gobierno.

Según el periódico *E'temad*, estos dos médicos se mantienen en prisión por ser "sospechosos de conspirar para derrocar el Gobierno de la República Islámica". Se dijo que han sido hostigados por las diferentes partes de los servicios de inteligencia durante los últimos dos años.

8. Se informó, además, de que se negó a estas dos personas asistencia letrada y se les advirtió de que no trataran de pedir asistencia jurídica. No se les autorizó a contactar con sus familiares. En una entrevista, previa a su detención, con la emisora en lengua persa Radio Zamaneh, el Dr. Kamiar Alaei expresó su grave preocupación por la propagación del VIH y el sida, que según afirmó, podría ser contenida.

9. La fuente considera que la detención de estos dos médicos se debe a motivos políticos. Considera que han sido detenidos y se les mantiene en régimen de incomunicación únicamente por ejercer sus derechos a las libertades de reunión, asociación, opinión y expresión.

10. En una nota verbal de fecha 25 de marzo de 2009, el Grupo de Trabajo recordó al Gobierno su solicitud de información sobre estos casos y le notificó que serían considerados en su 54º período de sesiones. Lamentablemente, el Grupo de Trabajo no ha recibido ninguna respuesta del Gobierno.

11. El Grupo de Trabajo se considera en el deber de adoptar una Opinión sobre la base de las alegaciones de la fuente y del resto de información puesta a su disposición, que no ha sido desmentida por el Gobierno, a pesar de que tuvo la oportunidad de hacerlo.

12. El Grupo de Trabajo constata que los Dres. Arash y Kamiar Alaei fueron arrestados sin una orden de detención y se encuentran reclusos en régimen de incomunicación y sin cargos en la prisión de Evin, en Teherán. Se les ha negado la posibilidad de obtener asesoramiento jurídico y las autoridades les han advertido de que no traten de pedir asistencia letrada. Llevan más de diez meses en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio. El Gobierno ha hecho caso omiso en dos ocasiones la solicitud de información formuladas por el Grupo de Trabajo sobre estos casos y sobre el fundamento jurídico que justifica mantener en prisión a los dos médicos.

13. El Grupo de Trabajo considera que las actividades de estos dos médicos en el ámbito de la prevención y tratamiento del VIH y el sida sólo puede consolidar y fortalecer el sistema nacional de salud del Irán. Ambos, que cuando se graduaron prestaron el juramento hipocrático, han elevado el nivel de interés del Gobierno de la República Islámica en las cuestiones relacionadas con el VIH/SIDA y han trabajado con otros 12 países de Oriente Medio y Asia Central impartiendo formación para trabajadores afganos y tayikos del sector sanitario. Han estado en la vanguardia de la lucha contra el sida. Es difícil entender que en los dos últimos años hayan sido objeto de acoso por parte de los servicios de inteligencia, o que sus actividades puedan ser consideradas una "conspiración para derrocar el Gobierno". En particular, el Dr. Kamiar Alaei ha sido considerado por la Asia Society como "uno de los nuevos líderes de opinión más prometedores de la zona Asia-Pacífico".

14. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La detención de los Dres. Arash y Kamiar Alaei es arbitraria, pues contraviene los artículos 9, 10, 25 y 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14, 18, 19 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que la República Islámica del Irán es Estado parte, y corresponde a las categorías I, II y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

15. La detención de los médicos mencionados también es contraria a los artículos 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a los

Principios 11, párrafo 1, 17, párrafo 2 y 18, párrafo 1 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

16. Consecuentemente con esta Opinión, el Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que ponga en libertad inmediatamente a estos dos médicos o les acuse de un delito penal tipificado y los juzgue de acuerdo con las normas de un juicio imparcial, y que tome las medidas necesarias para remediar la situación a fin de ponerla en conformidad con las disposiciones consagradas en los instrumentos internacionales pertinentes.

Aprobada el 7 de mayo de 2009.

## **Opinión N° 7/2009 (Níger)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 15 de octubre de 2008.**

**Relativa al Sr. Moussa Kaka.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado la información solicitada.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El caso que se resume a continuación se comunicó al Grupo de Trabajo de la siguiente manera: el Sr. Moussa Kaka (en adelante el Sr. Kaka), ciudadano nigerino, Director de la emisora de radio privada Radio Saraouniya y corresponsal de Radio France Internationale (RFI) en el Níger, fue detenido el 20 de septiembre de 2007 por agentes de la Brigada de Investigaciones de la Gendarmería Nacional en su lugar de trabajo, Radio Saraouniya, sita en Place du Marché, Niamey. Fue retenido por la policía durante 72 horas antes de ser trasladado a la prisión civil de Niamey. No se le hizo comparecer ante un juez como exige la ley ni se le comunicó el motivo de su detención.
5. El 25 de septiembre de 2007, el Sr. Kaka compareció finalmente ante un juez. Fue acusado como "cómplice para atentar contra la seguridad del Estado". Al parecer, el cargo se basa en su vinculación con el grupo armado de oposición Movimiento de los Nigerinos por la Justicia (MNJ), creado en febrero de 2007 y que actúa en el norte del país. La condena por ese delito puede dar lugar a una pena máxima de cadena perpetua.
6. Los cargos que se imputan al Sr. Kaka se basan únicamente en grabaciones de conversaciones entre el Sr. Kaka y dirigentes del MNJ. El 17 de noviembre de 2007, el Juez de instrucción decidió no utilizar las grabaciones porque se habrían obtenido de manera ilegal. Dictó una providencia para que se excluyeran del expediente de instrucción las cintas magnetofónicas con las conversaciones por haberse obtenido por medios que infringen la legislación vigente. Teniendo en cuenta que esas grabaciones eran la única prueba material de los cargos que se le imputaban, el Sr. Kaka debería haber quedado en libertad.
7. Sin embargo, el Fiscal interpuso un recurso de apelación contra esta resolución. El 12 de febrero de 2008, el tribunal de apelación de Niamey denegó la libertad provisional del Sr. Kaka. El tribunal rechazó la resolución del Juez de noviembre de 2007, y decidió asimismo remitir la causa del Sr. Kaka a otro juez. Los abogados del Sr. Kaka decidieron entonces recurrir ante el Tribunal Supremo del país. El 15 de mayo de 2008, el Tribunal desestimó el recurso del Sr. Kaka para que se excluyeran las grabaciones del expediente, y también rechazó su solicitud de libertad provisional. Tras una nueva solicitud de libertad provisional presentada por el abogado del Sr. Kaka, en una audiencia celebrada en junio de

2008, el magistrado superior de instrucción del tribunal de Niamey concedió la libertad provisional al Sr. Kaka el 23 de junio de 2008. El mismo día la Fiscalía recurrió esa resolución, y por consiguiente el Sr. Kaka sigue detenido. Actualmente se encuentra en la prisión central de Niamey, donde comparte una celda de ocho metros cuadrados con otros 14 reclusos. El Sr. Kaka recibe visitas y alimentos de su familia.

8. El 16 de septiembre de 2008, el Fiscal del Tribunal de Apelaciones de Niamey solicitó cambiar los cargos contra el Sr. Kaka, de "cómplice para atentar contra la seguridad del Estado" por los de autor de "actos que pudieran atentar contra la seguridad del Estado".

9. Sin embargo, los abogados del Sr. Kaka rechazaron este nuevo cargo basándose en que esa modificación sólo sería plausible en "tiempo de guerra", y señalaron también que las autoridades han considerado sistemáticamente las rebeliones en el norte del país "delitos organizados por delincuentes y narcotraficantes" y no situaciones de guerra o conflictos.

10. La fuente destaca que durante muchos años el Sr. Kaka fue víctima de acoso y amenazas por parte de las autoridades del Níger debido a sus actividades periodísticas. En agosto de 2005, el Sr. Kaka fue aprehendido y detenido durante cuatro días, después de entrevistar a una persona sospechosa de formar parte de un grupo rebelde que había reivindicado un atentado en el norte del país. El 14 de julio de 2007, el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (FAN), el Sr. Moumouni Boureima, amenazó públicamente de muerte al Sr. Kaka.

11. La fuente añade que durante varios años las autoridades han hostigado, detenido arbitrariamente y condenado a periodistas en un intento de restringir la libertad de expresión. Los periodistas detenidos cubrían casos de malversación del Gobierno y otros temas políticos.

12. El 30 de agosto de 2007, el Consejo Superior de Comunicación (CSC) del Níger prohibió la transmisión en directo de los debates sobre la situación en la región de Agadez, en el norte del país. En junio de 2008, el Gobierno cerró la Asociación Nacional de Prensa hasta nuevo aviso. En agosto de 2007, se dictó un decreto de estado de excepción (llamado "de advertencia") para la región de Agadez, que desde entonces fue renovado varias veces, y sigue vigente hasta la fecha. Este decreto no sólo conferiría al ejército y a la policía atribuciones aparentemente ilimitadas para detener y mantener en custodia policial a sospechosos durante un plazo de más de 48 horas (durante el cual normalmente se requiere que el detenido comparezca ante un juez, magistrado o funcionario judicial), sino que autorizaría también al ejército a llevar a cabo ejecuciones de miembros del MNJ.

13. En su respuesta del 21 de abril de 2009, el Gobierno confirma que el Sr. Moussa Kaka fue efectivamente detenido por agentes de la Brigada de Investigaciones de la Gendarmería Nacional debido a algunos indicios graves de su participación en los acontecimientos lamentables que se producen en el norte del país.

14. En virtud del artículo 71 del Código de Procedimiento Penal, el plazo de detención policial es de 48 horas, prorrogable por una sola vez, por lo que tras esa prórroga de su detención el Sr. Kaka fue puesto a disposición del Fiscal de la República. Éste procedió a efectuar investigaciones adicionales antes de someter el caso al Juez de instrucción, que dictó una orden de ingreso en prisión el 25 de septiembre de 2007.

15. En su respuesta, el Gobierno precisa que la detención policial es una detención legítima. Las detenciones arbitrarias no se basan en ninguna convención, ley o reglamento. Durante la detención policial, las personas sospechosas tienen derecho a contar con la asistencia de un abogado de su elección. También tienen derecho a un reconocimiento médico, y a recibir una notificación de los hechos que se les imputan, para que puedan ofrecer explicaciones.

16. El Gobierno añade que el 17 de noviembre de 2007, el Juez de instrucción estimó necesario excluir ciertas pruebas del expediente antes de poner en libertad al acusado, indicando que esas pruebas se habían obtenido de manera ilegal. El Fiscal General interpuso inmediatamente un recurso, con efecto suspensivo sobre la ejecución de esa resolución.

17. El tribunal de apelación competente revocó la resolución del Juez de instrucción y remitió la causa, según el Gobierno, a "otro juez con mayor experiencia, capaz de instruir la causa con más competencia y serenidad". La defensa interpuso seguidamente un recurso de casación contra la resolución del tribunal de apelación, y el Tribunal Supremo, mediante una resolución del 15 de mayo de 2008, confirmó la sentencia del tribunal de apelación.

18. El Gobierno indica que el 16 de septiembre de 2008, tras una nueva solicitud de libertad provisional, aceptada por el Juez de instrucción, el Fiscal apeló nuevamente y luego pidió que se recalificaran los hechos inicialmente imputados al Sr. Kaka, como presunto autor de "actos que pudieran atentar contra la seguridad del Estado".

19. El Sr. Kaka recuperó la libertad y su causa se remitió al tribunal penal para ser juzgado conforme a la ley.

20. Por último, el Gobierno considera necesario precisar que el Sr. Kaka ha recibido un trato preferencial durante su detención, en uno de los locales reservados para altos funcionarios del Estado, en un país en que impera el estado de derecho, sin ninguna restricción de la libertad de expresión, y en que la Asamblea Nacional está elaborando un proyecto de ley sobre la despenalización de los delitos de prensa.

21. La fuente confirma que el tribunal de apelación de Niamey ordenó la libertad provisional del Sr. Kaka y remitió su causa al Tribunal Penal de Niamey para que se lo juzgara por el delito de "atentado contra la integridad del territorio nacional en complicidad con elementos del MNJ", en virtud del artículo 80 del Código Penal. Se le puede imponer una pena de uno a diez años de prisión. El Sr. Kaka ha estado detenido durante más de un año, del 25 de septiembre de 2007 al 7 de octubre de 2008.

22. Tras la respuesta del Gobierno, y a pesar de la liberación del Sr. Kaka, después de más de un año de privación de libertad, el Grupo de Trabajo estima que, de conformidad con el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo (sección "Curso dado a las comunicaciones"), para decidir si la detención del Sr. Kaka es arbitraria o no se debe tener en cuenta la duración de la detención, la condición de periodista del Sr. Kaka y, por consiguiente, la libertad de expresión que impone esta función.

23. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno no refuta que el Sr. Kaka fue detenido el 20 de septiembre de 2007 y que la orden de ingreso en prisión se dictó sólo el 25 de septiembre de 2007, es decir, 5 días o 120 horas después. Habida cuenta de que el plazo de detención policial es de 48 horas, prorrogable una sola vez, es decir 4 días o 96 horas, se desprende que el Sr. Moussa Kaka, que aún no ha comparecido ante el Juez de instrucción, siguió durante 24 horas más en custodia policial, en violación de la legislación nacional, y esto es quizás lo que el Gobierno entiende en su respuesta cuando afirma que el Fiscal General "tuvo que llevar a cabo otras investigaciones".

24. Por consiguiente, cabe pensar, al igual que la fuente, que el Sr. Kaka estuvo detenido en la prisión antes de comparecer ante un juez. Esta detención no tiene ninguna base jurídica que justifique la privación de libertad.

25. El Grupo de Trabajo observa asimismo, como sostiene la fuente, que el Gobierno no menciona ningún hecho concreto en apoyo de las acciones judiciales incoadas contra el Sr. Kaka, sino que se limita simplemente a indicar que participó en los acontecimientos lamentables que se producen en el norte del país.

26. De igual modo, los cargos presentados o su recalificación en torno a la noción de "cómplice para atentar contra la autoridad del Estado" no constituyen hechos precisos y tipificados.

27. Esta falta de precisiones en la acusación constituye una violación del derecho a un juicio imparcial, ya que no permite al acusado defenderse de manera adecuada. Tal afirmación se confirma por el hecho de que no se ha desmentido que el único elemento de prueba consiste en grabaciones de conversaciones telefónicas obtenidas de forma ilegal a tenor del artículo 22 de la Constitución del 9 de agosto de 1999, de los artículos 59 y siguientes de la Orden N° 99-045 del 26 de octubre de 1999 que reglamenta las telecomunicaciones y de los artículos 60 y 416 del Código de Procedimiento Penal. En noviembre de 2007, el Juez de instrucción encargado de la causa dictó una providencia para que se excluyeran del expediente y se declararan nulas esas grabaciones. La grabación de las conversaciones del Sr. Kaka con miembros del MNJ se efectuó por medios que no se ajustan a la legislación vigente. Sin embargo, el Juez que invalidó las grabaciones por considerarlas ilegales fue recusado, y el caso se remitió a un juez "con mayor experiencia, capaz de instruir la causa con más competencia y serenidad".

28. El Grupo de Trabajo señala que esas escuchas telefónicas obtenidas por medios ilegales eran la única prueba material de las acusaciones formuladas contra el Sr. Kaka. Por lo tanto, en noviembre de 2007 el Sr. Kaka debería haber quedado en libertad.

29. Por último, el Grupo de Trabajo está sorprendido de que el Gobierno haya guardado silencio sobre el acoso y las amenazas de que ha sido objeto el Sr. Kaka durante muchos años, las denuncias de acoso a otros periodistas que se interesaron por la actividad del Gobierno, el hecho de que el 30 de agosto de 2007 el Consejo Superior de Comunicación de Níger prohibiera la emisión en directo de los debates sobre la situación en la región de Agadez, así como el cierre de la Asociación Nacional de Prensa en junio de 2008.

30. A falta de cargos específicos sobre hechos precisos y tipificados jurídicamente, y habida cuenta de la condición de periodista de Moussa Kaka, estos elementos permiten confirmar que ha sido perseguido por el mero hecho de ejercer su libertad de expresión.

31. Sobre la base de todos estos elementos y teniendo en cuenta que el Sr. Moussa Kaka fue puesto en libertad provisional, en virtud del párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La detención del Sr. Kaka es arbitraria, pues contraviene los artículos 9, 10 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a las categorías I, II y III de las aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

32. Consecuentemente con la Opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Kaka.

Aprobada el 7 de mayo de 2009.

## **Opinión N° 8/2009 (Emiratos Árabes Unidos)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 14 de octubre de 2008.**

**Relativa al Sr. Hassan Ahmed Hassan Al-Diqqi.**

**El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado información sobre las alegaciones transmitidas.

3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El caso se comunicó al Grupo de Trabajo como figura a continuación.
5. Sr. Hassan Ahmed Hassan Al-Diqqi (en adelante, el Sr. Al-Diqqi) es un ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos nacido el 3 de enero de 1957. Es contable de profesión y ha ocupado diversos cargos en la administración del país, como experto independiente como entidad consultiva ante los tribunales y como defensor de los derechos humanos.
6. Se informó de que el Sr. Al-Diqqi fue detenido el 20 de julio de 2008 en Sharjah y llevado a las instalaciones de los Servicios de Seguridad del Estado. Según la información recibida, se habría propuesto al Sr. Al-Diqqi que abandonara toda actividad política y cerrara su sitio en Internet, o de lo contrario se le iniciaría un proceso judicial sobre un caso de violación. Se negó a aceptar la propuesta.
7. El Sr. Al-Diqqi fue llevado a la prisión central, donde permanece recluido. Su detención no se comunicó oficialmente a su familia, sino que se dio a conocer a través de un artículo de prensa no firmado publicado el 24 de julio de 2008 en el diario *Al-Imarat Al-Yawm*, considerado próximo a las autoridades. En este artículo se presentó al Sr. Al-Diqqi como la persona responsable de un delito de violación cometido tres años antes contra una mujer de nacionalidad filipina, por el que sería condenado *in absentia* a la pena capital. Otro artículo de prensa no firmado, publicado en el diario *Al Itihhad*, también considerado próximo al Gobierno, y publicado el 26 de julio de 2008, presentó al Sr. Al-Diqqi como el "creador de una página en Internet cuyo objetivo es la politización de su caso, que es de carácter penal".
8. Durante una visita reciente de un familiar a la prisión, el Sr. Al-Diqqi le confirmó que había sido sometido a chantaje por las autoridades desde su detención, y que de hecho se le pidió cerrar su página en Internet y poner fin a todas sus actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos en su país, todo ello a cambio de su liberación.
9. La fuente sostiene que el Sr. Al-Diqqi podría ser víctima de procedimientos judiciales inventados por las autoridades con el único objetivo de desacreditarlo como defensor de los derechos humanos conocido en todo el país, y hacer que cesen todas sus actividades en este campo.
10. La fuente señala además que la detención del Sr. Al-Diqqi se decidió con el fin de impedirle participar en la tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en diciembre de 2008, en el que se examinó la situación de los derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos.
11. Según la fuente, la detención y encarcelamiento del Sr. Al-Diqqi se debe exclusivamente al ejercicio de su derecho a expresar libre y pacíficamente sus opiniones políticas y a denunciar los abusos y violaciones de los derechos humanos en su país. Su detención y encarcelamiento están claramente relacionados con su participación en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los Emiratos Árabes Unidos. El propósito es no sólo impedirle que siga realizando actividades pacíficas en este sentido, sino también prohibir de facto toda actividad de esta naturaleza en el país.
12. Por otra parte, la fuente sostiene que las autoridades mantienen un control férreo sobre las actividades de los defensores de los derechos humanos, con el objetivo expreso de imponer un silencio total sobre la información relativa a las violaciones de estos derechos en los Emiratos.
13. La fuente también proporciona información sobre la labor del Sr. Al-Diqqi de defensa de los derechos humanos y de denuncia de las violaciones de los mismos cometidas

en el país. En 2006, el Sr. Al-Diqqi creó su propia organización para la defensa de los derechos humanos, la Organización pro Derechos de las Personas de los Emiratos (Emiratos PRO), que no ha sido reconocida por las autoridades. Esta organización es conocida en todo el país gracias a la página del Sr. Al-Diqqi en Internet, en la que denuncia la falta de libertades civiles y políticas, así como diversos abusos y violaciones de los derechos de sus conciudadanos. La fuente señala que el contenido de sus "cartas" semanales es un indicador de su lucha pacífica y legalista contra la arbitrariedad y en favor del establecimiento del estado de derecho.

14. El 27 de abril de 2009, el Gobierno informó de que el Ministerio Fiscal devolvió al tribunal el expediente del Sr. Hasan Ahmad Al-Daqi (Al-Diqqi), que fue puesto en libertad bajo fianza. Se le confiscó el pasaporte, de conformidad con la legislación aplicable del Estado, y el asunto se encuentra actualmente ante el órgano judicial competente.

15. La fuente confirmó que el Sr. Al-Diqqi fue puesto en libertad el 12 de mayo de 2009, reiterando que estuvo encarcelado desde el 20 de julio de 2008, es decir, casi diez meses, sin otros motivos que el mero ejercicio de sus derechos fundamentales a la libertad de opinión y de expresión, y su trabajo como defensor de los derechos humanos, y con el fin de obtener el cierre de su sitio web ([www.emiratespro.com](http://www.emiratespro.com)), que de hecho se logró.

16. La detención del Sr. Al-Diqqi no se comunicó a su familia. Los familiares se enteraron de su detención sólo a través de los medios de comunicación progubernamentales, que lo presentaron como un delincuente vinculado con la comisión de delitos de carácter común, pero sin demostrar en ningún momento su responsabilidad en los mismos. El mismo tribunal que impuso al Sr. Al-Diqqi la pena de muerte posteriormente modificó su decisión, imponiéndole primero diez años de prisión y luego reduciendo su condena a seis meses cuando ya había pasado más de nueve en prisión.

17. El Grupo de Trabajo constata que el Sr. Al-Diqqi es el fundador de la organización no gubernamental de derechos humanos Organización pro Derechos de las Personas de los Emiratos (Emiratos PRO), que ha denunciado de forma permanente violaciones de los derechos humanos en su país. Esto incomodó a las autoridades, lo cual motivó su detención.

18. El Grupo de Trabajo recuerda que la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (Declaración sobre los defensores de los derechos humanos), aprobada por la Asamblea General el 8 de diciembre de 1998 en su resolución 53/144, reconoce el derecho de los defensores de los derechos humanos a recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos humanos, y a dirigirse sin trabas a las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales. Los defensores de los derechos humanos tienen derecho a investigar, recabar información e informar sobre violaciones de los derechos humanos. Tienen derecho a difundir sus informes y publicar sus conclusiones, directamente o a través de los medios de comunicación. La Declaración reconoce también su derecho a investigar y examinar si los derechos humanos y las libertades fundamentales se observan y respetan en una región o país en particular, tanto en la legislación como en la práctica. La Declaración sobre los defensores de los derechos humanos contiene una serie de principios y derechos que, en opinión del Grupo de Trabajo, se basa en las normas de derechos humanos consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Carta de las Naciones Unidas.

19. El Grupo de Trabajo observa además que el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, junto con unos 25 Estados más, presentó una declaración en la que manifiesta que la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos debe interpretarse de conformidad con su legislación nacional. El Grupo de Trabajo, sin embargo, considera que es la legislación nacional la que debería estar en plena conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con todos los principios y normas de derechos humanos

aplicables, incluidos los que figuran en la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos.

20. Aunque la detención del Sr. Al-Diqqi y el consiguiente proceso judicial en su contra se haya hecho de conformidad con la legislación nacional de los Emiratos Árabes Unidos, esto no impide el carácter arbitrario de la detención de acuerdo con el derecho internacional.

21. En el párrafo 17 a) de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo se establece que incluso si la persona ha sido puesta en libertad, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emitir una opinión o no sobre si la privación de libertad es arbitraria, caso por caso. Dado el carácter de la detención del Sr. Al-Diqqi, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir una Opinión sobre su caso, a pesar de su liberación.

22. En consecuencia, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La privación de libertad del Sr. Hassan Ahmed Hassan Al-Diqqi fue arbitraria de acuerdo con la categoría II de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo, y violó gravemente los artículos 9, 11, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, así como los Principios 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, entre otros, del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, aprobados por la Asamblea General en su resolución 43/173 de 9 de diciembre de 1988.

23. Consecuentemente con la Opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que remedie la situación del Sr. Al-Diqqi y le conceda una reparación adecuada.

Aprobada el 1º de septiembre de 2009.

## **Opinión N° 9/2009 (Japón)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 16 de marzo de 2009.**

**Relativa a los Sres. Junichi Sato y Toru Suzuki.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado información sobre las alegaciones transmitidas.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una Opinión sobre los hechos y las circunstancias del caso, a la luz de las alegaciones formuladas y de la respuesta del Gobierno.
5. El caso que se resume a continuación se comunicó al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la siguiente manera.
6. El Sr. Junichi Sato, de 32 años, y el Sr. Toru Suzuki, de 42, ambos defensores del medio ambiente, autores de *blogs* contra la caza de ballenas y activistas de Greenpeace Japón, fueron detenidos el 20 de junio de 2008 por agentes de la policía como sospechosos de robar cerca de 50 libras de carne de ballena, que según los ecologistas fueron ilegalmente desviados por los balleneros de capturas realizadas bajo el auspicio del Gobierno. El paquete, que llevaba inscrita la palabra "cartón", contenía cortes de la carne de ballena más cara, que se había retirado ilícitamente del buque factoría ballenero para ser enviada a una dirección privada.

7. Los Sres. Sato y Suzuki estaban investigando a fondo unas denuncias en relación con el hecho de que se utilizaban viajes oficiales de carácter científico del Gobierno japonés para dar cobertura a la captura ilegal de ballenas. El 15 de mayo de 2008 llevaron la caja y otras pruebas que habían reunido a la oficina de la Fiscalía General de Tokio y pidieron una investigación oficial.

8. El mismo día en que fueron detenidos, el Fiscal de Tokio anunció que abandonaba la investigación sobre las alegaciones de fraude formuladas por Greenpeace. Se registraron los domicilios de los Sres. Sato y Suzuki, así como los domicilios y las oficinas de otros cinco empleados de Greenpeace Japón. Las autoridades confiscaron el servidor de la oficina de Greenpeace. Después de 23 días de detención, los Sres. Sato y Suzuki fueron acusados de allanamiento y robo.

9. Según la fuente, los Sres. Sato y Suzuki diseñaron la investigación para recoger información y pruebas sobre la presunta complicidad del Gobierno en la desviación de carne de ballena. El objetivo de su acción era informar a las autoridades oficiales, así como al público, sobre las actividades ilegales que se estaban llevando a cabo. Una prueba clave era la caja de carne de ballena salada que fue interceptada. Los Sres. Sato y Suzuki dieron a conocer la información de sus hallazgos sobre el desvío ilegal de carne de ballena en una conferencia y un comunicado de prensa, y recibieron una amplia cobertura de los medios de comunicación.

10. El mismo día de la conferencia de prensa, los Sres. Sato y Suzuki presentaron un informe sobre la sospecha de desviación de bienes y ofrecieron a las autoridades su plena colaboración a fin de ayudarlas a investigar más a fondo sobre este asunto.

11. Los Sres. Sato y Suzuki cooperaron plenamente tanto con la policía como con la Fiscalía. Aportaron declaraciones por escrito al fiscal, y de forma voluntaria y proactiva presentaron las pruebas pertinentes. Actuaron con el fin de sensibilizar al público en torno al programa de captura de ballenas en el Océano Austral auspiciado por el Gobierno, y no para obtener un beneficio personal ilegítimo, puesto que trabajaban para una organización ecologista muy respetada.

12. La fuente considera que la detención y encarcelamiento de estas personas, los cargos presentados contra ellas y los registros policiales realizados en la oficina de Greenpeace y en los domicilios de cinco de sus empleados tenían como objetivo intimidar a los activistas y a las organizaciones no gubernamentales.

13. En su respuesta, de fecha 27 de mayo de 2009, el Gobierno informó al Grupo de Trabajo de que los antecedentes de hecho del presente caso, de la investigación, detención, encarcelamiento y libertad condicional hasta el juicio del 1º de mayo de 2009, fueron los siguientes:

- a) 20 de junio de 2008: la policía detuvo a los Sres. Junichi Sato y Toru Suzuki a las 6.42 horas y a las 7.08 horas, respectivamente, y los puso en celdas.
- b) 21 de junio de 2008: la policía remitió el caso a la Fiscalía, quien reconoció la necesidad de mantenerlos detenidos.
- c) 22 de junio de 2008: la policía llevó a estas dos personas ante el Fiscal, que pidió al Juez una prórroga de diez días de su detención. El Juez la autorizó y ordenó seguir adelante con la investigación.
- d) 1º de julio de 2008: el Fiscal solicitó una nueva prórroga de diez días. El Juez concedió la autorización.
- e) 11 de julio de 2009: el Fiscal acusó a los Sres. Sato y Suzuki.

f) 15 de julio de 2008: fueron puestos en libertad bajo fianza. Su juicio sigue en curso.

14. El Gobierno informa de que el 16 de abril de 2008 estas dos personas, actuando en connivencia, irrumpieron en una sucursal de una empresa de transporte en la ciudad de Aomori y robaron una caja con 23,1 kg de carne de ballena. La Constitución del Japón establece que: "No se privará a ninguna persona de la vida o la libertad ni se le impondrá cualquier otra condena criminal, salvo en los casos establecidos por la ley". Las siguientes disposiciones legales constituyen el fundamento jurídico de la detención:

### **1. Fundamento jurídico de la detención**

a) Código Penal, artículo 130 (allanamiento de morada): "Toda persona que, sin motivo justificado, irrumpa en la residencia de otra persona o en un local, edificio o nave vigilados por otra persona, o que se niegue a abandonar tales lugares cuando se le pida, será castigada con una pena de prisión con trabajos forzados de hasta tres años o una multa que no sobrepase los 100.000 yenes".

b) Código Penal, artículo 235 (hurto): "Toda persona que se apropie de un bien de otra cometerá un delito de hurto y será castigada con una pena de prisión con trabajos forzados de hasta diez años o una multa no superior a 500.000 yenes".

c) Código Penal, artículo 60 (coautoría): "Dos o más personas que cometan un delito en una acción conjunta serán considerados autores del mismo".

d) Código de Procedimiento Penal, artículo 199, extracto del párrafo 1: "Cuando existan suficientes indicios de que una persona sospechosa ha cometido un delito, un fiscal, un asistente del fiscal o un agente de la policía judicial podrán detenerla conforme a una orden de detención previamente emitida por un juez".

e) Código de Procedimiento Penal, artículo 199, párrafo 2: "En los casos en que un juez considere que existen indicios suficientes y probables para creer que la persona sospechosa ha cometido un delito, expedirá la orden de detención enunciada en el párrafo anterior a petición de un fiscal o un agente de la policía judicial (en el caso de un agente de la policía judicial que es agente de la policía, sólo si se trata de una persona designada por la Comisión Nacional de Seguridad Pública o la Comisión de Seguridad Pública de la Prefectura, y si su rango es igual o superior al de inspector de policía; lo mismo se aplicará en adelante en este artículo). Esto no será así, sin embargo, en los casos en que el juez considere que no hay una necesidad manifiesta de detener a la persona sospechosa".

### **2. La detención de un sospechoso**

Código de Procedimiento Penal, artículo 203, párrafo 1: "Cuando un agente de la policía judicial detenga a una persona sospechosa siguiendo una orden de detención o reciba a una persona sospechosa detenida por una orden de detención, le informará inmediatamente de los principales hechos del presunto delito y de su derecho a nombrar un abogado defensor. Seguidamente, después de dar a la persona sospechosa la oportunidad de explicarse, la pondrá en libertad si cree que no es necesario retenerla, o bien llevará a cabo el procedimiento de enviarla a un fiscal, junto con las pruebas recabadas, en un plazo de 48 horas desde el momento de su detención".

### **3. Detención de los acusados**

a) Código de Procedimiento Penal, artículo 60, párrafo 1: "El Tribunal podrá detener a un acusado cuando existan indicios que permitan sospechar que ha cometido un delito y: i) no tenga residencia fija; ii) existan razones fundadas para creer que puede ocultar o destruir pruebas; iii) haya huido o existan razones para sospechar que puede huir".

b) Código de Procedimiento Penal, extracto del artículo 61: "No podrá detenerse a un acusado sin haberle informado del caso y tomarle declaración".

c) Código de Procedimiento Penal, artículo 205, párrafo 1: "Cuando un fiscal recibe a una persona sospechosa que le ha sido enviada en virtud de lo dispuesto en el artículo 203, le dará una oportunidad para explicarse y, si cree que no es necesario detenerla, la pondrá inmediatamente en libertad; en cambio, si cree que es necesario detenerla, solicitará a un juez la orden correspondiente dentro de las 24 horas después de recibirla".

d) Código de Procedimiento Penal, artículo 205, párrafo 2: "El plazo establecido en el párrafo anterior será de 72 horas desde el momento en que se imponga la restricción física a la persona sospechosa".

e) Código de Procedimiento Penal, artículo 207, párrafo 1: "El juez al cual se solicita la detención según lo dispuesto en los tres artículos anteriores tendrá la misma autoridad que un tribunal o el presidente de un tribunal al respecto; esto no se aplicará, no obstante, a la libertad bajo fianza".

f) Código de Procedimiento Penal, artículo 207, párrafo 4: "Cuando un juez reciba una solicitud de prisión preventiva según se establece en el párrafo 1 dictará inmediatamente una orden, salvo cuando considere que no hay motivos para la detención o cuando no pueda expedir una orden de conformidad con las disposiciones del párrafo 2 del artículo anterior; en este caso ordenará su puesta en libertad".

g) Código de Procedimiento Penal, artículo 208, párrafo 1: "Cuando un fiscal no ha iniciado el proceso contra una persona sospechosa dentro de los diez días posteriores a la solicitud en relación con un caso en que la persona sospechosa haya sido detenida en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, deberá poner inmediatamente en libertad a la persona sospechosa".

h) Código de Procedimiento Penal, artículo 208, párrafo 2: "El plazo establecido en el párrafo anterior podrá prorrogarse a petición de un fiscal cuando un juez considere que existen circunstancias inevitables. El período total de dichas prórrogas no podrá exceder de diez días".

#### **4. Libertad bajo fianza**

a) Código de Procedimiento Penal, artículo 89: "La solicitud de libertad bajo fianza se concederá, salvo cuando:

i) El delito presuntamente cometido por la persona acusada se castigue con pena de muerte, cadena perpetua, con o sin trabajos forzados, o pena de prisión, con o sin trabajos forzados, cuyo plazo mínimo de prisión fuera superior a un año;

ii) La persona acusada ya haya sido declarada culpable anteriormente de un delito castigado con pena de muerte; cadena perpetua, con o sin trabajos forzados; o pena de prisión, con o sin trabajos forzados, cuyo plazo máximo de prisión fuera superior a diez años;

iii) La persona acusada haya cometido un delito castigado con pena de prisión, con o sin trabajos forzados, cuyo plazo máximo de prisión fuera superior a tres años;

iv) Existan razones fundadas para pensar que la persona acusada puede ocultar o destruir pruebas;

v) Existan razones fundadas para sospechar que la persona acusada puede hacer daño o amenazar el cuerpo o los bienes de la víctima o de cualquier otra persona que se considere que posee información esencial para el juicio o de los familiares de dichas personas;

vi) Se desconozca el nombre o el domicilio de la persona acusada";

b) Código de Procedimiento Penal, artículo 90: "El tribunal podrá, cuando lo considere oportuno, otorgar la libertad bajo fianza de oficio".

15. El Gobierno añade que en el Japón para detener a una persona debe haber indicios razonables suficientes de que ha cometido un delito. Es necesaria una orden de detención dictada previamente por un juez, excepto en casos de emergencia como la detención sobre el terreno de personas encontradas en flagrante delito. La policía, los fiscales y los jueces, en este orden, verifican estrictamente el caso y deciden si la persona sospechosa debe ser mantenida en prisión después de su detención. La persona sospechosa será puesta en libertad a menos que el juez autorice su detención, a más tardar, dentro de las 72 horas posteriores a su detención.

16. El Gobierno informa de que los procedimientos de detención y encarcelamiento en Japón son plenamente compatibles con las normas y estándares internacionales de derechos humanos aplicables. Las prórrogas de un período de detención sólo se autorizan cuando el juez considera que existen circunstancias inevitables. La autoridad investigadora realiza sus funciones mediante la investigación de los casos de ilegalidad sobre la base de la neutralidad, la imparcialidad y la justicia, de conformidad con las disposiciones legales pertinentes, basándose en pruebas creíbles y prestando la debida atención a la situación penal y a los requisitos que definen un delito.

17. El Gobierno concluye que las alegaciones de la fuente no son objetivamente correctas y que la detención de los Sres. Sato y Susuki no es arbitraria.

18. La respuesta del Gobierno fue transmitida a la fuente el 24 de junio de 2009, pero no se han recibido sus comentarios.

19. El Grupo de Trabajo considera que está en condiciones de emitir una Opinión sobre este caso. Toma nota de que los dos activistas de Greenpeace fueron detenidos después de difundir información sobre un escándalo relacionado con carne de ballena en que estaba implicado un programa de captura de ballenas auspiciado por el Gobierno.

20. La fuente, en su comunicación, ha explicado claramente que los Sres. Sato y Suzuki son defensores del medio ambiente que han actuado en el marco de sus actividades como miembros de la organización ecologista Greenpeace Japón y que investigaron a fondo unas denuncias en relación con la utilización de viajes oficiales de carácter científico del Gobierno como cobertura de la captura ilegal de ballenas. Los Sres. Sato y Susuki se apoderaron de una caja llena de carne de ballena salada y la llevaron, junto con otras pruebas que habían logrado reunir sobre la actividad ilegal, a la Fiscalía de Tokio, a la que pidieron una investigación oficial. Actuaron con transparencia, difundiendo la información sobre sus hallazgos en una conferencia y un comunicado de prensa que tuvieron una amplia cobertura mediática. Hicieron público todo lo relacionado con su trabajo de investigación. La fuente denuncia que la detención de estas dos personas constituye una violación del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo al ejercicio de la libertad de opinión y de expresión.

21. Estas dos personas fueron voluntariamente a la oficina de la Fiscalía de Tokio, presentaron las pruebas que habían reunido y ofrecieron su cooperación en la futura investigación pública que solicitaban. Sin embargo, se les detuvo el mismo día en que el fiscal de Tokio anunció que abandonaba la investigación sobre el presunto desvío ilegal de carne de ballena. Posteriormente, casi un mes después de su detención, se les acusó de allanamiento de morada y hurto.

22. El Grupo de Trabajo observa además que el Gobierno ha dedicado su respuesta a demostrar con firmeza que la legislación japonesa cumple con los principios y normas internacionales de derechos humanos en lo que se refiere a detención y prisión preventiva,

proporcionando información detallada sobre la legislación penal y procesal del Japón. Sin embargo, el Gobierno no ha proporcionado información suficiente sobre las circunstancias de la detención y el encarcelamiento de estos dos investigadores, ni ha dado una respuesta detallada a las diferentes alegaciones de la fuente.

23. En su respuesta, el Gobierno se limita a concluir que las afirmaciones de la fuente "no son objetivamente correctas" y que la detención de las dos personas mencionadas no es arbitraria. No presenta información sobre las actividades de los Sres. Sato y Susuki en defensa del medio ambiente; sobre las investigaciones que llevaron a cabo en relación con un gran escándalo de corrupción en torno al programa de captura de ballenas; sobre las pruebas que habían reunido con respecto al desvío ilegal; ni sobre la colaboración que ofrecieron a la policía y al Fiscal con el fin de ayudar a las autoridades a investigar las denuncias que habían presentado. El Grupo de Trabajo considera que estos puntos son esenciales.

24. El silencio que el Gobierno ha mantenido sobre estos importantes puntos acredita la tesis de la fuente, en especial el hecho de que no dé ningún detalle específico sobre los cargos presentados contra estas personas, su participación en actividades pacíficas de protección del medio ambiente y otras alegaciones presentadas por la misma fuente.

25. En consecuencia, el Grupo de Trabajo debe concluir que estas dos personas han actuado en el marco de sus facultades como miembros activos y como investigadores de la organización ecologista Greenpeace. Actuaron con las miras puestas en el interés público superior, ya que trataron de sacar a la luz un delito de desviación de bienes dentro de la industria ballenera financiada por los contribuyentes. No se ha reconocido su disposición a cooperar con la policía y el Fiscal en relación a la forma en que obtuvieron las pruebas de sus acusaciones de corrupción, ni su actitud general de conciliación y colaboración. En su respuesta, el Gobierno no niega estas acusaciones ni plantea como una infracción la actitud cooperante de los activistas.

26. El Grupo de Trabajo considera que siempre deben prevalecer el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho de reunión y el derecho a investigar la corrupción y a expresar divergencia con las políticas del Gobierno. Los ciudadanos tienen derecho a investigar y exponer pruebas sobre las sospechas de corrupción de los funcionarios públicos.

27. El sistema judicial no ha respetado en este caso el derecho de los dos activistas ambientales a no ser privados arbitrariamente de su libertad, ni sus derechos a la libertad de opinión y de expresión, a llevar a cabo actividades legítimas y a participar en actividades pacíficas sin sufrir intimidación o acoso.

28. El Grupo de Trabajo observa además que no se ha permitido a estas personas impugnar su detención ante un tribunal independiente e imparcial mediante procedimientos acordes con las normas internacionales de equidad, tal como recogen los artículos 2, 10, 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que el Japón es un Estado parte.

29. En consecuencia, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La detención de los Sres. Junichi Sato y Toru Suzuki es arbitraria y contraviene las disposiciones contenidas en los artículos 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que el Japón es un Estado parte, y corresponde a la categoría II de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

30. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que garantice que las dos personas mencionadas *supra* sean sometidas a un procedimiento justo que cumpla con las normas internacionales de equidad, de acuerdo con los artículos 2, 10, 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se asegure de que se respetan plenamente todos sus derechos de defensa en juicio.

Aprobada el 1º de septiembre de 2009.

### **Opinión N° 10/2009 (República Bolivariana de Venezuela)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 28 de mayo de 2009.**

**Relativa al Sr. Eligio Cedeño.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no le proporcionase la información solicitada, a pesar de haberla requerido por carta de 28 de mayo y nota verbal de 8 de agosto de 2009.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. Según la fuente, el Sr. Eligio Cedeño, nacido el 1º de diciembre de 1964 en el Estado de Miranda; de nacionalidad venezolana; domiciliado en Urbanización Ávila, La Florida, Caracas; de profesión banquero; antiguo vicepresidente de finanzas del Banco Canarias de Venezuela; presidente de Bolívar Banco, fue detenido el 8 de febrero de 2007 en la sede de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) por funcionarios de dicha entidad, quienes no mostraron orden de detención.
5. Se afirma que el Sr. Cedeño se presentó voluntariamente en dichas dependencias, al haber sido informado de que agentes de la referida dirección policial tenían la intención de detenerle. Al día siguiente, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas a cargo de la abogada Veneci Blanco García expidió la orden de detención (Expediente 8845-06).
6. El Sr. Cedeño se encuentra recluso en las dependencias de la DISIP en El Helicoide desde el 8 de febrero de 2007.
7. Se informa de que el Sr. Cedeño es percibido por las autoridades como una figura política contraria al régimen. De origen muy humilde, al punto que según la fuente debió compartir con su hermano ropa y libros, logró culminar con éxito sus estudios y hacer carrera como financista. En 1997, creó la Fundación CEDEL con el objeto de luchar contra la pobreza endémica de los barrios marginales de Venezuela valorizando el trabajo duro y el esfuerzo personal. Se afirma que la Fundación ha brindado asistencia a 27 escuelas; 40 centros de salud; otorgado ayuda financiera mensual a más de mil familias y hecho importantes donaciones a TeleCorazón, el principal programa televisivo de recaudación de fondos.
8. La detención del Sr. Cedeño se produjo sin que se hubiese producido una previa imputación formal del delito en que se fundaba; en este caso, el de distracción de recursos financieros, previsto y sancionado en el artículo 432 de la Ley general de bancos y otras instituciones financieras. Según la fuente, este hecho violó el derecho del Sr. Cedeño a la defensa y, consecuentemente, afectó todo el proceso y principalmente el derecho al debido proceso de ley.

9. Como consecuencia, el Sr. Cedeño fue impedido de solicitar al tribunal que declarase anticipadamente la improcedencia de la detención, violándose de esta manera el numeral 8 del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

10. Los dos años y tres meses que el Sr. Cedeño ha sido privado de libertad constituyen además, según la fuente, una violación de su derecho a la presunción de inocencia. No se ha acreditado en todo este largo período ninguna responsabilidad penal. En adición, la detención de esta persona no se funda en la peligrosidad procesal pues existe evidencia suficiente de que el peligro de fuga es inexistente. Tanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como el Código Orgánico Procesal Penal exigen a fiscales y jueces que acrediten peligros concretos para demandar u ordenar una detención. En el presente caso, sin embargo, el Sr. Cedeño ha dado muestras reiteradas que su voluntad no ha sido huir sino enfrentar el correspondiente proceso judicial. Pese a contar con medios económicos e instrumentos suficiente para abandonar el país u ocultarse en la clandestinidad, decidió presentarse voluntariamente a las dependencias policiales para aclarar su situación y ponerse a derecho, siendo detenido sin previa orden de arresto.

11. Lo anterior ha sido corroborado por la Fiscal General de la República, Dra. Luisa Ortega Díaz, quien ha precisado que, en su opinión, la privación de libertad no debe proceder cuando el imputado se ha sometido voluntariamente a un proceso.

12. Tampoco ha podido acreditarse en concreto la eventualidad que el Sr. Cedeño pudiese recurrir a conductas que tuviesen por objeto obstruir el alcance de la verdad durante el proceso.

13. Por consiguiente, nunca debió ordenarse la detención de esta persona sino simplemente su comparecencia para presentarse en juicio. Su detención preventiva resulta así arbitraria y hace presumir una voluntad política que materializa una sanción penal anticipada sin juicio previo. El Sr. Cedeño nunca debió haber sido sometido a detención pues nunca se acreditó ni peligro de fuga ni voluntad de obstruir el alcance de la verdad. Su mantenimiento en detención por más de dos años y tres meses confirma la arbitrariedad de la medida. En adición, la fuente informa que los bienes del Sr. Cedeño fueron ilegalmente confiscados luego de su arresto.

14. Según se informa, en febrero de 2003 ante una seria escasez de divisas, el Gobierno impuso un estricto sistema de control de cambios. El Banco Central de Venezuela estableció la tasa de cambio oficial con el dólar de los Estados Unidos de América en 1.600 bolívares por dólar. Los dólares eran exclusivamente vendidos por una entidad oficial creada para tal efecto, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). En junio de 2003, el Consorcio Microstar, la principal empresa distribuidora de computadoras en Venezuela, solicitó dólares a la CADIVI a través del Banco Canarias para poder desaduanar un importante lote de computadores que había importado. Microstar es una entidad que ha vendido cientos de millones de dólares en computadoras en Venezuela. El Banco Canarias accedió a lo solicitado por Microstar y gestionó el otorgamiento de la divisa extranjera ante CADIVI, la cual accedió a lo solicitado. Con posterioridad, la Administración de Aduanas de Venezuela informó de que las computadoras no se encontraban en sus depósitos.

15. El Ministerio Público acusó al Sr. Cedeño de haber beneficiado a la Empresa Consorcio Microstar, C.A. con la cantidad de cuarenta y tres mil millones trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y seis bolívares (43.368.496) para adquirir del organismo estatal Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) la suma de 27.105.310 dólares de los Estados Unidos a un precio preferencial, en base a operaciones previas que se estimaron simuladas. El Sr. Cedeño fue acusado de haberse prevalido de su condición de directivo del Banco Canarias y de haber causado un perjuicio a la institución a la que prestaba sus servicios. La CADIVI nunca fue investigada.

16. El juicio contra el Sr. Cedeño ha estado caracterizado por graves faltas del Ministerio Público y por abusos judiciales. El Ministerio Público no pudo probar sus imputaciones durante el juicio oral. Por el contrario, quedó demostrado que las operaciones financieras no fueron simuladas, sino reales; que el Sr. Cedeño no tenía relación con las compañías con las cuales se realizaron las operaciones financieras cuestionadas; y que el Banco Canarias no sufrió perjuicios. Se acusó también al Sr. Cedeño de complicidad en los delitos de contrabando por simulación de importación y estafa cambiaria. El Ministerio Público no pudo aportar pruebas para acreditar estos delitos.

17. El Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece en su artículo 244 que las medidas de coerción penal no pueden exceder de dos años. Sólo podrá concederse una prórroga cuando la duración desmedida del proceso sea atribuible al imputado o a sus defensores. En el presente caso, la dilación ha provenido siempre del Estado; particularmente de los Fiscales y del Tribunal Supremo de Justicia.

18. Evacuadas las pruebas, las acusaciones fiscales fueron desvirtuadas por la defensa. Al momento de convocarse al acto de Conclusiones, que precede a la sentencia, la Fiscalía recusó, ilegal y extemporáneamente, a la Juez de juicio. Apelada la medida, se declaró inadmisibles la recusación. Acto seguido, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia requirió el expediente, lo que paralizó la emisión de la sentencia. Lo hizo atendiendo a una olvidada solicitud de avocamiento efectuada ocho meses antes.

19. El artículo 244 del COPP precisa que no se podrá ordenar una medida de detención cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, con las circunstancias de su comisión y con la posible sanción. Pese a ello, el 17 de diciembre de 2008, la Fiscal Lisette Rodríguez Peñaranda solicitó a la Sala de Casación Penal la prórroga del juicio con reo en cárcel. Fue ésta la última de una serie de maniobras de la Fiscalía por demorar el desarrollo del proceso judicial y la emisión de la sentencia, con el objeto de mantener al Sr. Cedeño en situación de castigo penal sin haber sido nunca declarado culpable. Entre estas medidas dilatorias la fuente menciona:

- a) Paralización del proceso por vacaciones de los miembros del Ministerio Público durante los meses de agosto y diciembre de 2007 y de 2008;
- b) Paralización por los días de depuración de los escabinos (legos que colaboran con el juez);
- c) No presentación de los representantes de la Fiscalía a cuatro importantes audiencias judiciales consecutivas, con el evidente y único propósito de retardar el proceso;
- d) Recusación de cinco jueces en la etapa de juicio;
- e) Ausencia de los fiscales en la etapa conclusiva.

20. La fuente precisa que pese a que el artículo 335 del COPP establece un plazo máximo de suspensión del juicio oral de diez días, éste ha sido paralizado durante diez meses, sin que la Sala de Casación Penal hubiese emitido el pronunciamiento que estaba obligada a emitir en un plazo máximo de 30 días.

21. También en la imputación por distracción de fondos el Ministerio Público ha cometido graves irregularidades. Ello obligó a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia a anular el 4 de mayo de 2009 (Acta N° 73) las acusaciones fiscales del Ministerio Público en lo que respecta al delito de distracción de recursos financieros así como los actos consecutivos que de los mismos emanaren o dependieren. Declaró así con lugar el avocamiento del expediente. Sin embargo, dispuso mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad del Sr. Cedeño, sin atender a los dos años y tres meses que esta persona ha pasado en los calabozos de la sede policial sin haber sido hallado culpable.

22. Según dicho auto, el juicio oral vuelve a fojas cero y el Ministerio Público debe proceder a una nueva imputación del Sr. Cedeño que debe ser hecha esta vez de conformidad con la ley y en un plazo de 45 días.

23. La acusación que se presentó contra el Sr. Cedeño con fundamento en el delito de distracción de recursos financieros tuvo como presupuesto una investigación preliminar en la que se cercenó su derecho a la defensa material. El 16 de marzo de 2007, el Juzgado Tercero de Control dictó un auto mediante el cual prohibió que el Sr. Cedeño pudiera trasladarse al Ministerio Público para enterarse personalmente del contenido de las actas del proceso, en violación flagrante del artículo 49 numeral 1 de la Constitución y de los artículos 12 y 125, numeral 7, del CCPP. Se impidió así al imputado conocer el contenido de la investigación a la que estaba sometido y de las actas procesales. Ello nulificó por ende el cabal ejercicio del derecho a la defensa material. La investigación preliminar, presupuesto de la acusación penal, resultó de esta manera afectada por graves vicios de inconstitucionalidad.

24. El Ministerio Público ha también afectado el derecho a la defensa del Sr. Cedeño al no señalar en su acusación las razones que le permitieron efectuar la tipicidad. En ningún momento la Fiscalía realizó la necesaria adecuación de los hechos a las normas jurídicas cuya aplicación requirió. La defensa tuvo así que confrontar simples adivinanzas y suposiciones.

25. La acusación no precisa cuál es la conducta irregular que se reprocha al Sr. Cedeño; no establece qué operaciones beneficiaron ilegalmente a la firma Microstar; no explica por qué hubo un beneficio ilegal; no hay un solo cuestionamiento, ni serio ni superficial, a dichas operaciones. El Ministerio Público se limita a afirmar generalidades y a una imputación tácita, no expresa, lo que obstaculiza gravemente una defensa efectiva.

26. Los fiscales se han limitado durante el proceso a afirmar que las referidas operaciones eran irregulares, pero en ningún momento han precisado en qué consistía la supuesta anomalía.

27. En la promoción de múltiples pruebas, el Ministerio Público tampoco cumplió con establecer, como era su deber funcional, el hecho que pretendía acreditar con ellas, ni la utilidad que las mismas representaban con respecto al proceso. En clara violación del numeral 5 del artículo 326 del CCPP, se cercenó el derecho de la defensa a contraprobar.

28. No solamente se negó al Sr. Cedeño el acceso al expediente, obstaculizando su defensa material, sino que se violó el derecho a la defensa:

- a) Por defectos substanciales de forma de la acusación relativa al delito;
- b) Por falta de señalamiento claro, preciso y circunstanciado del elemento fáctico que funda el delito;
- c) Por falta de motivación de la correcta adecuación del hecho atribuido y relacionado con el delito;
- d) Por ilegalidad en el ofrecimiento de los medios de prueba que el Ministerio Público presentó en juicio.

29. La defensa opuso en estos casos las excepciones contempladas en los literales e) e i) del numeral 4 del artículo 28 del COPP. Dichas excepciones fueron inmediatamente resueltas, de manera negativa, por la Juez Tercero de Control en la fase intermedia del proceso.

30. Según la fuente, la misma Juez de Control a quien correspondió conocer hasta en tres oportunidades de la medida privativa de libertad, ha sido la misma:

a) Que conoció acerca de la admisibilidad de las pruebas promovidas por la defensa;

b) Quien dictó un auto mediante el cual las negó casi todas.

Todo ello resultó en la indefensión del imputado en la fase de juicio.

31. En contra de lo establecido por los instrumentos internacionales, el mismo juez que acuerda la privación de libertad durante la fase preparatoria, actúa también en Venezuela en la fase intermedia; se pronuncia sobre la admisibilidad de la acusación e incluso, dicta el auto que obliga a ir a juicio. El mismo juez que ordena la privación de libertad se pronuncia luego sobre la probabilidad de condena. Resulta así un juez prejuiciado. En el presente caso, la Juez Tercero de Control:

a) Dictó la medida privativa de libertad;

b) Ante la oposición efectuada, determinó la legalidad de la misma;

c) En la fase intermedia, desechó diversas solicitudes de nulidad efectuadas por la defensa;

d) Rechazó los alegatos de que el hecho atribuido no constituía delito;

e) Ordenó la apertura a juicio;

f) Evaluó por tercera vez la alta probabilidad de condena;

g) Declaró la legalidad de todas sus decisiones anteriores.

32. Se ha violado así, en el presente caso, el derecho del imputado a ser juzgado por un juez imparcial.

33. La fuente agrega que sobre la base de consideraciones de carácter político, el Sr. Cedeño ha sido también posteriormente imputado con otros delitos que no fueron sin embargo mencionados como base para su detención. Así se le atribuyó complicidad en la comisión de un delito de contrabando por simulación de importación. La acusación fiscal no establece qué conducta atribuida al Sr. Cedeño le permite al Ministerio Público atribuirle complicidad en dicho delito. Sólo se dice que "respaldó al representante de Microstar y le suministró los medios para la comisión del delito". Pero no establece cómo lo respaldó, ni qué medios le suministró. El Ministerio Público violó así también el numeral 2 del artículo 326 del COPP, que es presupuesto y requisito sine qua non para el cabal ejercicio del derecho a la defensa. Ni siquiera hay mención discriminada, separada, de los elementos que pretenden acreditar uno u otro delito.

34. Esta grave confusión del Ministerio Público resultó en la total indefensión del imputado, impidiéndose la promoción de pruebas dirigidas a destruir o enervar dichos elementos, obstaculizándose de manera grave el ejercicio de la defensa y afectándose de manera seria el debido proceso de ley.

35. El Ministerio Público no señaló en su acusación las razones que le permitieron efectuar la tipicidad; no hizo la necesaria adecuación de los hechos a las normas jurídicas cuya aplicación requirió porque no los estableció previamente. En la promoción de múltiples pruebas, no cumplió con establecer el hecho que pretendía acreditar con ellas ni la utilidad de las mismas con respecto al juicio.

36. El Ministerio Público, durante más de dos años y tres meses, no solamente ha violado seriamente el derecho a la defensa del Sr. Cedeño sino que además ha incurrido en una grave ilegalidad al ofrecer actas de allanamiento como pruebas documentales.

37. Además, la fuente alega otro hecho grave: el Ministerio Público pretendió ejercer una acción penal inexistente para lograr una sentencia condenatoria arbitraria al referir que

un delito de estafa cambiaria se habría consumado entre agosto y octubre de 2003 sin considerar que dicho delito tiene un término de prescripción de tres años, según lo dispuesto por el artículo 108, numeral 5, del Código Penal. Consecuentemente, la prescripción ordinaria de la acción penal operó ya entre agosto y octubre de 2006. El Ministerio Público pretendió en abril de 2007 interrumpir una prescripción que había ya operado por expreso imperio de la ley.

38. En resumen, el proceso al que está sometido el Sr. Cedeño muestra una serie de graves irregularidades y de violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; al Código Penal; al Código Orgánico Procesal Penal; a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y a la doctrina jurídica internacional y venezolana.

39. El Sr. Cedeño ha venido también siendo víctima de una campaña de insultos, calumnias y difamaciones en medios de comunicación afines a las autoridades gubernamentales. Así, el 23 de marzo de 2009, en una edición del programa Los papeles de Mandinga de Venezolana de Televisión, el Sr. Cedeño fue calificado de "choro, choro, ladrón delincuente, que propició, realizó, efectuó una estafa con una empresa llamada Microstar, que obtuvo un chorrerón de dólares de CADIVI para efectuar una importación de equipos electrónicos que jamás ingresaron a Venezuela. Estos tipos están acostumbrados a derrochar, a vivir, a mandar, a hacer lo que les da la gana. Su abogado es un traidor a la patria, un delincuente; él mismo es un pelón, un traidor que odia a Venezuela, que amparado en los miedos y en la desesperación del malandro de Cedeño le está sacando real, pero como monte; plata como arroz".

40. La fuente concluye que el Sr. Eligio Cedeño está detenido desde hace más de dos años y tres meses sin juicio definitivo ni sentencia por un supuesto delito de fraude tributario y desviación de recursos que los fiscales no han podido probar hasta el momento en las distintas etapas del largo proceso. Según la fuente, pese a todas las violaciones constitucionales y legales cometidas y todas las irregularidades procesales, no existen elementos para poder demostrar que es culpable.

41. La jurista Yuri López, quien se pronunció en favor del Sr. Cedeño, ha tenido que abandonar el país y solicitar asilo político en los Estados Unidos de América, después de recibir serias amenazas de sus superiores en la Judicatura de que "su vida sería destruida" y luego del intento de secuestro de uno de sus hijos. El antiguo Fiscal Hernando Contreras declaró en noviembre de 2008 que el Ministerio Público había sobornado testigos para que testimoniasen en contra del Sr. Cedeño.

42. La fuente expresa el temor de que ante la imposibilidad de que se le pueda imponer al Sr. Cedeño una sanción judicial, esta persona pueda ser víctima de actos en agravio de su integridad física o psicológica.

43. La fuente concluye que el Sr. Eligio Cedeño ha sido privado arbitrariamente de su libertad durante más de dos años y tres meses y sujeto a un proceso penal que adolece de graves irregularidades y violaciones del derecho a la defensa y al debido proceso. Su detención sin condena desde el 8 de febrero de 2007 es contraria a las normas contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en la Constitución (art. 49 numeral 1); en el Código Penal (arts. 37 y 108) y en el Código Orgánico Procesal Penal (arts. 12, 28 numeral 4 literal e) e i); 31; 250; 326; 335).

44. El Grupo de Trabajo solicitó al Gobierno en dos oportunidades información oportuna y detallada sobre estas alegaciones, sin recibir respuesta.

45. Como se ha manifestado en el párrafo 3 precedente, en concepto del Grupo de Trabajo, según sus métodos de trabajo aprobados en 1991 y aprobados por la antigua

Comisión de Derechos Humanos y hoy por el Consejo, sólo es posible considerar arbitraria una privación de libertad por alguna de las tres categorías ahí mencionadas.

46. Desde luego, cabe desestimar la categoría I, pues la privación de libertad del Sr. Cedeño emana de una orden judicial, a solicitud del Ministerio Público, lugar este último al que se presentó voluntariamente esta persona el 8 de febrero de 2007, advertida de la decisión del referido Ministerio Público. Sobre la extemporaneidad de la orden de detención se volverá más adelante.

47. Que también debe desestimarse la calificación de arbitrariedad de la detención por la categoría II, toda vez que la detención se funda en la supuesta comisión de delitos comunes, y no en el ejercicio legítimo de derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o en otro instrumento sobre la materia. En parte alguna de la comunicación de la fuente que da origen a esta Opinión se señala cuál o cuáles derechos habría ejercido el Sr. Cedeño, que hubiesen motivado su detención. Es cierto que la fuente informa que "el Sr. Cedeño es percibido por las autoridades como una figura política contraria al régimen", pero no acusa de ser ése el motivo de su privación de libertad. Más aún, también se entrega información sobre que el inculcado y su abogado habrían sido injuriados con graves epítetos. Pero también es cierto que los insultos y descalificaciones no son emitidas sino en marzo de 2009, es decir más de dos años después de su privación de libertad.

48. Corresponde analizar si se trata de la categoría III, es decir si en la especie ha habido una "inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pertinentes instrumentos internacionales aceptados por los Estados partes que sea de una gravedad tal que confiera a la privación de libertad, en cualquier forma que fuere, un carácter arbitrario". Como ha sostenido el Grupo de Trabajo en Opiniones anteriores, "el Grupo de Trabajo no ha sido concebido como un tribunal de última instancia, que en sus Opiniones deba evaluar la prueba rendida en un juicio contra un detenido, tanto en la etapa de investigación como en la posterior sentencia definitiva. No es su mandato y por lo demás, le es imposible hacerlo sin un estudio en profundidad del expediente, salvo que la sentencia se apoye utilizando como prueba una confesión obtenida bajo tortura". Y ha agregado que: "Así, si el auto de procesamiento, o la sentencia definitiva, en un proceso por un delito común (y no por un delito en que la acción impugnada es el ejercicio de uno de los derechos mencionados en la categoría II de las consideradas por el Grupo), se ajustan o no a los elementos de convicción que obran en el expediente, no es un análisis que compete al Grupo de Trabajo. Sí lo sería si el Tribunal hubiese denegado admitir una prueba ofrecida por el acusado, y se trataría de una eventual infracción mencionada en la categoría III y la detención podría ser arbitraria".

49. La mayor parte de las alegaciones contenidas en la comunicación de la fuente se refieren a la naturaleza de los hechos considerados como delitos; a debilidades de la prueba; a no haberse acogido una excepción perentoria, y, en consecuencia, el Grupo de Trabajo no podría pronunciarse sobre la procedencia de las alegaciones.

50. Según la comunicación, la primera anomalía del proceso habría sido la de haberse practicado la detención antes que la orden emanada de la autoridad judicial competente la hubiese emitido. El beneficiario de la comunicación dice haber sido detenido el 7 de febrero de 2007, mientras que la orden habría sido emitida el día siguiente. No obstante, a juicio del Grupo de Trabajo, lo que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exige es que: "Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales" (artículo 9, párrafos 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). De donde se desprende que, si bien la infracción a la legislación venezolana de orden previa, exigida por todas las legislaciones, el hecho que el detenido haya sido puesto

a disposición del tribunal o autoridad judicial competente el mismo día del arresto, puede considerarse una infracción a las normas del debido proceso de derecho, pero no de "una gravedad tal que confiere a la privación de libertad, en cualquier forma que fuere, un carácter arbitrario".

51. Alega la comunicación que también se han transgredido los derechos de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. Así está previsto en el párrafo 3 del artículo 9 del Pacto ya citado.

52. El Grupo de Trabajo estima que estas normas relativas al debido proceso de derecho constituyen violaciones que sí le dan a la privación de libertad del Sr. Cedeño el carácter de arbitraria, y ello porque:

a) El juicio ha estado paralizado largo tiempo por inercia de la Procuraduría, sin que el Gobierno haya justificado esta dilación, en violación de lo consagrado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

b) Porque la larguísima detención preventiva supera ya los dos años y seis meses, siendo que la legislación venezolana obliga a otorgar la libertad provisional a los dos años de la detención (artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal). Más injustificada es la denegación de este derecho dado el hecho que el Sr. Cedeño, al tener noticia de la existencia de una orden de detención (que en realidad no se había aún dictado), concurrió voluntariamente al Tribunal competente, y, al encontrarlo cerrado, se presentó a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), lo que demuestra que no ha habido interés alguno de escapar a la justicia.

53. Habida cuenta de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La privación de libertad del Sr. Eligio Cedeño es arbitraria, pues contraviene lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

54. Consecuentemente con la Opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que ponga remedio a la situación del Sr. Eligio Cedeño, de conformidad con las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mediante la concesión de la libertad provisional hasta la terminación del juicio, adoptando además medidas para que el proceso que se sigue en su contra no sufra nuevas dilaciones indebidas.

Aprobada el 1º de septiembre de 2009.

## **Opinión N° 11/2009 (Malawi)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 1º de abril de 2009.**

**Relativa a los Sres. Paul Newiri, Boxtton Kudziwe y Lawrence Ndele.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya presentado sus observaciones sobre las alegaciones de la fuente, a pesar de las diversas invitaciones a hacerlo.

3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. Los casos resumidos a continuación se comunicaron al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la forma siguiente.
5. El Sr. Paul Newiri, ciudadano de Malawi, con residencia habitual en la aldea de M'gunda, fue detenido sin orden judicial en su domicilio el 22 de julio de 2004 a las 23.00 horas por agentes de la policía de Thyolo. En el momento de su detención tenía 26 años. Según las órdenes de prisión preventiva que constan en los archivos del Tribunal Superior de Blantyre, el incidente que dio lugar a su detención tuvo lugar en febrero de 2004, es decir, unos meses antes. No está claro si se trata de un error de la policía de Thyolo o del Tribunal Superior, o incluso si el Sr. Newiri era la persona que debía detenerse.
6. El Sr. Newiri permaneció en la comisaría de Thyolo entre el 22 y el 28 de julio de 2004, fecha en que fue trasladado a la prisión de Thyolo, donde estuvo recluido hasta noviembre de 2004. Actualmente está en la prisión de Chichiri, en Blantyre, junto con la población penitenciaria en general, incluidos los condenados. El 28 de julio de 2004 se llevó al Sr. Newiri ante el Tribunal de Primera Instancia de Thyolo, donde se le informó de que se le acusaba de homicidio en virtud del artículo 209 del Código Penal de Malawi. El Sr. Newiri no tiene antecedentes penales y nunca había sido detenido antes de este incidente.
7. No se proporcionó al Sr. Newiri asistencia letrada durante su audiencia, y el Tribunal de Primera Instancia no le informó de este derecho ni del derecho de presunción de inocencia; tampoco de su derecho a solicitar la libertad bajo fianza. Hasta la fecha, no se ha juzgado al Sr. Newiri por ningún delito. Se programó su comparecencia ante el Tribunal Superior de Blantyre para el 29 de julio de 2008, pero se le llevó el 31 de agosto de 2008 ante este tribunal sólo para informarle de que sería juzgado por el Tribunal Superior de Thyolo el 1° de septiembre de 2008. No está claro si se llevó a cabo alguna investigación sobre el delito.
8. El Sr. Newiri permanece en una situación de indefinición, esperando una fecha para el juicio y sin poder mantener a su esposa y a sus tres hijos pequeños. Desde 2004 su familia sólo ha podido permitirse viajar a Blantyre para visitarlo una o dos veces cada año. Debido a su situación y a las condiciones de extrema pobreza en la prisión de Chichiri, el Sr. Newiri sufre de depresión y ansiedad, tiene dificultades para dormir y ha desarrollado problemas de salud mental. Debido a la distancia entre su lugar de detención y de residencia, su familia es incapaz de proveerle regularmente de alimentos. Como a menudo los presos no reciben comida por la falta de recursos, el Sr. Newiri también sufre de hambre y malnutrición.
9. El Sr. Newiri ha recurrido a los asistentes sociales de la prisión de Chichiri en dos ocasiones para buscar una solución a su caso, pero ha sido en vano.
10. El Sr. Boxtton Kudziwe (los archivos del tribunal recogen su nombre incorrectamente como "Boston"), nacido el 19 de febrero de 1978, con educación superior y dueño de un pequeño negocio, con residencia habitual en Chisombezi, Limbe, fue detenido cerca de su domicilio por dos policías sin orden judicial el 10 de abril de 2006, aproximadamente a las 10.00 horas. Tras arrestarlo, la policía le exigió que les informara del paradero de una persona con el nombre de Viera Chidzidzira. El Sr. Kudziwe explicó a los agentes de policía que no conocía a ninguna persona con ese nombre, a pesar de lo cual y sin esgrimir ningún motivo lo llevaron a la comisaría de Bangwe, donde estuvo detenido durante tres días.
11. La policía le informó de que estaba detenido en relación con los delitos cometidos por el Sr. Chidzidzira, que, según la policía, había participado en el robo y venta de teléfonos móviles, y también estaba acusado de asesinato. Se dijo al Sr. Kudziwe que se le

pondría en libertad si revelaba el escondite del Sr. Chidzidzira. Tras averiguar más sobre las circunstancias del Sr. Kudziwe, se dieron cuenta de que realmente conocía al Sr. Chidzidzira, pero por otro nombre, el de Felix Funali, con el que había realizado algunas transacciones comerciales en el pasado. El Sr. Kudziwe no sabía, sin embargo, que el Sr. Funali era en realidad el Sr. Chidzidzira y que estaba acusado de asesinato y robo.

12. Como era incapaz de facilitar a la policía el paradero de Felix Funali, alias Vierra Chidzidzira, los policías le golpearon con la culata de un fusil durante los tres días que permaneció detenido. Como resultado, le ha quedado una cicatriz en la cabeza. Los policías dejaron de golpear al Sr. Kudziwe sólo cuando los llevó ante la suegra del Sr. Funali/Chidzidzira, que tampoco pudo proporcionar información sobre el paradero de su yerno. Se mantuvo encarcelado al Sr. Kudziwe en la comisaría de Bangwe durante dos meses más, sin cargos ni juicio, hasta que finalmente se le llevó ante el Tribunal de Primera Instancia de Midima el 23 de junio de 2006. Allí supo por primera vez que se le acusaba de asesinato en virtud del artículo 209 del Código Penal. Se le trasladó a la prisión de Chichiri, en Blantyre, ese mismo día, y está recluido allí desde entonces.

13. Más allá de su relación comercial limitada con el Sr. Funali/Chidzidzira, los policías no fueron capaces de establecer un nexo entre el Sr. Kudziwe y las acusaciones de asesinato y robo. El Sr. Funali/Chidzidzira fue detenido en agosto de 2006 en relación con otro delito. En esa época el Sr. Kudziwe fue llevado a la comisaría de Bangwe para confirmar que la persona que él conocía como Sr. Funali era de hecho el Sr. Chidzidzira, cosa que hizo. Cuando se confrontó con el Sr. Kudziwe, el Sr. Funali/Chidzidzira lo acusó de ser el autor de los delitos que se le imputaban a él. En febrero de 2007, el Sr. Funali/Chidzidzira intentó escapar de la prisión de Chichiri y posteriormente fue trasladado a una prisión de máxima seguridad.

14. En agosto de 2006, el Sr. Kudziwe solicitó la libertad bajo fianza. Después su asesor letrado se fue de Malawi sin informar a su cliente. La solicitud de libertad bajo fianza no produjo ningún resultado. Sus padres contrataron entonces a un abogado privado, pero su segunda solicitud de libertad bajo fianza fue denegada debido al intento de fuga del Sr. Funali/Chidzidzira.

15. Desde su detención y encarcelamiento, el Sr. Kudziwe ha sido incapaz de mantener a su esposa y a sus dos hijos pequeños, lo cual le ha causado depresión y ansiedad. Además, sufre de malnutrición, insomnio y úlceras. Dada su inclinación al estudio, pasa el tiempo en la prisión de Chichiri aprendiendo informática y marketing, y leyendo a sus compañeros de cárcel.

16. En julio de 2008, el Tribunal Superior de Blantyre acusó de nuevo formalmente al Sr. Kudziwe, pero no se ha fijado fecha para el juicio.

17. El Sr. Lawrence Ndele, nacido el 28 de septiembre de 1981, cuyo último lugar de residencia fue el municipio de Soche, en Blantyre, fue detenido el 8 de junio de 2004 cerca del mercado de Manje sin una orden judicial por cuatro agentes del Departamento de Investigación Penal de Bvumbwe. Los agentes le explicaron que lo llevaban a comisaría para interrogarlo. El 11 de junio de 2004, el Tribunal de Primera Instancia de Midima dictó contra él una orden de prisión preventiva al considerarlo sospechoso de homicidio en virtud del artículo 209 del Código Penal, y ordenó su encarcelamiento hasta el 30 de junio de 2004 sin acusarlo formalmente. Ese mismo día se le trasladó desde la comisaría de Bvumbwe a la prisión de Chichiri, donde está recluido desde entonces.

18. El Sr. Ndele presentó una solicitud de libertad bajo fianza por primera vez en mayo de 2008. Su audiencia sobre esta solicitud se aplazó dos veces, antes de serle denegada el 8 de junio de 2008 sobre la base de que había huido a Blantyre desde su vivienda habitual en la aldea de Msamuti, en Thyolo, donde se cometió el presunto homicidio. Sólo en septiembre de 2008 se concedió al Sr. Ndele una audiencia preliminar ante el Tribunal

Superior de Blantyre, que lo acusó de homicidio, delito del que se declaró no culpable siguiendo el consejo de un abogado. El Tribunal Superior informó al Sr. Ndele de que su caso se aplazaba para ser juzgado en una fecha posterior sin concretar. Desde entonces, el Sr. Ndele espera ser llamado a comparecer ante el Tribunal Superior.

19. La fuente sostiene que la detención y el encarcelamiento de los Sres. Newiri, Kudziwe y Ndele son arbitrarios. En el momento de su detención, la policía no les informó de su derecho a guardar silencio, garantizado en virtud del artículo 42, 2) a) de la Constitución de Malawi: "Toda persona detenida (...) tiene derecho a ser informada sin demora, en una lengua que comprenda, de su derecho a guardar silencio, y a que se le advierta de las consecuencias de cualquier declaración que haga". Tampoco se les informó en el momento de la detención de los cargos contra ellos, lo cual viola el artículo 42, 1) a) de la Constitución de Malawi, que establece: "Toda persona detenida (...) tendrá derecho a ser informada, sin demora y en una lengua que comprenda, de las razones de su detención".

20. El Sr. Newiri sólo fue llevado ante un tribunal seis días después de su detención, lo que viola el artículo 42, 2) b) de la Constitución de Malawi, que establece que: "Toda persona detenida o acusada por supuesta omisión de un delito disfrutará de todos los derechos propios de una persona detenida y, además, (...) deberá ser llevada, tan pronto como sea razonablemente posible, pero a más tardar 48 horas después de finalizar la jornada de los tribunales ordinarios o, si no es un día laboral, el primer día laboral en el tribunal después de la expiración de dicho plazo, ante un tribunal independiente e imparcial, que deberá acusarla o informarle de los motivos de su detención, y en caso de no hacerlo deberá ponerla en libertad". El Sr. Kudziwe no fue llevado ante el Tribunal de Primera Instancia en Midima hasta dos meses y medio después de su detención. El Sr. Ndele no fue llevado ante un tribunal en las 48 horas posteriores a su detención ni fue acusado formalmente por el Tribunal de Primera Instancia de Midima.

21. No se informó al Sr. Newiri y al Sr. Ndele de su derecho a asesoramiento jurídico, reconocido en el artículo 42, 1) c) de la Constitución de Malawi, que reza: "Toda persona detenida (...) tendrá derecho (...) a consultar confidencialmente con un abogado de su elección, a ser informada de ese derecho sin demora y, cuando el interés de la justicia así lo requiera, a contar con los servicios de un abogado de oficio".

22. Dado que las tres personas mencionadas han permanecido en prisión sin juicio durante largos períodos (el Sr. Newiri durante más de cuatro años, el Sr. Kudziwe durante más de dos años y medio, y el Sr. Ndele durante más de cuatro años y medio) también se han violado sus derechos en virtud del artículo 42, 2) i) de la Constitución de Malawi, que reza: "Toda persona detenida (...) tendrá derecho (...) a un juicio público ante un tribunal independiente e imparcial en un plazo razonable después de ser acusada". Además, el Tribunal de Primera Instancia autorizó la permanencia del Sr. Ndele en prisión preventiva sólo hasta el 30 de junio de 2004.

23. En aras de garantizar la mutua cooperación, el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo envió las denuncias mencionadas al Gobierno de Malawi por carta de 1º de abril de 2009. El Gobierno no respondió a esta carta dentro del plazo de 90 días establecido en el párrafo 15 de los métodos de trabajo del Grupo.

24. Por nota verbal de fecha 20 de agosto de 2009 se envió un recordatorio en que se explicaba que el Grupo de Trabajo tenía la intención de emitir una Opinión sobre estos casos en su 55º período de sesiones, pero el Gobierno no respondió ni solicitó una prórroga del plazo. El Grupo de Trabajo considera, sobre la base de lo dispuesto en el párrafo 16 de sus métodos de trabajo, que está en condiciones de emitir una Opinión a partir de la información recabada.

25. La ausencia de respuesta por parte del Gobierno podría considerarse una aceptación tácita de las alegaciones recibidas de la fuente y transmitidas por el Grupo de Trabajo.

26. Sobre esta base, el Grupo de Trabajo considera que no se informó a los Sres. Newiri, Kudziwe y Ndele, en el momento de su detención, de su derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismos. Tampoco se les informó acerca de la naturaleza y el origen de las acusaciones formuladas contra ellos. No se hizo comparecer al Sr. Newiri ante un tribunal hasta seis días después de su detención. No se le informó de su derecho a asistencia letrada y ha permanecido en prisión sin juicio durante más de cuatro años. No se llevó al Sr. Kudziwe ante un tribunal hasta dos meses y medio después de su detención y se ha mantenido en prisión preventiva durante más de dos años y medio. No se presentó al Sr. Ndele ante un tribunal dentro de las 48 horas posteriores a su detención y no fue acusado formalmente. Tampoco se le informó de su derecho a asistencia letrada y ha permanecido detenido sin juicio durante más de cuatro años y medio.

27. Estas tres personas estuvieron detenidas durante varios meses sin la posibilidad de impugnar la legalidad de su detención ante un juez, y luego en prisión preventiva durante varios años (en dos casos, durante más de cuatro años), sin poder beneficiarse de un proceso legal.

28. En consecuencia, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

Las violaciones de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial y a un proceso con las debidas garantías son de tal gravedad que conceden a la privación de libertad de los Sres. Paul Newiri, Boxtan Kudziwe y Lawrence Ndele un carácter arbitrario, de acuerdo con la categoría III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo. La detención de las tres personas mencionadas contraviene los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

29. Una vez emitida esta Opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para remediar la situación de estas tres personas y cumplir con sus compromisos internacionales en esta materia.

Aprobada el 2 de septiembre de 2009.

### **Opinión N° 12/2009 (Líbano)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 11 de mayo de 2009.**

**Relativa al Sr. Nawar Ali Abboud.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. Teniendo en cuenta las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. La respuesta del Gobierno se ha transmitido a la fuente, que formuló comentarios al respecto. El Grupo de Trabajo espera poder emitir una Opinión sobre los hechos y las circunstancias del caso, teniendo en cuenta las alegaciones y la respuesta del Gobierno, así como las observaciones de la fuente.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El caso que se menciona a continuación se comunicó al Grupo de Trabajo de la siguiente manera: Nawar Ali Abboud (en adelante Sr. Abboud), ciudadano sirio, de 45 años, residente de Trípoli, Líbano, es un líder de la oposición política siria y tesorero de una organización siria llamada la Alianza Nacional Unida, un grupo político afiliado a la organización Ref 'al-Asad.

5. Según la información recibida, el Sr. Abboud, quien es tío del Presidente de la República Árabe Siria, Bashar al-Asad, fue detenido el 24 de diciembre 2008, alrededor de las 18.00 o 19.00 horas, cerca de su oficina situada en la calle Maarad, en Trípoli, por agentes de los servicios de inteligencia del ejército en el Líbano.
6. La fuente dijo que ese día el Sr. Abboud fue detenido junto con su chofer y guardaespaldas de nacionalidad libanesa por personas vestidas de civil que se identificaron como miembros de los servicios de inteligencia militar, cuando regresaba a su oficina después de la distribución de regalos durante un acto cristiano en la Iglesia Bechara. En esa ocasión se le confiscó su coche. Los tres fueron trasladados a la sede de los servicios de inteligencia militar en Al Qubbeh, donde permanecieron por un día, después de lo cual el guardaespaldas y el conductor fueron puestos en libertad.
7. Después de la detención, agentes de los servicios de inteligencia militar habrían acudido a la oficina del Sr. Abboud para confiscar equipos electrónicos, CD, CD-ROM y DVD, y en una segunda oportunidad, tres días después, para confiscar un segundo coche perteneciente al Sr. Abboud.
8. La fuente afirma que, desde entonces, se desconoce la suerte y la situación legal del Sr. Abboud. Sus dos coches y equipos electrónicos confiscados no fueron devueltos a sus familiares.
9. Según la fuente, la detención de dicha persona en un lugar desconocido y por tiempo indefinido, sin cargos y sin juicio, viola las normas de un juicio justo y contraviene las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los que el Líbano es parte.
10. La fuente también expresó su preocupación por la posible salida del territorio libanés del Sr. Abboud, que habría sido transferido ilegalmente a la República Árabe Siria. Según la agencia oficial del Líbano responsable de los extranjeros y de las fronteras, no hay constancia de una posible salida del Sr. Abboud del territorio libanés.
11. El Gobierno, en una breve respuesta de 18 de mayo de 2009, se limitó a decir que el Sr. Nawar Ali Abboud fue efectivamente detenido por los servicios de inteligencia del ejército, y luego puesto en libertad al día siguiente con sus dos vehículos.
12. La fuente, a la que se transmitió esta respuesta, hizo las siguientes observaciones.
13. El Sr. Abboud no parece haber sido puesto en libertad ya que no volvió a casa y no se puso en contacto con su familia o su abogado. Después de la fecha especificada de su liberación, sus coches estaban estacionados todavía fuera de la sede de los servicios de inteligencia del ejército. Sobre todo, agregó la fuente, el Gobierno no proporciona ninguna prueba de su puesta en libertad.
14. La respuesta del Gobierno no indica por qué el Sr. Abboud fue detenido ni qué autoridad ordenó la detención.
15. La fuente concluye solicitando información adicional a las autoridades libanesas para determinar qué autoridad ordenó la detención, por qué motivos y las circunstancias exactas de su liberación, aunque tiene la sensación de que el Sr. Abboud nunca salió libre del cuartel general.
16. El Grupo de Trabajo considera que la actitud del Gobierno, que a raíz de las alegaciones de una fuente particularmente precisa y concreta responde frente a la gravedad de los hechos de forma breve y vaga, permite dar crédito a la tesis enunciada por la fuente.
17. Esta posición es aún más concebible dado que el Gobierno, que es considerado como el principal garante del respeto de los derechos humanos, debe ser capaz de dar

información detallada acerca de una persona detenida por sus servicios, de las razones de su detención y del seguimiento previsto para este caso.

18. A falta de esa información, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La detención del Sr. Nawar Ali Abboud es arbitraria, pues contraviene los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

19. Consecuentemente con la Opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que aclare las circunstancias y condiciones de la detención del Sr. Nawar Ali Abboud, indique con precisión las pruebas de su puesta en libertad o, en su caso, lo haga comparecer sin demora ante un juez o tribunal competente, todo ello en el marco del cumplimiento de sus compromisos internacionales.

Aprobada el 2 de septiembre de 2009.

### **Opinión N° 13/2009 (Yemen)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 28 de mayo de 2009.**

**Relativa a los Sres. Amir Abdallah Thabet Mohsen Al Abbab, Mohamed Abdallah Thabet Mohsen Al Abbab y Movad Thabet Mohsen Al Abbab.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya respondido en el plazo de 90 días.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. A la luz de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo habría acogido con satisfacción la cooperación del Gobierno. No obstante, y aunque el Gobierno no ha ofrecido su versión sobre los hechos y las circunstancias del caso, el Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una Opinión sobre la base de las afirmaciones comunicadas.
5. El caso se comunicó al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria tal como se resume a continuación.
6. Los Sres. Amir Abdallah Thabet Mohsen Al Abbab, nacido en 1978 y empleado en una gasolinera; Mohamed Abdallah Thabet Mohsen Al Abbab, nacido en 1984 y estudiante; y Mouad Thabet Mohsen Al Abbab, nacido en 1985 y estudiante; son hermanos y ciudadanos yemeníes, con residencia habitual en la región de Al-Sabiin, vecindario de Al-Qadissya, Sana. Fueron detenidos sin orden judicial el 19 de julio de 2007, a las 2.00 horas, por tres agentes de los Servicios de Seguridad Política del Yemen (Al Amn Asiyassi).
7. Según la fuente, no se les ha comunicado el motivo de su detención y permanecen en prisión sin ningún tipo de procedimiento legal.
8. Al parecer, los tres hermanos Al Abbab fueron detenidos en lugar de su hermano mayor, el Sr. Adel Mohsen Al Abbab Thabet, profesor de árabe y buscado, según los Servicios de Seguridad Política, por su presunta pertenencia a Al Qaeda. Cuando los agentes no encontraron a Adel Al Abbab procedieron a la detención de sus tres hermanos y su padre, quien sufre de hipertensión arterial y diabetes. El padre fue puesto en libertad dos días después.

9. Los tres hermanos permanecen en la prisión de los Servicios de Seguridad Política en Sana desde su detención. Durante los primeros dos meses estuvieron en régimen de incomunicación, pero actualmente están en contacto con su familia, y su padre puede visitarlos una vez por semana. No se les ha acusado formalmente ni se les ha llevado ante un juez ni se les ha sometido a ningún otro tipo de proceso judicial. Su padre formuló una petición ante el jefe de los Servicios de Seguridad Política, el Sr. Ghalib Al Kamsh, pero fue en vano.

10. Aunque el artículo 47 c) de la Constitución de la República del Yemen dispone que toda persona temporalmente detenida bajo sospecha de haber cometido un delito será presentada ante un tribunal en un plazo máximo de 24 horas desde el momento de su detención; y aunque el artículo 73 del Código de Procedimiento Penal (Ley N° 31 de 1994) estipula que toda persona detenida debe ser informada inmediatamente de los motivos de su detención, tiene derecho a conocer la orden de detención, puede contactar con todas las personas que deban, a su juicio, ser informadas, y puede solicitar la asistencia de un abogado, las autoridades no proporcionaron a los tres hermanos Al Abbab ninguna razón jurídica que justificara su detención y encarcelamiento.

11. La fuente informa además de que las leyes nacionales del Yemen establecen que los individuos deben ser informados sin demora de las acusaciones que se les formulan. El artículo 269 del Código de Procedimiento Penal dispone que todas las acusaciones contra una persona que haya sido detenida por esta razón deben ser examinadas con la máxima urgencia por un tribunal, que rápidamente deberá tomar una decisión. Hasta la fecha, y a pesar de sus peticiones, los tres hermanos Al Abbab no han podido obtener asistencia letrada. Actualmente se encuentran reclusos al margen de toda legalidad y en clara violación de las leyes nacionales del Yemen.

12. Tras examinar la información recibida y en ausencia de una respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo considera que la detención de los tres hermanos Al Abbab es arbitraria, pues contraviene el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que "nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado"; y el artículo 9, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual "todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales" y "nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta".

13. La detención de los tres hermanos también viola el artículo 14, párrafo 3 a) y c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que toda persona tendrá derecho "a ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella" y "a ser juzgada sin dilaciones indebidas".

14. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La privación de libertad de Amir Abdallah Thabet Mohsen Al Abbab, Mohamed Abdallah Thabet Mohsen Al Abbab y Movad Thabet Mohsen Al Abbab es arbitraria, pues contraviene el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Corresponde a las categorías I y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

15. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para remediar la situación, que, dadas las circunstancias específicas de este caso, deben ser la inmediata liberación de los tres hermanos Al Abbab y una reparación adecuada.

16. El Grupo de Trabajo subraya que la obligación de poner en libertad de inmediato a Amir Abdallah Thabet Mohsen Al Abbab, Mohamed Abdallah Thabet Mohsen Al Abbab y

Movad Thabet Mohsen Al Abbab no permitiría una posterior detención, incluso en el caso eventual de que las nuevas medidas adoptadas contra los tres hermanos cumplan con las obligaciones internacionales asumidas por la República del Yemen en materia de derechos humanos.

17. Además, el Grupo de Trabajo señala que la obligación de proporcionar una compensación adecuada en virtud del artículo 9, párrafo 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se basa en la consideración de que los tres hermanos han sido víctimas de detención arbitraria y que las actuaciones o conclusiones posteriores sobre ellos no pueden limitar la responsabilidad del Estado.

Aprobada el 3 de septiembre de 2009.

## **Opinión N° 14/2009 (Gambia)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 28 de mayo de 2009.**

**Relativa al Jefe Ebrima Manneh.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya respondido en el plazo de 90 días.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. Habida cuenta de las alegaciones, el Grupo de Trabajo habría acogido con satisfacción la cooperación del Gobierno. No obstante, y aunque el Gobierno no haya ofrecido su versión sobre los hechos ni explicado las circunstancias del caso, el Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una Opinión a la luz de las afirmaciones formuladas.
5. El caso se comunicó al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria tal como se resume a continuación.
6. El 7 de julio de 2006, el Jefe Ebrima Manneh, ciudadano de la República del Gambia ("Gambia"), nacido el 18 de febrero de 1978, con residencia habitual en la aldea de Lamin, Gambia, periodista experimentado del diario *Daily Observer*, con sede en Banjul, fue detenido sin orden judicial en las oficinas del mencionado periódico por dos agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia de Gambia vestidos de civil. Desde entonces ha permanecido recluido en régimen de incomunicación, sin cargos y sin juicio, bajo la autoridad de las fuerzas de seguridad del Estado de Gambia, probablemente con la ayuda de la Agencia Nacional de Inteligencia. Nunca se ha dado al Sr. Manneh una razón para su detención o encarcelamiento.
7. Se desconoce el lugar de detención del Sr. Manneh, que no tiene contacto con el mundo exterior. El Gobierno de Gambia no ha admitido nunca que el Sr. Manneh esté bajo su custodia. El Consejo de Seguridad Nacional de Gambia alegó su ignorancia sobre la situación del Sr. Manneh. Otros funcionarios de Gambia, en particular la Policía Estatal, han negado públicamente que tengan en custodia al Sr. Manneh. Se cree, sin embargo, que actualmente está recluido en la comisaría de Fatoto, en parte oriental de Gambia. Durante el tiempo que lleva en prisión, algunos testigos lo han visto en diferentes lugares. Se sabe que estuvo detenido en la prisión Mile Two en Banjul. También estuvo encarcelado, en condiciones muy difíciles, en la remota prisión de Fatoto, en la zona oriental de Gambia. En 2007 fue visto también en el Royal Victorian Teaching Hospital, en Banjul, bajo la custodia de las fuerzas de seguridad. Después de unas horas en el hospital lo llevaron, a fin de evitar

la publicidad, a una clínica militar cercana de Banjul. Un portavoz del Royal Victoria declaró, sin embargo, que no tenía idea de "quién ingresa en el hospital". El Sr. Manneh también estuvo en la sede de la Agencia Nacional de Inteligencia y en las comisarías de Kartong, Sibanor y Kuntaur.

8. La fuente sostiene que existen pruebas sólidas que sugieren que el Sr. Manneh todavía está vivo. Por ejemplo, el 3 de julio de 2008, el líder de la minoría en el Parlamento de Gambia instó al Presidente del país a que pusiera en libertad al Sr. Manneh. Si estuviera muerto, el líder de la oposición no habría arriesgado su propia vida realizando una solicitud tan categórica. Del mismo modo, Richard J. Durbin, senador de los Estados Unidos, pronunció un discurso en el Congreso el 30 de julio de 2008, en el que reclamó a Gambia la liberación del Sr. Manneh. En su discurso, el senador Durbin se lamentó de que sus consultas al embajador de Gambia en los Estados Unidos habían recibido por respuesta tan sólo un "silencio vergonzoso".

9. La fuente informa sobre afirmaciones según las cuales la detención del Sr. Manneh derivaría de los contactos que éste mantuvo con un periodista de la British Broadcasting Corporation (BBC) que hizo un reportaje sobre la celebración de una cumbre de la Unión Africana en Banjul. Al parecer, el reportaje de la BBC menciona que el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, llegó al poder mediante un golpe de Estado. El Sr. Manneh podría haber intentado republicar esta crónica, calificada por la fuente como inocua, en el *Daily Observer*, momento en el que la Agencia Nacional de Inteligencia lo detuvo. Aunque el Sr. Manneh no sabe exactamente qué reportaje de la BBC pudo motivar su detención, aunque es probable que fuera uno de fecha 29 de junio de 2006. En él se decía: "El anfitrión de esta reunión [de la Unión Africana], el Presidente de Gambia, Yahya Jammeh, es, al igual que varios de sus compañeros, un ex militar autor de un golpe de Estado que más tarde legitimó su gobierno a través de un proceso electoral". Dado el carácter del reportaje, los intentos del Sr. Manneh de publicarlo nuevamente no pueden ser considerados perjudiciales o ilegales. Sin embargo, la fuente cree que el Presidente Jammeh optó aparentemente por detener y encarcelar al Sr. Manneh.

10. La fuente informa de que los representantes de las organizaciones locales y los periódicos que cubren el reportaje del Sr. Manneh se exponen a un riesgo personal extremo. La policía de Gambia detuvo a un reportero del periódico *Foroyaa* mientras investigaba la detención del Sr. Manneh en una comisaría de las afueras de Banjul.

11. El Sr. Manneh sufre de graves problemas médicos, incluyendo hipertensión arterial, que según los informes desarrolló durante su reclusión. Además, se le ha negado una atención médica adecuada, a excepción de la fugaz visita a un hospital de Banjul descrita anteriormente. Las pésimas condiciones de su encarcelamiento probablemente están agravando sus problemas de salud.

12. La fuente informa además de que se ha mantenido al Sr. Manneh en régimen de incomunicación y se le ha obligado a soportar unas condiciones de reclusión inhumanas, entre ellas tener que dormir sobre el suelo desnudo en celdas con presos hacinados. La fuente afirma que tales condiciones, sumadas a la imposibilidad de comunicarse con familiares o colegas, están poniendo en grave peligro la salud física y emocional del Sr. Manneh.

13. La fuente también informa de que el Sr. Manneh está en grave riesgo de ser torturado por agentes del Gobierno de Gambia, pues abundan las denuncias de tortura de ciudadanos gambianos a manos de su propio Gobierno. La fuente apoya esta denuncia con el informe de 2007 sobre los derechos humanos en Gambia realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En este informe se afirma que las fuerzas de seguridad de Gambia han torturado a acusados mediante "electrocución, quemaduras de cigarrillos, colocación de bolsas de plástico en sus cabezas, heridas de arma blanca, tratamientos de

agua fría, y amenazas de recibir disparos". El editor del diario gambiano *The Independent* afirma que recibió "descargas eléctricas sobre su cuerpo desnudo" durante su detención por las fuerzas de seguridad de Gambia. El trato infligido al Sr. Manneh forma parte de una práctica más amplia en Gambia, en virtud de la cual "las fuerzas de seguridad hostigaban y maltrataban a los detenidos (...) y a los periodistas con impunidad"<sup>28</sup>. La fuente informa de que algunos miembros de la prensa han sido torturados.

14. Además de la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la fuente sostiene que la detención del Sr. Manneh viola el artículo 6 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta Africana), que prohíbe las privaciones de libertad salvo "por las causas y razones fijadas previamente por la ley", así como el artículo 19, párrafo 1, de la Constitución de Gambia, que incluye una garantía idéntica. De acuerdo con la fuente, su detención viola también el artículo 9 de la Carta Africana, que garantiza el derecho de todo individuo a "expresar y difundir sus opiniones dentro de la ley", y el artículo 7 de la Carta Africana y el artículo 19, párrafo 5, de la Constitución de Gambia, que estipulan el derecho a un juicio en un plazo razonable.

15. La fuente señala que el caso del Jefe Ebrima Manneh ha sido ya objeto de una sentencia vinculante del Tribunal de Justicia Comunitario de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) de fecha 5 de junio de 2008<sup>29</sup>. En su fallo, el Tribunal declaró que la detención del Sr. Manneh violaba el derecho internacional y exigía a Gambia que lo liberara inmediatamente de su "detención ilegal" y le pagara 100.000 dólares de los EE.UU. en concepto de indemnización. El Gobierno de Gambia no se presentó ante el Tribunal de Justicia para defender el caso e hizo caso omiso del fallo. En su sentencia, el Tribunal recoge testimonios dignos de crédito de testigos oculares que vieron al Sr. Manneh en prisión, y considera que "todos estos hechos son tan irrefutables y verídicos que el Tribunal los acepta como ciertos". La fuente destaca que resulta imposible vincular la detención del Sr. Manneh con fundamento jurídico alguno, y hace hincapié en las afirmaciones del Tribunal en el sentido de que "no se ha acusado de ningún delito contra la ley de la República de Gambia" al Sr. Manneh. El Tribunal sostuvo que "dado que [Gambia] no ha demostrado que la detención y encarcelamiento del demandante se realizaron en virtud de las disposiciones de una ley previamente establecida, el autor de la queja tiene derecho a recobrar su libertad y seguridad personales".

16. La fuente informa de que las posibilidades de presentar recursos judiciales en el país son escasas debido a la supuesta hostilidad de los tribunales de Gambia ante reclamaciones de esta naturaleza. Añade que la familia del Sr. Manneh ha debido padecer dificultades económicas y emocionales extremas desde su detención y encarcelamiento.

17. Tras examinar la información recibida y a falta de una respuesta por parte del Gobierno, el Grupo de Trabajo se basa en la credibilidad de la presentación de la fuente, corroborada por los testimonios que recoge la sentencia del Tribunal, de que el Sr. Manneh permanece recluido en poder de las autoridades de Gambia desde su detención sin orden judicial el 7 de julio de 2006 por agentes del servicio de inteligencia de Gambia. A pesar de las afirmaciones de la propia fuente de que las diferentes autoridades de Gambia habrían negado públicamente tener bajo su custodia al Sr. Manneh, los testimonios oculares transmitidos, judicialmente respaldados, indican de forma evidente que fue visto en diversos centros de detención del país.

18. El Grupo de Trabajo considera que la detención del Sr. Manneh contraviene el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en particular las

<sup>28</sup> Departamento de Estado de los Estados Unidos, *Country Reports on Human Rights, Gambia* (2007).

<sup>29</sup> *Chief Ebrima Manneh v. The Republic of The Gambia*, ECW/CCJ/JUD/03/08.

garantías de que "todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales", que "nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias" y que "nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta".

19. A partir de la Opinión N° 47/2005<sup>30</sup>, el Grupo de Trabajo ha clasificado la reclusión en un lugar secreto como detención arbitraria en los términos de la categoría I de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo, pues carece de todo fundamento jurídico. Ningún procedimiento legal permite recluir a un individuo en régimen de incomunicación cuando no se le han comunicado las razones de su detención, cuando no se le permite acceder a un abogado o a sus familiares, cuando no se ejerce ningún control judicial sobre su privación de libertad y cuando, en definitiva, no se le ha acusado de ningún delito recogido en la legislación de Gambia con vistas a la celebración de un juicio.

20. La detención del Sr. Manneh en estas circunstancias queda fuera de los límites de la ley, pues durante cerca de tres años también le ha expuesto al riesgo de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes<sup>31</sup>.

21. El Grupo de Trabajo también considera que la detención secreta de una persona es en sí misma una violación del derecho a un juicio con las debidas garantías<sup>32</sup> en el que un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley pueda establecer la culpabilidad o inocencia de un acusado, como exige el artículo 14, párrafo 1, inciso 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

22. El Sr. Manneh no ha sido juzgado. Ni siquiera ha sido acusado de un delito penal. No se le ha permitido el acceso a un abogado para preparar su defensa. Su detención, por tanto, contraviene el artículo 14, párrafo 3 a), b) y c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que exigen que toda persona será informada sin demora de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; dispondrá del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y se podrá comunicar con un defensor de su elección; y será juzgada sin dilaciones indebidas. Su detención corresponde a la categoría III de las categorías de detención arbitraria elaboradas por el Grupo de Trabajo.

23. El Grupo de Trabajo considera que la privación de libertad del Sr. Manneh resulta del ejercicio pacífico de su derecho fundamental a la libertad de opinión y de expresión como reportero de un periódico, garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aunque el párrafo 3 de este último permite la restricción del derecho a la libertad de opinión y de expresión en ciertas circunstancias, dichas circunstancias no se presentan en el caso del Sr. Manneh. Este derecho sólo podrá sufrir las restricciones "fijadas por la ley" cuando sea necesario para "asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás" o para "la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas".

24. La detención del reportero de un periódico que intentó publicar nuevamente un reportaje crítico sobre la manera en que el Presidente, como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno en ese momento, llegó al poder no era necesaria para preservar el interés, la reputación o la seguridad nacional. No hay al parecer pruebas de que el Sr. Manneh

<sup>30</sup> A/HRC/4/40/Add.1, pág. 41.

<sup>31</sup> Véase Informe anual del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, E/CN.4/2006/7, pág. 19, párr. 57.

<sup>32</sup> Opinión N° 5/2001, E/CN.4/2002/77/Add.1, pág. 45, párr. 10 iii).

estuviera implicado en actividades subversivas, ni tampoco el Gobierno ha presentado argumentos en este sentido.

25. Incluso si se considerara necesaria la censura del reportaje para proteger la reputación del Presidente o la seguridad nacional de Gambia, es indudable, tomando como referencia el artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que no es necesaria la reclusión del Sr. Manneh en régimen de total incomunicación y sin cargos durante casi tres años. El uso de la detención arbitraria para restringir la libertad de prensa es una violación particularmente aborrecible de los derechos civiles y políticos. La privación de libertad del Sr. Manneh, por tanto, también corresponde a la categoría II de las aplicadas por el Grupo de Trabajo.

26. Tras llegar a esta conclusión en el caso, el Grupo de Trabajo señala, además, que Gambia no ha cumplido con la sentencia del Tribunal de la CEDEAO de 2008, de la cual se ha incluido una copia como parte del expediente del caso, que ordenaba la liberación del Sr. Manneh y una indemnización por daños y perjuicios.

27. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La privación de libertad del Jefe Ebrima Manneh es arbitraria, pues contraviene los artículos 9, 10 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los artículos 9, 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Corresponde las categorías I, II y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

28. Una vez emitida esta Opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para poner remedio a la situación, lo que consistiría, dadas las circunstancias especialmente graves por tratarse de un caso de detención secreta, en la liberación inmediata del Sr. Manneh y en una reparación adecuada de conformidad con el artículo 9, párrafo 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 3 de septiembre de 2009.

## **Opinión N° 15/2009 (Zimbabwe)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 20 de marzo de 2009.**

**Relativa a los Sres. Lloyd Tarumbwa y Fanny Tembo, y a la Sra. Terry Musona.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno, que ha presentado información relativa a las alegaciones de la fuente.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una Opinión sobre los hechos y las circunstancias del caso, a la luz de las alegaciones formuladas y de la respuesta del Gobierno a las mismas, así como de las observaciones de la fuente.
5. El caso que se resume a continuación se comunicó al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la siguiente manera.
6. Lloyd Tarumbwa, de 39 años de edad, ciudadano de Zimbabwe, coordinador en la provincia de Mashonaland Occidental del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), fue detenido el 30 de octubre de 2008 alrededor de las 3.00 horas en su domicilio por miembros de la policía de la República de Zimbabwe y agentes de seguridad del Estado

relacionados con la Organización Central de Inteligencia (CIO), que no mostraron ninguna orden de detención. Los familiares del Sr. Tarumbwa presenciaron la detención.

7. Terry Musona, de 55 años, ciudadana de Zimbabwe, Vicesecretaria del MDC en la provincia de Mashonaland Occidental, con residencia en Gumbo Road, municipio de Kuwadzana, Banket; y Fanny Tembo, de 41 años, también nacional de Zimbabwe, funcionario del gobierno local (concejal) por el MDC, fueron recogidos en el 445 de la calle Muonde, en el municipio de Kuwadzana, Banket, por cuatro hombres desconocidos. Uno de ellos se identificó como Mpopu y dijo a los miembros de la familia que acudieran a la comisaría de Banket.

8. El paradero de las tres personas mencionadas *supra* fue una incógnita durante 58 días. Inicialmente estuvieron bajo la custodia de la policía, que no lo reconoció, antes de ser trasladadas y puestas clandestinamente bajo la custodia de agentes de la CIO. Durante este período estuvieron en régimen de incomunicación y esposados, y fueron víctimas de malos tratos y tortura. No se les permitió contactar con sus abogados y familiares, y se les denegaron los derechos básicos de la prisión preventiva.

9. Teniendo en cuenta que su detención se prolongó más allá de la limitación legal de 48 horas, en noviembre de 2008 el Tribunal Superior de Zimbabwe, de conformidad con la Ley de procedimiento penal y de pruebas, dictaminó que la detención de estas tres personas fue ilegal desde el inicio y ordenó su liberación (caso de *Fidelis Chiramba and 11 others vs. Minister of Home Affairs and others*; referencia HC 6420/08). En su resolución, el Juez Hungwe estableció que la continua detención de estos activistas del MDC era ilegal y que debían ser puestos en libertad. El Tribunal Superior también declaró que la policía tendía que continuar por la vía de la citación judicial si deseaba emprender una acción contra ellos. A pesar de esta orden judicial, estas tres personas quedaron bajo la custodia de la CIO y permanecieron recluidas. A día de hoy sigue sin ejecutarse la orden del Tribunal Superior.

10. Con el fin de averiguar el paradero de estas personas, que no se encontraban en un lugar oficial de detención, los abogados tuvieron que presentar un nuevo recurso, esta vez un despacho urgente ante el Tribunal Superior de Zimbabwe (*Lloyd Tarumbwa and 11 others vs. The Minister of State Security, Lands, Land Reform and Resettlement in the President's Office*; referencia HC 23/09). Se llevó a las tres personas mencionadas *supra* ante el Juez del Tribunal Superior Chitakunye J. Se permitió al Juez, así como a los abogados de estas tres personas y a los abogados de la acusación, interrogar a las tres personas en cuestión, pero en condiciones muy estrictas y limitadas. A sus abogados no se les permitió hablar con ellos en privado.

11. Las tres personas dijeron que las habían obligado, mediante amenazas de tortura, a decir que se encontraban bajo protección policial en calidad de testigos del Estado. En enero de 2009, el juez informó a la Policía de Zimbabwe, la CIO y los representantes del Estado de que estaban obligados a cumplir con las órdenes judiciales y dictaminó la liberación inmediata de las tres personas citadas de su custodia ilegal. Esta orden, sin embargo, tampoco se cumplió.

12. Estas personas permanecen detenidas bajo protección policial y como testigos del Estado. Están alojadas en una habitación individual, donde su derecho a la libre circulación se ve gravemente restringido. En ocasiones se les niega el permiso para utilizar el cuarto de baño. Cuando se les permite, deben ir hasta allí con los ojos vendados. Tampoco se les proporcionan mantas. Según la fuente, su nueva condición de testigos protegidos del Estado motivó, en enero de 2009, que cesaran las torturas que estaban sufriendo. Sin embargo, se ha negado al Sr. Tarumbwa el acceso a los servicios médicos. Se queja de dolor por todo el cuerpo como consecuencia de los ataques con mangueras que le infligieron y de los puntapiés con botas recibidos durante largos períodos.

13. La fuente informa además de que estas personas no quieren ser testigos de cargo, pues desconocen de qué han sido supuestamente "testigos". Se les pide que testifiquen en un caso relacionado con otros activistas del MDC que también fueron detenidos arbitrariamente, secuestrados y víctimas durante un tiempo de desaparición forzada antes de ser entregados a la policía, y que ahora están en proceso. La lista de estas personas incluía a los activistas del MDC Fidelis Chiramba, Jestina Mukoko, Concilia Chinanzvavana (presidenta de la Asamblea Provincial de la Mujer de Mashonaland Occidental), Manuel Chinanzvavana, Pieta Kaseke, Colleen Mutemagau, Violet Mupfuranhewe, Broderick Takawira y otros, acusados de conspirar para la insurgencia, así como de bandidaje y sabotaje.

14. La fuente considera que las tres personas mencionadas han estado detenidas arbitrariamente durante más de cuatro meses. Fueron secuestradas, técnicamente desaparecidas y torturadas; no se las acusó de ningún delito común tipificado ni se las llevó voluntariamente ante una autoridad judicial. Se les negaron sus derechos más elementales, como la libertad de asociación y el derecho a participar en actividades políticas sin intimidación ni acoso, y se las trató como rehenes. El acceso limitado a sus familiares no fue voluntario, sino por orden judicial. La fuente también señala que Fanny Tembo, como concejal electo del MDC, no pudo cumplir con sus deberes políticos con la circunscripción que le votó.

15. En su respuesta, el Gobierno confirma que Lloyd Tarumbwa, Terry Musona y Fanny Tembo fueron recogidos por miembros de agentes encargados del cumplimiento de la ley a partir de la información de que ciertas personas de Banket, en colaboración con elementos extranjeros, participaban en el adiestramiento de bandidos e insurgentes. De la investigación se desprende que las personas mencionadas no participaron en estos actos, pero estaban dispuestas a facilitar información o pruebas sobre el asunto a la policía. Estas personas fueron por tanto retenidas bajo custodia policial en un lugar seguro para evitar que los autores materiales de los actos pudieran causarles daños.

16. El Gobierno declara además que el Tribunal Superior ordenó la liberación de Fidelis Chiramba y sus coacusados. En la lista de esa orden judicial figuraban los nombres de Lloyd Tarumbwa, Terry Musona y Fanny Tembo, "pero estos no habían sido formalmente acusados de ningún delito y fueron en ese momento liberados de la custodia policial". Se presentó una nueva presentación urgente ante el Tribunal Superior en nombre de estas personas. El 16 de enero de 2009 el juez visitó a las tres personas nombradas, todavía bajo custodia de la policía, y confirmó la posición del Estado. De acuerdo con la respuesta del Gobierno, el juez no ordenó su liberación.

17. El Gobierno confirma que las tres personas mencionadas indicaron a la policía que llevaban mucho tiempo lejos de sus hogares y que querían volver a casa; el Gobierno accedió y, tras tomarles declaración jurada, les permitió regresar a sus hogares.

18. El Gobierno, en su respuesta, también rechaza la alegación de la fuente sobre malos tratos y torturas, asegurando que las personas mencionadas aceptaron de buen grado convertirse en testigos del Estado; un agente de policía las llevó ante el tribunal el 2 de junio de 2009 y después de ser entrevistadas regresaron a sus hogares. Al día siguiente se hizo una presentación urgente en nombre de las tres personas, para denunciar su secuestro. El Gobierno declara que el Juez llamó a los tres, que confirmaron en su presencia que nunca habían sido secuestrados y que se les había llevado a Harare para una entrevista en la Oficina del Fiscal General. A la luz de esta prueba, el Juez preguntó a los peticionarios si deseaban retirar la solicitud presentada en nombre del trío, y estos lo hicieron.

19. La información recibida por el Gobierno se envió a la fuente, para recabar sus comentarios, que se exponen a continuación. En primer lugar, la fuente califica de engañosa la respuesta del Gobierno cuando declara que se detuvo a las tres personas mencionadas

con su consentimiento, especialmente si se tiene en cuenta que la respuesta del Gobierno no niega de ninguna forma la detención y reclusión de estas personas.

20. La fuente a continuación presenta pruebas que comprenden una orden provisional (caso N° HC 872/09) de fecha 6 de marzo de 2009 en la que el Juez declaró que el secuestro y la reclusión de Lloyd Tarumbwa, Fanny Tembo y Terry Musona durante más de 48 horas fueron abusivos e ilegales. El Juez también consideró abusiva e ilegal la conducta de los demandados al negarse a permitir a los secuestrados el contacto con sus familiares. Además, la orden también declara ilegal la negativa de los funcionarios del Estado a que sus abogados pudieran reunirse con ellos. Por último, el documento prohíbe un nuevo secuestro de esas personas por el Estado y sus funcionarios, y ordena que se las ponga inmediatamente en libertad.

21. El Grupo de Trabajo, sobre la base de la información puesta a su disposición, considera lo siguiente.

22. Hay una serie de discrepancias en la respuesta del Gobierno, cuyas conclusiones se apoyan también en la información proporcionada. Por ejemplo, el Gobierno reconoce que las tres personas fueron "recogidas"; no participaban en ninguna acción incorrecta, pero su reclusión era necesaria y prolongada debido a su condición de testigos del Estado en un caso. El Gobierno declara además que estas personas permanecieron voluntariamente bajo la custodia de la policía. Sin embargo, la copia de las declaraciones juradas de los tres que apoya este hecho y que adjunta el Gobierno en su respuesta contiene una serie de frases significativas que apuntan a indicar que su detención no fue consentida.

23. Lloyd Tarumbwa dice en su declaración que: "No tengo ningún problema en estar bajo custodia de protección, pero ahora quiero ir a casa y estar con mi familia, a pesar de las importantes amenazas sobre mi seguridad". Fanny Tembo hace un llamamiento similar en su declaración cuando dice: "Ahora siento que debo estar con mi familia, en la que siempre pienso. Mi esposa está enferma y también siento que es mi responsabilidad cuidar de ella". Terry Musona declara: "No tengo ningún problema en general sobre mantenerme en custodia de protección, pero siento que he sobrepasado mis límites y necesito volver a casa".

24. El Grupo de Trabajo también toma nota de que la información proporcionada por el Gobierno en el sentido de que el Tribunal Superior no ordenó la liberación de los tres detenidos contradice su propia postura de que estas personas eran libres de irse y sólo estuvieron detenidas cierto tiempo. La copia de una orden provisional del Tribunal Superior proporcionada por la fuente demuestra lo contrario, cuando el tribunal declara que la detención continua de esas personas en custodia de protección era abusiva e ilegal, y exige su inmediata liberación.

25. La información proporcionada por el Gobierno y por la fuente muestra que las tres personas eran activistas políticos y miembros del principal partido de la oposición, el MDC, y ocupaban cargos en diferentes calidades. Ello no ha sido desmentido por el Gobierno y es un elemento común en los perfiles de los tres detenidos. No hay ninguna indicación en la respuesta del Gobierno que sugiera que los tres detenidos no estarían disponibles para prestar declaración como testigos del Estado.

26. Por tanto, el Grupo de Trabajo considera que no hay fundamento jurídico para su detención.

27. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La detención y reclusión de Lloyd Tarambwa, Terry Musona y Fanny Tembo es arbitraria, pues contraviene los artículos 7, 9, 10, 11, párrafo 1, 13, párrafo 1, y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los artículos 9, 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a las categorías I

y III de los criterios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

28. Consecuentemente con la Opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para remediar la situación de Lloyd Tarambwa, Terry Musona y Fanny Tembo, poniéndola en consonancia con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para lo cual debe liberarlos de inmediato de la custodia de la policía.

29. Por último, el Grupo de Trabajo pide que, de conformidad con el artículo 9, párrafo 5, del citado Pacto, se conceda a los detenidos el derecho efectivo a obtener una reparación por lucro cesante, problemas de salud y de vida personal durante el período de detención arbitraria descrito anteriormente.

Aprobada el 3 de septiembre de 2009.

### **Opinión N° 16/2009 (Ucrania)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 1° de mayo de 2009.**

**Relativa al Sr. Alexandr Rafalskiy.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno, que ha presentado información relativa a las alegaciones de la fuente.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una Opinión sobre los hechos y las circunstancias del caso, a la luz de las alegaciones formuladas y la respuesta del Gobierno a las mismas, así como de las observaciones de la fuente.
5. El caso se comunicó al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria tal como se resume a continuación.
6. El Sr. Alexandr Rafalskiy, nacido el 21 de mayo de 1971, ciudadano ucraniano, director adjunto de la empresa privada Polimerzaschita, con residencia habitual en Kiev, fue detenido el 13 de junio de 2001 en un apartamento en Volgodonskiy Pereulok, en Kiev, por agentes del Departamento de Asuntos Internos. No se le mostró ninguna orden ni se le dio una explicación de la detención. Inicialmente el Sr. Rafalskiy estuvo en un centro de detención del Departamento de Asuntos Internos en Kiev, en la calle Vladimirski N° 15. Al día siguiente se le trasladó a un lugar de detención desconocido. El Sr. Rafalskiy habría sido torturado en ambos lugares con el fin de arrancarle una confesión.
7. El 13 de junio de 2001, aproximadamente a las 23.30 horas, el Sr. Rafalskiy fue llevado al Hospital Regional Central de Obukhiv. Lo examinaron dos médicos, que le diagnosticaron una herida en la cabeza y numerosas lesiones en la espalda.
8. Entre el 14 y el 16 de junio de 2001, el Sr. Rafalskiy fue trasladado al Centro de Detención Temporal de Obukhov (TDC), administrado por el Departamento de Policía del Distrito de Obukhov, detenido como una persona sin residencia fija y sin identidad de conformidad con el artículo 5, párrafo 5, de la Ley de la Militsia (Policía), aunque los agentes conocían su identidad y lo detuvieron bajo el nombre de Alexandr Rafalskiy. El 16 de junio de 2001, el Sr. Rafalskiy formuló una solicitud por escrito para pedir al máximo

responsable del Centro de Detención Temporal de Obukhov que contactara con sus padres y les informara acerca de su lugar de detención.

9. El Sr. Rafalskiy fue trasladado tres veces de un centro de detención temporal a otro sin nuevas explicaciones. El 17 de junio de 2001 fue recluido en el centro de Staviche; entre el 17 y el 21 de junio de 2001, en el centro de Tetiev; y del 21 al 25 de junio de 2001, una vez más en el centro de Staviche. Los tres centros de detención se encuentran en la región de Kiev. El 17 de junio de 2001, aproximadamente a las 20.40 horas, el Sr. Rafalskiy recibió tratamiento médico en el Hospital Regional Central de Staviche. Se le diagnosticó una disfunción circulatoria y una lesión en la zona del pecho y la cintura.

10. El Sr. Rafalskiy fue interrogado continuamente entre el 14 y el 21 de junio de 2001. Como no se le permitió el acceso a su abogado o a sus familiares, no pudo emplear recursos legales para evitar las violaciones de sus derechos. Sólo el 25 de junio de 2001 se le informó de que permanecería en detención como sospechoso de asesinato. Desde entonces está recluido bajo la autoridad de la Oficina del Fiscal Regional de Kiev en el Centro de Detención e Investigación de Kiev.

11. El 26 de junio de 2001, el Sr. Rafalskiy compareció por primera vez ante un juez, que ordenó su encarcelamiento. El 30 de julio de 2004 fue condenado por asesinato a cadena perpetua. Actualmente se encuentra cumpliendo su condena en la cárcel N° 1, en calle Ostovski 2, de Vinnitha.

12. Posteriormente, el Sr. Rafalskiy ha presentado solicitudes y recursos denunciando las torturas y la privación ilegal de libertad a la Oficina del Fiscal General, a la autoridad investigadora y al Tribunal de Primera Instancia que examinó su caso. A pesar de estas solicitudes, apoyadas en un dictamen pericial médico-judicial emitido el 19 de julio de 2001 por el Hospital Regional Central de Kiev, que no excluía las denuncias de tortura, no se llevó a cabo ninguna investigación penal.

13. De acuerdo con el peritaje médico-judicial, solicitado por un investigador de la Fiscalía Regional en Kiev, el Sr. Rafalskiy sufrió dos heridas en sus rodillas derecha e izquierda, una contusión en la parte interna del hombro izquierdo, y una herida en la parte delantera de la fontanela interior izquierda de la cabeza. A excepción de la herida de la cabeza, las lesiones podrían ser el resultado de la utilización de objetos contundentes, posiblemente de golpes con las manos, con los pies o provocados por una caída. Se consideraron heridas leves sin consecuencias a largo plazo sobre el estado de salud. La opinión de los expertos concluyó que no era probable que las lesiones mencionadas fueran resultado de la utilización de un palo.

14. El 15 de septiembre de 2001, el investigador de la Oficina del Fiscal General se negó a iniciar un proceso penal contra los policías que le maltrataron para obtener una confesión mientras estaba bajo su custodia, sobre la base de que se recurrió a la fuerza contra el Sr. Rafalskiy probablemente cuando intentó escapar el 13 de junio de 2001 por la salida de ventilación del centro de detención del Departamento de Asuntos Internos, en la calle Vladimirski 15 de Kiev. Este hecho obligó a la policía a recurrir a "disciplinas de lucha y medios especiales" para evitar su fuga, en estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley de la Militsia. La Oficina del Fiscal General considera desde una perspectiva crítica las alegaciones del Sr. Rafalskiy y considera que no se corresponden con la realidad. Con respecto a la herida de su cabeza, el Fiscal General sostiene que podría ser resultado de la utilización de un objeto punzante y que no es probable que fuera causada por golpes o medios similares.

15. Dado que la Oficina del Fiscal General es el único órgano en Ucrania que podría iniciar actuaciones penales contra agentes de la policía, y dado que ello no ha resultado efectivo en este sentido, el Sr. Rafalskiy no tiene más recursos internos disponibles.

16. En consecuencia, la fuente sostiene que la detención, reclusión y encarcelamiento del Sr. Rafalskiy son arbitrarios. En virtud del artículo 29, párrafo 3, de la Constitución y de los artículos 106 y 165-2, párrafo 4, del Código de Procedimiento Penal, una detención sin orden sólo es admisible "en caso de urgencia cuando se trata de prevenir o detener la comisión de un delito". El artículo 165-2, párrafo 4, del Código de Procedimiento Penal establece el procedimiento para la emisión de una resolución judicial fundamentada que autorice la detención. El autor de la queja fue detenido sobre la base de la sospecha de un delito, cometido unos meses antes de su detención, por lo que la detención no cumple con los requisitos consagrados en el artículo 29 de la Constitución y en los artículos 106 y 165-2, párrafo 4, del Código de Procedimiento Penal.

17. Además, el 14 de junio de 2001, las autoridades del Estado recluyeron al sujeto como si fuera una persona sin residencia fija, a pesar de que conocían bien su identidad desde el día anterior a su detención. Las autoridades se aprovecharon de que la legislación de Ucrania no somete a control judicial las detenciones de vagabundos y no obliga a informar a los familiares u otras personas sobre la detención y el lugar en que se encuentran. La Fiscalía aprobó la detención del Sr. Rafalskiy sólo el 25 de junio de 2001.

18. La fuente afirmó además que las acciones de las autoridades tenían por objeto soslayar los obstáculos para torturar al Sr. Rafalskiy y obtener una confesión, así como para ocultar las pruebas de la tortura y evitar su responsabilidad en estos actos. Esos actos violaron el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 3 y 5, párrafo 3, del Convenio Europeo de Derechos Humanos; y los Principios 4, 6, 9 y 15 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

19. Por último, la fuente sostiene que la detención arbitraria, la detención sin necesidad de registro y la consiguiente detención falsa como persona sin residencia fija, se tradujeron en la violación del derecho del Sr. Rafalskiy a un juicio con las debidas garantías, garantizado por el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; y los Principios 17, 18 y 21 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

20. El 1º de mayo de 2009, el Grupo de Trabajo transmitió estas alegaciones al Gobierno de Ucrania, solicitándole información detallada sobre la situación actual del Sr. Alexandr Rafalskiy, así como aclaraciones sobre las disposiciones legales que justifican su detención y reclusión continua. En una nota verbal de fecha 20 de agosto de 2009 el Grupo de Trabajo envió un recordatorio con respecto a su solicitud de información a la Misión Permanente de Ucrania ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra.

21. El 21 de agosto de 2009 el Gobierno presentó su respuesta. Según la misma, el Sr. Rafalskiy fue detenido el 25 de junio de 2001 por agentes de la Oficina del Fiscal Regional en Kiev como sospechoso de haber cometido un delito en virtud del artículo 93 g) del Código Penal de Ucrania. Por decisión de la Fiscalía Regional en Kiev de fecha 26 de junio de 2001, el Sr. Rafalskiy fue llevado al Centro de Detención e Investigación de Kiev. El tribunal del distrito y el Tribunal Regional de Apelación de Kiev decidieron en varias ocasiones prorrogar el período de detención.

22. El Gobierno también informa que el 30 de julio de 2004 el Sr. Rafalskiy fue condenado a cadena perpetua por asesinato. El Tribunal Supremo de Ucrania confirmó su condena a cadena perpetua. Se encuentra recluido en la prisión de Vinnitha desde el 11 de julio de 2006. El Gobierno concluye que los resultados de la investigación llevada a cabo

no incluyen ninguna acción ilegal imputable a los agentes de policía. Los actos de los agentes de la Militsia para evitar los intentos de fuga del Sr. Rafalskiy fueron plenamente legales.

23. En sus observaciones a la respuesta del Gobierno, presentadas el 25 de agosto de 2009, la fuente considera que la información proporcionada por el Gobierno no refuta las alegaciones presentadas relativas a la detención ilegal y a los actos de tortura y malos tratos infligidos con el fin de obtener una confesión. La fuente considera irrelevante la respuesta del Gobierno en relación con las alegaciones contenidas en su comunicación original. El Gobierno se limita a pasar por alto que el Sr. Rafalskiy permaneció recluido entre el 13 y el 25 de junio de 2001 y no ofrece ninguna explicación sobre los fundamentos jurídicos de este período de detención. La respuesta del Gobierno sólo cubre el período posterior al 25 de junio de 2001. Por esta razón, la fuente concluye que el Grupo de Trabajo no puede tenerla en cuenta en su examen del caso.

24. El Grupo de Trabajo considera que debe tomar en consideración las siguientes circunstancias:

a) La comunicación inicial de la fuente contiene alegaciones de tortura y malos tratos, así como de privación ilegal de la libertad del Sr. Rafalskiy imputable a agentes de policía en varios centros de detención temporal durante los primeros 13 días de su detención preventiva. Su detención no se registró oficialmente e incluso se mantuvo al Sr. Rafalskiy parcialmente en régimen de incomunicación.

b) Dos hospitales centrales regionales en Kiev señalaron en su diagnóstico que el Sr. Rafalskiy presentaba heridas en varias partes de su cuerpo.

c) No se permitió al Sr. Rafalskiy el acceso a un abogado ni a sus familiares.

d) Sólo se le comunicaron las razones de su detención 13 días después de la misma, cuando se le informó de que debía permanecer en prisión bajo sospecha de asesinato. Sólo después el Sr. Rafalskiy compareció por primera vez ante un tribunal.

25. Estas denuncias no han sido refutadas por el Gobierno.

26. Sin embargo, hay una discrepancia entre la información proporcionada por la fuente y la proporcionada por el Gobierno sobre la fecha de la detención del Sr. Rafalskiy (13 y 25 de junio de 2001, respectivamente). Es durante este período de prisión previa al juicio, inmediatamente posterior a la detención del Sr. Rafalskiy, cuando presuntamente tuvieron lugar los actos de tortura y malos tratos, y las graves violaciones del derecho a la libertad y la seguridad.

27. En consecuencia, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que le proporcione información más detallada sobre la fecha, los fundamentos jurídicos y las circunstancias de la detención del Sr. Rafalskiy, la duración y las condiciones de su detención preventiva y los resultados de la investigación sobre los actos de los agentes de policía durante su detención y prisión preventiva.

28. El Grupo de Trabajo, de conformidad con el párrafo 17 c) de sus métodos de trabajo, decide mantener el caso abierto hasta que reciba la información solicitada al Gobierno.

Aprobada el 4 de septiembre de 2009.

## **Opinión N° 17/2009 (España)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 28 de mayo de 2009.**

**Relativa al Sr. Karmelo Landa Mendibe.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 17/2008.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su apreciación al Gobierno por proporcionarle oportunamente la información solicitada.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 17/2008.)
4. Habida cuenta de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación recibida del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente y ha recibido sus comentarios. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una Opinión acerca de los hechos y circunstancias del caso considerado, teniendo en cuenta las alegaciones formuladas, la respuesta del Gobierno sobre ellas y los comentarios de la fuente.
5. Según la fuente, el Sr. Karmelo Landa Mendibe, de nacionalidad española; Profesor de la Universidad del País Vasco en Bilbao; Diputado Europeo (1990-1994) y miembro del Parlamento Vasco (1994-1998) por la coalición Herri Batasuna, fue arrestado el 11 de febrero de 2008, aproximadamente a las 2.00 horas de la madrugada, en su domicilio, por un numeroso grupo de agentes de la Policía Nacional vestidos de paisano, armados y con los rostros cubiertos.
6. Los autores de la aprehensión no mostraron orden, decisión ni mandato de ninguna autoridad pública en la cual constasen los motivos del arresto practicado. La detención fue realizada tras un registro domiciliario de dos horas. El Sr. Landa Mendibe fue sacado por la fuerza de su domicilio, esposado, conjuntamente con los bienes confiscados: dos ordenadores; dos teléfonos móviles; una agenda y libros propios de su trabajo como profesor universitario. Su esposa fue testigo de la detención. El arresto fue filmado y fotografiado por periodistas que habían acompañado a los agentes de la Policía Nacional durante la operación y fue difundido ampliamente en los telediaros y periódicos durante los días siguientes.
7. El Sr. Landa Mendibe fue introducido en un vehículo sin distintivos en el cual se le colocó una capucha o tela de saco opaca sobre la cabeza. Se le informó que a partir de ese momento se encontraba en situación de incomunicado y sin derecho a contar con abogado propio.
8. Luego de un largo viaje de madrugada, fue internado en un calabozo en la ciudad de San Sebastián. Una mujer se presentó como médico forense y le informó que se la había hecho venir desde Madrid "para atenderle". Luego fue conducido nuevamente a Bilbao, donde se le encerró en los calabozos de la Jefatura de Policía. Después fue conducido a la Dirección General de la Policía Nacional en Madrid, donde se le mantuvo durante dos días en un minúsculo calabozo de tres metros por cuatro, sin ventanas y sin muebles. Durante todo ese tiempo el Sr. Landa Mendibe no fue interrogado ni se le hizo siquiera pregunta alguna.
9. El 13 de febrero de 2008, fue conducido ante el Juez titular del Juzgado de Instrucción N° 5 de la Audiencia Nacional, donde se le comunicó el auto de procesamiento con base en la imputación de pertenencia a la organización terrorista ETA y se decretó su consiguiente prisión provisional incondicional. El Juez tampoco procedió a formularle

pregunta alguna. No obstante, el detenido negó rotundamente la imputación y denunció el modo en que había sido arrestado y los malos tratos sufridos.

10. El Sr. Landa Mendibe recordó al Juez que en un procedimiento anterior, que ese mismo juez había instruido, el Tribunal Constitucional había anulado una condena emitida luego de un proceso que le recluyó en prisión preventiva durante dos años, entre 1997 y 1999.

11. Tras su comparecencia, el Sr. Landa Mendibe fue trasladado en un furgón de la Guardia Civil, esposado y prácticamente inmovilizado, a la prisión madrileña de Soto del Real. Pasó la noche del 13 al 14 de febrero en los pasillos del módulo de Ingresos de la mencionada prisión.

12. El 14 de febrero se comunicó al Sr. Landa Mendibe la "Orden de Dirección" de la prisión, en la que se manifestaba "la capacidad criminal y la peligrosidad del interno patente en los delitos cometidos (terrorismo) y por los que actualmente se encuentra preso". Señala también "la vinculación del interno a la organización terrorista ETA". El Ministerio del Interior decidió clasificar e incluir al interno en el Fichero FIES 1-3.

13. El Sr. Landa Mendibe fue internado en una celda compartida con un hombre joven que presentaba hematomas y marcas de pelea en la cara. Se le despojó la ropa que vestía y se le obligó a vestir en su lugar un buzo blanco de una pieza con cremallera en la parte anterior, de varias tallas inferiores a la del detenido. En reacción a su protesta por estos hechos, fue enviado a una pequeña celda del módulo especial de aislamiento, donde se le internó totalmente desnudo. Se informa de que la celda estaba infestada de cucarachas que correteaban por suelo y paredes; estaba extremadamente sucia y permanentemente iluminada con una cegadora luz blanca.

14. El 17 de febrero, las autoridades negaron a los familiares del Sr. Landa Mendibe, quienes habían viajado expresamente desde Bilbao, la posibilidad de visitarle. El 18 de febrero fue trasladado a una celda ordinaria del Módulo 1. Ahí se le informó que había cometido faltas muy graves, por lo que el Director de la prisión había ordenado un nuevo aislamiento de entre seis y 14 días en régimen de incomunicación. Sin embargo, fue trasladado el 20 de febrero a la prisión de Madrid II (Alcalá-Meco), localizada en la ciudad de Alcalá de Henares.

15. El Sr. Landa Mendibe permaneció en la prisión de Alcalá-Meco hasta el 18 de diciembre de 2008. Durante dicho período se le denegaron los siguientes recursos:

- a) Solicitud de ser encarcelado en un módulo con presos preventivos y no con sentenciados y convictos: formulada el 18 de marzo de 2008 y denegada;
- b) Solicitud de participar en las actividades del polideportivo de la prisión y de practicar atletismo: formulada el 27 de marzo de 2008 y denegada;
- c) Solicitud de entrevista con el Juez de Vigilancia Penitenciaria durante una de sus visitas ordinarias a la prisión: formulada el 9 de abril de 2008 y sin merecer respuesta;
- d) Solicitud de que se le permitiese disponer de un ordenador portátil y de una impresora para poder continuar trabajando en su tesis doctoral: formulada el 7 de julio de 2008 y denegada;
- e) Solicitud de que se le permitiese disponer de un medidor de tensión arterial: formulada el 7 de julio de 2008 y denegada;
- f) Solicitud de autorización para mantener comunicación telefónica con su abogada defensora más allá del cupo semanal de llamadas familiares: formulada el 6 de agosto de 2008 e igualmente denegada;

g) Solicitud de que se le entregase una copia del reglamento interno de la prisión: nunca respondida.

16. El 19 de agosto de 2008, el Sr. Landa Mendibe fue sancionado con prohibición de visitas familiares y 30 días de prohibición de salidas al patio carcelario, al haberse hallado, durante un registro, un álbum de fotos familiares y un disco de música. Esta sanción no fue comunicada por escrito por lo que el Sr. Landa Mendibe no pudo impugnarla. El Sr. Landa Mendibe fue trasladado el 13 de diciembre de 2008 en un autobús de la Guardia Civil a la prisión de Valdemoro, situada a unos 60 km de Madrid. No obstante la escasa distancia que separa los dos centros de reclusión, el viaje duró más de seis horas. Fue trasladado encerrado con otro recluso en un habitáculo metálico y opaco. Al llegar fue sometido a régimen de incomunicación durante cinco días sin que se le brindase ninguna explicación. Ni su abogado ni sus familiares fueron informados de dicho desplazamiento. Cinco días después, en iguales condiciones, fue conducido a la prisión de Cáceres en Extremadura, a 300 km de Madrid y a más de 600 km de Bilbao, donde reside su esposa. No existen en la práctica medios de transporte público que comuniquen directamente Bilbao y Cáceres.

17. El Sr. Landa Mendibe se encuentra procesado en el Sumario 35/02 del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, a la espera de que se celebre la vista correspondiente. Ha sido acusado de pertenecer a la organización terrorista ETA sobre la base del Artículo 515.2 del Código Penal. Sin embargo, según la fuente, no consta en autos ningún elemento de prueba que pudiera justificar tal grave imputación.

18. Se ha solicitado en varias ocasiones la libertad bajo fianza del Sr. Landa Mendibe pero ésta ha sido sistemáticamente denegada; la última denegación tuvo lugar en julio de 2008. Actualmente se encuentra en vía de resolución una nueva petición.

19. Según la fuente, el Sr. Landa Mendibe ha sido privado de su derecho a la libertad y a la seguridad personales y a no ser sometido a detención o prisión arbitrarias (artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos). Su detención y procesamiento se producen en represalia al ejercicio de su derecho a la libertad de opinión y expresión (artículo 19 de la Declaración y artículo 19 del Pacto). Al ejercer pacíficamente sus legítimas actividades políticas de oposición, no lesionó en ningún momento los derechos o la reputación de los demás. Tampoco ha atentado contra la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, ni incurrido en propaganda en favor de la guerra, apología del odio nacional, racial o religioso que constituyese una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Sólo en estos casos las autoridades estarían legitimadas para restringir el ejercicio de las mencionadas libertades (cfr. artículos 19 y 20 del Pacto). Se ha violado también el derecho del Sr. Landa Mendibe a ser tratado durante su arresto y detención humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano; a ser reconocido como preso preventivo; a estar separado de los condenados y convictos y a ser sometido a un tratamiento distinto y adecuado a su condición de no condenado (artículo 10 del Pacto).

20. Se ha sometido al Sr. Landa Mendibe a tratos inhumanos y degradantes incompatibles con su derecho a la integridad física y mental proclamados en los Arts. 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ello es también incompatible con los artículos 1 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes la cual obliga a España a adoptar "medidas eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción" (artículo 2 de la Convención).

21. También, por aplicación combinada de los artículos 12 y 16 de la Convención contra la Tortura, el Estado Español está obligado a proceder a una investigación pronta e imparcial tan pronto haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de

tortura o de malos tratos. El Sr. Landa Mendibe denunció haber sufrido malos tratos durante su arresto y detención ante el Juez de la Audiencia Nacional que dictó el auto de procesamiento en su contra. Sin embargo, el Juez hizo caso omiso y no ordenó, como habría debido de acuerdo con la ley, la correspondiente investigación judicial.

22. La fuente agrega que no se ha establecido todavía en España un mecanismo independiente de la Policía que pueda llevar a cabo la investigación efectiva e imparcial a que se refiere el artículo 12 de la Convención contra la Tortura.

23. La clasificación en el fichero FIES 1-3, de alta peligrosidad, se destina a los presos que cumplen condena por delitos graves de terrorismo. El Sr. Landa Mendibe fue clasificado como tal desde el primer día de su ingreso en prisión. Durante sus más de 15 meses de estancia en prisión preventiva en centros penitenciarios españoles, el Sr. Landa Mendibe ha estado sujeto a condiciones de detención sumamente severas que suponen un maltrato continuado.

24. Dicha clasificación en el fichero FIES 1-3, aplicada inmediatamente después de su aprehensión, supone una violación del principio de presunción de inocencia durante el proceso, principio fundamental consagrado en el artículo 11 de la Declaración y en el párrafo 2 del artículo 14 del Pacto.

25. En diversas ocasiones, como las arriba descritas, la Administración Penitenciaria no ha reconocido el principio de la presunción de inocencia en favor del Sr. Landa Mendibe y le ha impuesto restricciones indebidas que no son compatibles con sus derechos humanos, los que son objeto de reserva legal.

26. Se ha vulnerado también el derecho del Sr. Landa Mendibe a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad (artículo 9.3 del Pacto) y a ser juzgado sin dilaciones indebidas (artículo 14.2.c del Pacto).

27. El párrafo 3 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece textualmente que "la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general"; si bien permite que la libertad del procesado "pueda estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo". La prisión provisional decretada por el Juez instructor hace más de 15 meses y el largo tiempo ya transcurrido no son compatibles con dicha disposición del Pacto, obligatoria para España.

28. También, agrega la fuente, se ha violado el inciso b del párrafo 2 del artículo 14 del Pacto, al no garantizarse el derecho del detenido a comunicarse con un defensor de su libre elección en todo momento y adecuadamente.

29. Los reiterados traslados a diversos centros de detención ubicados en diferentes Comunidades Autónomas, sin aviso a los familiares ni al defensor y sin aviso previo al detenido, han resultado en una seria merma del derecho del Sr. Landa Mendibe a su vida familiar, así como del derecho de su familia a recibir protección del Estado (artículos 17 y 23 del PIDCP). Dichos traslados, aparentemente innecesarios, parecen obedecer a una política gubernamental deliberada de dispersión de los presos vascos por todo el territorio español para impedirles recibir la ayuda de sus familiares.

30. La fuente considera que se han también violado los Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, y algunos principios fundamentales del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1988 (específicamente, los Principios 4, 8, 15, 16, 18 a 20, 28, 30, 33, 36, 38 y 39).

31. La fuente precisa que la antijuridicidad de los hechos descritos viene avalada por la práctica convergente desarrollada por distintos mecanismos convencionales (Comité de Derechos Humanos); y extraconvencionales temáticos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas (Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Relator Especial sobre la cuestión de la tortura; Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados). Tanto el Comité de Derechos Humanos como el Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo han puesto de manifiesto su preocupación por los problemas que ocasiona en España una definición deficitaria de terrorismo. El Comité de Derechos Humanos recomendó incluso la modificación de los artículos 572 a 580 del Código Penal.

32. Los mecanismos internacionales antes mencionados también han expresado su preocupación por el mantenimiento, en la legislación y en la práctica cotidiana, del régimen de incomunicación y su relación con la tortura y los malos tratos; por el empleo de la duración de la pena aplicable como criterio para determinar la duración de la prisión provisional; por la interposición de acciones judiciales ante la Audiencia Nacional que podrían restringir de modo injustificado la libertad de expresión y de asociación; y por el carácter de jurisdicción de excepción atribuida a la Audiencia Nacional.

33. Según la fuente, el procesamiento del Sr. Landa Mendibe ante dicha jurisdicción de excepción debe ser revisado, debiéndose considerar ilegal la utilización de tribunales de excepción, como la Audiencia Nacional, para el combate y la represión del terrorismo. La fuente agrega que la vigente Ley de partidos políticos ha permitido la ilegalización del grupo político al cual el Sr. Landa Mendibe pertenecía y está en la base de su detención.

34. El Gobierno en su respuesta no contradice el hecho que la detención del Sr. Landa Mendibe emana de la orden de autoridad judicial dispuesta en la causa 35/02, lo que justificaría la privación de libertad y afirmaría su carácter no arbitrario, negando que en el acto del arresto y durante los días siguientes se haya incurrido en irregularidades. Agrega el Gobierno en su respuesta que el Sr. Landa Mendibe se encuentra procesado actualmente "como presunto autor de un delito de integración en organización terrorista".

35. Manifiesta que a su respecto se adoptaron todas las medidas de higiene; otorgamiento de prendas de vestir; revisiones médicas, y demás medidas de rigor, conforme a la legislación carcelaria. Sostiene que se le permitió llamar "en forma gratuita" a su madre, y que recibió, el 14 de febrero, la visita de su abogado.

36. Agrega que, conforme a la legislación interna, se dispuso la intervención de las comunicaciones del Sr. Landa Mendibe, excepto con su abogado. En cuanto a la calificación del preso en el fichero FIES 1-3, sostiene que es propio de quienes están "dentro del colectivo denominado bandas armadas, lo que está ajustado a la ley; lo que fue rechazado por Landa por haber en ellos presos comunes, excusa común en los internos vinculados a la organización terrorista ETA". Dada su conducta, se le aplicaron medidas de aislamiento. Debido a su mal comportamiento, sufrió otras sanciones, impuestas reglamentariamente, incluyendo la suspensión de las comunicaciones orales por tres meses, y la entrega de paquetes alimenticios. Confirma también el Gobierno el hecho del traslado del reo a la localidad de Cáceres, por su mala conducta. Sostiene que desde ese traslado esta persona recibe visitas y comunicaciones ordinariamente.

37. Respecto a la denegación de peticiones, el Gobierno también confirma el hecho, haciendo presente que Landa "pudo haber cursado el oportuno recurso o queja ante el Juez Central de Vigilancia".

38. Sostiene el Gobierno, en cuanto al fondo del asunto, que en la especie se ha aplicado la legislación ordinaria española. Respecto de la naturaleza del tribunal Audiencia Nacional sostiene que no es un tribunal de excepción, sino "un organismo encarnado en la organización judicial española, competente en diversas materias no sólo penales, puesto que abarca importantes espacios en la jurisdicción contencioso administrativa y en la social. En materia penal, le está atribuido el enjuiciamiento de una amplia gama de delitos, entre ellos los de terrorismo, donde queda separada la función instructora de las causas (que compete a los Juzgados de Instrucción) de la función específicamente juzgadora (desempeñada por las Salas de Justicia)". Informa que la aceptación de la Audiencia Nacional como tribunal ordinario fue reconocida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde 1986, en el caso Barberá.

39. No controvierte el Gobierno la ausencia de pruebas incriminatorias, porque entiende que "sería inútil y contradictorio con la referida presunción (de inocencia) el intento de justificar desde este escrito o desde cualquier otra instancia distinta al Juez ordinario previsto por la ley para el enjuiciamiento de los hechos, la procedencia o la justificación de la incriminación penal del Sr. Karmelo Landa"; argumento que hace extensivo a las medidas de aseguramiento de la persona, incluida la privación de libertad.

40. La comunicación transcribe diversas disposiciones de la Ley de enjuiciamiento criminal relativas a las garantías judiciales de los imputados; a la prisión preventiva, tanto las que la decretan, la prorrogan o la deniegan. También transcribe normas de la legislación penitenciaria tanto de nivel constitucional, como de la Ley orgánica penitenciaria y de su reglamento y modificaciones a estos preceptos.

41. Finalmente, sostiene que se le imputa al Sr. Landa Mendibe su "presunta integración en la estructura y órganos directivos (Mesa Nacional) de Batasuna". El Tribunal Supremo Español decretó la ilegalización de esta formación política por su vinculación con la banda terrorista ETA. El Tribunal Constitucional se pronunció en igual sentido. Agrega que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido de la misma opinión, de la que dejó constancia en su sentencia Batasuna contra España, Causa 25803/4 y 2581/04.

42. La fuente, en carta dirigida al Grupo de Trabajo el 28 de agosto de 2009, rectifica lo que considera diversos errores de hecho en la respuesta del Gobierno, y refuta sus argumentaciones.

43. El Grupo de Trabajo se pronunciará separadamente sobre cuatro órdenes de materias que se advierten en los antecedentes: el arresto del Sr. Landa Mendibe; la naturaleza del tribunal; los hechos que se imputan al preso y su calificación jurídica; y el respeto de las reglas del debido proceso de derecho.

#### **La detención del Sr. Karmelo Landa Mendibe**

44. Las versiones de la comunicación original de la fuente y de la respuesta gubernamental son incompatibles, pues mientras la primera relata una gran cantidad de abusos contra la persona privada de libertad (ver párrafos 5 a 18 de esta Opinión), la segunda niega en bloque todas las alegaciones, sosteniendo que no se han cometido irregularidades (párr. 34). Si bien en general las partes no ofrecen pruebas que fundamenten sus afirmaciones, hay al menos dos hechos indesmentibles, que, analizados en conjunto, permiten sostener que la presunción de inocencia de Landa fue afectada.

45. El primero es que ante las quejas y denuncias del Sr. Landa Mendibe de haber sufrido torturas, o ante el mero hecho de que hubo motivos razonables para creer que se produjeron actos de torturas, el Estado Español debió disponer una investigación de estas alegaciones, de manera pronta e imparcial, en cumplimiento de los artículos 12 y 13 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y no lo hizo. No tiene dudas el Grupo de Trabajo que en la especie hubo motivos razonables

para pensar en este sentido. Ya el Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo manifestó su inquietud por la cantidad de "denuncias de malos tratos físicos o psicológicos presentadas ante el Juez de instrucción" que "fueron ignoradas" (A/HRC/10/3/Add.2, párr. 23).

46. El segundo hecho se refiere a que son incontestables los largos períodos de incomunicación a que el Sr. Landa Mendibe fue sometido. Y es sabido que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos considera como una de las formas de tortura o de trato cruel e inhumano, la incomunicación prolongada, que en este caso fue, además, reiterada. El Relator Especial sostiene en su informe de misión a España que pudiera haberse recurrido al régimen de incomunicación "para obtener información que pudiera ayudar en las investigaciones y no únicamente información relacionada con los sospechosos de terrorismo" (id., párr. 22).

47. A juicio del Grupo de Trabajo, no es ilegítimo ni afecta al derecho humano a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, con las debidas garantías, el que existan diferentes órganos judiciales siempre y cuando su composición y funcionamiento, el tener órganos superiores comunes, y magistrados nombrados y seleccionados de acuerdo a criterios de objetividad, transparencia, y capacidad, demuestren su carácter de independencia e imparcialidad. Su esfera de competencia no debe estar inspirada en factores corporativos ni en motivos ideológicos o religiosos (como en el caso, por ejemplo, de los tribunales militares; los tribunales populares, los de orden público u otros semejantes). El Grupo de Trabajo estima que la Audiencia Nacional de España ha dado generalmente garantía de respeto de estos requisitos, por lo que su sola actuación no es suficiente para impugnar como arbitrario —o de sospecha de arbitrariedad— un juzgamiento particular.

48. Por lo demás, el Grupo de Trabajo entiende que el Relator Especial no deslegitima en su informe la existencia de la Audiencia Nacional, toda vez que expresa que "aunque tiene conocimiento de un fallo pronunciado en 1988 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (criterio que previamente había tenido la Comisión Europea de Derechos Humanos en 1986) en el que caracterizaba a la Audiencia Nacional como un tribunal ordinario, considera problemático que un único tribunal central especializado, tenga competencia exclusiva en la aplicación e interpretación en materia de delitos de terrorismo, cuyo ámbito se ha hecho problemáticamente amplio". En el párrafo 58 del informe citado, el Relator Especial "pide al Gobierno que considere la posibilidad de trasladar la competencia para los delitos de terrorismo a los tribunales ordinarios, en lugar de reservarla a un solo tribunal central especializado, la Audiencia Nacional". Es decir, el Relator Especial no cuestiona ni su existencia (también tiene competencias en materia administrativa, laboral, social, delitos relativos al narcotráfico, corrupción, crimen organizado; delitos contra el Rey y su familia, contra miembros del Gobierno, delitos que dan lugar a la jurisdicción universal); ni tampoco que el ejercicio de su jurisdicción vulnere el derecho a un juzgamiento por un tribunal independiente e imparcial. Sólo le parece problemática, al Relator Especial, la extensión territorial de la competencia del Tribunal para los delitos de terrorismo.

#### **Los hechos que se atribuyen a Landa y su calificación jurídica**

49. El Grupo de Trabajo no comparte la consideración del Gobierno en cuanto a que resulta inútil discutir, desde una instancia distinta al juez, "la procedencia o la justificación de la incriminación penal del Sr. Karmelo Landa", ni "las medidas de aseguramiento que se imponen a una persona". Ésta es, precisamente, la labor del Grupo de Trabajo frente a una alegación de detención arbitraria.

50. De conformidad con la información recibida del Gobierno, el único hecho que se imputa al Sr. Landa Mendibe es "la presunta integración en la estructura y órganos directivos de la Mesa Nacional de Batasuna". El Gobierno agrega que "El Tribunal Supremo español declaró la ilegalización de esta formación política por su vinculación con la banda terrorista ETA. El Tribunal Constitucional se pronunció en igual sentido".

51. El Grupo de Trabajo considera que el Estado tiene la obligación institucional, política y moral de garantizar la seguridad de todas las personas frente al terrorismo. Toda persona es titular del derecho humano a la seguridad, reconocido en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (junto al derecho a la vida y a la libertad) y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (junto a la libertad personal). Tal obligación supone la adopción de políticas públicas y de medidas de prevención de la acción terrorista así como impedir la impunidad de hechos de esa naturaleza.

52. No obstante, todas las políticas públicas y medidas que deben implementar los Estados han de ser respetuosas de los derechos humanos de todas las personas, y el Estado pierde su legitimidad si ellas finalmente se traducen en violaciones de esos derechos.

53. Según la fuente, el delito motivo de la inculpación es el tipificado en el artículo 515 del Código Penal español, que dispone:

"Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración: 1) Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada. 2) Las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas. 3) Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución. 4) Las organizaciones de carácter paramilitar. 5) Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello."

El artículo 516 sanciona a "los promotores y directores de las bandas armadas y organizaciones terroristas, y a quienes dirijan cualquiera de sus grupos", y a los integrantes de las citadas organizaciones".

54. De la información proporcionada por el Gobierno pareciera desprenderse que el rol del Sr. Landa Mendibe sería el de ser integrante y pertenecer a órganos directivos de una organización terrorista. El Gobierno considera, con apoyo en sentencias de los tribunales Supremo y Constitucional de España, que el partido político Batasuna es un grupo terrorista.

55. El Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo sostiene —con razón— que en el artículo 515 ya transcrito no se establece una definición del término "organización terrorista", manifestando que "las medidas antiterroristas no deben utilizarse para limitar los derechos de las ONG, los medios de comunicación o los partidos políticos. Toda medida que afecte al ejercicio de los derechos fundamentales en una sociedad democrática debe aplicarse con arreglo a criterios precisos definidos por la ley y respetar los principios de proporcionalidad y necesidad" (A/HRC/10/3/Add.2). Critica también la aplicación que los tribunales españoles han dado al concepto de "organización terrorista", pues "no parece ofrecer suficiente precisión y podría aplicarse a actividades que quedan fuera del ámbito de los delitos de auténtico carácter terrorista". A ese respecto, recuerda que toda restricción de los derechos humanos fundamentales debe basarse en la ley y ser proporcionada y eficiente

en relación con el objetivo de la lucha contra el terrorismo. El Grupo de Trabajo comparte estos juicios.

56. La acusación única que según el Gobierno se ha formulado al Sr. Landa Mendibe (presunta integración en la estructura y órganos directivos [Mesa Nacional] de Batasuna), sin atribuirle rol de promotor, organizador, conspirador, instigador, cómplice o encubridor de algún acto de carácter delictivo o terrorista, y sin que se informe de su comisión y si se ejecutó y consumó, o si quedó en grado de proposición, tentativa o frustración, permite al Grupo de Trabajo entender que el único motivo de la inculpación de esta persona es su sola militancia en el ilegalizado partido político Batasuna, un hecho que en sí no es delito, sino el ejercicio de un derecho humano reconocido tanto en la Declaración Universal (arts. 19, 20 y 21), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 18, 19 y 22).

57. Por otra parte, según las informaciones proporcionadas al Grupo de Trabajo, las sentencias de los tribunales Constitucional y Supremo que declaran la ilegalidad de Batasuna, no transforman a dicha organización, por sí misma, en una organización ilícita o delictiva. La militancia y la dirigencia en un partido político, legal o ilegal, son conductas legítimas y manifestaciones indiscutibles de la libertad de expresión y opinión, así como del derecho de asociación.

#### **El respeto de las reglas del debido proceso de derecho**

58. Luego de aquilatar debidamente las explicaciones formuladas por el Gobierno, el Grupo de Trabajo considera que se encuentran acreditadas diversas infracciones a las normas del debido proceso de derecho, tales como:

a) No haber informado al Sr. Landa Mendibe al momento de su detención de las razones de la misma, pues —aun en el caso de que se le haya notificado el cargo de "presunta integración en la estructura y órganos directivos (Mesa Nacional) de Batasuna"— no se le comunicaron las "razones" ni la "naturaleza y causas" y "en forma detallada" en que esa acusación se apoyaba (artículos 9 y 14.3.a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos);

b) No habérsele juzgado dentro de un plazo razonable y sin dilaciones arbitrarias, llevando ya 19 meses privado de libertad (artículos 9 y 14 c) del mismo Pacto);

c) No haber gozado del derecho a la libertad durante el juicio, aun adoptándose las medidas de aseguramiento (art. 9.3), derecho que en la especie se justifica en atención a que el Sr. Landa Mendibe nunca ha pretendido eludir la acción de la justicia;

d) No haber respetado su derecho a la presunción de inocencia, hecho que se configura con los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a los cuales se alude en los párrafos 44 a 46 de esta Opinión, los que se produjeron desde el momento de su privación de libertad, y su inmediata consideración como reo peligroso, imponiéndosele en consecuencia el régimen carcelario reservado a éstos (artículo 14.2 del Pacto).

59. Habida cuenta de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La privación de libertad del Sr. Karmelo Landa Mendibe es arbitraria, ya que contraviene a lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11 y 18 a 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 9, 10, 14, 18, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categorías I, II y III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

60. Consecuentemente con la Opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno de España:

a) Que ponga remedio a la situación del Sr. Karmelo Landa Mendibe, de conformidad con las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mediante la concesión de la libertad provisional hasta la terminación del juicio, adoptando además medidas para que el proceso que se sigue en su contra no sufra nuevas dilaciones indebidas;

b) Que adopte medidas de reparación pública y de otra naturaleza en favor de esta persona;

c) Sin perjuicio de hacer suyas, en lo que corresponde, las recomendaciones contenidas en el informe de misión del Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo (A/HRC/10/3/Add.2), que adopte políticas públicas y medidas concretas para combatir el flagelo del terrorismo con perspectiva de derechos humanos; es decir, respetando los derechos humanos de todas las personas, y especialmente los de carácter procesal.

Aprobada el 4 de septiembre de 2009.

---